

BRASIL: FRACASO DEL LULISMO
Y EMERGENCIA DE ALTERNATIVAS

**BRASIL: FRACASO DEL LULISMO
Y EMERGENCIA DE ALTERNATIVAS**

JORGE LORA CAM
WALDO LAO FUENTES

PRÓLOGO
DECIO MACHADO

Colección
Temas Estratégicos

elaleph.com

Temas Estratégicos

Cuerpo Académico Internacional
e Interinstitucional

Directores

Robinson Salazar Pérez
Juan Antonio Fernández Velazquez
Rudis Y. Flores Hernández

Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización escrita de los titulares del copyright, bajo las sanciones establecidas por las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la fotocopia y el tratamiento informático.

© 2017, Jorge Lora Cam
© 2017, Waldo Lao Fuentes
© 2017, Imagen de cubierta por Tatiana Farah
© 2017, Elaleph.com S.R.L.

contacto@elaleph.com
http: //www.elaleph.com

Primera edición

Tiraje de 1.000 ejemplares.

Este libro ha sido editado en Argentina.

ISBN

Hecho el depósito que marca la Ley 11.723

Impreso en el mes de octubre de 2017
en Bibliográfika, de Voros S.A.
Barzana 1263, Buenos Aires, Argentina.

Comité editorial internacional

Ignacio Medina, Jorge Beinstein, Raul Delgado Wise,
Orlando Villalobos Finol, Dídimo Castillo Fernández,
Guido Galafassi, Leticia Salomón, Fabián Nieves,
Atilio Borón, Marco Gandásegui, Jennifer Fuenmayor
Carroz, Sonia Winer, Gloria Caudillo, Yamandú Acosta,
Álvaro Márquez-Fernández, Luz Parra Neira, Mario Ortega,
Sebastián Goinheinx, Oliver Klein, Rafael Paz Narváez,
Hernán Fair, Raul Rodríguez Guillén, Gilberto Valdés
Gutiérrez, Gian Carlo Delgado, Paula Lenguita, Ma. Pilar
García-Guadilla, Alfonso Rivas Mira, Alfredo Falero,
Manuel Antonio Garretón, Norma Fuller, Leonardo
Rioja Peregrina, John Saxe-Fernández, Carlos Fazio,
Ambrosio Velasco Gómez, José Alfredo Zavaleta Betancourt,
Rigoberto Lanz, Julián Rebón, Jorge Lora Cam,
Francisco Ávila-Fuenmayor, Victor Ego Ducrot, Sonia Winer,
Jorge Alonso Sánchez y Pablo Ormazabal.

ÍNDICE

Prólogo	9
Introducción	27
Capítulo I. La coyuntura: ¿fin del neoliberalismo populista?	49
Capítulo II. Derechización del PT, retroceso político, expansión transnacional y resistencias populares	81
Trasnacionales de Brasil en América Latina y resistencias populares	97
Capítulo III, Brasil: extractivismo transnacional, corrupción y sometimiento al imperio en la disputa hegemónica regional	121
Las transnacionales brasileñas	121
Extractivismo y corrupción de trasnacionales brasileñas en América Latina: el caso peruano	156
Capítulo IV. ¿Nos quedamos en la mera resistencia, comenzamos a construir un mundo nuevo o aún es posible la revolución?	175
La acumulación primitiva permanente, la reestructuración de la reproducción y las crisis de reproducción	175
Resistencias y movimientos sociales en el Sur contra el Estado colonial	182
La estrategia fetichista de la guerra electoral. La imposibilidad democrática en el capitalismo	199
¿Nuevos sujetos de cambio para un nuevo e inédito ciclo de rebeldía?	215

Capítulo V. Las entrevistas: la palabra de los de abajo sobre el nuevo hacer	227
Mauro Lemes	230
Gilmar Mauro	232
João Pedro Stedile	237
Gimar Mauro	240
Judith Santos	246
João Paulo	249
Raúl Zibechi	252
Ana Paula Perles	256
Jose de Asivaldo	261
Ana Moraes	264
Sonia Guajajara y Lindoamar Terena	269
Rosangela Piovisani	278
Robinho Dos Santos	283
Sidnei Pita	285
Anderson Amaro y Rosieli Ludtke	288
María das Graças Xavier	293
Bibliografía	299

PRÓLOGO

Por Decio Machado¹

La lectura de esta obra, la cual goza de un fuerte nivel de producción teórica y una vasta amplitud de fuentes bibliográficas, pone sobre la mesa las múltiples contradicciones en las que incurrieron los gobiernos “progresistas” durante su reciente ciclo hegemónico en América Latina. El esfuerzo de elaboración hecho por Jorge Lora Cam y Waldo Lao Fuentes es un aporte importante para entender la complejidad de la realidad en la que vivimos, planteando paralelamente propuestas que ayudan a pensar en la hoja de ruta que han de recomponer los caminos emancipatorios contruidos desde y para las y los de abajo.

Los autores parten de la realidad política brasileña para abordar las problemáticas globales de un capitalismo que si bien en decadencia, no deja de mostrarnos –aunque con cada mayores falencias- su cada capacidad de adaptación, transvistiéndose en esta ocasión y en nuestra región bajo formas populistas mediante insólitos ejercicios de teatrales y nuevas narrativas.

Brasil, por su importancia y transcendencia geopolítica, es un buen punto de partida desde el que desarrollar un análisis crítico respecto a lo que nos deja, como triste legado en el subcontinente, esto que hemos tenido a bien definir como “ciclo progresista”.

¹ Sociólogo y periodista español. Coautor con Raul Zibechi del libro “Cambiar el mundo desde arriba: los límites del progresismo”. Consultor internacional en temas investigación social y económica, marketing político, publicidad de productos, comunicación estratégica y digital. Experto en Social Media y colaborador en diversos medios de comunicación en América Latina y Europa. Miembro cofundador del periódico Diagonal. Miembro investigador de Sistemas Integrados de Análisis Socioeconómico y director de la Fundación Alternativas Latinoamericanas de Desarrollo Humano y Estudios Antropológicos.

Esta obra puede ser considerada como una reacción a una de las consecuencias más nefastas de este período: la desertión casi completa de toda una generación de profesionales académicos respecto a su rol como impulsores del pensamiento crítico latinoamericano. Convertida esta intelectualidad en voceros de dichos regímenes, pocas veces en la historia hemos asistido a una complicidad tan nefasta entre la simplificación del pensamiento/discurso y la proliferación de ejercicios de genuflexión de la Academia frente al poder.

Jean Paul Sartre, allá por el año 1945 escribiría en la revista *Le Temps Modernes*, “considero a Flaubert y a Goncourt responsables de la represión que siguió a la Comuna (de París) porque no escribieron una palabra para impedirlo”. Tocará en breve plantear lo mismo respecto a estos voceros del poder “progresista” en relación a su silencio y complicidad con episodios represivos como los emprendidos por gobiernos que se erigieron como representantes de la expresión popular contra la resistencia indígena en el Tipnis en septiembre de 2011 en Bolivia, las operaciones antimotines contra jóvenes urbanos movilizados en diferentes ciudades en junio del 2013 en Brasil o las acciones militares contra el levantamiento indígena de agosto del 2015 en Ecuador, por citar tan solo algunos ejemplos.

Volviendo al pensamiento sartriano, parecería evidente que la misión de un intelectual es proporcionar a la sociedad una “conciencia inquieta” de sí misma, “una conciencia que la arranque de la inmediatez y despierte la reflexión”. Pero vayamos a más, y reflexionemos si esto de la intelectualidad no debería superar su estatus de oficio o profesión para conllevar una tarea colectiva al servicio de los sujetos comunales en lucha... Citando a Piotr Kropotkin, cabría decir que más allá de los egos inherentes a toda *intelligentia*, “sólo los esfuerzos de miles de inteligencias trabajando sobre los problemas pueden cooperar al desarrollo de un nuevo sistema social y hallar las mejores soluciones para las miles de necesidades concretas”. Es por lo tanto el rol de la intelectualidad un quehacer subordinado a la lucha colectiva, algo que a muchos intelectuales hoy les cuesta aceptar. Por ahí discurre el transfondo de esta obra, la cual tiene como punto de partida un concepto hoy tristemente olvidado que sin embargo es básico: el pensamiento crítico no puede estar atado a los poderes existentes, sino que debe ser autónomo respecto a estos y sus expresiones partidistas que de una forma u otra conforman la vía institucional.

Desde el esfuerzo intelectual desarrollado en esta obra, se niega la aceptación de las fórmulas fáciles hoy tan en boga, renunciando a su espacio de confort para buscar la confrontación frente a los poderes existentes. Esto no es factible, y los autores así lo entienden, sin desafiar ortodoxias ideológicas y lógicas conformistas con los distintos modelos de dominación a los que estamos sometidos. Citando a Agamben, “el totalitarismo moderno puede ser definido (...) como la instauración, a través del estado de excepción, de una guerra civil legal, que permite la eliminación física no sólo de los adversarios políticos sino de categorías enteras de ciudadanos que por cualquier razón resultan no integrables en el sistema político”. De lo anterior se desprende entonces, que sólo un modelo basado en las personas es capaz de no producir personas basadas en un modelo.

El pensamiento crítico es por autonomasia un pensamiento radical y abierto, lo que supone profundizar sin concesiones en los mecanismos que mantienen la dominación. Eso, precisamente eso, es lo que hacen los autores durante el transcurrir de las páginas siguientes. Pero Lora y Lao entienden también, lo cual no es baladí en nuestra región y en este momento, que no existe el pensamiento crítico contemplativo, pues este nace del compromiso y es desde ese compromiso desde donde estamos obligados a situar nuestras colectivas reflexiones. Como diría Luís Cernuda, poeta español de la llamada *Generación del 27* fallecido en su exilio mexicano, “maldigo la poesía que no toma partido hasta mancharse”. Es desde ahí desde donde no podemos olvidar que fue el accionar de los movimientos sociales -protagonismos anónimos y populares- los que posibilitaron este “ciclo progresista”, siendo posteriormente traicionados por las estructuras partidistas que rentabilizaron dicho acumulado y olvidados por esa intelectualidad hoy al servicio del poder, los cuales han pasado a convertirse en una rémora para la reconfiguración de futuros movimientos antisistémicos y emancipadores.

Centrándonos en Brasil, el libro aborda la profunda crisis que vive el gigante suramericano haciendo hincapié en tres de sus ejes principales: la aplicación de medidas neoliberales inmediatamente después de terminada la campaña electoral del 2014 por el gobierno de Dilma Rousseff, cuya mayor ignominia fue haber basado su discurso electoral precisamente en denunciar de forma agresiva el neoliberalismo existente en el ADN de sus rivales; el impacto de la actual crisis multifacética brasileña y sus consecuencias sociales; y las tramas de corrupción institucional que transver-

salizan al país, las cuales comienzan a revelarse a partir del caso Petrobrás pero que posteriormente se extienden mediante el descubrimiento de múltiples *affaires* entre el gran capital nacional y el Estado.

Consecuencia de lo anterior, Brasil vive una crisis que va más allá de lo económico, pues entra en deslegitimidad su institucionalidad y régimen de partidos, pasando a ser una crisis de carácter estructural. En palabras del economista Pierre Salama, el gobierno sufrirá “un déficit de legitimidad y de racionalidad” desde un sentido cercano al que en su día le diera Habermas a dicho término, siendo incapaz para orientar una política económica coherente aunque esta sea de carácter neoliberal.

Lora y Lao nos hablan de la carencia en Brasil de un desarrollismo basado en el cambio industrial, y cierto es esta condición, la cual que podemos visualizar con facilidad con tan solo analizar algunos datos económicos. Para mantener tal aseveración, basta constatar que la industria de transformación brasileña en la industria de transformación mundial (en valor agregado) era de 2.7% en 1980 y cae, momentos antes del inicio de la crisis, al 1.7% en 2011. Siguiendo con las metodologías comparativas, cabe señalar también que las exportaciones de productos manufacturados brasileños también menguan en términos relativos, pasando del 53% del valor de las exportaciones en 2005 al 35% en 2012.

Si bien es cierto que la desindustrialización en Brasil se viene desarrollando desde los años noventa y se acentúa a partir del inicio del presente siglo, también lo es que durante el período petista la industria de transformación nacional disminuyó aún más -hablando en términos capitalistas- su capacidad competitiva. Lo anterior implica que la economía brasileña se haya reprimarizado, elevándose el peso de sus exportaciones de productos primarios.

La tan alardeada recuperación de la planificación por parte de los gobiernos progresistas demostró a la postre que sus tecnoburócratas desconocían las lógicas que conlleva la globalización capitalista, ignorándose así que en la actualidad las medidas de dinamización neokeynesianas del mercado interno ya no pueden ser independientes al mercado externo. En la actualidad y a diferencia de lo que sucedía a mediados del siglo pasado, el mercado interno no puede ser proyectado sin que sea considerado un modo inteligente de inserción de la economía nacional en el sistema mundo.

El crecimiento económico latinoamericano se sostuvo sobre la necesidad de fagocitación de los recursos naturales por parte de la República Popular China. Pero al igual que muchas economías emergentes aunque en este caso de forma sobredimensionada, China prosperó de manera clásica, construyendo carreteras para unir las fábricas a los puertos, desarrollando redes de telecomunicaciones para conectar unos negocios con otros y ofreciendo a su histórico campesinado puestos con muy superior remuneración en fábricas urbanas. Pero llegó el momento del punto de inflexión en la economía china: la oferta de mano de obra procedente de las zonas rurales se agota y el empleo en las fábricas alcanzó su máxima capacidad; de igual manera la red de autopistas construida en China supera los setenta y cinco mil kilómetros, siendo la segunda más larga del mundo tras Estados Unidos; pero además, la tendencia demográfica se ha invertido y ahora el Estado tendrá que afrontar un novedoso reto respecto a cubrir las necesidades de su clase social pensionista.

Fruto de lo anterior el crecimiento de China se desaceleró y con ello golpeó a nuestro subcontinente. El camino más probable para China es el que siguió Japón a principios de la década de 1970, cuando su economía en auge desde el fin de la guerra se ralentizó sustancialmente pero continuó creciendo a un ritmo respetable durante una serie de años posteriores. Nada más y nada menos que lo esperable en la fase de madurez de cualquier economía “milagro”.

La desaceleración china pone fin a un ciclo económico global, cerrando una etapa que para bien o para mal ha alterado el curso de la histórica económica durante las últimas décadas. Se redujo la pobreza global al mismo tiempo que se aceleraron las amenazas de destrucción ambiental, el calentamiento global y la forja de un nuevo modelo de imperialismo que los analistas institucionales al servicio de los gobiernos del Sur se niegan a reconocer.

Este *boom* de los *commodities* ocasionado por la hasta hace poco desconocida demanda china de recursos naturales, no implicó en Brasil ni en el resto del subcontinente la puesta en cuestión de la lógica derivada de las economías rentistas. Por lo tanto y partiendo de lo anterior, fueron más transformadores los gobiernos populistas gestados entre 1910 y 1954 que el neopopulismo desarrollado a partir de 1999. Lo anterior deriva de la ausencia de reformas estructurales orientadas a poner en función un sistema fiscal que no sea regresivo y una política industrial menos clientelista.

Pasado década y media de gobiernos progresistas en la región, el modelo de desarrollo latinoamericano ha agudizado su dependiente inserción internacional como proveedores de materias primas en el mercado global, implicando una mayor vulnerabilidad de nuestras economías y subordinándolas aún más a las fluctuaciones erráticas de los mercados internacionales. El agotamiento del período de crecimiento basado en la reprimarización y la financiarización manifiesta los límites del progresismo actual y la necesidad de una política de izquierda que no se reduzca a una simple redistribución del excedente. Pese a los folclóricos discursos oficialistas que llegaron a la osadía de hablarnos de una “segunda independencia”, la historia le volvió a dar la razón a Marx cuando se nos avisó, siglo y medio atrás, de que “la manera como se presentan las cosas no es la manera como son; y si las cosas fueran como se presentan la ciencia entera sobraría”. Así las cosas va quedando también en cuestión hasta el tan altisonante concepto de “década ganada”, el cual está siendo esbozado mediante las vocerías de esta intelectualidad latinoamericana al servicio de poder.

Fue Tomas Piketty quien hace relativamente poco tiempo nos demostró que desde 1700 hasta 2012 la economía mundial creció en promedio 1.6% anual, mientras la tasa de retorno del capital generó un indicador que oscila entre el 4 y el 5%. Lo anterior implica que la riqueza global terminó en muy pocas manos y en el caso de América Latina estos indicadores han sido aún de mayor concentración. Pese a la reducción de la pobreza durante esta última década en la región, lo cual no es un logro de los gobiernos progresistas dado que todos los países del subcontinente bajaron sus indicadores de pobreza en 2003 y 2013 salvo Honduras, y como consecuencia de no haberse intervenido sobre los pilares estructurales de la desigualdad, hoy en América Latina el 10% más rico de la población concentra el 71% de la riqueza. Sería el propio Banco Mundial quien indicaría en un informe del 2016 que de mantenerse esta tendencia en menos de diez años el 1% más rico tendrá más riqueza que el 99% restante.

Fruto de lo anterior, aplica aquella cita de Albert Camus mediante la cual se aseveraba que “la estupidez siempre insiste”, pues los gobiernos progresistas creyeron que los niveles de crecimiento económico que fueron fruto del ciclo alcista de los *commodities* se mantendrían de forma permanente. Seamos serios, si bien es cierto que han existido países de la periferia más cercana al centro que han conseguido, mediante dinámicas de desarrollo tardo-capitalistas, ocupar posiciones prominentes en el mer-

cado global a costa de viejas potencias en declive, basta releer la teoría marxista del desarrollo desigual y combinado para poner en discusión que esta regla pueda generalizarse. En la cúspide de la pirámide global capitalista no hay sitio para todos, y esto implica que muy pocos países hayan logrado un crecimiento rápido y sostenido a lo largo del tiempo.

Basta hacer un recorrido por la historia económica reciente para ver como a lo largo de cualquier década desde la segunda mitad del pasado siglo, sólo una tercera parte de los países emergentes han logrado crecer a una tasa de crecimiento anual del 5% o superior. Menos de un cuarto han mantenido ese ritmo durante dos décadas y la décima parte durante tres décadas. Sólo seis países (Malasia, Singapur, Corea del Sur, Taiwán, Tailandia y Hong Kong) han mantenido esta tasa de crecimiento durante cuatro décadas y dos de ellos (Corea del Sur y Taiwán) durante cinco décadas. De hecho, durante la última década –con excepción de China e India– todos los demás países que consiguieron mantener una tasa de crecimiento del 5% era la primera vez que lo hacía.

Ahora bien, de la lectura de las páginas de este libro se desprenderá una pregunta que implícitamente nos dejan sus autores: ¿qué podríamos esperar de gobiernos que más allá de su etiqueta progresista llegaron al poder por la vía electoral? Es ahí donde Lora y Lao abren una no tan nueva pero interesante reflexión, pues entienden que la democracia electoral no es más que una herramienta creada para garantizar los intereses de las élites burguesas y la centralidad del Estado ante la sociedad. Llegados a este punto, “con la iglesia hemos topado Sancho” diría Don Quijote en el aquel bellissimo capítulo IX de la obra maestra escrita por Cervantes. Quizás valga la pena nuevamente recuperar el viejo pensamiento anarco-comunista ruso, cuando planteaban que lo que viciaba a la revolución era la burocracia y el Estado. Cuenta Isaac Deutscher al respecto en documento titulado *Las raíces de la burocracia* que “cuando Kropotkin deseaba mostrar la profundidad de la corrupción moral de la revolución francesa, explicaba cómo Robespierre, Danton, los jacobinos, y los hebertistas se pasaron de revolucionarios a hombres de Estado”. Y cierto es, quedando de forma sobreentendida en este libro, que la fuerza de la burocracia no es otra cosa que el reflejo de la fragilidad de la sociedad.

Lora y Lao nos explican como los petistas brasileños, al igual que sus *partners* progresistas en la región, confiaron en “la capacidad del Estado para la definición de las geoestrategias económicas nacionales”, ignorando

la inexistencia de contradicción entre Estado y capitalismo. Sería allá por 1878, en los manuscritos del *Anti Dühring*, cuando el viejo Engles aseveraría que “el Estado mismo, cualquiera que sea su forma, es esencialmente una máquina capitalista, es el Estado de los capitalistas, el capitalista colectivo ideal”. Un siglo después y ya mediante máquina de escribir, Fernand Braudel añadiría que “el capitalismo sólo triunfa cuando se identifica con el Estado, cuando es Estado”. Y dos décadas más tarde, por medio de los teclados de las primeras computadoras domésticas, Wallerstein remataría la cuestión agregando que “el Estado es un elemento que forma parte del funcionamiento del sistema capitalista”, de modo muy particular en su fase monopólica-imperialista. En resumidas cuentas y citando en esta ocasión al amigo Claudio Katz, “no hay mercados fuertes sin estados fuertes” y por lo tanto no estamos hablando de conceptos antagónicos.

Hablemos claro. Más allá de lo que significó como agresión a la clase trabajadora, debilitamiento de la organizaciones obreras y desmantelamiento del Estado, el neoliberalismo fue un proyecto fracasado de las élites dominantes para expandir sus negocios, reforzar su base de acumulación y aumentar su presencia en el mercado mundial. El neoliberalismo ni dinamizó la actividad económica ni incentivó el crecimiento. Los beneficios que generó para las clases dominantes fueron de corto plazo, limitándose a los resultados de las medidas de *shock* aplicadas despiadadamente contra las y los trabajadores, lo que supuso cierto incremento aunque exiguo de la tasa de explotación. Es a partir de ahí que se desarrolla un “nuevo consenso” por el cual se determina que el mercado por sí solo no resuelve ni la pobreza para dinamizar el consumo y tampoco resuelve las inestabilidades económicas. De acuerdo con lo anterior, incluso sectores conservadores tuvieron que asumir la siguiente conclusión: hace falta entonces “más Estado”.

El párrafo anterior nos muestra lo absurdo del debate inventado por algunos autores sobre si “Estado mínimo” o “Estado fuerte”. El capitalismo lo tiene claro: la cuestión es que el Estado intervenga intensamente a favor del capital, quedando el ámbito de su tamaño sujeto a consideraciones coyunturales. Por lo tanto, el “retorno del Estado” protagonizado por los llamados gobiernos “progresistas” no es más que la adaptación de una perversa variante del capitalismo regional disfrazado bajo una tautológica invocación a soflamas antineoliberales, devolviendo al sistema económico capitalista una legitimidad anteriormente perdida fruto de crack neoliberal

en la región. En base a ello, durante el período progresista se articulan apenas meras correcciones sobre los excesos descontrolados del capital que protagonizaron de forma dolorosa la etapa anterior.

Llegados a este punto, surge una nueva pregunta cuya respuesta es categórica y se transversaliza en diferentes momentos este libro: ¿es que se pueden construir alternativas mediante gobiernos que han mantenido su dinámica política y radical-discursiva conviviendo con el poder de las élites económicas? Para los autores, ni siquiera hubo la voluntad de imaginar el fin del capitalismo, motivo por lo cual son evidentes sus carencias respecto a cualquier tipo de elaboración de un proyecto anticapitalista por parte de estos.

Lora y Lao, con otras palabras, dejan claro que ni hubo desmercantilización, ni despatriarcalización de la sociedad, ni construcción combinada de múltiples formas de poder popular, ni procesos de nacionalización significativos, ni gestión obrera en las empresas, ni economía social y solidaria significativa, ni empoderamiento de las organizaciones sociales o populares, ni elaboración de estrategias de lucha contra la alineación...

Si como aseveró en algún momento Deleuze, la izquierda más que una ideología es una forma de percibir el mundo; el progresismo quedó muy lejos de percibir el mundo de forma diferente a como lo percibe la ideología dominante. Siendo así las cosas, cabe reflexionar irónicamente sobre que quizás el progresismo rememorando a Marcuse pensó que “si los individuos están satisfechos hasta el punto de sentirse felices con los bienes y servicios que les entrega la administración, ¿por qué han de insistir en instituciones diferentes para una producción diferente de bienes y servicios diferentes? Y si los individuos están precondicionados de tal modo que los bienes que producen satisfacción, también incluyen pensamientos, sentimientos, aspiraciones, ¿por qué han de querer pensar, sentir e imaginar por sí mismos?”.

Sin embargo la escenificación progresista ha sido gloriosa, presentándose a sí mismos como la personificación del orden, de la capacidad de gobernar y tomar decisiones, como protectores paternales del pueblo y velando por sus representados a quienes protegen del rigor del capitalismo salvaje practicado durante la etapa anterior.

Para entender lo anterior habría que rescatar a Horkheimer, uno de los principales exponente de la Teoría Crítica de la Escuela de Frankfurt, cuando explicaba que el Estado autoritario es un fenómeno sociológico

originado tras circunstancias históricas caracterizadas por la anarquía, el desorden y la crisis, presentándose como la vía para la superación de los problemas existentes. Laclau, ya en el presente siglo, nos diría que “la identificación con un significante vacío es la condición *sine qua non* de la emergencia de un pueblo”, ignorando que el significante vacío se rellenó de cualquier cosa durante el llamado ciclo progresista. Sería el brasileño Bruno Cava quien demolería la tesis laclauiana en la región, indicando que “en la situación que nos encontramos nosotros, el significante vacío se vacía aún más, no adopta la multitud, pero es fagocitado por aquellos poderes fuertes que no tienen nada que ver con el pueblo, la nación y todos los otros conceptos alegres del vocabulario político de la modernidad”.

En este libro sus autores esbozan que el hecho de que la crisis en Brasil pone en riesgo incluso el proyecto integracionista diseñado para la región, lo que siendo verdad no profundiza en el hecho de que la pretendida construcción de condiciones para el desarrollo autónomo del capital periférico tiene escasa relación con la emancipación social y la libertad. Es, rememorando a Castoriadis, desde la democracia directa y radical donde toma forma fundamental el eje de lucha contra cualquier intento de racionalización capitalista y conformismo instaurado.

Sería un europeo, el francés Jean Baudrillard, quien nos diría que la modernidad es una triste farsa donde las dirigencias de los pueblos sometidos, en lugar de diferenciarse de sus dominadores y proceder con su propia revancha liberadora, dedicaron sus esfuerzos a intentar parecerseles y hasta exagerar de forma grotesca su modelo, en sintonía con el aserto de Fanon, “piel negra y máscaras blancas...”.

En el recorrido de las próximas páginas veremos como Jorge Lora y Waldo Lao ponen en cuestión la redistribución estatal de los mayores ingresos derivados del *boom* de los *commodities* sin que se halla tocado el patrimonio de la élites. Ciertamente es así, dado que el neodesarrollismo latinoamericano tiene más que ver con la CEPAL tecnocrática que con el pensamiento crítico o cualquier teoría emancipadora. En definitiva, el modelo implementado por el “progresismo” tiene más relación con las continuidades del neoliberalismo que con rupturas respecto a este. Es un hecho que en ningún país de la región se tocó la matriz de acumulación heredada del período neoliberal y que sus soflamas respecto al cambio de matriz productiva quedaron en eso.... ¡soflamas!.

Con el progresismo se instauraron condiciones modernas de explotación a las clases trabajadoras, se mantuvo la distribución desigual de los medios de producción, no se alteraron las estructuras oligopólicas de los mercados y tampoco se redujeron los subsidios estatales a los grandes grupos económicos. Si bien es cierto que hace ya siglos que los bienes naturales de América Latina, en toda su dimensión, fueron incorporados al sistema mundo capitalista como bienes destinados para la retroalimentación del capitalismo global, ha sido durante esta última década y media el período en el que se ha agudizado esta dinámica de la modernidad/colonialidad. Este retroceso nos lleva al renacentismo, cuando Sir Francis Bacon plasmaba su ansiedad mediante el siguiente mandato: que “la ciencia torture a la Naturaleza, como lo hacía el Santo Oficio de la Inquisición con sus reos, para conseguir develar el último de sus secretos...”.

Por otro lado, los autores dejan claro en el transcurrir de las siguientes páginas que la transferencia en forma de subsidios del excedente extractivista —eso que podemos definir como políticas sociales compensatorias— careció, mientras duró, de perfil transformador y mucho menos movilizador para la sociedad. En palabras de Carlos Lessa, quien fue nombrado por Lula da Silva para presidir del BNDES en 2003 y luego fue cesado por el mismo tras negarse a apoyar la política neoliberal gubernamental, “pasamos de ser una periferia inquieta a una periferia conformista”, denunciando también dicho funcionario que no existió traspaso de renta de los más ricos hacia los pobres, ni cambios estructurales, pese a que los tres primeros gobiernos petistas fueron “razonablemente exitosos”.

Sería el propio André Singer, quien ejerció como portavoz de la presidencia de Lula, quien reconocería que “como el lulismo es un modelo de cambios dentro del orden, y hasta un refuerzo del orden, por lo tanto no puede ser movilizador”. Pues así las cosas, queda claro que las políticas sociales mejoran transitoriamente los ingresos de los beneficiarios, pero no modifican su lugar estructural. En tan solo dos palabras: no transforman.

Brasil está sumido desde hace dos años en la peor recesión económica que ha vivido el país en más de un siglo, y los autores de esta obra nos dicen que el país vive una “crisis de hegemonía” donde no hay fuerzas políticas con propuestas consistentes capaces de darle algún rumbo al país en la disputa por el poder. Textualmente los autores nos indican que “en 2013 el PT perdió las calles; en 2014-2015, el Congreso”. Sin embargo y pese a la revitalización de nuevas izquierdas autonomistas superadoras

del paradigma del *Partidão* (el PT como partido de masas), desde su nueva lógica de oposición y carente de voluntad por ejercerse autocrítica alguna, el petismo parece que se rearticula como bajo una “renovada” hegemonía *post-impeachment* ante los sectores de la izquierda brasileña. En todo caso y pese a esta frustrante situación, esta por verse si las operaciones judiciales derivadas del Lava Jato permiten la presentación de la candidatura de Lula a las próximas elecciones presidenciales.... ya que como bien se indica en el libro, “no existe liderazgo en el PT más allá de Lula”.

Como no podía ser menos, el libro aborda la impresionante secuencia de escándalos de corrupción que ha dejado espantada a la ciudadanía del Brasil e incluso a la ciudadanía latinoamericana dadas sus implicaciones en el resto del subcontinente. En el eje del huracán político institucional está el sistema de financiamiento de partidos, mientras que el eje del cuestionamiento ético de las izquierdas se centra en el Partido de los Trabajadores. Desde el *Mensalão*, red de desvío de dinero público que garantizaba que varios diputados votaran según la orientación establecida por el gobierno federal, hasta la Operación Lava Jato –según los autores, “símbolo de la corrupción en Brasil entre el sistema privado y el público”-, el partido de masas más importante de Latinoamérica como organización política está desacreditado y el pacto social derivado de la Constitución de 1988 quedó en la picota.

Entre 1993 y 1997 Brasil vive un momento de refundación de sistema de financiamiento de sus partidos políticos, materializándose mediante la aprobación de la Ley de Partidos Políticos de 1995 y la nueva Ley Electoral de 1997. A partir de ahí se determinaría que sus fuentes de financiamiento pasaban a ser prácticamente ilimitadas, se permitirían las donaciones de empresas y apenas existirían techos para las donaciones y gastos. Lo anterior permitió, como se recoge en el libro, que el líder del Movimiento Sin Tierra (MST) Joao Pedro Stedile denunciara que la representación política brasileña está secuestrada por el capital, pues en la práctica las diez mayores empresas del país eligieron al 70% del Legislativo. En las últimas elecciones presidenciales del 2014 más del 80% de las donaciones a los principales contendientes de la campaña provenían de estas mismas empresas. Fruto de lo anterior y como consecuencia de la presión social derivada de la Operación Lava Jato, la Corte Suprema de Brasil decidió prohibir en septiembre del 2015 la financiación de campañas electorales y partidos por parte de empresas, corazón del mega-escándalo de corrupción en la estatal

Petrobras y en la red de constructoras privadas encabezadas por Odebrecht. Las elecciones municipales realizadas en octubre del 2016, donde el PT sufrió su mayor debacle electoral en veinte años perdiendo 374 alcaldías, fueron las primeras en las cuales se aplicaron dichas restricciones. En todo caso, en Brasil se mantienen serias dudas sobre la capacidad del sistema de fiscalización que permitiría garantizar el cumplimiento de las nuevas reglas.

Esta obra también transita por los caminos del llamado “maldesarrollo” y neoextractivismo, abordando la lógica brasileña desde su potencialidad como país top minero. Brasil está junto a Rusia, Estados Unidos, Canadá, China y Australia, en el alto ranking de la minería, lo que le convierte en territorio codiciado para las corporaciones transnacionales extractivas, generándose la correspondiente afectación sobre las tierras comunales indígenas. La acumulación por despojo ha sido una práctica que ha dejado en América Latina varios millones de hectáreas libres para el desarrollo de megaproyectos, minería, ganadería extensiva y agronegocios, así como el desplazamiento de un número grande de comunidades en diversos países de la región, elemento que no que podía ser ignorado por Lora y Lao.

La relación entre el capital y el Estado brasileño, ampliamente abordada por autores del libro en diversos momentos diferentes, viene de lejos. El movimiento de internacionalización de las corporaciones brasileñas de construcción civil inició en los años 1970 con la recomendación de la dictadura militar de obras de gran porte, con vías de alta velocidad y usinas hidroeléctricas, lo que permitió el aumento de ganancias y la conformación de conglomerados empresariales. A inicios del presente siglo y con la acción del BNDES, estas firmas se proyectan exteriormente con el apoyo central de la diplomacia brasileña. Desde el Palacio de Itamaraty se ha intercedido en toda la región a favor de Odebrecht o de Andrade Gutierrez, siendo las contrataciones impulsadas desde las embajadas brasileñas en diferentes países de región y también de África, lo que fue calificado eufemísticamente bajo el término de “promoción comercial”. Fruto de este “ejercicio patriótico”, Lora y Lao nos indican que “en la lista que divulga la revista Fortune, cinco empresas brasileñas figuraron entre las quinientas mayores compañías del mundo: Petrobras, Vale, Itaúsa, Bradesco y Banco de Brasil. Estos monopolios tuvieron, por un lado, el respaldo de Lula y el Estado; por otro, financiamiento del BNDES”.

El libro aborda esa relación entre el poder político y el económico, posicionando el rol de Lula da Silva en diferentes crisis mantenidas por algunas de estas corporaciones en diferentes países de la región. Al fin y al cabo, y tal y como se expresa en algún momento de esta obra, administrar el Estado te transforma en “una unidad indiferenciada con el capital”. En la actualidad y destapada posiblemente apenas una parte del iceberg corruptivo institucional brasileño mediante la Operación Lava Jato, estas empresas le hacen un flaco favor al país mezclando su imagen con la de Brasil, lo cual en acertada opinión de los autores “afecta negativamente el imaginario de la sociedad”.

Como bien sabemos, el populismo es una lógica política que plantea una construcción imaginaria del “pueblo”, lo cual implica la articulación de una comunidad política homogénea que a su vez se identifica con ese concepto tan manoseado y discutible en el mundo globalizado como es el de “patria”. Este “nosotros” el “pueblo” se articula entonces bajo parámetros antagónicos con respecto a un “ellos” la “élite”, algo ya venía determinado de las lógicas de antagonismo marxista: explotados vs explotadores. Los autores bien cuestionan en el transcurrir de las siguientes páginas como la supuesta irrupción de lo “plebeyo” en la política no haya significado otra cosa que el incremento en la acumulación de capitales por parte del 10% privilegiado de la población de nuestra región. La consecuencia deriva de una cita de Álvarez Junco que está incorporada en el libro: “el rasgo común a los populismo es la ausencia de programas concretos”. Es por ello que Lora y Lao parten a reflexionar sobre las alternativas, planteando la autonomía y entendiendo, tal y como nos lo están enseñando una diversidad de indígenas con pasamontañas en el sur de México mediante sus caracoles y juntas de buen gobierno, que la autonomía de la colectividad no puede realizarse más que a través de la autoinstitución y el autogobierno, lo cual es inconcebible sin la autonomía efectiva de los individuos que la componen.

Entrados ya en el mundo de las alternativas, la obra explora diferentes facetas de la decolonialidad, el cuestionamiento de la forma partido, la representación como *contrarius* a la democracia, el feminismo, el postdesarrollo y otros tantos nuevos y no tan nuevos paradigmas que están conformando la actual lógica de prácticas emancipatorias en nuestra región. Su construcción final ha pasado a ser urgente dado el carácter estructural de la crisis que transversaliza en la actualidad al sistema mundo.

Si bien sabemos desde los *Grundrisse* de Marx que la tendencia hacia crisis cíclicas es una ley inherente al capitalismo, el momento actual requiere transformaciones de carácter civilizatorio. Es un hecho indiscutible que el sistema capitalista ha generado periódicamente docenas de crisis cíclicas por lo menos desde 1825, cuando la primera auténtica crisis de sobreproducción internacional golpeó al planeta. Ahora bien, la forma en la que se desató la crisis del 2008, a diferencia de otras anteriores, demuestra que el sistema económico global ya no es tan sólido como lo era antaño, condición que hace que su recuperación este siendo especialmente lenta y altamente conflictiva. En un mundo de crecimiento ralentizado como el que vivimos tras el crack de las *subprime*, el endeudamiento global crece como la espuma alcanzando en la actualidad unos 200 billones de dólares (tres veces el tamaño de la economía global). El modelo aplicado para la salida de la crisis económica del 2008, a diferencia de otros modelos aplicados sobre otras crisis en otros momentos, vaticina un potencial desastre a medio plazo, abocándonos a un fuerte colapso del sistema financiero global. No es casualidad que el propio Larry Summers, quien ejerciera como secretario del Tesoro en la época de Bill Clinton y también como consejero presidencial durante la pasada administración Obama, haya llegado incluso a desarrollar la llamada tesis del “estancamiento secular”, según la cual el tipo de interés de equilibrio en la economía habría bajado tanto que las políticas monetarias ultraexpansivas no serían suficientes para estimular la demanda, llegándose a la conclusión que el crecimiento sólo se conseguirá en adelante por medio de burbujas que tras estallar vuelven a generar una economía maltrecha.

Pero más allá de que no hayamos sido capaces de salir aún de la crisis del 2008 o estemos en un prolongado reflujo post-crisis, lo que pasa a ser particularmente preocupante es que a diferencia de otras crisis esta no es tan sólo económica, sino una combinación de varias crisis lo que la convierte en una crisis multifacética. Tomando como base la tesis de José María Tortosa, podríamos afirmar que el momento actual combina al menos siete crisis distintas, pues además de la económica, tendríamos a nivel global una crisis de carácter ideológico, otra energética, la alimentaria, la medioambiental, la democrática y por último una de carácter hegemónico.

Aquí toma sentido nuevamente Wallerstein, cuando nos indicaba que el capitalismo es un sistema y que como todos los sistemas tiene una vida

no eterna (los sistemas pasan por tres fases: creación, desarrollo y declive), motivo por el cual podríamos estar asistiendo a su última etapa, si bien está puede prolongarse aun en agonía durante décadas y generando cada vez mayor daño sobre la humanidad.

Siendo así y tomando como referencia a mi buen amigo y cómplice de múltiples investigaciones y proyectos Raúl Zibechi, “los pueblos enfrentamos ya no una tormenta/huracán/tsunami, sino algo mucho más complejo”. Zapatistamente hablando, estamos ante una hidra de mil cabezas que nos ataca desde diferentes lugares, pero en los mismos tiempos y con modos igualmente asesinos.

Lora y Lao nos cuentan que “la experiencia de Brasil, la generación de movimientos otorga especial importancia a la creación de espacios donde los diversos se encuentran y se reconozcan, donde se elaboren códigos y lenguajes comunes con base en sus diferentes modos de hacer y estar en el mundo”. Es así como se construye poder propio, donde la resistencia se convierte en la forma de vida, porque precisamente es la resistencia lo que determina el valor de la vida, liberando espacios y territorios. Se trata entonces, nos dicen los autores, “de resignificar lo social desde el territorio, desde la tierra y la cosmogonía de las altas culturas agrícolas, de sus lógicas colectivas de socialidad y de nuevas políticas que respondan a las demandas culturales y se opongan a la fragmentación y homogenización imperial”.

Para ello es necesario superar el discurso/confusión que llevó a que los pueblos latinoamericanos durante el ciclo progresistas a que dejaran de levantar sus puños para levantar tarjetas de crédito, lo que a la postre derivó en endeudamiento familiar fruto de la ideología del consumo y no en valores de solidaridad colectiva.

Es por ello que la opción por la vida es hoy el único camino posible, pero demanda de una nueva solidaridad aún en construcción. Como diría Hinkelammert, “aquella que reconoce que la opción por la vida del otro es la opción por la vida de uno mismo”, principio que rompe con el esquema de valores individualistas, de la economía fácil, de la depredación de una Naturaleza convertida en objeto, y que sitúan a nuestros pueblos en un nuevo paradigma civilizatorio que pasa a confrontar con ese pasado que gramscianamente no termina de morir y por lo tanto impide el nacimiento de lo nuevo.

Bien, pues es en ese sentido en el que este libro camina, entendiendo como muy bien se dice entre sus páginas que “el pensamiento crítico debería de tener como punto de inicio una forma específica de realidad: la realidad de las formas de lucha que se oponen a la ley de la dominación”. Para ello hay que escuchar el sonido del mundo derrumbándose y el del nuestro resurgiendo, opción por la que opta este libro en su última parte, mediante una serie de entrevistas a compañeras y compañeros brasileños en sus distintas geografías, tiempos y modos.

INTRODUCCIÓN

A pesar de la llegada de una serie de gobiernos progresistas en América Latina, el neoliberalismo nunca se fue. No podemos entender al neoliberalismo sólo como una ideología, un programa de gobierno o un paquete de ajustes estructurales: las formas de acumulación en la globalización neoliberal, impulsadas primordialmente por la lógica de la acumulación por desposesión, también se reproducen en procesos moleculares, escurridizos, híbridos, que pueden, a su vez, coexistir con formas de control estatal. El gran capital globalizado no sólo golpea —el shock neoliberal—, sino que se escurre, se mimetiza, se filtra, se camufla, de ahí la idea de lo “trans”, propio del análisis del capitalismo tardío. Por esto, necesitamos comprender el carácter complejo, diverso e híbrido (e incluso diríamos *sui generis*) de los mecanismos de acumulación que operan en los Estados progresistas Latinoamericanos. Como afirma David Harvey, la neoliberalización pura no funciona. De ahí que el neoliberalismo post Consenso de Washington sea un neoliberalismo mutante (Terán Mantovani, 2014).

Este libro pretende reflexionar y debatir acerca del momento histórico que vive el proceso político brasilero. Algunos lo caracterizan como fin de ciclo desarrollista, crisis multidimensional, crisis del posneoliberalismo, de gobernabilidad, entre otros. En efecto, Brasil vive una crisis que no sólo está afectando internamente el futuro de un posible proyecto alternativo, sino que puede trascender fronteras y atentar contra gobiernos de países que siguieron ese patrón de cambio, desencadenar procesos judiciales contra líderes de la izquierda de la región, comprometidos en las redes de corrupción, deslegitimar cualquier perspectiva antineoliberal, disolver lo avanzado con respecto a la integración de países progresistas en la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) o los BRICS (acrónimo de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), modificando la correlación internacio-

nal de fuerzas a favor de la potencia imperial que nos acecha: Estados Unidos.

Esta investigación proviene —más que de intereses académicos y de los campos conceptuales que los investigadores han venido configurando— de los sujetos que hacen parte de las políticas de Estado y las organizaciones en lucha contra la recolonización y por la emancipación. La investigación parte de la necesidad de realidad, donde el sujeto, en un determinado momento histórico, consciente de tal contexto, requiere comprometerse con ese momento. Es la forma en que investigador y actores están en un momento y se reconocen ante el contexto que requiere un conocimiento. La conjunción de estas necesidades de realidad es lo que nos llevará a configurar esta investigación necesariamente transdisciplinaria.

Vimos la urgencia de emprender un estudio que nos diera pistas sobre cómo se estructura el poder y el sistema, y cómo las organizaciones y movimientos sociales² realizan procesos de formación para ver las potencias y alternativas que allí se erigen en torno a la constitución de subjetividades políticas. En tal sentido, se trata de una articulación de necesidades de realidad y un esfuerzo por incorporar al sujeto resistente (con la conciencia crítica suficiente). Se trata de realizar una investigación acerca del proceso de recolonización colectiva sobre el saber de la experiencia y de los sujetos del poder y el antipoder. Recuperamos la observación metodológica de Zibechi para examinar lo que él llama la tercera transición hegemónica. Propone que comprender este proceso implica conocer las nuevas relaciones de fuerzas, las alianzas que se están tejiendo por arriba, los sectores que se incorporan al bloque en el poder y aquellos que son marginados en el nuevo escenario político y social (Zibechi, 2012).

² Los movimientos sociales los concebimos como expresiones colectivas de descontento social con expectativas de cambio, forma de acción colectiva con un mínimo de presencia espacial y temporal, en la cual un grupo más o menos organizado recurre a acciones generalmente extra institucionales a fin de promover o impedir ciertos cambios, impactando en los regímenes y sistemas políticos. Obedecen a desbordes historizados de la sociedad sobre el Estado y mantienen continuos flujos constituyentes de acciones demandando derechos, transformación de regímenes o instituciones políticas, pudiendo modificar sistemas de creencias, mecanismos y tejidos de adhesión y de movilización colectiva con efecto societal y estatal. Participan de una politización del espacio público permitiendo modificar el espacio legítimo donde se produce la política, rediseñar la condición socioeconómica y étnica de los actores políticos, hasta mutar los fines y sentido de la política.

Hacen falta análisis con cartografías o mapas rudimentarios de las relaciones de poder para orientar sin determinar, y mostrar los obstáculos que hay por delante y los posibles atajos a la investigación. No podemos pensar en una metodología estándar o rígida de este instrumento, máxime si se incorpora el componente de participación social, el cual es fundamental. Los problemas y conflictos territoriales y ambientales responden a factores e intereses de orden político, económico, social e institucional, relacionados mayormente con actividades extractivas, como la minera y las industrias petrolera, gasífera y maderera. Por ende, en esos países los escenarios son complejos y variables; se vienen recreando a nivel central y regionalmente principios, criterios y metodologías disímiles de ordenamiento territorial por cuestión de escala, temporalidad, recursos disponibles (instrumental, técnico), marco institucional-legal, participación y articulación de los sujetos, dimensión clasista, cultural, étnica.

Se trata de impulsar una iniciativa de investigación hacia la generación de conocimiento que impacte las agendas de las organizaciones y movimientos societales y políticos, y, a través de estos, las políticas públicas que buscan responder a las necesidades, intereses y expectativas de los individuos y los grupos sociales emancipatorios. Este conocimiento debe ser socialmente válido y pertinente, capaz de interpelar y movilizar las estructuras y voluntades que dan sustento a las dinámicas de exclusión y sometimiento, y debe generar oportunidades y develar horizontes para romper con lógicas que ponen en entredicho la dignidad humana. Debe ser un aporte a la transformación de realidades indeseables y, desde todo punto de vista, intolerables.

Para ello, necesitamos estudiar cómo en los últimos quince años se han configurado las prácticas y estrategias de quienes comparten el poder en torno a la ganancia, el control, la competencia y el poder. El dominio no sólo se ejerce sobre la fuerza de trabajo y sobre el proletariado, sino sobre un conjunto de campos, ámbitos, territorios, pueblos y poblaciones. No sólo se puede suponer la existencia de los monopolios como condición de posibilidad histórica del capitalismo brasilero; es menester explicar la formación del monopolio de los medios de producción, de la tierra, banca, comercio y los medios de comunicación. Todo poder es una relación social de dominación, explotación y conflicto. Esos tres elementos constitutivos de toda relación de poder están allí en medidas y formas diferentes cada cual, según las situaciones, los espacios y tiempos concretos.

Más que un cambio de ciclo, estamos hablando de una derrota del nuevamente reciclado reformismo caudillista y neopopulista, que viene de hace medio siglo y carece de un programa político emancipatorio (entendido como anticapitalista), por su ambigüedad o inconsistencia en la gestión de la acumulación y de la lucha de clases. No existe proyecto de gestión política del capital posible de ser emancipatorio y que no sea represivo. Más bien podríamos hablar de un reinicio del ciclo de las luchas emancipatorias. Pero para pensar hoy en una nueva articulación entre sociedades en movimiento y lucha de clases, entre liberación nacional y el problema étnico-clasista, hay que partir de una perspectiva centrada en los cambios en la lógica social o en las transformaciones de las relaciones sociales que trajo el capital. Una vez que entendemos que el mismo proceso de despojo y creación del trabajo libre moderno es el proceso de reorganización del nexo social donde se gestan las prácticas emancipatorias y los movimientos sociales, se puede volver a plantear la pregunta por la composición de un sujeto revolucionario complejo y diverso, unificado por un proyecto emancipador socialista que corresponda con el momento histórico.

Antes de junio de 2013, en el país ya acontece un ascenso de luchas, una multiplicidad desconcertante de enfrentamientos, unos organizados y emancipatorios y otros reactivos. Para María Orlanda Pinassi, el momento histórico está marcado porque se agregan activismos fragmentados, contingentes y, mayormente, espontáneos e ideológicamente confusos. Sin embargo, para ella resurgen como manifestaciones de liberación de la clausura que representó el extrañamiento ideológico impuesto durante más de diez años; sería la salida del control de la política de consenso del lulismo. La consecuencia consistirá en que la parte más disconforme de los manifestantes será duramente reprimida y criminalizada por la violencia policial (Pinassi, 2015).

En ese sentido, hay que remarcar que los movimientos sociales y antineoliberales son anticoloniales y poseen un más definido perfil cultural y de anclaje territorial. Permitieron visualizar claramente, con sus prácticas de resistencia, la persistencia de esquemas y prácticas de neo-colonialismo y de ‘colonialidad del poder’ en sus sociedades. González Casanova (1969), en particular, lo denomina ‘colonialismo interno’. En realidad, nunca fue sólo interno; siempre fue externo-interno.

Las luchas acontecen más fuertes en tanto hacen a las otras luchas parte integrante de sí mismas. A su vez, integran las restantes si se da con

proyecto, objetivos políticos y sociales claros, organización y capacidad de poner en práctica una política integral independiente. De lo contrario, están destinadas a extinguirse por sí mismas, a ser aniquiladas o fácilmente derrotadas y divididas por quienes sí tienen claridad y organización. La contribución a la gestación de sujetos que confluyan en movimientos sociales y movimientos políticos con vocación y posibilidades de transformar sólo puede hacerse desde el propio movimiento; esto es, desde una organización-movimiento que trascienda definitivamente el electoralismo, el parlamentarismo y tenga posibilidades de extenderse. La *fuerza social* se refiere a determinados segmentos de población organizados que son reconocidos por estos sectores y por otros adyacentes, como fuerza de opinión, legitimidad y lucha en torno a sus problemáticas relevantes.

La potencia política es la síntesis de una fuerza social y una fuerza teórica y mítica –en perspectiva mariateguista– cuya emergencia ocurre desde el campo de la práctica, de la acción. Se caracteriza por su capacidad convocante, dada su legitimidad y verosimilitud; por tanto, es capaz de definir objetivos y caminos susceptibles de transformarse en práctica política y social alternativa a partir de las condiciones existentes. Una fuerza teórico-programática resulta de la sistematización de la experiencia propia y colectiva para otorgar sentido al problema de la construcción y el cambio social. La fuerza teórica es la expresión de la potencia movilizadora y la verosimilitud de una visión precisa pero abierta de la realidad y su transformación.

Intentamos juzgar a los partidos y gobiernos por su práctica (sin dejar de lado la historia de su línea política, las campañas políticas en que se compromete y sus luchas políticas internas); por la confrontación entre sus posiciones cuando están en la oposición y cuando están en el poder; por el programa para transformar la sociedad, o incluso por los valores e ideas que inspiran su identidad; por la composición social de sus miembros –militantes o simpatizantes–, de sus electores, o de su dirección; por el régimen interno de su funcionamiento; por las formas de su financiamiento o por sus relaciones internacionales. Muchos ya rechazan la agitación de divisiones y de inestabilidad generalizadas manipulada por los medios de comunicación que desinforman y distorsionan la realidad, lo mismo que la actitud reaccionaria del congreso y los golpistas que pisotean la constitución y conforman una anárquica oposición.

Para ello, precisamos esclarecer algunas categorías básicas que nos parecen imprescindibles para entender Latinoamérica y otras zonas del globo y también para darle contenido e historicidad a las categorías “colonial” y “colonialidad”: neoliberalismo, neodesarrollismo, capitalismo colonial y neo populismo.

Neoliberalismo y neodesarrollismo-neopopulista son compatibles. El neoliberalismo es más que sólo un recetario que prescribe cómo debe intervenir el Estado en una economía financiarizada. Comprende otros aspectos, no menos importantes. Es, principalmente, una estrategia política e ideológica que reformula la dominación, en los términos y condiciones que reclaman las formas contemporáneas de producción-acumulación de plusvalía que ahora se centran en la apropiación masiva de empresas, territorios y trabajadores. Es un proyecto de integración neoliberal que cambió todo: leyes, normas, convenciones, procesos económicos y políticos, valores y cotidianidades.

El neoliberalismo proporciona instrucciones precisas para arrebatar patrimonios y derechos a las poblaciones, y transferirlos a grupos privados que gestionan esos recursos. Son las técnicas, procedimientos y saberes de la pérdida y el saqueo modernos, aunque con procedimientos prototípicamente coloniales. La entrada en vigor de normas desregulatorias generó un estado permanente de excepcionalidad e ilegalidad, que abarcó al antiguo sistema de intermediación política basado en el quebranto selectivo de la ley, ahora indiscriminadamente extendido al trabajo vivo. Sin embargo, esta geoestrategia se apoya también en la legalidad, en constituciones, tratados y leyes que aceleran el avance de la agenda neoliberal: la construcción de una población consumista e individualista y al mismo tiempo carente de personalidad jurídica o política, vidas precarias y desechabilidad de grandes sectores sociales.

El neoliberalismo no se define sólo en el nivel de abstracción de las políticas económicas, sea monetaria, fiscal o cambiaria. No sólo se trata de políticas económicas ortodoxas, de control de la demanda agregada para combatir los problemas inflacionarios y fiscales. El neoliberalismo se define por la estabilización macroeconómica, control de precios y de los equilibrios fiscales, condición previa, necesaria, sin importar la política económica. En eso coinciden los gobiernos neoliberales y los llamados progresistas. Y también por la estabilización, donde también encajan las reformas estructurales de liberalización y apertura de los mercados, parti-

cularmente el mercado financiero y de trabajo, así como las privatizaciones. Esto profundiza la mercantilización y promueve la competencia, las inversiones, el aumento de la productividad, el crecimiento, e inclusive la distribución del ingreso. En esto las coincidencias fueron totales. Neoliberalismo y neodesarrollismo pueden ser totalmente compatibles, si este último se subordina al primero.

El neoliberalismo es mucho más que la prioridad de la lógica del mercado en la regulación de la economía; reglamenta la vida de la sociedad en su conjunto. Es más que la privatización de la economía y liberalización del comercio internacional; es también saqueo y legalización de la economía ilegal. Es más que el cuestionamiento del Estado como regulador de la economía y promotor de políticas sociales, pues el Estado sigue regulando una y otra para el interés privado, aunque desregule los mercados financieros y prefiera la autorregulación controlada por las empresas multinacionales, el FMI y el BM.

¿Qué balance puede hacerse después de casi quince años de esos gobiernos progresistas? Los gobiernos no se propusieron revertir las privatizaciones, el grado de apertura económica, incorporar derechos laborales o desaparecer las pensiones privatizadas; siguen sufriendo las imposiciones económicas y políticas de los grupos dominantes internos y externos. La derecha tradicional reconquista espacios políticos, dentro de los propios gobiernos. No se cambiaron en lo sustancial las políticas económicas de equilibrio, estabilización, ni las privatizaciones; pero sobretodo no se rompe con las reformas estructurales que elevaron el grado de dependencia de las economías, sin una estrategia que cuestione ese carácter colonial frente a la economía capitalista mundial. Y eso es porque en los marcos del capitalismo no es posible. Las distintas perspectivas político-teóricas no se definen por lo que dicen defender, sino por lo que proponen política, teórica y prácticamente para cada una de ellas.

Los neoliberales siempre tuvieron propuestas para las políticas sociales: focalizadas, compensatorias, con base en los individuos más frágiles, y se hizo con los gobiernos locales, las ONG, fundaciones y otras entidades de la “sociedad civil”, coordinadas con la empresa y el gobierno. Las políticas sociales aplicadas por los gobiernos progresistas, en su mayoría, no están fuera de los marcos propuestos por el neoliberalismo, pero se diferencian porque se centran en los gobiernos, los cuales las necesitan para mantenerse en el poder, y las hacen parte de sus recetas y programas.

Lo que propone el pseudoneodesarrollismo actual se reduce a bajar las tasas de interés a niveles inferiores a las tasas de ganancia del capital productivo para que los capitales inviertan y acumulen en proceso productivo, generando crecimiento y empleo, reduciendo en algo la valorización financiera en este aspecto pero dejándoles o abriéndoles otros campos. La propuesta del neodesarrollismo frente al neoliberalismo no es enfrentarlo donde él se define, esto es, en las reformas estructurales. Incluso se habla a veces de la necesidad de profundizar las reformas, modificando apenas las políticas económicas. Por eso, el neodesarrollismo es una falsa alternativa al neoliberalismo. Es más bien un complemento necesario que terminó en el elogio por parte del FMI.

Además, la forma que el capitalismo encuentra para responder a los efectos de su crisis actual, tanto en el centro de la acumulación mundial como en las economías dependientes (lo cual nos incluye), es profundizar el neoliberalismo más radical. La crisis actual implica una rebaja de las tasas de ganancia, una vez que gran parte de los capitales se especializaron meramente en apropiarse de la riqueza, sin contribuir directamente para su producción.

Ahora bien, la acumulación originaria se hace permanente desde la misma independencia. Hoy algunos la denominan acumulación por desposesión o despojo, no es sólo un saqueo de los recursos naturales, que se inicia desde la colonización hace más de cinco siglos; ni simplemente un proceso de proletarianización y privatización, que también transcurre desde que se inicia el capitalismo en el siglo XIX; es, desde ese momento, sobre todo una relación financiera de intercambio desigual, cuando se instaura la deuda acogida por el centro para absorber plusvalor de países donde la composición orgánica de capital no permite la inversión vía reproducción ampliada.

El capitalismo, después de más un siglo, ha dado por finalizado el proceso de modernización, acogiendo como estrategia ampliar mercados y tratar de acumular plusvalor sin tener que pasar los problemas de la producción. Un rasgo de esta modalidad de acumulación por despojo es que el capital intenta producir plusvalor sin crear nuevos medios de producción y subsistencia. Así, el legado neoliberal en América Latina ha sido un proceso de desindustrialización y reprimarización extractivista de la economía, acompañada de la intensificación del vínculo entre la institu-

cionalidad de los Estados nacionales y los organismos dependientes del imperialismo informal.

Manfred Gerig considera que el continente ha sido incapaz de crear mecanismos efectivos para cambiar este proceso acelerado de acumulación por desposesión. Desde los años ochenta, y más aun durante la última década, posterior al 2009, asistimos a un proceso de intensificación de la actividad imperialista. Cíclicamente, el ataque a las monedas se convirtió en el elemento mediante el cual la cooptación de plusvalor hacia el Norte global (vía pago de la deuda, fuga de capitales y repatriación de ganancias) daba cuenta de un proceso de expropiación de las riquezas: la “década ganada” no fue tal. Esta estrategia imperial se intensificó con el previsible aumento de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal estadounidense, es allí cuando se completará el proceso de externalización de la crisis, siendo América Latina uno de los principales receptores. Las enormes cargas de deuda y la debilidad de las monedas intentarán convertirse en el caldo de cultivo para un amplio proceso privatizador (Manfred Gerig, 2015).

El capitalismo colonial, que es más colonial que capitalista, en algunos países más que en otros, trata de una nueva forma de producir, pues incluye explotación y opresión colonial con nuevas modalidades. Se desarrolla en un oculto mundo colonial y va más allá de las administraciones coloniales. La “independencia” de Portugal o España confirmó que un nuevo colonialismo inglés sería más útil, duradero y estable que el colonialismo preanglosajón, entendido como un sistema de dominación institucionalizada de un Estado externo sobre criollos y pueblos que no están bajo su órbita territorial estatal.

Esto ocurre con la participación de los sectores dominantes en cada país con supremacía y sujeción étnico-clasista. Serán los españoles, criollos y caciques, que antes y después de la independencia desarrollan un “colonialismo interno”, quienes irán construyendo un capitalismo y una dominación no sólo militar, sino también económica, política y cultural. Este es en realidad un colonialismo externo-interno que funcionó sometido a grandes potencias y que corresponde a una estructura de relaciones sociales de dominio y explotación entre sujetos clasistas y culturales heterogéneos, de diferentes civilizaciones. Se renueva la noción del dominio y la explotación de los nativos indígenas, afrodescendientes, mestizos y otras etnicidades de parte de los nativos más blancos. La sociedad colonial

construyó su propia sociedad nacional excluyente-incluyente de mayorías-minorías indígenas y afrodescendientes.

Las relaciones coloniales son mucho más que un aspecto de las relaciones étnicas y de clase; lo colonial es la totalidad concreta. Esto es, el racismo, la discriminación, la dependencia política, la inferioridad social, las relaciones de género, la sujeción económica y la incapacidad jurídica van entrelazados con la acumulación primitiva y las relaciones étnico-clasistas y coloniales sobre la base de la propiedad de los medios de producción. Es una relación de dominio y explotación de una población por otra, ambas con sus distintas clases entrelazadas y en potencial oposición. En el racismo propiamente moderno, posición de clase y pertenencia a una misma etnia suelen coincidir. Las clases sociales tienen “color”; su conformación no es algo privativo de la esfera económica; también es de la esfera política e ideológica, y ellas conservan plena vigencia, incluyendo los cambios históricos en las clases nativas y sus relaciones de explotación y dominio.

En América Latina, el capitalismo y la sociedad de clases no son sólo un producto de una lenta evolución interna; también vino de fuera y se produjo marginalmente, en una estructura colonial servil y esclavista sobre pueblos originarios del lugar, sin condiciones de acumulación, autosustentadas y autónomas. En estas realidades, tanto el mercado como el sistema de producción tuvieron que adaptarse a las estructuras socioeconómicas de la hacienda y la minería de origen colonial para poder expandirse y consolidarse. Ello supuso que por la ausencia de varios determinantes específicos, estos se articulen de una forma particular con un Estado autoritario y liberal artificial, sin contenido nacional.

No obstante, la expansión de un capitalismo colonial y periférico alcanzaría proporciones suficientes en el siglo XX como para hacer de la ordenación de clases sociales el núcleo estructural y dinámico de la organización social. La manera en que el capitalismo se objetiva y se irradia históricamente como fuerza social es diferente. En este contexto, cobran valor las ideas de Quijano, quien, sin embargo, en los últimos años parecería que deriva las relaciones coloniales de las ideas. Sostiene que el capitalismo es el resultado de la convergencia de dos procesos históricos bien definidos: por un lado, la idea de raza; por otro, la articulación de todas las formas históricas de relaciones de producción (esclavitud, servidumbre, pequeña producción mercantil) alrededor del capital y del mercado mundial. De tal modo, la idea de raza y la división del trabajo —y con ello el nacimiento de

una nueva estructura de clases— constituyeron un todo unificado y crearon una nueva división global racial del trabajo.

La perspectiva desarrollista para el atraso brasileño, cuyo modelo se practicaba desde 1970, no fue algo positivo para el futuro de la clase trabajadora. Como señala Pinassi, este modelo no fue más que un plan de interacciones transnacionales, una financiarización total de la economía exigida por organismos multilaterales (como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional), que penetraba la médula de la sociedad brasileña. Consistió en modernizar al sector agricultura, foco permanente de conflictos en todo el territorio nacional; desechó una reforma agraria, imponiéndole a cambio un nuevo y agresivo patrón de producción tecnológico: la Revolución Verde, que impulsó un violento proceso de expropiación de millares de familias campesinas, indígenas, de trabajadores rurales de sus tierras y sus formas tradicionales de vida. Se les transformó en proletarios precarios, con bajos salarios y desprovistos de derechos para proveer la demanda de fuerza de trabajo en el campo y en las industrias urbanas, también en ascenso.

Este cambio radicó, cada vez más, en la utilización de tecnologías basadas en máquinas, en semillas transgénicas auto-reproductivas, en el consumo de insumos químicos y de venenos. Bajo el comando de las transnacionales del sector, el modelo hegemónico por la *comoditización* dominó el país, beneficiándose del desmantelamiento progresivo de la mal sedimentada industria de bienes de producción, de la reestructuración productiva, del desempleo estructural, del debilitamiento de los sindicatos y la represión de los movimientos sociales, de la incidencia generalizada del trabajo informal, precarizado, esclavizado, de la súperexplotación del trabajo infantil y femenino. Brasil se adentraba en el mundo del imperialismo, apostando por un renovado extractivismo, que no es más que capitalismo colonial. La proletarización más plena de Brasil no se basó en la articulación social predominantemente productiva del capital, sino en la destrucción ambiental.

En las últimas décadas, se reimpuso el modelo primario exportador, similar al que conoció la región desde la conquista, reinició en la segunda mitad del siglo XIX, y se recrudeció al terminar el siglo XX y el inicio del XXI, acompañado de particulares mecanismos políticos. Esto ha venido acompañado de desindustrialización, penetración renovada del capital extranjero, principalmente de las multinacionales imperialistas, la expropiación

ción de bienes comunes y la imposición del dogma de las ventajas comparativas, como criterio que justifica la especialización en producir bienes primarios.

El Estado no ha servido para regular con cierto grado de eficacia a los grandes depredadores, que predominan en las finanzas, en los servicios públicos, en las concesiones de obra pública y en sectores industriales que sólo sobreviven gracias a subsidios de niveles insostenibles. El extractivismo, de acuerdo con Vega Cantor (2012), no se refiere solamente a la explotación de minerales o hidrocarburos, sino que incluye a otras actividades económicas. El extractivismo se podría definir como el conjunto de actividades económicas –con sus correspondientes derivaciones militares, sociales, políticas, ideológicas y culturales– que posibilitan el flujo de materia, energía, biodiversidad y fuerza de trabajo desde un territorio hacia los centros dominantes del capitalismo mundial, donde se consumen a gran escala para garantizar la reproducción del capital. De este modo, retornan las economías de enclave en la medida en que las inversiones extranjeras de “tipo productivo” que se implantan en el territorio operan con la mirada puesta no en el mercado interno sino en el mercado mundial.

En los enclaves no se efectúan procesos de acumulación de capital en el plano local o nacional –y las cadenas productivas que generan–; las actividades se desenvuelven en consonancia con los intereses del capital transnacional, cuyo funcionamiento está ligado a los grandes mercados globales. Como enclaves, operan los agronegocios, la minería, las zonas turísticas, los parques naturales, y los espacios urbanos vinculados al capitalismo mundial. Son enclaves las maquilas, las zonas francas, los puertos y también los eslabones de la economía ilegal hibridada con la legal, ligados a la trata de personas, al tráfico de especies animales, de niños, mujeres, órganos, al comercio mundial de estupefacientes, al blanqueo de divisas.

Las relaciones laborales que se imponen en los enclaves borran los derechos de los trabajadores, puesto que anulan sus conquistas históricas e implantan la flexibilización y la precarización como norma dominante. Aparte de que generan poco empleo, y efímero, aumentan los niveles de explotación de la fuerza de trabajo, con la finalidad de incrementar la tasa de ganancia de las inversiones. Los parámetros laborales que se imponen en toda la economía replican lo que sucede en los enclaves: la generalización de los salarios de sobrevivencia. No importa si se trata de actividades propiamente primarias, o del sector servicios, o de lo que queda de indus-

tria. Al mismo tiempo, se eliminan los sindicatos y se obstaculiza la lucha colectiva de los trabajadores, a la par con el incremento del trabajo informal, la terciarización laboral, y la eliminación de los derechos de la gente que vive de su trabajo. La degradación laboral se convierte en una de las cartas de presentación que ofrece el Estado y las clases dominantes locales para atraer inversiones extranjeras; argumentan que en esos países existe una fuerza de trabajo barata, capacitada y sumisa dispuesta a dejarse explotar por los inversores extranjeros que quieran invertir en un territorio.

En lo esencial, el Estado es un peón al servicio del capital, del imperialismo y de sus empresas. Toda su política está destinada a dar lo que sea sin contraprestación alguna e incluso pagándole a las multinacionales para que se lleven riquezas naturales. En síntesis, las empresas transnacionales y algunas nativas, llegan a un territorio de la región, expulsan a las comunidades que lo habitan, destruyen los ecosistemas, contaminan las aguas y dejan luego de pocos años un tremendo cráter de miseria y destrucción. Aparte de todo, los gobiernos subsidian y pagan su infraestructura y servicios.

Los enclaves vienen acompañados de la militarización de los territorios, porque el Estado se compromete a proteger las inversiones extranjeras, con el pretexto de que esa es la condición que garantiza la permanencia de esas inversiones. Por esto observamos que en los últimos años se ha presentado un crecimiento exponencial de las fuerzas represivas del Estado para resguardar las zonas de extracción de minerales e hidrocarburos, y los lugares donde se siembran los cultivos de exportación. La militarización no solamente la efectúan las fuerzas legales, sino los grupos paraestatales (componente esencial del modelo extractivista), creados, financiados y auspiciados tanto por el Estado como por empresarios locales y transnacionales. Los enclaves no generan modernización ni innovación tecnológica propia, sino que allí se implanta la tecnología que producen y controlan las multinacionales.

En concordancia, la economía y el territorio periférico colonial se han convertido en una especie de basurero para la chatarra producida por las multinacionales. Esto se acentúa con los tratados de libre comercio, que facilitan el ingreso de las tecnologías que ya se consideran obsoletas en esos lugares, como sucede, por ejemplo, con las armas, aviones y máquinas de guerra que el Estado le compra a Estados Unidos, la Unión Europea o a Rusia. Adicionalmente, el territorio se convierte en el basurero de los

residuos contaminantes que se exportan desde los centros imperialistas. Los tratados de libre comercio rematan la arquitectura institucional en el plano interno del país, para consolidar la lógica extractivista.

Esto se fundamenta con dispositivos jurídicos que protegen al capital transnacional y condenan irremediabilmente a abandonar cualquier intento de construir una economía propia y autónoma, obligando a estos países a vivir prisioneros de la exportación de materias primas agrícolas y minerales. En términos de propaganda, adquieren fuerza el imaginario de enclave y la mentalidad extractivista colonial basada en el prejuicio de que el comercio internacional en sí mismo es garantía de progreso, modernización y prosperidad. Dicha mentalidad domina todas las actividades, como el deporte, la educación o la salud, para lo cual preparan fuerza de trabajo barata y sumisa que le sirva al capitalismo transnacional en distintos frentes.

Con el imaginario de enclave se impone la idea que el modelo exportador constituye la única salida. Quienes se oponen –trabajadores, campesinos, indígenas, afrodescendientes, intelectuales– son considerados enemigos del desarrollo y del progreso que se supone genera el libre comercio. El extractivismo tiene consecuencias nefastas en el ámbito social y ambiental. En el plano social, destruye y desestructura a las comunidades locales, introduce nuevos hábitos y pautas de consumo, genera una mentalidad rentística y obliga a los habitantes de un territorio a subordinarse a los intereses de fracciones minoritarias de las clases dominantes que se articulan con el mercado internacional y se apropian de algunos restos que les deja el libre comercio. El extractivismo aumenta la pobreza, la dependencia, la destrucción de los bienes comunes de tipo natural, que replican la eterna paradoja de la pobreza y la desigualdad en medio de la riqueza de recursos. Al mismo tiempo, destruye a las comunidades indígenas; las que sobreviven son incorporadas brutalmente a la lógica extractivista.

El extractivismo contemporáneo involucra todas las actividades económicas y cubre todo el territorio nacional y transnacional. La puesta en marcha de megaproyectos hidrocarbúricos, mineros y agrícolas altera en forma inmediata y a futuro (en la mayor parte de los casos de manera irreversible) la riqueza natural de aguas, suelos y subsuelos. Esto representa una verdadera catástrofe ambiental con nefastos antecedentes históricos a nivel mundial, tal y como aconteció en la segunda mitad del siglo XIX: en un determinado momento dicha merma de recursos se consideró como

una derivación inmediata de los cambios climáticos que produce el fenómeno meteorológico del niño.

Pero estas alteraciones no se dan en el vacío sino en condiciones económicas y sociales específicas, que aumentan el impacto destructor en la medida en que la producción local, que permite la subsistencia de los pequeños productores, ya no se dedica a alimentar a los pueblos y a ellos mismos, sino que se exporta al mercado mundial. La utilización del agua para propiciar la exportación de productos al mercado mundial destruye las fuentes hídricas y los ecosistemas, con lo que se garantiza la muerte de plantas y animales nativos, como un resultado directo del imperialismo ecológico. En el período mencionado se presentaron terribles hambrunas que dejaron millones de muertes entre campesinos y otros hambrientos en India, China, Brasil y otros lugares del mundo colonial. Han transcurrido siglos de esta dinámica, como resultado de la vinculación directa, por la vía del libre comercio que Inglaterra impuso mediante la violencia, entre la producción local de alimentos y su destino al mercado mundial, principalmente europeo.

La memoria histórica sirve para recordar que hoy las condiciones climáticas son peores que hace un siglo y por lo tanto sus efectos son más destructores. Un trastorno climático en marcha afecta al mundo entero, pero impacta de manera inmediata a ciertas regiones. Investigaciones recientes recalcan que las zonas tropicales son las primeras afectadas, básicamente por su estabilidad climática y por su biodiversidad

Los gobiernos están insertos en las relaciones de producción capitalistas neoliberalizadas. Lo decisivo para que una economía y un Estado capitalistas funcionen es que el capital reinvierta la plusvalía en dar vida al sistema. Para eso, desde el Estado hay que garantizar las condiciones de reproducción del capital. En esto no hay vueltas. Dicha expansión económica y patrimonial fue posible merced a la muy activa participación de esta burguesía en muchas de las “áreas de negocios” que se habilitaron desde el sector público en diferentes frentes: obras de infraestructura, energía, medios de comunicación, etcétera. La expansión de estos grupos “nuevos” fue posible por tratarse en general de actividades no transables y reguladas por el Estado.

Por ende, no se trata de un nuevo conjunto que disputa una porción del mercado mundial en sectores dinámicos, a la manera de los *chaebols* coreanos, sino que se vinculan con el aprovechamiento de espacios de acu-

mulación a resguardo de la competencia externa. Más allá de las posibles diferencias entre estos nuevos capitales y los tradicionales, es claro que, vistos en conjunto, su crecimiento en los últimos años no ha contribuido a una reindustrialización basada en el despliegue de nuevas capacidades productivas que impulsen el proceso de desarrollo autónomo. Si a esto se le suma la propensión a fugar capitales que ha tenido esta fracción del empresariado en las últimas décadas, difícilmente se puede considerar a estos actores como agentes del desarrollo.

Si bien pueden existir conflictos puntuales sobre medidas de política económica, existe una fuerte confluencia de intereses entre el capital extranjero y los diferentes segmentos del gran capital nacional: en el caso de los burgueses tradicionales, por su inserción en el mercado mundial a partir del aprovechamiento de las ventajas comparativas domésticas; en el de los nuevos burgueses, porque allí tampoco se busca modificar las modalidades de inserción en la economía mundial, sino que el objetivo casi excluyente pasa por garantizarse ciertos nichos de privilegio, sin competir con el capital transnacional. En ambos casos, el resultado es el mismo: la profundización de un perfil de especialización regresivo y una inserción pasiva y subordinada en el mercado mundial; es decir, las bases materiales de un país colonial y atrasado.

Todas las limitaciones señaladas quedan en evidencia cuando se observa la relativamente insuficiente inversión por parte de las grandes empresas extranjeras y nacionales, así como la persistencia de una parte importante del plusvalor en estado “líquido”, en su mayor parte bajo la forma de fuga de capitales al exterior. Por tales motivos, queda en evidencia que las tareas pendientes del desarrollo sólo podrán ser llevadas a cabo a partir de un cambio radical en las relaciones de fuerza entre clases sociales y las fracciones de clase (Wainer y Schorr, 2015).

En resumen, el desenvolvimiento capitalista garantiza la valorización de los capitales individuales como “capital social” en conjunto y pone en juego la totalidad de aspectos y elementos de la realidad y de la praxis social. La acumulación originaria, para nuestros países, es continua e indefinida, pues requiere de la permanente conversión de los seres humanos en productores *desposeídos*, sin medios de producción para subsistir; en individuos que no pueden ser soberanos, sino dependientes de quienes los compran o no como fuerza de trabajo. A ello se suma la producción de poseedores de medios de producción abocados a reproducir de forma constante y am-

pliada el capital, quienes compiten sin fin entre sí. Los recursos naturales son los medios de esa competencia. Esto implica la explotación incesante y creciente del medio físico o la depredación del hábitat.

Es sabido que en Brasil y en América Latina el capitalismo contemporáneo impulsa procesos de recolonización, que se inscriben en la órbita de la acumulación por desposesión, en la fase actual del imperialismo. Necesitamos reconstruir estos procesos; para ello, utilizaremos los métodos históricos. Analizaremos los mecanismos de esa acumulación por desposesión que se inicia hace siglos, pero que continúa con las privatizaciones de las más rentables empresas públicas en Brasil desde 1990.³ La privatización que inició Collor de Mello ha proseguido; ahora las empresas multinacionales podrán explotar la mayor fuente de biodiversidad del planeta gracias a promulgación del Congreso de Brasil y del presidente Lula da Silva de la privatización de la totalidad del territorio amazónico. Lo mismo que hizo Alan García y después Correa y Evo Morales.

En esta segunda etapa neopolulista de izquierda, centro y derecha, la mercantilización de todos los bienes comunes, entre ellos el agua, la biodiversidad, los bosques y los saberes ancestrales de los pueblos indígenas (Cardoso, Lula y Dilma), está ligada al crecimiento de la extracción minera y el resurgir de las economías primarias de tipo exportador. Esto, a su vez, se articula con la penetración de la inversión transnacional e intrarregional, la desindustrialización, el despojo territorial, la expropiación de indígenas y campesinos, y la militarización de la vida cotidiana. Todo esto, además, asegura el flujo de materia y energía hacia los centros imperialistas, con el fin de mantener la acumulación de capital, que perpetúe sus niveles de producción y consumo.

³ En Brasil, desde 1990, se privatizaron empresas estatales con el objetivo de reordenar la participación estatal en la economía, reducir la deuda pública y aumentar la productividad y competitividad de la industria nacional. A principios del 2000 se había privatizado 65 empresas y otorgado concesiones de 58 servicios públicos, con lo que se ingresó 72 mil millones de dólares y transfirió al sector privado 18 mil millones en deudas. Destacan: Telecomunicaciones, Ferrovías, para su venta se dividió en siete bloques regionales y se optó por un modelo de privatización por concesión de 30 años, dando prioridad a la inversión y la mejora de los servicios principalmente de carga. Aeropuertos y carreteras, hasta el 2000 se habían transferido 10 mil kilómetros de carreteras entre federales y estatales. La privatización del sector eléctrico, iniciada en 1995, y después la privatización del servicio de telefonía (fija y móvil), continuaron con bancos, minas, siderúrgicas, petróleo y agricultura, hasta la actualidad.

Otro elemento por conocer es cómo a lo largo de más de tres décadas ha funcionado el colonialismo interno hasta definir una nueva geografía de la economía, del poder y la dominación. El concepto de acumulación por desposesión permite vincular en forma coherente la dependencia de la periferia con respecto a los Estados capitalistas centrales y sus empresas multinacionales, a la par con la articulación estrecha entre los poderes hegemónicos a nivel mundial y sus súbditos locales, que se convierten en la “correa de transmisión” endógena de los intereses imperialistas. En Brasil, debemos revisar críticamente la resistencia histórica del Movimiento de los Sin Tierra (MST), sectores del Partido del Trabajo (PT) y otras organizaciones que actualmente están en movimiento como los sin techo y otros movimientos sociales que aparecen en nuestro último capítulo. Estos movimientos nos mostraran grandes experiencias.

Con este presupuesto, queda claro que la dominación internacional no puede funcionar solamente como imposición externa, sino que necesita de serviles mediadores locales que en cada país encarnan esos intereses imperialistas y se benefician de esa alianza. Visto así el asunto, adquiere sentido la noción de colonialismo interno para expresar cómo las clases dominantes de una determinada formación social reproducen en un territorio particular las lógicas generales del sistema mundo capitalista. Este colonialismo interno, además, explica las razones por las cuales, el Estado y las clases dominantes—ahora reforzadas con los sectores emergentes ligados a la acumulación de capital mafioso—lucran con la entrega incondicional del territorio nacional y de sus bienes comunes al imperialismo estadounidense y a las empresas transnacionales. Con ello obtienen unas cuantas migajas, que les permiten preservar una estructura social y económica profundamente injusta y desigual, la cual sólo puede perdurar a largo plazo con el uso desmedido de la violencia. Será importante conocer cómo se da esa distribución entre ambos tipos de sujetos económicos.

Una política de proyección de poder exige objetivos claros y una coordinación estrecha entre las agencias responsables de la política exterior del país, involucrando la diplomacia, la defensa, las políticas económicas y culturales. Exige una voluntad estratégica consistente y permanente; es decir, una capacidad social y estatal de construir consensos en torno a objetivos internacionales de largo plazo, junto con la capacidad de planear e implementar acciones de corto y mediano plazo a través de las agencias estatales, y en conjunto con los actores sociales, políticos y económicos relacionados.

Los caminos que tomen los conflictos indicarán para dónde van las políticas que orientan el proceso económico y de integración del continente. La integración regional de América Latina que había sido una bandera de emancipación levantada en contra del imperialismo norteamericano avanza hoy, pero no como una reivindicación de integración de los pueblos emancipados, sino como una herramienta de integración capitalista, sea nacional o continental, funcional a nuevas formas imperiales y coloniales de explotación y exclusión. Se trata entonces de una integración para la exclusión y la dominación de los pueblos, la integración con políticas económicas y de infraestructura.

Pretendemos explicar e interpretar la lógica esquizofrénica de las relaciones de poder entre Brasil y América Latina (tomando como referentes, por un lado, a todos los países involucrados en actos de corrupción en América Latina, por otro, a Unasur, el ALBA y a los países que integran BRICS) desde y con los arriba y los de abajo, articulando planos y niveles de la realidad. Nos preguntamos por los impactos de la expansión de Brasil en esos países y si esta potencia emergente mantendrá su poder y su liderazgo en América Latina, o si se traducirá en oposición y rechazo a su presencia; ¿cuál será su carácter y naturaleza?, ¿podrá proyectar poder fuera de sus fronteras nacionales?, ¿y a través de qué medios (inversiones, coimas, coerción, cooperación, difusión de sus ideas y valores, o a través de su capacidad de transferir dinamismo económico y alternativas hacia su zona de influencia)?

El objetivo principal de este estudio es comprender y explicar cómo funciona el capital, los Estados y las resistencias que se dan en esta subregión latinoamericana en el actual momento histórico. En particular, en un contexto donde las contradicciones más peligrosas surgen del imperativo de mantener un crecimiento exponencial que sostenga a los gobiernos en una situación en la cual las tensiones y crisis sociales, económicas, políticas y medioambientales se están volviendo cada vez más graves, y las oligarquías y derechas lo aprovechan creando escenarios favorables para ellos, se modernizan, mimetizan y vuelven a la carga desde dentro y fuera de los gobiernos llamados progresistas. Los pueblos originarios y mestizos resisten a esta recolonización encubierta.

Se trata de mejorar los instrumentos teóricos de las luchas sociales, de adecuarlos a los desafíos y transformaciones del presente, incluso trastocar los mismos cuerpos teóricos. La teoría de la desposesión y la extracti-

vista conectan la teoría crítica del capitalismo con las teorías del colonialismo, de la colonialidad, de la descolonización y de la decolonialidad. Están directamente asociadas con el liberalismo representativo y el republicanismo antirepublicano, donde la democracia brilla por su ausencia.⁴

Será necesario traspasar estos límites construyendo conceptos menos abstractos, menos orientados al modelo universal; conceptos históricos, más orientados a buscar las articulaciones específicas dadas en distintos contextos. El colonialismo no es el resultado de conspiraciones más o menos sofisticadas; ni la colonialidad la consolidación colonial manejada por oscuros grupos; las conquistas y las incursiones coloniales y sus sucesivas corrientes (sus distribuciones, los ciclos coloniales, así como las distintas composiciones, estructuras e instituciones de la colonialidad) se sostienen en la materialidad, en las prácticas, en las inscripciones, de diagramas de poder, configurados en los despliegues y conformaciones del mundo capitalista colonial. Constituyen imaginarios institucionales a partir de la economía política. A la inversa, las fuerzas anticoloniales y emancipatorias en esos mismos diagramas y prácticas irá constituyendo un polo emancipatorio de mayores dimensiones.

Concluimos este apartado compartiendo la idea de que en Brasil existe, en paralelo al neoliberalismo populista, una contratendencia democrática y autonomista. Está representada desde abajo por una diversidad de luchas sociales desde el 2013: el Movimiento Passe Livre, las ocupaciones de los sin techo, el nuevo activismo feminista, la ocupación de cientos de colegios secundarios, reivindicaciones de los afrodescendientes, pequeños agricultores por la soberanía alimentaria y campesinos por una reforma agraria popular, por vivienda y contra el alza de tarifas de servicios energético, del agua y los trabajadores de reciclaje, entre otros.

Estos movimientos se suman a los sin tierra, al movimiento indígena, a la marginal resistencia sindical; ya no obedecen a la vieja lógica de subordinación a los partidos, sino a nuevas relaciones sociales, entre las cuales destaca la autonomía de los partidos y los sindicatos, la horizontalidad, el

⁴ Algunas fuentes son: David Harvey, *El nuevo imperialismo*, Ediciones Akal, Madrid, 2004; James Petras, *La izquierda contraataca*, Ediciones Akal, Madrid, 2000; Samir Amin, *Más allá del capitalismo senil*, Paidós, Bs. As. 2003; Giovanni Arrighi, *Caos y orden en el sistema mundo moderno*, Ediciones Akal, Madrid, 2001; Boaventura de Souza Santos, *Refundación del Estado en América Latina*, Plural, La Paz, 2010; Aníbal Quijano, “Colonialidad del poder y descolonialidad del poder”, <http://ceapedi.com.ar/imagenes/biblioteca/libros/51.pdf>

consenso para tomar decisiones y la importancia de las redes sociales en la lucha política. Estas ideas surgen de la práctica de la lucha emancipatoria expresadas en las entrevistas a dirigentes y activistas de esta nueva movilización de los pueblos, las cuales aparecen en el último capítulo.

Para cerrar, Zibechi afirma que Brasil atraviesa por el fin de la hegemonía de los actores políticos o sociales. Lo mismo ocurre con otros países con gobiernos progresistas, los cuales se han convertido en sociedades sin hegemonía, pero son caóticas, desordenadas, y ninguna instancia tiene legitimidad ni capacidad para determinar rutas por dónde transitar. Para la izquierda institucional y electoral, y para los profesionales del pensamiento, en gran parte responsables de esta situación, esto es una atrocidad, una enormidad, un peligro del que se debe huir. Agregaríamos que para la otra izquierda, la crítica, particularmente en Ecuador y Bolivia, queda una nueva prueba difícil: continuar intentando cambios desde arriba. Para Zibechi (2016), quien apuesta por el autogobierno de pueblos y comunidades, esta coyuntura abre una posibilidad real de expropiar a los expropiadores, ya que es la antesala de un colapso sistémico. La escasa legitimidad del representacionismo liberal conservador y de izquierda, está desapareciendo ante la fuerza del capital legal e ilegal en los regímenes políticos latinoamericanos. Sólo van quedando las opciones insurreccionales, de desborde por fuera, y las alternativas prácticas del hacer y la desfeticización desde abajo y la izquierda.

Como se podrá apreciar en las entrevistas, estos autogobiernos deberán organizarse alrededor de la lucha territorial y de la vida cotidiana, fundamentalmente urbana, las cuales apuntan a la esfera de realización del valor como en la esfera de la producción del valor. Muchos luchadores e intelectuales, como el mismo Harvey, coinciden en que hay que lidiar y desafiar a las estructuras fundamentales de poder. Sostiene que el Estado capitalista debe combatirse; se debe dominar el poder del Estado y tomarlo, para no volver a permitir que el Estado vuelva a manos de la burguesía, se reorganice, aplaste la resistencia y vuelva a conducir a la opresión y la miseria. Paralelamente, se van imponiendo las ideas comunitarias, junto con las de un orden social justo y emancipatorio regido por valores como alternativas a la idea neoliberal de que vivimos una lucha de competencia entre sujetos orientados al beneficio personal, reguladores de la vida social (Harvey, 2016). En este sentido, John Holloway dice que el mundo vive una tormenta:

¿De dónde viene la tormenta? No de los políticos, son ejecutores de la tormenta nada más. No del imperialismo, no es producto de los estados, ni de los estados más poderosos. La tormenta surge de la forma en la cual la sociedad está organizada. Es expresión de la desesperación, de la fragilidad, de la debilidad de una forma de organización social que ya pasó su fecha de caducidad, es expresión de la crisis del capital (Holloway, 2015).

Señala que nosotros somos la crisis del capital; como consecuencia, la lucha es para dejar de crear el capital. Es una lucha contra nuestra dependencia del capital, para emancipar nuestras capacidades creativas, nuestras fuerzas productivas; una lucha esquizofrénica, pues dependemos del capital y necesitamos aprender caminando.

En fin, son los temas que seguirán en debate, en los cuales sólo podemos avanzar partiendo de la subjetividad práctica, sobre la cual el marxismo debe repensar su aparato teórico y su práctica.

Los autores

CAPÍTULO I

LA COYUNTURA: ¿FIN DEL NEOLIBERALISMO POPULISTA?

Las protestas de los últimos años encarnaron un desacuerdo de las mayorías dirigido simultáneamente contra las políticas económicas y sociales y frente a unas élites políticas subordinadas a los poderes económicos y financieros incapaces de afrontar la crisis económica en términos favorables para las mayorías sociales. Sus políticas sociales y las adoptadas frente a la crisis han traído consigo una vuelta al aumento de la desigualdad, un adelgazamiento de los servicios sociales y una fragilización del empleo que perjudica a millones de personas. Esas políticas antisociales acordadas por políticos de izquierda y derecha llevan a cabo prácticas populistas, corruptas y clientelares, que parecen consustanciales a la vida política oficial. Han venido a alimentar una extendida indignación popular. No se trata del fin de ciclo neodesarrollista-progresista, o sólo de una ofensiva de la derecha brasileña (aunque también haya algo de eso), sino de que el neoliberalismo populista ha llegado a sus límites y sólo queda el crudo neoliberalismo o un cambio radical.

El desarrollismo centrado en el cambio industrial, que tanto se debatió y realizó en los países grandes en la segunda posguerra, nunca se redefinió para nuestra época antes de llamar a algunos gobiernos “neodesarrollistas” o “posneoliberales”. Estos regímenes comparten ideas sobre proyecto de país que coincidieron con el modelo Brasil: la confianza en la capacidad del Estado para la definición de las geoestrategias económicas nacionales; la crítica a la unipolaridad imperialista, la apuesta por una integración regional alternativa; la necesidad de redefinir contratos con las empresas transnacionales, buscando una relación menos abusiva respecto al Estado; o la de reducir la influencia financiera del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial

o una banca controlada por el imperio, instrumento de despojo mediante la deuda externa y potenciando experiencias regionales alternativas, como una banca alternativa (Banco del Sur). En todo caso, el desarrollo industrial en estos países apenas se expandió; y con la crisis brasilera se podría frustrar, incluso, el proyecto integracionista liderado por este país.

Sin embargo, Brasil vivió una encadenada ola de protestas contra la política ortodoxa neoliberal de Dilma y por la corrupción del sistema político que hoy emerge brutalmente. Este país no puede esperar un nuevo *impeachment*, pues la mayoría de personajes políticos y posibles sucesores de todos los partidos también merecen un juicio político, y lo saben. En un corto plazo, la persistencia de la crisis económica ha acabado con la prosperidad de los últimos años y anuncia tiempos aún más duros ante la incapacidad del sistema político para salir de la recesión y atajar y sancionar de forma convincente la corrupción, el gran espantajo político del país. Después de las políticas claramente neoliberales de gobierno que siguieron al triunfo por mínima diferencia en las elecciones de octubre de 2014, el problema del fin de ciclo populista neoliberal se muestra con mayor claridad. La aprobación de Dilma Rousseff llegó a 7% en mayo de 2015, y la de Lula da Silva, posible candidato para 2018, está en franca caída.

Detrás de 71% del rechazo ciudadano está una economía en recesión. El estancamiento se encuentra relacionado principalmente con el persistente descenso de la inversión en los últimos años, que ha reducido el aumento de los ingresos y del empleo. Esto ha dado lugar a un menor nivel de consumo y de producción, lo cual afecta significativamente la recaudación de impuestos e incrementa el déficit y la deuda pública. Dicho fenómeno marca el fin de una farsa inclusiva que redistribuyó los mayores ingresos de los *commodities*, sin tocar el patrimonio de la burguesía.

Como resultado, tenemos la protesta de una población en ruinas y unas clases medias y altas que nunca quisieron al PT, el cual se ha transformado en los últimos años en el partido del sector de la clase media que se benefició y del poder tradicional. En realidad, las protestas contra las políticas públicas recientes son por el malestar causado por los efectos del extractivismo y la caída de los *commodities* que modifican la política económica. La tasa de desempleo que se encontraba estabilizada en torno a cinco por ciento superó en junio la marca del nueve por ciento con más de ocho millones de desocupados.

Comparado con años anteriores, el desempleo se presenta actualmente con una preocupante tendencia al alza, considerando la situación de paralización por la que atraviesa la economía. Una devaluación de la moneda que pasó de 1.60 a 2.40 y luego a 3.40 reales por dólar actuó sobre la inflación y acrecentó el estancamiento productivo, con consecuencias sobre el empleo y los salarios. Brasil es la economía más afectada con los cambios globales. En 2013, el crecimiento fue de 2%; el año 2014, 0.1%; el 2015 decreció -1.5%, con una inflación de 8.5%.

El fondo del asunto es, además de la política colonial, la oculta presencia imperial en la utilización de la deuda pública como vehículo para desviar recursos públicos hacia el sistema financiero y su relación con la política. Lo que el poder económico mundial quiere es el patrimonio estatal y su control. Son los bancos más importantes del mundo (Citibank, HSBC, Itaú y otros), a través de los *dealers*, quienes compran directamente los títulos de la deuda y se convierten en los acreedores del país, considerando que no existe ninguna inversión en el mundo que pague más que los títulos de la deuda brasileña.

La estrategia del sistema de la deuda sigue un patrón de destrucción de la soberanía. Se genera una deuda que somete al país y el gobierno entrega así el patrimonio. De este modo, en Brasil se perdieron las empresas telefónicas, las empresas de energía eléctrica, las hidroeléctricas, las siderúrgicas. Todo pasa a ser propiedad de ese gran poder económico mundial. Los *dealers* tienen todo ese poder; intervienen en la financiación privada de las campañas. Sólo con entrar en el Tribunal Superior Electoral se puede ver quién financia las campañas. Una gran empresa o un banco. La deuda es el centro, la espina dorsal del sistema (Truffi, 2015). Ahora sabemos que las transnacionales brasileñas y su gobierno estaban sobre los organismos electorales de varios países latinoamericanos; ambos decidían quiénes serían los nuevos gobernantes con coimas anticipadas a las sobreganancias.

La crisis en torno al desvío de fondos de Petrobras coloca al gobierno a la defensiva. Luego de un periodo de zozobra, el Supremo Tribunal Federal publicó los nombres de los 47 políticos que serán investigados. Brasil, rumbo al fin del mundo. El número tiende a crecer:

El grupo que controla la mayor constructora de América Latina involucró en la corrupción al menos 130 diputados, senadores, ministros y alrededor de

20 gobernadores. Las denuncias abarcan los mandatos de Cardoso, Da Silva y Rousseff (Nepomuceno, 2016).

La mayoría son miembros del PT, pero también de los partidos aliados, como el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), al cual pertenece el vicepresidente de la república, Michel Temer, y los presidentes de la Cámara de diputados, Eduardo Cunha, y del Senado, Renan Calheiros. Cinco ex ministros de Rousseff, una ex gobernadora, doce ex diputados y el ex presidente Fernando Collor de Mello integran la lista de los primeros sospechosos. En total, están involucrados miembros de seis partidos, tanto del oficialismo y sus aliados como de la oposición. La investigación se basa en las denuncias del ex director de Abastecimiento de Petrobras, Paulo Roberto Costa, y de Alberto Yousseff, encargado de lavar el dinero desviado. Se estima inicialmente que entre 2004 y 2012 la red de corrupción desvió unos 3700 millones de dólares de la petrolera estatal.

El otro eje de la crítica al progresismo petista estriba en la carencia de un proyecto de nación, desde que Fernando Collor de Mello (1990-1992) y Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) decidieron sepultar el proyecto nacional desarrollista del cual Getúlio Vargas fue la expresión más acabada. Sobre esta base, la defensa del programa neoliberal de la derecha y los Estados Unidos en realidad nunca cambiaron el carácter conservador del bloque conformado por la alianza entre las viejas oligarquías locales y los sectores corporativos y tecnocráticos emergentes a partir del proceso de industrialización sustitutivo de importaciones.

Con la Agenda Brasil, parecía que la destitución de Dilma quedaba atrás. Le tocó el turno de negociar. La agenda contuvo veintisiete propuestas que luego fueron ampliadas. Entre las más polémicas figuraba la privatización del Sistema Único de Salud, el aumento de la edad jubilatoria, regularizar la tercerización laboral, revisar el marco jurídico de los territorios indígenas, y plazos más breves para otorgar licencias ambientales. En lo internacional, el objetivo es darle fin al Mercosur y la ALBA, reduciendo al mismo tiempo su influencia sobre los BRICS. En principio, Dilma aceptó todas las propuestas de la derecha. Desde diversos ámbitos se ha destacado que el objetivo de esa derecha es liquidar el papel de organismos estatales como Petrobras, el BNDES, la Caixa Económica Federal y Eletrobras, que serían privatizados o sus funciones mermadas. El caso más grave es el

de Petrobras. A mediados de agosto, Petrobras decidió privatizar 25% de BR Distribuidora, que controla 38% del mercado brasileño.

Pero se están registrando también cambios en la política internacional. Nunca se había propuesto en Brasil la salida del Mercosur, que en definitiva es abandonar el proyecto de integración regional; esa es una amenaza en debate. Ya existen indicios. Al día siguiente de la reunión entre Dilma y Barack Obama (el 1 de julio de 2015), Brasil votó contra Siria en las Naciones Unidas, acompañando una resolución promovida por Estados Unidos sobre derechos humanos y dejando de lado a sus aliados del BRICS.

El programa de ajuste causado por la crisis económica derivó en conflicto social y desorden político. Generó desempleo y deslegitimación de la representación y sus objetivaciones. Sin embargo, esta narrativa de la crisis sirvió de pretexto para que un gobierno electo por la izquierda y el pueblo implantara un programa típicamente neoliberal acorde con el Consenso de Washington: privatización, apertura comercial y financiera, ajuste presupuestal, flexibilización del mercado de trabajo, reducción del Estado, todo con la aprobación del sistema financiero nacional. El PT se libra de responsabilidad al sostener que sólo dispone de 14% de los diputados y otro tanto de los senadores.

Zibechi nos alerta ante los cambios dramáticos en defensa y en las geoestrategias. Se trata de un área donde Brasil estaba avanzando proyectos estratégicos. Entre Brasil y Estados Unidos hubo intensos debates, promovidos por el entonces vicepresidente John Kerry, para llegar a acuerdos en materia aeroespacial y en todas las áreas de la industria de defensa.

La sociedad brasileña se polariza y el gobierno hoy confronta una ofensiva conservadora que se aprovecha de estas entrelazadas crisis para llevar adelante sus objetivos estratégicos, mientras otros aún llaman a defender las conquistas de los trabajadores, la empresa nacional, el desarrollo del país, la soberanía nacional y la capacidad de autodeterminación de la sociedad brasileña. Paradójicamente, fue la política de los gobiernos del PT la que perfeccionó el neoliberalismo al favorecer a los más pobres, a través del aumento sostenido del salario mínimo y de programas sociales focalizados como Bolsa Familia; al mismo tiempo, creó las condiciones subjetivas de la nueva protesta social. Otro elemento, como sostiene Raúl Zibechi, es que:

Este ajuste pretende resolver el déficit fiscal del Estado, pero es cruel porque ataca a las familias pobres endeudadas y a la pequeña y mediana empresa y, por lo tanto,

genera más desempleo, pero los bancos se están beneficiando. Lessa asegura que “los recortes de gasto se están haciendo sobre los sectores que no dependen o no viven del sistema financiero”. En el último trimestre los grandes bancos tuvieron ganancias del 15%, entre ellos Itaí, Bradesco y Banco do Brasil (Zibechi, agosto 2015).

Junio de 2013 encarnó los deseos de los cuarenta millones de brasileños que salieron de la pobreza para volver a ella; fueron incluidos a través del mercado y descubrieron la desigualdad, omnipresente en la sociedad brasileña. Es cierto que las políticas sociales fortalecieron las herramientas políticas, culturales, comunicativas, cuyo contraefecto es una capacidad superior de accionar y demandar ante la violencia de clase expresada en una estructura impermeable al cambio y sutiles formas de violencia sufridas en la vida cotidiana: vivienda, transporte público, reforma agraria, ecocidio, medidas antilaborales, corrupción, etcétera.

La regeneración de la política social y la vuelta a unos ilusorios orígenes no será posible por la propia naturaleza y dinámica del sistema político, mientras el sector empresarial financie las campañas y por la dependencia estatal de ingresos producto del extractivismo. Este último es base también de alianzas espurias con caudillos locales y capital multinacional, sin responsabilidad ni horizonte más allá de la búsqueda de ganancias. Buena parte de las políticas sociales son fruto de estos ingresos, por lo que la marca y popularidad de estos gobiernos se asocia íntimamente con estos tipos de explotación económica sumamente dependiente del precio internacional y con consecuencias ecológicas desastrosas. Los otros países progresistas, como Bolivia y Ecuador, sufren los mismos problemas.

En realidad, los gobiernos progresistas son transformados por el poder global e interno y las instituciones, antes que lo inverso. Así, se convierten en gestores del capital. Mientras recetas ortodoxas anuncian la llegada de nuevas políticas neoliberales, alejan definitivamente la posibilidad de fortalecer procesos que apuesten por otra opción de cambio. Al mismo tiempo, crece el marco ideológico conservador de vieja data, con base en fetiches, el fútbol, el carnaval, las iglesias y las telenovelas, a lo cual se agrega la ideología del consumo, el consenso del desarrollo y la agenda política de sectores religiosos. La propaganda institucional presenta los bonos y el crecimiento de los índices de consumo como acceso de millones a la clase media.

Dicha política desarma al pueblo, pues además de abandonar agendas campesinas, indígenas y obreras, la discusión deja de lado la revisión

de prioridades en la economía y la forma de distribución –que continúa beneficiando mayormente a los más ricos–. Tampoco complementa este acceso al consumo con un acento en el acercamiento a salud, educación y transporte de calidad, que permanecen ajenos a las mayorías. Más que un horizonte anti o post extractivista como alternativa de poder en un nuevo ciclo, vemos aparecer nuevas derechas con discursos renovados “para la gente” y postideológicos, con la bandera que perdió la izquierda de la ética contra la corrupción. El trance que atormenta a los brasileños se expresa como un trauma político y no permite vislumbrar una salida. Es el fin de un ciclo, según variados análisis, pero no hay indicios de que se esté gestando algo nuevo desde arriba.

La relativa autonomía del Estado (que los neopopulistas absolutizan) y su papel de mediador ya ha concluido. Estamos ante su sumisión completa al capital, provocada por la transnacionalización de la economía de los últimos decenios. Las funciones económicas de los Estados están determinadas desde el exterior por oligopolios internacionales y las políticas imperiales. En el actual sistema mundializado, la producción se destina a un mercado mundial jerarquizado donde queda en el centro el sector moderno y los consumidores ricos. El Estado tiende a convertirse en una entidad amorfa dentro de un Estado mundial de hecho y formado por diversas instituciones y tratados mundiales, regionales y bilaterales dominado –política, económica, militar y culturalmente– por el gran capital transnacional y sus gerentes, los líderes políticos.

Con el capitalismo monopolista e imperialista y de sus reiteradas crisis se producen nuevas formas de intervención estatal e interestatal institucional, para asegurar la reproducción del sistema y la tasa de beneficio. El mundo académico también acepta y fetichiza las teorías. El Estado participa en ciertas industrias y servicios (especialmente en los no rentables), en sectores de la investigación científica y tecnológica, en la constitución de coaliciones militares para agredir países en nombre de los “derechos humanos”, para someterlos, en realidad, a su esfera geoeconómica y geoestratégica.

No obstante, sin considerar estas constataciones, socialdemócratas como Emir Sader o Arkonada, o políticos cercanos al Foro de São Paulo creen que sólo es un recodo en el camino y que las ultraderechas y las ultraizquierdas maquinaban la caída de Dilma. Para otros, Brasil vive una “crisis de hegemonía”, donde no hay fuerzas políticas con propuestas con-

sistentes capaces de darle algún rumbo al país en la disputa por el poder. La Constitución de 1988 falló al no renovar la política; no cambió las reglas para los partidos, que siguen con el monopolio del proceso electoral. Lo más grave es que Tamer y muchos miembros del gabinete y del Congreso están procesados por corrupción y continúan gobernando.

Se creía que la democracia estaba aún por hacerse en esa área: el gobernante Partido de los Trabajadores (PT) perdió la hegemonía que hizo efectiva con el triunfo de su líder máximo, Luiz Inácio Lula da Silva, en las elecciones presidenciales de 2002. Era tan grande que resistió el escándalo de 2005, cuando tuvo a sus principales dirigentes presos, acusados de obtener recursos fraudulentos para sobornar parlamentarios. Logró la reelección de Lula en 2006, e impuso como sucesora a Rousseff, también reelegida en 2013. Lula gobernó con el “todo vale”, sellando acuerdos territoriales con coroneles, élites latifundistas, multinacionales de la soja y herederos de la dictadura. Especialmente con el Partido del Movimiento Democrático Brasileño. No es casualidad que Katia Abreu, empresaria de la soja, sea la ministra de Agricultura de Dilma.⁵

Es por ello que mientras para Genro, que crea fetiches políticos, el PT, para superar su crisis actual, “tendrá que reinventarse, preservar su visión utópica, en una sociedad mucho más compleja”, para Grzybowski no se podrá reformar el PT como una fuerza de transformación capaz de recuperar la hegemonía pues este esfuerzo pasa por “un sistema político colonizado, heredado de la dictadura militar”, que no favorece respuestas a las demandas de la sociedad.

El otro factor de frustración es la corrupción y las investigaciones del Ministerio Público Federal (fiscalía general) y la Policía Federal sobre el pillaje en los grandes proyectos petroleros, los cuales son sólo la superficie. El PT es apuntado como principal articulador de la red que desvió, según estimaciones de Petrobras basadas en las investigaciones judiciales, el equivalente a por lo menos 6000 millones de dólares. Dos de sus dirigentes están detenidos desde el 3 de agosto. Por lo menos veintitrés acusados decidieron colaborar con la justicia y otros negocian acuerdos de delación para reducir penas, un mecanismo legal brasileño que permite a los jueces obtener informaciones cada día más detalladas y más extensas

⁵ Candido Grzybowski, *Patricia Fachin*, Entrevista especial: Con crisis política brasileña: lo nuevo no vendrá inmediatamente. Revista *Diálogos Sur*, 5/08/2015, <http://www.dialogos-dosul.org.br/crise-politica-brasileira-o-novo-nao-surgira-imediatamente/05082015/>

sobre la corrupción aparentemente generalizada en muchos sectores. Se trata del “pequeño reparto” frente al grande de los títulos de la deuda, las privatizaciones, los mercados, el saqueo, las *commodities*, el proyecto de país y la soberanía.

Decenas de empresarios presos, incluyendo los presidentes de las dos mayores constructoras brasileñas son el resultado parcial del proceso. Luego les tocará a los políticos que sólo pueden ser juzgados por el Supremo Tribunal Federal, un privilegio de los parlamentarios y altos miembros del gobierno. Muy rápido estaban involucrados por lo menos 31 legisladores, incluyendo los presidentes de la Cámara de diputados, Eduardo Cunha, y del Senado, Renan Calheiros, además de dos gobernadores estatales y catorce ex parlamentarios, la mayoría del PT y de su principal socio en la coalición gobernante: el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB).

Es el fin de un momento del PT hegemónico y un viejo patrón desarrollista heredado y un neo populismo, en que adoptó una visión política y prácticas tradicionales de la política brasileña desde el inicio de la República, en 1889. Los problemas éticos del Partido de los Trabajadores, al involucrarse con la corrupción, puede ser visto como componente secundario. Ruy Braga, sociólogo y profesor en la Unicamp, asegura que la hegemonía lulista se sostiene sobre dos pilares. Por un lado, “el consentimiento activo de las direcciones de los movimientos sociales, con los sindicalistas al frente, que se instalaron en el aparato del Estado y en los fondos de pensiones de las empresas estatales”; por otro, “en el consentimiento pasivo de las clases subalternas que, seducidas por las políticas públicas redistributivas implementadas por el gobierno federal, permanecieron junto al Partido de los Trabajadores. Él ni siquiera intentó ser un gobierno de izquierda, fue un gobierno de coalición y conciliación entre los sectores de las grandes fracciones de la burguesía financiera, contemplando también a los sectores industriales, del agro-negocio, la burguesía de los servicios, bancos: todos tuvieron una “fuerza” muy significativa en los gobiernos del PT” (Machado, 2015).

Utilizando un concepto de la lingüística, se puede decir que, en el espectro político brasileño, la derecha ha sido el término “no marcado”, el término de la generalidad, mientras que la especificidad, la excepcionalidad, no sólo le ha tocado a la izquierda, sino que también ha sido siempre su estigma y anatema. No se trata sencillamente de lo novedoso de las utopías. Las ideas mismas de

*justicia social y participación ciudadana, la simple fórmula republicana de que todo el poder emana del pueblo, por la falta de una narrativa de la irrupción popular en el espacio de la gobernanza, ocupan el lugar de lo anómalo en el campo de las experiencias históricas y en el curso del pensamiento social en Brasil. El reciente decenio del Partido de los Trabajadores (PT) en el gobierno federal tampoco atisbó un mínimo sentido para una idea tan exótica como la de poder popular—o de poder de los de abajo—. La narrativa (o contranarrativa) que se venía gestando desde la segunda mitad de los ochenta acerca de la ampliación de la ciudadanía y del robustecimiento institucional del espacio público (no sólo del Estado)—que animó la primera década y media de existencia del mismo Partido de los Trabajadores— ha sido troncada en algún momento, domesticada y reducida al gueto de legitimidad corporativista y clientelar de las ONG. Esta narrativa estaba ya definitivamente derrotada, incluso dentro del PT, cuando éste llegó al gobierno federal. Los varios siglos de vigencia de un orden social pesadamente segregador, jerarquizante y autoritario en Brasil convirtió al sistema de valores conservador en algo “natural”, una “naturalidad” de la que muchas veces ni siquiera la izquierda escapa.*⁶

La enajenación no alcanza a todos los movimientos. La Plenaria de los Movimientos Sociales, aún una minoría, emitió un comunicado de veintidós puntos donde demandaba la reforma del sistema político (al cual considera rehén del poder económico), la democratización de los medios y de la educación, entre los más destacados. La Central de Trabajadores (CUT), el Movimiento sin Tierra (MST) y la Unión de Estudiantes (UNE) son algunos firmantes. Los movimientos más activos en junio de 2013 muestran otras preferencias. Unos defienden la movilización permanente, “no cree en la vía institucional, de arriba hacia abajo. Si creyéramos en ella, estaríamos contribuyendo a construir alguna candidatura. Y no estamos haciendo eso”.

El Movimiento de Trabajadores sin Techo (MTST) emitió un contundente comunicado en defensa de vivienda libre y reforma urbana: “En nuestra presión sobre el Estado, en sus diversos niveles, no nos guiamos por quién esté en el gobierno. Tenemos rigurosa autonomía en relación a cualquier partido político y esencialmente ante cualquier gobierno”. Los sin techo agregan que sus demandas “se construyen con lucha y organización popular” y no a través de las instituciones. El texto finaliza: “Re-

⁶ Ricardo Cavalcanti-Schiel, “Fractura política en tiempos de cólera”, *Rebelión*, 28/08/2015.

afirmamos que nuestro camino no es la participación en las campañas electorales [...] Nuestro voto es el poder popular”. El movimiento más importante de Brasil, el MST, destacó que “el poder del capital secuestra la política y las instituciones públicas, impidiendo las transformaciones políticas y económicas que interesan al pueblo brasileño”. Luego de detallar un conjunto de demandas hasta ahora incumplidas, finaliza con su compromiso de “luchar de forma permanente, en defensa y construcción de la Reforma Agraria Popular y de una sociedad socialista (“Brasil. Stedile...” julio, 2015; Korol, 2015).

La “derrota” del gobierno comenzó en realidad bajo los dos gobiernos de Lula (2003-2006 y 2007-2010). En junio de 2002, en plena campaña electoral, Lula emitió la “Carta al pueblo brasileño” para calmar al capital financiero ya que el riesgo país había trepado a 2400, la inflación se disparaba y el dólar había alcanzado cuatro reales, ante el temor de los banqueros de que Brasil siguiera los pasos de Argentina, que había declarado el cese de pagos en diciembre de 2001.

Pese a las notables diferencias y a que Brasil tenía reservas monetarias de 370 000 millones de dólares que lo blindaban —según los burócratas de las finanzas— y lo ponían a salvo de cualquier inestabilidad y de ataques especulativos a su moneda, el capital financiero está agitando las aguas. El superávit fiscal del período Lula se evaporó; hace años el país entró en déficit comercial por el retroceso de las exportaciones industriales.

En octubre de 2013, por primera vez Brasil subastaba uno de los principales campos de petróleo en la “capa pre-sal” (por estar debajo de una gruesa capa de sal en el fondo de la plataforma marítima). Pese a tratarse de un negocio garantizado sin ningún riesgo, tanto que fue criticado por el movimiento sindical, las grandes petroleras estadounidenses no se presentaron. Esto mostró que la política sigue siendo clave para interpretar los pasos del gran capital. La estatal brasileña Petrobras, la cuarta petrolera del mundo, líder en exploración y explotación en aguas profundas, la empresa que realizó los mayores descubrimientos en la última década, sigue bajo acoso del mercado financiero; sus acciones cayeron más de 10% en 2013. Está realizando gigantescas inversiones —el año pasado instaló nueve plataformas marinas, una cada cuarenta días— como parte de un plan que le permitirá triplicar la producción y convertir a Brasil en el quinto productor de hidrocarburos del mundo. En la lógica del mercado financiero,

ese paso es un problema porque lo está dando un país emergente, no tan controlado como quisieran.

Las empresas multinacionales y financieras se comportan con una lógica económica sobre todo geopolítica, al igual que los Estados que las hospedan, a los cuales, a menudo mantienen como rehenes. La economía está subordinada a la política, la lógica del poder, y ésta a la geopolítica (al poder anclado en ciertos territorios). Para ellas, los gobiernos nacionales no cuentan, menos aún el interés nacional, salvo el de las grandes potencias, en particular los Estados Unidos. Los cuatro años del gobierno Dilma han registrado un crecimiento mediocre; por primera vez la economía empezó a crecer desde la aplicación del Plan Real en 1994. El índice Gini, que mide la desigualdad, registró un leve retroceso, y el desempleo creció por primera vez desde 2009. Los conceptos liberales, como nación y soberanía se dejan de lado práctica y conceptualmente; es la recolonización.

La poderosa industria paulista está sufriendo la competencia china y tiende a decrecer la exportación de *commodities*, en particular soja y mineral de hierro con destino asiático. Más recientemente, preocupa la influencia de China en Argentina, que sigue siendo el principal mercado de la industria brasileña. Los productos brasileños en 2005 representaban 36.4% de las importaciones argentinas, pero cayeron a 22.5% en 2014. Las ventas de China, por su parte, crecieron de 5.3 a 16.2% en el mismo período. No es un problema económico sino estratégico. “Pasamos de ser una periferia inquieta a una periferia conformista”, se queja el economista Carlos Lessa, quien fue nombrado por el Gobierno de Lula en la Presidencia del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) en 2003, para retirarle su confianza menos de dos años después por negarse a apoyar la política neoliberal del gobierno. Lessa sostiene que no hubo traspaso de renta de los más ricos hacia los pobres, ni cambios estructurales, pese a lo cual los tres gobiernos del PT fueron “razonablemente exitosos” (Zibechi, agosto de 2015).

Dilma perdió la paz que tenía en importantes sectores populares. El PT está rumbo al precipicio: los escándalos en Petrobras, constructoras, está atacando a su corazón político financiero. Lo más evidente e innegable es que la población percibe dificultades en la economía, en recesión en 2014, con desempleo e inflación en alza. Además, está el escándalo de corrupción en los negocios estatales, que llevaron a la cárcel a grandes empresarios y amenaza a muchos líderes políticos, incluyendo a Dilma y a Lula. La

situación aparece como una crisis de múltiples dimensiones. La presidenta Dilma Rousseff enfrenta además una rebelión de aliados en la Cámara de diputados, un rechazo popular récord, según las encuestas, presiones por su inhabilitación o renuncia y la reanudación de protestas en las calles.

Sin embargo, para los oficialistas recalcitrantes y apologistas cínicos, estamos ante un posneoliberalismo, y la pasajera retracción del apoyo se debería a la crisis económica –que no tiene responsables internos– y a la acción de los grandes medios en manos de la derecha. Lo que no se acepta es que, en realidad, la popularidad de Dilma Rousseff –y también de Lula– ya había sido baja en el estallido popular de junio de 2013 y durante la copa del mundo, cuando aun la alianza entre el Partido de los Trabajadores, el poder empresarial y los partidos conservadores con los que cogobierna permanecía unida. La lucha popular y la ruptura de este frente conservador es la base de la crisis política, de la quiebra de la legitimidad y del relato progresista.

El voto desencantado contra el neoliberalismo de Marina Silva fue seguido por una verdadera indignación frente al gabinete neoliberal y las primeras medidas políticas de ajuste y austeridad, en sentido contrario de lo prometido en la campaña electoral. La composición derechista del gabinete mostraba las tendencias; incluso fue Lula quien incorporó al responsable económico del programa de la oposición, y dio lugar a un recorte de gastos que pesaría especialmente sobre la clase trabajadora y la educación. Otro nombramiento de impacto fue el de Katia Abreu en el Ministerio de Agricultura: defensora de crímenes ambientales y el avance del agronegocio sobre tierras indígenas, dos causas de amplia sensibilización en la ciudad.

Dilma, con un discurso anticorrupción, señaló la posibilidad de un cierre del ciclo por el camino más conservador. En el Congreso, aumentó la influencia de la bancada “de la bala, el buey y la Biblia (BBB)”, con control de la Cámara de diputados y con mucho más influencia sobre el gobierno que los movimientos sociales. Sectores conservadores en la base del gobierno y la oposición consiguieron que el gobierno frenara iniciativas educativas antihomofóbicas en curso; con ello se preparó el camino para aprobar una enmienda constitucional que reduzca a 16 años la edad de la mayoría penal, después de haber aprobado la generalización de la tercerización, antes restringida, para todos los sectores de la economía.

Quedaron cada vez más alejados del proyecto de cambios que los llevó al poder, sin capacidad para movilizar ni frenar institucionalmente reformas conservadoras, como el del deterioro de los derechos del trabajo. Las encuestas y el cálculo electoral determinan así el proyecto político, que bajo un manto tiende al culto de lo institucional y la tecnocracia, aunque mantenga un discurso con énfasis en lo social. El fin de ciclo pasa por la aceptación de un modelo conservador, evaluado como condición necesaria para la estabilidad y continuidad política.⁷

La Constitución de 1988 falló por no renovar la política. No cambió las reglas para los partidos, que siguen con el monopolio del proceso electoral. “La democracia está aún por hacerse en esa área”, sostuvo el sociólogo Grzybowski, director de Ibase, una de las organizaciones no gubernamentales más reconocidas de Brasil. Los partidos perdieron la escasa capacidad representativa que les quedaba, más aún cuando la ciudadanía se transformo en manada clientelar gracias al populismo.

Esa Constitución, que institucionalizó la redemocratización brasileña tras la dictadura militar, de 1964 a 1985, reconoció derechos de variados sectores sociales, como los de los indígenas sobre sus tierras ancestrales, la niñez, los discapacitados; a la vez, detalla los deberes del Estado. Por eso la atacan los economistas ortodoxos como fuente de gastos públicos crecientes, imponiendo el crónico aumento del déficit fiscal y de la carga tributaria, cuyo agravamiento en los últimos años conspira contra el gobierno de Rousseff y Temer. Eso frena el crecimiento económico, aducen. Agregan que el problema no es la Constitución, sino “el clientelismo, el exceso de empleos públicos y la corrupción” que imponen “gastos desenfrenados a los gobiernos, tanto en el escala nacional, como estatal y municipal”. Pese a esas críticas, es prácticamente imposible movilizar multitudes en contra de una Constitución que representa conquistas para la mayoría de la población. Es un factor de estabilidad que favoreció por

⁷ Una fuerte alianza BBB (biblia, buey y bala) que reúne aproximadamente a 373 diputados de los 513 que conforman el Parlamento brasileño. Esto está permitiendo que la “bancada evangélica”, que algunos denominan “bancada de la Biblia”, refuerce su capacidad de *lobby* político. En este caso, unida con dos sectores muy importantes, que son la “bancada del buey”, conformada por los latifundistas, y la “bancada de la bala”, conformada por comisarios, ex militares o simpatizantes. La bancada evangélica es un alianza interpartidaria conformada por más de 80 diputados de los diversos partidos del Brasil, en el contexto de un Parlamento más sectorializado y conservador que el anterior.

un tiempo la permanencia de la presidenta, amenazada de inhabilitación u otros mecanismos de destitución legal casi desde que comenzó su segundo cuatrienio, en enero.

Una alternativa, en la visión opositora, fue imponer ajustes que desgasten a Dilma y mantener un gobierno en agonía hasta enero de 2019, con la economía y la situación social en deterioro. Pero la crisis de credibilidad no afectaba sólo a Rousseff; ella es la síntesis de la política nacional, en que también el Congreso Nacional está sumergido en el descrédito. “Sin cambiar el sistema electoral nada cambia”, afirmó Dilma; con ello defiende el fin del financiamiento empresarial de las campañas “para que el poder económico no siga determinando quién será elegido”. Pero ese simple cambio no tiene apoyo en el parlamento.

En el Supremo Tribunal, sí lo tiene. Una mayoría de seis de sus once magistrados consideró inconstitucional el apoyo financiero de empresas a candidatos, acogiendo una acción del Colegio de Abogados de Brasil. El argumento fue que las empresas no tienen derechos políticos. El Supremo Tribunal Federal toleró que uno de sus miembros interrumpiera, hace más de un año, bajo el pretexto de vista, una acción cuyo resultado ya está definido por seis votos a uno, sobre la ilegalidad del financiamiento privado de campañas. Este fenómeno está en el origen de la corrupción del sistema electoral en todos los partidos; es el vehículo para el ejercicio de la influencia corrupta del poder económico en la política y en la administración. El objetivo de este juez es aguardar hasta que el Congreso apruebe la enmienda constitucional, ya en trámite, por parte del presidente de la Cámara, que torna legal el financiamiento privado de campañas. Gran parte del dinero desviado de Petrobras se destinó, según los acusados, a financiar campañas electorales y partidos.

Entidades de abogados y jueces han denunciado los abusos de poder del juez Sérgio Moro, quien ha extrapolado sus funciones y utilizado, junto con los medios de comunicación, la fuga de informaciones, de denuncias premiadas y prisiones con claro sesgo partidario. No se ve la misma actitud en casos semejantes de corrupción de otros políticos y empresarios en otros casos: trenes de San Pablo, en el conocido *mensalão mineiro*, o en las estafas practicadas por el gobierno de Aécio/Anastasia en las empresas estatales de Furnas y Cemig, en Minas Gerais. No obstante, muchos lo consideran un héroe de la justicia brasileña.

El juez Moro se prestó a alimentar un odio de la vieja clase media contra los petistas (nuevos integrantes de la misma), como si todos estuvieran envueltos con corrupción, todos fuesen culpables, cuando el verdadero culpable es el sistema electoral que ellos no quieren mudar. El proyecto de Serra, en debate en el Senado, es la prueba más cabal de cómo los parlamentares de la derecha aplican el programa de la burguesía en el Congreso Nacional para salir de la crisis. El proyecto retira de Petrobras la prioridad de explorar el *pré-sal*. Es todo lo que las empresas transnacionales precisan, ya que no será más necesario gastar en investigación, dado que se sabe dónde está el petróleo. No hay ningún riesgo; basta ir y buscarlo.

En un país continental, el Estado brasileiro no tiene ninguna condición de fiscalizar lo que las empresas harían en alta mar, ni para dónde y cuánto petróleo llevarían. Hay quienes consideran que si Petrobras está atravesando dificultades financieras y no puede operar todos los pozos, que vaya más lento con la explotación de reservas, garantizando el control del pueblo brasileño sobre ellas.

La entronizada corrupción aparece descarnada. Su principal exponente es la Operación Lava Jato, pero también la Operación Zelotes, inclusive de mayor dimensión. Está sirviendo para destruir la poderosa industria de construcción, donde se encuentra el capital nacional de forma importante, con actuación internacional, y para preparar la desintegración de organismos del Estado, tales como Petrobras, el BNDES, la Caixa Econômica, la Eletrobras, etcétera. Su privatización, que correspondería con su desestatización/desnacionalización, eliminaría, según ellos, la posibilidad de corrupción.

De este modo, el 1 de enero, el día que asumió su nueva gestión, Rousseff estaba empantanada en el mayor escándalo conocido de corrupción de la historia brasileña. Esta corrupción es una operación compleja y enraizada desde hace al menos quince años. Políticos, funcionarios públicos, las principales constructoras del país y diversos cambistas formarían la organización criminal Lava Jato, sospechosa de lavar alrededor de diez billones de reales. Las nueve empresas de construcción implicadas (Camargo Corrêa, Oas, Utc-Constram, Odebrecht, Mendes Júnior, Engevix, Queiroz Galvão, Iesa Óleo & Gás y Galvão Engenharia), conocidas como “El club”, se distribuían entre ellas los contratos con diversas empresas públicas, especialmente con Petrobras, mediante el pago de jugosas “pro-

pinas” –coimas–, es decir, desvío de dinero público que era pasado a diversos partidos políticos.

Según la Policía Federal, Alberto Yousseff era el operador financiero del esquema y Paulo Roberto Costa el operador político que repartía los fondos entre los funcionarios públicos y los partidos. El dinero salía de las constructoras y pasaba por unas “consultoras” que lo lavaban y lo derivaban a los políticos. Se sabe que los principales partidos beneficiados han sido el Partido de los Trabajadores (PT), el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB, principal aliado del gobierno) y el Partido Progresista (PP). A su vez, el Partido Socialista Brasileño (PSB) y su ex presidente, el fallecido Eduardo Campos, habría recibido alrededor de veinte millones de reales para su campaña de reelección de 2010 en Pernambuco. El Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), principal opositor del gobierno, se habría llevado –de manos del también fallecido Sergio Guerra– alrededor de diez millones de reales a cambio de no investigar las primeras denuncias sobre la corrupción de Petrobras. Todos ellos niegan su participación en esta gigantesca trama.

Lava Jato se ha convertido en el principal obstáculo para la expresidenta. El día que tomó posesión de su cargo, la última vez aseguró que iba “a defender a la empresa estatal de los predadores internos y de los enemigos externos”. Para entonces ya sabía que su mano derecha, la ex ministra de la Casa Civil Gleisi Hoffmann, había sido acusada de recibir dinero para su campaña en el Senado, y que el ex ministro Antonio Palocci también era mencionado como receptor de dos millones de reales para la campaña de la propia Rousseff. En enero, Petrobras ya había cancelado sus negocios con más de veintitrés empresas privadas, y se sumaban decenas de personas presas, entre funcionarios y ejecutivos de las constructoras. Otros cinco directores de diversas áreas de la petrolera también habían sido acusados.

De una lista de 2000 funcionarios públicos por investigar, 150 ya han sido llamados a declarar. Si enero de 2015 fue un mes negro para Dilma, febrero fue todavía peor. El día 4, la presidenta de la estatal petrolera, Graça Foster, presionada por los resultados de las investigaciones, dimitió de su cargo. Al día siguiente, la Policía Federal llevó a declarar al tesorero del PT, João Vaccari, acusado de acumular más de 200 millones de reales para su partido y otro pico para su cuenta personal. El 6 de febrero, Rousseff anunció la designación del nuevo presidente de Petrobras: Aldemir

Bendine, ex presidente del Banco de Brasil, poseedor de un perfil más político y menos mercantil.

Esto provocó las críticas del poder financiero internacional y una nueva caída de las acciones de la petrolera estatal. A pesar de haber intentado complacer a la derecha con un equipo económico proclive a los deseos del mercado y de anunciar políticas de recorte del gasto público calcadas de las que predicara la oposición, Rousseff no pudo conquistarlos. A la vez, su giro a la derecha enfadó mucho a los sectores que confiaron en sus promesas “de izquierda”. La elección de ministros como Katia Abreu en Agricultura (conocida como la “reina del agronegocio”) o de Gilberto Kassab en la cartera de Ciudades (uno de los ex alcaldes de San Pablo más desprestigiados y corruptos) ha enfurecido también a los propios afiliados y compañeros del PT.

Si Lava Jato ha vuelto a colocar al PT en el punto de mira en materia de corrupción, la prensa “grande”, siempre alineada con la derecha más conservadora, también colabora con el hundimiento del partido. El periodista Luis Nassiff denunciaba el envío de un mail de la directora de la Central de Globo de Periodismo, Silvia Faria, en el que advertía a sus redactores que eliminaran las partes donde aparecía el nombre de Fernando Henrique Cardoso vinculado con la operación. El diputado del izquierdista Partido Socialismo y Libertad (PSOL) Jean Wyllys hacía la misma advertencia: “Está claro que hay que investigar la corrupción en Petrobras durante los gobiernos petistas, pero también durante la etapa tucana. Los medios seleccionan la información relativa a la corrupción del PT y obvian la de los otros partidos”. Wyllys también destacaba cómo este escándalo debía servir para reflexionar sobre la financiación privada de las campañas electorales.

Lava Jato es el símbolo de la corrupción en Brasil entre el sistema privado y el público. La otra gran víctima de la prensa es Petrobras, presentada como una empresa arruinada. La Federación Única de Petroleros (FUP) fue la primera en quejarse del maltrato mediático: “Estamos viendo cómo intentan desprestigiar a Petrobras, esconder sus éxitos para disminuirla ante los inversores privados”, dicen los sindicalistas en una carta publicada en el portal Carta Maior (Marra, 2015). Desde la FUP recuerdan que en los últimos doce años las inversiones que hizo condujeron a que la empresa se volviera autosuficiente y cosechara éxitos tecnológicos, como el descubrimiento de los yacimientos petroleros del *pré-sal*. En 2002, su

valor en el mercado era de 15 billones de dólares; ahora alcanza los 110 billones: nueve veces más.

A finales del 2015, la producción de Petrobras fue superior a la de la estadounidense Exxon Mobil, con una cifra de 150 000 barriles por día. Esto la convirtió en la mayor productora de petróleo del mundo entre las empresas de capital abierto. La prensa, sin embargo, insiste en la caída de las acciones de Petrobras en las bolsas extranjeras y evita hablar de la crisis internacional de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y de la nueva guerra de precios del petróleo marcada por Arabia Saudita, que ha dejado a países como Irán, Rusia y Venezuela en serios problemas. Pero Petrobras es importante a nivel nacional; genera trece por ciento del producto bruto interno del país y veinte por ciento de las inversiones realizadas en Brasil. Las veintitrés empresas que están marcadas por Lava Jato suman catorce por ciento de los empleos formales totales en el gigante latinoamericano. Si estas constructoras se mantienen imposibilitadas de ofrecer productos a Petrobras y de participar en obras públicas, el desempleo será una de las primeras consecuencias.

La intervención del Poder Judicial, del Ministerio Público y de la Policía Federal se desarrolla en varias esferas y provoca una pugna jurídica. La teoría del dominio del hecho permite que cualquier persona sea responsable de los actos de su subordinado sin que el fiscal o el juez tengan necesidad de probar que el acusado conocía dichos hechos. El sistema del Ministerio Público permite a cualquier procurador individual desencadenar procesos basado incluso en noticias de un periódico contra cualquier individuo. También puede filtrar de forma selectiva estas acusaciones a la prensa, que las reproduce sin ningún respeto por los derechos de los supuestos acusados y sin perspectiva de reparación del daño en caso de que se verifique la improcedencia de las acusaciones.

De acuerdo con las declaraciones del presidente de las entidades de la Policía Federal en la Cámara de Diputados, la Policía Federal recibe recursos regularmente de la CIA, del FBI y de la DEA, por un monto de diez millones de dólares anuales, depositados directamente en cuentas individuales de policías federales. La Policía Federal ejerce sus funciones con extrema parcialidad, de forma mediática, creando en la sociedad la presunción de alta peligrosidad de los individuos que arresta para la investigación y abrogándose la figura de poder independiente del Estado. Sin embargo, hay que anotar que las declaraciones de los imputados o

apresados ante la policía federal, están ocasionando acusaciones contra presidentes y altos funcionarios en varios países de América Latina, como Perú, Chile y otros.

Para algunos, la crisis política proviene de la decepción y del inconformismo del PSDB y de sus aliados, con la derrota en las urnas en 2014, lo cual lo lleva a procurar, por todos los medios, erosionar la credibilidad y la legitimidad del gobierno de Dilma Rousseff y, transversalmente del gobierno de Lula, y así minar las posibilidades de victoria de una eventual candidatura de Lula en 2018.

Los partidos y políticos conservadores cuentan con la campaña sistemática de la televisión, diarios y revistas, basados en denuncias filtradas, con la campaña de intimidación en internet, con las manifestaciones populares, con el desempleo creciente causado por la política de recorte de inversiones y de aumento estratosférico de intereses, para hacer bajar los índices de aprobación del Gobierno y de la presidenta y argumentar con la legitimidad y la necesidad de deponerla por medio del *impeachment*. Una campaña del miedo que fue efectiva en tanto se mantuvo la confianza en el resquebrajado sistema representativo.

La crisis en la prensa y en los medios de comunicación se desarrolla en un ambiente en que las televisoras, radios, diarios y revistas reciben paradójicamente enormes recursos del gobierno para que le hagan una oposición sistemática, erosionen la confianza de la población en el sistema político y en los partidos, en especial en los progresistas de izquierda, y dejen fuera a los partidos conservadores, como el PSDB, que recibió tantas donaciones para su campaña de 2014 como el PT y de las mismas empresas ahora acusadas por el juez Moro.

La crisis social también se desarrolla por internet, donde circula todo tipo de ofensa racista, homofóbica, antifemenina, antiprogresista y fascista, contra los políticos y partidos de izquierda. Ello genera un clima de hostilidad y odio, y estimula la agresión física. En el Congreso, los sectores más conservadores se alzaron con un gran número de diputados en las elecciones y, habiendo conquistado la presidencia de la Cámara de diputados, impulsaron, a golpe de balde, sin prestarle atención a la necesidad de debate entre los parlamentarios y por parte de la sociedad, una abultada agenda de proyectos conservadores que incluye, entre los principales, la reducción de la edad de imputabilidad penal, la ampliación del uso de armas y el financiamiento privado de las campañas.

El máximo objetivo de esta gran ofensiva política y económica conservadora es la desmoralización del PT que lo lleve a una estruendosa derrota en las elecciones de 2016, la cual lo preparará para su derrota final y su “desaparición” en las elecciones de 2018. El proceso político del *impeachment* de la presidenta Dilma no avanzaba mientras el PSDB y PMDB estaban divididos en cuanto a su conveniencia en el actual momento del calendario político y económico. Los tres candidatos posibles del PSDB a la presidencia de la República, cualquiera que sea (Aécio Neves, Geraldo Alckmin y José Serra), tienen opiniones diferentes sobre su conveniencia. A Aécio Neves le interesaba el *impeachment* de Dilma Rousseff y de Michel Temer por delito electoral, declarado por el TSE, tan pronto cuanto sea posible, ya que esto daría lugar a una elección en noventa días donde espera que, como presidente nacional del PSDB y candidato que habría perdido la elección debido a un “fraude”, ahora se beneficiaría mediante su persistente campaña por la ilegitimidad de los resultados electorales de 2014, lo cual lo convertiría en el candidato del PSDB con mejor perspectiva de victoria.

A Geraldo Alckmin le importaba que el proceso político, económico y social desgaste en forma larga y duradera al gobierno Dilma y al PT hasta que se lleven a cabo las elecciones municipales en 2016, con una fragorosa derrota del PT y del PMDB y que tenga tiempo de construir su candidatura, en el gobierno de San Pablo; mientras, la candidatura de Aécio se debilitaría con el tiempo como resultado de eventuales denuncias. A José Serra le motiva también que el *impeachment* no se produzca ahora, que el gobierno se desgaste para que tenga tiempo de reconstruir su imagen y eventualmente pueda postularse como candidato por el PSDB en 2018 o, incluso, por el PMDB, el cual insiste en tener un candidato propio pero sin un nombre hoy viable. Finalmente, Serra fue fundador del PMDB y volvería a su casa, construyendo su candidatura junto a la clase media nacional, a través de su actuación en el Senado, con toda la cobertura favorable de la prensa.

Para el PMDB, el *impeachment* de la presidenta representaba el fin de un gobierno donde ocupa la vicepresidencia y al cual le brinda apoyo. Un largo proceso de desgaste de Rousseff, del gobierno y del PT también lo afectaría como partido aliado, mientras la prensa desgasta su imagen en la opinión pública como partido oportunista y corrupto. Los intereses de Michel Temer, de Renan Calheiros y de Eduardo Cunha son divergentes.

Cunha ansía ser el candidato del PMDB a la presidencia, asumiendo el liderazgo de la ofensiva conservadora en el Congreso y el papel de defensor del Congreso, pero enfrenta el desgaste de las denuncias de corrupción. Michel Temer sabe que la condena por delito electoral de Dilma Rousseff que impuso el TSE también lo arrastraría, mientras que la condena de Dilma por el rechazo de las cuentas de 2014 por parte del TCU y del Congreso lo llevaría a la presidencia. Renan disputa con Temer la influencia en el PMDB y se imagina que puede ser candidato en 2018 con el debilitamiento de los demás. Al final dejaron que se impusiera la lógica normal de la sucesión.

En el PT, la situación es tal vez aún más grave. El programa económico conservador, al recortar inversiones públicas y los gastos de financiación del gobierno, aumenta el desempleo y afecta la demanda, por lo que se reducen las perspectivas de ganancia, se contraen las inversiones privadas, se instaura la desconfianza en los mercados y disminuyen los ingresos tributarios normales, lo cual incrementa el déficit público. Al aumentar la tasa de interés, el Banco Central aumenta los gastos del gobierno y la relación entre deuda y producto interno bruto, reduce la actividad económica y las perspectivas de ganancia, y provoca la caída en la recaudación. Al no conseguir el aumento de ingresos normales por la dificultad de subir los impuestos, pasa a apelar a la venta de activos, lo cual es una forma disfrazada de privatización, con resultados apenas temporales.

Al provocar el desempleo, apoyar medidas desfavorables para los trabajadores, como alteraciones en el seguro de desempleo, en las bonificaciones salariales y otras, y causar la reducción del crecimiento, el gobierno mina su base de apoyo social y político y las bases sociales y políticas del PT. La retracción de la demanda, el aumento de las tasas de interés, la contracción de las actividades del BNDES, la reducción de las oportunidades de inversión y la perspectiva de aumento de tributos afectan los intereses de los empresarios y aumentan su descontento con el gobierno y su política. No existe liderazgo en el PT más allá de Lula, quien, por su parte, no ve cómo abandonar el programa económico del gobierno de Dilma sin acelerar su caída, pero se queja de la incapacidad de la presidenta para el ejercicio de la política.

La situación brasilera es muy complicada porque se trata de una conjunción de factores. El primero es la victoria de Dilma con la promesa durante las elecciones de mantener las políticas sociales y los derechos de

los trabajadores. Sin embargo, comenzaron los cortes sociales y una brutal política de controles del gasto público e intensificación del superávit primario. Además, eligió a un ministro de Economía de un gran banco brasileño para hacer los trabajos de la estabilización de la economía.

Ese fue el primer problema, pero se conjugan dos o tres elementos importantes. La situación de Petrobras es muy crítica, la percepción de un esquema de corrupción profundo, que no es de hoy y tampoco del gobierno de Dilma, ni del gobierno de Lula, viene de muchos años atrás. Los gobiernos de Lula y de Dilma tomaron muchas obligaciones con Maluf y con el PMDB que son partidos que conviven mucho con la corrupción. La sensación de corrupción viene de que muchos directores de grandes empresas están presos.

El capital internacional esta tras las riquezas de Brasil. Hoy en día, la industria extractiva opera aproximadamente 72 minerales, veintitrés tipos de metales y 45 de no metálicos, además de cuatro tipos de combustibles. La minería representa 5% del PIB y ofrece productos que son ampliamente utilizados en las fábricas de acero, fertilizantes, y principalmente en la industria petroquímica. El país se destaca en la producción de amianto, bauxita, cobre, cromo, estaño, hierro, grafito, manganeso, níquel, oro, potasa, fosfato de roca y zinc. Hierro ha sido el metal más importante, con siete grandes empresas de la zona: Cia Vale do Rio Doce; Minería Brasileiras Reunidas; Trinidad Minería; Ferteco Minería; Samarco Mineração; Cia Siderúrgica Nacional; e Itaminas Comercio Minerales.

Según estudios del Departamento Nacional de Producción Mineral, Brasil es el país con potencial minero más grande del mundo, junto con la Federación de Rusia, los Estados Unidos, Canadá, China y Australia. Su territorio es muy codiciado, ya que las reservas son grandes y pueden generar beneficios durante mucho tiempo.

Por lo tanto, no es sin razón la embestida de grandes representantes terratenientes en el Congreso Nacional para revisar la demarcación de las tierras indígenas. Estos extensos territorios ya demarcados tiene reservas estratégicas de mineral, y quienes utilizan la tierra como una mercancía quieren poner sus afiladas garras en esta riqueza. Pasando a la legislatura nacional la decisión sobre la demarcación de tierras y dándoles poder sobre la revisión de las circunscripciones ya hechas, lo que puede suceder es la retirada de los territorios ya garantizado a los indígenas, quilombolas (descendientes de los negros esclavizados) y pueblos tradicionales. Todo

en nombre de la ganancia, sea para el monocultivo para la exportación o para la minería (Tavares, 2015). Siguiendo a Hernández (2015), el enorme ecocidio amazónico es otra crisis profunda de desertificación del clima. A pesar de que ha mejorado en los últimos cinco años, a ciudades del sureste les falta el agua. El gobierno de São Paulo afirma que hay racionamiento, pero en la periferia no hay agua.

Para comprender tanto la crisis del agua como la energética, se debe contemplar que Brasil vivió una desertización climática que los gobiernos de Dilma y de Lula no previeron. Jamás hicieron inversiones para contar con una alternativa. Utilizaron el precio de la nafta y de la energía eléctrica para ejercer control político. Las empresas privadas de energía contaban con un enorme subsidio para que los precios no subieran, para no comprometer la inflación y garantizar la victoria del PT. En el segundo gobierno de Dilma hubo que corregir el precio de la nafta y de la energía eléctrica. La población trabajadora se vio directamente afectada, lo cual sumó al descontento social. Las empresas públicas de energía eléctrica brasileñas combinan la gestión pública y privada. Esta variante del neoliberalismo se apoya en el desarrollismo y el asistencialismo. Las empresas privadas dependen del Estado desde la crisis mundial, que llegó a Brasil en 2013 (Hernández, 2013).

Ambos gobiernos, de acuerdo con Hernández (2013), subsidiaron también a la industria automovilística, la cual, en consecuencia, incrementó sus ventas enormemente. Cuando la crisis se desató, las transnacionales redujeron personal a medida que sus ventas disminuyeron. A pesar de que un acuerdo firmado en 2012 aseguraba que no dejarían a ningún trabajador fuera de su puesto hasta 2016, echaron a ochocientos empleados y anunciaron que harían lo mismo con otros dos mil. Los obreros se manifestaron en contra.

En opinión de Salem Vasconcelos, con Lula el PT profundizó el carácter primario-exportador de la economía brasileña y modernizó la posición neocolonial en el sistema económico mundial. La subjetividad popular percibió el impacto de las políticas sociales del neoliberalismo petista (aunque fueron superficiales y no mitigaron la segregación social) como un gran avance. “La deshonestidad intelectual petista fue alzarse en el papel de mesías, protector de los pobres y de los oprimidos, produciendo la fantasía/farsa de que el capitalismo brasileiro alcanzaba su autodeterminación por las manos mágicas de un obrero” (Salem Vasconcelos, 2015).

Por otro lado, se perpetuó el pago abusivo de los intereses de la deuda pública. Esta, para Vasconcelos, es la verdadera espina dorsal de la corrupción que asalta al Estado. El ensayo se evaporó a la menor señal de “huelga de los inversores”. Incluso, algunos creyeron que la burguesía industrial brasileña podría ser menos rentista (Salem Vasconcelos, 2015).

La derecha apoyó inicialmente a Dilma porque su gobierno no es de izquierda y hace lo que le impone el capital. Aécio Neves y los socialdemócratas se habían apropiado del programa con el argumento de que Dilma está haciendo el suyo. Finalmente, la corrupción en Petrobras y en otras empresas públicas financió la elección de Dilma. El *impeachment* acarrea una crisis social profunda. El gobierno de Dilma terminó representando a la derecha: la banca, los agronegocios y las grandes industrias. Algunos pensaban que dichos sectores dominantes no iban a apoyar un golpe, porque no les conviene una crisis social. Hay un descontento en todas las capas de la sociedad, entre los trabajadores rurales y las clases medias. Aunado a ello, la crisis internacional está golpeando Brasil. Los recursos de la política económica del gobierno comienzan a ser insuficientes para mantener el asistencialismo (Hernández, 2013).

Como podemos observar, Brasil pasa por tres graves crisis. Una es la crisis económica, con la economía paralizada, falta de crecimiento de la industria, señales de desempleo y caída en los ingresos de la clase trabajadora. Otra es la crisis social, cuyos problemas, sobre todo en las grandes ciudades, como falta de vivienda, de transporte público, aumento de la violencia contra la juventud en las periferias y de millones de jóvenes que no están consiguiendo entrar en la universidad apenas aumentan. Los ocho millones de jóvenes que se inscribieron en el examen nacional de enseñanza media (ENEM), requisito obligatorio para entrar en las universidades públicas brasileñas, por ejemplo, disputaron 1.6 millones de lugares.

En opinión de João Pedro Stédile, líder del Movimiento de los Trabajadores Rurales sin Tierra, quien examina las crisis:

La última es la grave crisis política e institucional, en que la población no reconoce la legitimidad y liderazgo en los políticos electos. Eso se debe al sistema electoral, que permite que las empresas financien sus candidatos. Para tener una idea, apenas las diez mayores empresas eligieron 70% del parlamento. O sea, la representación fue secuestrada por el capital, y eso generó una hipocresía de los electos y una distorsión política insuperable. Eso se refleja en las pautas que el parlamento adopta y en las ideas que

ellos defienden, que no tiene nada que ver con los electores. Por ejemplo: en la sociedad brasilera tenemos 51% de mujeres. Se presentó un proyecto para garantizar 30% de representación femenina, pero ellos bloquearon. Y, con eso, ¡se va mantener apenas el actual 9%! (Stédile, 2015).

Para salir de la crisis, la burguesía defiende el Estado mínimo, a través de la disminución de ministerios, de la intervención estatal en la economía y de derechos laborales. Para Stédile, el objetivo es que el costo de la mano de obra disminuya y que se recuperen las altas ganancias, para competir mejor en el mercado mundial. “Otro elemento es la realineación de la economía y de la política externa con Estados Unidos. Por eso critican las políticas de los BRICS, de Unasur, de Mercosur y defienden abiertamente el regreso del ALCA [Área de Libre Comercio de las Américas]: este es el programa de Dilma” (Stédile, 2015).

Stédile afirma que para alcanzar estos objetivos usan a sus operadores políticos en los espacios que detentan hegemonía completa: el Congreso nacional, el poder judicial y los medios de comunicación, los cuales actúan articulada y permanentemente. “El partido ideológico que está articulando esa unidad entre los tres espacios es la Red Globo” (Stédile, 2015).

El gobierno montó un ministerio dependiente de los partidos conservadores, los cuales incluso votan en contra de él en el parlamento. Este ministerio está resumiendo la crisis, continúa Stédile, a un problema de déficit en el presupuesto. Sin embargo, dicho déficit es consecuencia de la crisis. Las medidas paliativas e iniciativas gubernamentales, lejos de resolverla, tienden a agravarla. “Si el gobierno no muda de rumbo, no muda su política económica y toma iniciativas que coloquen el debate en la sociedad, de la necesidad de una reforma política profunda, continuará cayendo en la impopularidad y en la incapacidad de salir de la crisis” (Stédile, 2015).

Por otro lado, los movimientos y las fuerzas populares (partidos, sindicatos, movimientos sociales, pastorales) no han logrado gestar una plataforma común para salir de la crisis. Se cree que se puede salir de la crisis económica si el gobierno, en lugar de pagar 280 000 millones de reales en intereses por año, invierte en la industria para generar empleos, en obras públicas de transporte, vivienda o educación. Stédile (2005) afirma que la crisis política sólo se superará con una reforma política profunda.

Siguiendo a Stédile, la corrupción en la sociedad brasilera va mucho más allá de los empresarios que se apropian de los recursos públicos. Está presente en la gestión de recursos, donde se involucran políticos de todos

los partidos y otros sectores sociales. Afirma que es preciso que los trabajadores de Petrobras participen más en la gestión de la empresa, para evitar que ocurra lo mismo que con el mineral de hierro. Fernando Henrique Cardoso privatizó la Vale do Rio Doce: la entregó gratuitamente a los capitalistas estadounidenses. “Se exportan miles de millones de toneladas de hierro por año, y el pueblo brasilero no tienen ningún beneficio con esa riqueza natural, aunque, según la constitución, debería utilizarse en beneficio del bienestar de toda la población” (Stédile, 2015).

Por otro lado, las centrales sindicales, en especial la Central Única de Trabajadores (CUT), desde su larga parálisis, intentaron coordinar la movilización en defensa de los derechos de la clase trabajadora. Estaban dispuestos realizar una huelga general en todos los sectores de la economía. Las quimeras continúan y otras propuestas consisten en construir dos espacios complementarios de unidad: un frente de lucha de masas (entre la CUT y los movimientos populares), y otro político, que consiga aglutinar los movimientos populares, partidos, entidades, pastorales e intelectuales para debatir un proyecto para Brasil. Es decir, se buscaría un frente político que no fuera partidario ni electoral para pensar un proyecto alternativo al de la burguesía (Stédile, 2015).

La reforma agraria, afirma Stédile, también está paralizada desde antes de la crisis por falta de un proyecto de país. Hay 120 000 familias acampadas que el gobierno debe ubicar y un déficit de más de 100 000 casas en los asentamientos. Falta asistencia técnica y los proyectos de agroindustria están parados. Asimismo, el Movimiento de los sin Tierra propone organizar una producción que priorice el cultivo de alimentos saludables para toda la población. “La matriz tecnológica debe volcarse para la agroecología, instalar agroindustrias y cooperativas en todos los asentamientos como forma de aumentar el empleo y los ingresos de los asentados. De ahí el esfuerzo de aliarse con otras articulaciones políticas y populares, ya que el avance de la reforma agraria popular depende de los cambios generales, de las reformas estructurales de la sociedad brasilera” (Stédile, 2015).

Como podemos apreciar, la propuesta de Stédile, indiscutible líder del MST, va más allá de lo institucional. Rompe sus marcos después de haber permanecido muchos años esperando soluciones a los grandes problemas agrarios desde arriba. Otros intelectuales y organizaciones que buscan la raíz de la crisis actual comparten la crítica al gobierno del PT.

Para Katz, la gestión inicial del sucesor de Fernando Henrique Cardoso sorprendió por la sintonía que mantuvo con su antecesor. La nueva gravitación social que alcanzaron los trabajadores no se plasmó en un proyecto distinto de las tradiciones dominantes. Afirmo, además, que PT llegó al gobierno con la explícita aprobación de los grandes grupos capitalistas y adoptó desde el inicio una postura extremadamente conformista. “Sólo se introdujeron ciertas regulaciones en las privatizaciones, algún control en la liberalización financiera y se acotaron límites a la apertura comercial” (Katz, 2015).

Una caracterización remarca el continuismo y la ausencia de rupturas con el neoliberalismo. El PT se amoldó al Consenso Pos-Washington con políticas económicas que estabilizaron el mismo curso de las últimas décadas (Katz, 2015). Ese legado contrasta con la primacía asignada a la exportación y a la liberalización comercial, en un marco de apertura al capital extranjero, desnacionalización y dependencia tecnológica. Resalta la continuada vulnerabilidad de la economía y de políticas ortodoxas encubiertas.

Siguiendo a Katz (2015), en el neodesarrollismo la burguesía industrial, la sustitución de importaciones y las posturas nacionalistas implican liderazgo. Las nuevas políticas fiscales de estímulo productivo, la inversión pública y la expansión del programa Bolsa Familia reflejaron estos cambios. Esta política híbrida permitió crecimiento. Sin embargo, no había un programa coherente. La estrategia neoliberal se entrelazó con subsidios a la industria financiados por la previsión social. El lulismo intentó favorecer a la burguesía frente a sus rivales extranjeros. Sin embargo, no se consumó un cambio radical que “pasara de altas tasas de interés y políticas de libre ingreso de capitales, a orientaciones que privilegian la actividad fabril” (Katz, 2015).

En comparación con los periodos precedentes, la tasa de crecimiento 2006-2013 bajó y se sostuvo en el endeudamiento. La tasa de inversión fue inferior a la media histórica y el pago de intereses de la deuda continuaba agobiando a la economía. El proyecto industrializador chocó con los proyectos de agroexportación y finanzas y afectó el desenvolvimiento manufacturero. Se notó el freno al desenvolvimiento industrial en la pérdida de competitividad y el costo Brasil.⁸ “Esa obstrucción se corrobora, además,

⁸ La expresión ‘costo Brasil’ se utiliza para designar a los factores ajenos a la producción interna que merman la eficiencia de las empresas brasileñas, como la carga tributaria o la precariedad de la infraestructura (CEPAL, 2007).

en el estancamiento tecnológico y en la obsolescencia de la infraestructura” (Katz, 2015).

Se estima que los beneficios del neodesarrollismo se verifican en la expansión de la clase media. Para Katz, señalar que los beneficios del neodesarrollismo se observan en la expansión de la clase media equivale a sobredimensionar el ascenso de dicho sector utilizando los criterios del Banco Mundial: ubicar en la clase media a cualquier trabajador que gane 10 dólares por día, sin considerar las desigualdades sociales. Este discurso de crecimiento, afirma Katz, se generalizó a partir del ascenso al salario mínimo. Sin embargo, el país ocupa la posición 84 en el índice mundial de desarrollo humano (Katz, 2015).

Por otro lado, hubo mejoras sociales reales en esa década, como la recuperación de los salarios postergados, los incrementos en las negociaciones de las convenciones colectivas y el mayor financiamiento educativo. Pero la concentración de la tierra afectó a la mayoría de los campesinos; la desigualdad disminuyó, pero un grado ínfimo; la tasa de explotación se mantuvo y la precarización se hizo más profunda: se implementaron formas de subcontratación. Los trabajadores terciarizados absorbieron un tercio de los nuevos empleos del período (Katz, 2015).

A menudo la expansión de la clase media se identifica con la modernización del consumo. Sin embargo, el incremento de compra se debe a la obtención de créditos con tasas de interés poco sustentables. La idea de Brasil como un país de segmentos medios cae en duda cuando se toman en cuenta los treinta millones de pobres. “Se ha creado un nuevo círculo de ese sector, pero en un escenario de continuada segmentación social y convalidación del asistencialismo. No existen logros acordes con los objetivos enunciados en el terreno de industrialización o el desenvolvimiento. El frustrado proceso de reindustrialización actual prolonga las dificultades que enfrentó la versión fallida de los años 1950-1960” (Katz, 2015).

Nuestro autor ilustra la imposibilidad del capitalismo nacional desde arriba, en particular de la transformación agraria, la reindustrialización, la eliminación de la pobreza y la creación de extendidas clases medias, mientras continúe con la encubierta ortodoxia neoliberal. Sólo fueron nuevos fetiches para ocultar su verdadera política extractivista y neoliberal.

Hay diferencias entre neodesarrollismo y neoliberalismo que se proyectan a la esfera política. El primero busca retomar la industrialización con importantes mercados internos y masas de asalariados, pero sin el

pilar que sostiene a esas estructuras en las potencias centrales. Sin embargo, enfrenta severas trabas periódicas para la acumulación de capital. Que las nuevas economías intermedias se consoliden de manera internacional acentúa la necesidad de recuperar el peso fabril. Esto afecta, además, las posibilidades de concreción de esa meta. “Las economías de la región necesitan expandirse aceleradamente, pero enfrentan espacios internacionales reducidos para materializar ese crecimiento” (Katz, 2015).

Por otro lado, sigue Katz (2015), para algunas naciones sudamericanas, la abundancia de recursos naturales genera una altísima renta para bienes producidos a un costo inferior al promedio internacional. Cuando repunta el precio mundial de las materias primas, se incentiva un rendimiento superior a la ganancia industrial. Los programas desarrollistas con tendencia a la reiteración han debido lidiar con esta contradicción. Para revertir esta tendencia, intentan canalizar grandes porciones de la renta hacia los emprendimientos industriales que las clases dominantes evitan, e implementar impuestos a las agroexportaciones y subsidios a los industriales (Katz, 2015).

Los petistas adaptaron el liberalismo al crecimiento económico. Durante los tiempos de Cardoso se dio una ola de privatizaciones, el capital, tanto nativo como extranjero, instaló directamente sus multinacionales como el mejor socio de las *global players* brasileñas e implementó la especulación financiera sobre la deuda pública. Esta situación ocurrió no sólo en Brasil, sino en todo el mundo: el “combate a la corrupción” se utilizó para privatizar empresas y recursos estatales según intereses particulares (“Petrobras: corrupción...”, julio de 2015).

Por un lado se encuentra la reforma que propuso el canciller José Serra, la cual permite a las empresas extranjeras controlar los yacimientos submarinos, lo cual implica la reducción de la participación de Petrobras (“Brasil: la ley...”, octubre de 2016). Con esto se expuso a esta riqueza del país a un mayor saqueo. Por otro lado, las privatizaciones, la tercerización y la precarización del trabajo se ligaron a la corrupción y expusieron a los trabajadores a los despidos masivos. “Recientemente, Petrobras vendió su participación en un pozo a la empresa Shell por un precio casi regalado, anunció la venta de acciones en BR Distribuidora e informó sobre la “desinversión” (eufemismo petista de privatización) millonaria, de 15 100 millones entre este año y el que viene, y otros 42 600 millones entre 2017 y 2018” (“Petrobras: corrupción...”, julio de 2015).

El PT no tomó en cuenta que tanto su discurso como su estrategia se volvieron obsoletos. Prefirió callar sobre los verdaderos problemas y continuar con el autoelogio. Al obstruir el debate sobre los verdaderos problemas del país y los poderosos intereses que deberían enfrentarse para resolverlos, el PT alimentó el conservadurismo destinado a derrotarlo. Cuanto más demuestra servilismo ante las exigencias de gobernabilidad del Partido del Movimiento Democrático de Brasil (PMDB), cuanto más alardea que el ajuste neoliberal es la única e inevitable salida, más insufla y fortalece a sus enemigos (Salem Vasconcelos, 2015).

CAPÍTULO II

DERECHIZACIÓN DEL PT, RETROCESO POLÍTICO, EXPANSIÓN TRANSNACIONAL Y RESISTENCIAS POPULARES

El hecho de que Brasil esté al frente de la Secretaría Ejecutiva del Foro de São Paulo tuvo un significado que toca desentrañar. Si bien en su momento contribuyó en mucho para que América Latina y el Caribe se convirtieran en un conjunto de experiencias políticas y sociales que crearon expectativas socialdemócratas para la región y la misma humanidad, en los últimos años ha dejado muchas interrogantes acerca de las interinfluencias negativas en la administración del capital. A partir del año 2005, el PT de Brasil no le permitió a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) participar más en el foro; en la medida en que se derecha el PT y el gobierno de Brasil, el Foro pierde toda perspectiva emancipatoria, si alguna vez la tuvo.

En la última década, algunos partidos miembros del Foro de Sao Paulo pasaron de ser oposición a ser partidos gobernantes, como el Movimiento al Socialismo (MAS) en Bolivia, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) de Nicaragua, el Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) de El Salvador, el Frente Amplio en Uruguay, y el Partido de los Trabajadores (PT) en Brasil. Esto hablaba de la importancia potencial de Brasil en una Latinoamérica en proceso de cambio, que además cuenta con la presencia del Partido Socialista Unificado de Venezuela (PSUV), el peronismo en Argentina y Alianza PAIS de Ecuador.

Así, los congresos del Foro de Sao Paulo se convirtieron en reuniones políticas del más alto nivel, con la participación de partidos, cancilleres y

jefes de Estado. En ellos se defienden ante amenazas comunes y coordinan proyectos, pero carecen de autocrítica con una mirada emancipatoria de la reconfiguración del sistema y los poderes. Esta situación ha cambiado a favor del conservadurismo. Lula y Dilma apoyaron indistintamente el financiamiento de campañas de candidatos progresistas y neoliberales. Con ello, promovieron la corrupción en una decena de países latinoamericanos. En el 2015 vimos al gobierno de Dilma apoyando a la oposición en Venezuela y al PT en franca descomposición.

Las concepciones socialdemócratas, hoy expresadas en neopopulismos posmarxistas (otros los califican de posneoliberales, neodesarrollistas), dejan de lado la concepción marxista del Estado para retomar el eurocomunismo. Para Marx el Estado no es el reino de la razón, sino de la fuerza y los fetiches; no es el reino del bien común, sino del interés parcial; no tiene como fin el bienestar de todos, sino de quienes detentan el poder; tampoco es la salida del estado de naturaleza, sino su continuación bajo otra forma. La salida del estado de naturaleza coincidirá con el fin del Estado.

En fin, el Estado es un órgano de dominación de clase, de opresión, de creación de un orden que legaliza la opresión, y amortigua los choques entre clases. La práctica les fue demostrando la corrección de esta explicación. Administrar el Estado los fue transformando en una unidad indiferenciada con el capital. El PT nació con una postura crítica al reformismo de los partidos políticos socialdemócratas y se organizó, en el discurso, a partir de las formulaciones de intelectuales marxistas. Sin embargo, contenía en su núcleo, desde su nacimiento, ideologías espontáneas de los sindicalistas y de partidos reformistas de Latinoamérica, los cuales constituyeron una ideología que apuntaba a una aceptación del orden burgués, y cuya importancia se volvió cada vez mayor a medida que el partido adquirió bases materiales como máquina administrativa del capital. En 1992, cuando ya poseían una influencia mayoritaria en la clase trabajadora, el papel de Lula y del PT fue regresivo: llegaron a las calles con atraso, y les tocó el papel de cortafuegos.

Adoptaron la ideología populista para ser potencialmente competitivos en las elecciones, pero no pudieron salir de ella. Piqueras distingue los procesos populistas de los populares. Estos últimos se construyen a partir de los propios sujetos de emancipación; por tanto, tienen autonomía. Entiende por *populista* cualquier proceso social en que estén implicados sujetos

colectivos, sea subordinadamente o no, promuevan lo que promuevan, o hagan lo que hagan (Piqueras, 2015).

El discurso, el programa y el mito de la voluntad popular, el mesianismo y el clientelismo marcan los rasgos del fetichismo populista. Esto lo vemos en Brasil, como el modelo, y en Bolivia, en Ecuador, Venezuela o en Nicaragua. Álvarez Junco sostiene:

Los movimientos o personajes políticos a quienes se llama “populistas” basan su discurso en la dicotomía pueblo/antipueblo. [...] [El pueblo] representa el sùmmum de las virtudes, [...] el antipueblo es la causa de todos los males; y puede tomar cuerpo, según los populismos, en entes internos o externos: el imperialismo, la USAID, la oligarquía, la plutocracia, los extranjeros, el clero. Otro rasgo común a los populismos es la ausencia de programas concretos. En su discurso los llamamientos emocionales dominan sobre los planteamientos racionales. Apelan a la acción de los movimientos sociales o ciudadanos, a los indígenas, a los campesinos, a la juventud, la moralidad, la audacia, la honradez, “menos palabras y más acción”, no se trata de hacer pensar a sus oyentes sino de movilizarlos. El gobierno del pueblo como “gobierno para el pueblo”, sistema político cuyo objetivo es establecer la igualdad social, favorecer a los más débiles [...] es típico de cualquier populismo la formación de redes clientelares. La existencia de un líder dotado de cualidades redentoristas, carismático o milenarista. El antielitismo populista comporta una importante dosis de antintelectualismo y antitecnicismo. Más que un rasgo modernizador, este elemento clave parece un resto del mesianismo religioso o del paternalismo tradicionalista. Todos los populismos prosperan en un contexto institucional muy deteriorado, en el que los partidos tradicionales y los cauces legales de participación política, por corrupción o por falta de representatividad, están desprestigiados hasta niveles escandalosos [...] Quieren gobernar, quieren el poder. Y cuando llegan a él, les molestan las cortapisas: no son de su agrado ni la división y el control mutuo entre poderes, propio de las democracias liberales, ni la existencia de una oposición crítica ni el que su mandato se termine a fecha fija. Su lógica es, la verdad, impecable: si el poder es ahora del pueblo, ¿por qué limitarlo? ¿Quién y en nombre de qué puede oponerse a la voluntad del pueblo? Es decir, que su vínculo privilegiado con el pueblo exige eliminar todo límite a su capacidad de acción. Lo cual abre un peligroso camino hacia la tiranía. Por otra parte, al no establecer ni reconocer normas, tienden a recurrir a la acción directa, lo que suele significar prácticas coactivas contra los discrepantes (Álvarez, 11 de noviembre de 2014).

El PT vive de crisis en crisis desde que creyeron que podían utilizar las políticas ortodoxas en su favor, excluyendo a los críticos. Entre las más graves está la de 2005, cuando una parte del núcleo duro de su dirección fue desaforada políticamente. Pese a la inocultable satisfacción de las fracciones mayoritarias de la clase dominante con el gobierno Lula desde su primer mandato, la oportunidad que abrió la crisis precipitó una ofensiva política del capital en el Congreso nacional y en los medios, con algún eco en las calles, las fábricas y las universidades. Para Arcany, este hecho tambaleó a Lula. La dirección del PT cambió. Las señales de enriquecimiento se hicieron evidentes. “El mismo partido cambió de naturaleza social. Pasó a la historia el partido obrero reformista. Luego de años en el poder, nació un partido con relaciones orgánicas con algunas fracciones de la burguesía brasileña” (Arcany, 2011). Petras sostiene:

El 90% de los delegados del PT son profesionales, abogados, políticos profesionales. No hay nada de obrero allí y mucho menos consultan con los obreros por el programa o el tipo de campaña.

El PT es un partido de clase media que busca asociarse con el gran capital. En ese sentido han aplicado en Brasil la fórmula tradicional de clientelismo con programas hacia la pobreza, y del otro lado fortalecer el capital monopolístico en Brasil (Petras, 2013).

Aunque la fracción dirigente del Partido del Trabajo en 2010 fuera esencialmente la misma, el partido había cambiado. En tres décadas, eligió miles de concejales, centenares de diputados estatales y federales, consiguió el gobierno de más de mil intendencias, muchos estados y estuvo a cargo de la presidencia por cuarta vez. Durante 2010 fue la máquina electoral más profesional de Brasil. Estaba integrada a las instituciones del régimen y se había asociado con algunos grupos empresariales poderosos. Paradójicamente, la autoridad de Lula no disminuyó (Arcany, 2011).

El PT mostró el camino electoral como una opción al neoliberalismo de Cardoso, a las derrotas guerrilleras y gobiernos militares; ganó tres elecciones presidenciales consecutivas y bajo su gobierno el país consiguió protagonismo en el escenario internacional en lo político y lo económico. Como partido de gobierno, ha llevado a Brasil a ser una de las siete economías capitalistas emergentes conocidas colectivamente como BRICS, que se pronosticaba superarían el crecimiento económico del G7 en los próximos veinte años.

Mientras que China ya se ubica como primera o segunda potencia económica, Brasil, que había pasado de ser deudor a ser acreedor del Fondo Monetario Internacional, el 2014 se encontraba en graves problemas. Todavía le quedaban defensas, su Banco Nacional de Desarrollo (BNDES) es el banco de desarrollo del sector público más grande del mundo –más grande que el Banco Mundial–, y el Estado brasileño es accionista mayoritario de Petrobras, una de las mayores compañías de hidrocarburos del mundo. Brasil con sus trasnacionales tiene presencia en Latinoamérica en renglones económicos como construcción, manufactura, minería, agricultura, biocombustibles y represas hidroeléctricas.

Al tiempo que Lula da Silva y Dilma Rousseff aparecen como voceros de la potencia trasnacional, el PT, desde el gobierno, ha logrado un poder que ahora comparte con la clase dominante. Esta relación no se ha modificado desde 2003, correlación difícil de modificar, mientras sea gobierno.

Brasil tiene una situación económica que se fue complicando; la ocultaron en el periodo post copa y no quisieron discutirla con los movimientos. Aparentemente, las cuentas del Estado brasileño están comprometidas. Brasil tiene una situación de competencia fuerte con las exportaciones de China que están desplazando a las brasileñas en Argentina y en otros países de la región. No hay muchos márgenes para acelerar el crecimiento y mejorar la política social. Brasil está en un momento de quiebre muy difícil, porque las políticas sociales que aplicó el gobierno de Lula en el año de 2003 llegaron a un límite, y ya no tiene capacidad de disciplinar o de satisfacer las necesidades de la gente, lo cual tendrá fuertes repercusiones a mediano plazo.

La política internacional es el espacio de conflicto con los Estados Unidos. El imperialismo está intensificando el sabotaje permanente a cualquier proyecto de integración autónomo e independiente que se intente poner en marcha en Latinoamérica y con los BRICS. Esto se ratifica con la guerra financiera contra China y la formación de la Alianza del Pacífico, con la clara intención de implosionar el ALBA, Mercosur y Unasur. En los últimos años se acuñó la denominación del Israel de Sudamérica para referirse al papel que el Estado colombiano (y antes el chileno) desempeña como peón de brega de los Estados Unidos en su tradicional patio trasero. Dicho apelativo hoy es extensivo al Acuerdo del Pacífico: Chile, Perú, México y Colombia.

Este recuento de hechos significativos expresa que la realidad sobrepasa a la teoría y en mucho a los análisis más acuciosos de intelectuales, quienes deberán acostumbrarse a seguir los procesos sociales y políticos con sus rumbos inusitados. Estos, a su vez, obligan a modificar planteamientos iniciales y supuestos considerados comprobados. Los sujetos, los movimientos y los actores sociales subalternos no pueden concebirse en la exterioridad de los procesos observados.

En lo interno, la economía brasileña estuvo parcialmente estancada durante el primer mandato de Dilma. Durante 2013 hubo movilizaciones ciudadanas por el encarecimiento del transporte público y por el gasto público que requirió el mundial de fútbol del 2014. Para Machado, esto dejó en claro que el eje del proyecto económico y político del Partido de los Trabajadores era conciliar los intereses de las grandes empresas con la mejora del nivel de vida de las clases bajas, lo cual conducía a un *impasse* (Machado, 2015).

La noche del 8 de marzo de 2015, mientras la presidenta se dirigía al país en cadena de televisión, una parte de la población le respondió con cacerolazos, bocinazos y abucheos en una decena de ciudades. Fue la primera aparición pública de Dilma Rousseff desde que se difundió la lista con los nombres de 47 políticos que serían investigados por desvío de fondos de la estatal Petrobras.

La protesta fue convocada desde las redes sociales por la oposición, donde juega un papel central el Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB) del ex presidente Fernando Henrique Cardoso y del candidato a quien derrotó Dilma, Aécio Neves. Cardoso, sin embargo, se desmarcó del pedido de destitución, como promueve una parte de la oposición, incluyendo miembros de su propio partido. Las protestas tendían a escalar. La oposición convocó marchas, mientras el oficialismo reaccionó, de la mano de Lula, llamando a sus partidarios a ganar las calles. El clima de crispación social se produjo en un marco de crisis económica, ajuste fiscal y recorte de beneficios sociales de los trabajadores.

El PT difundió un comunicado defendiendo la investigación y asegurando que si alguno de sus militantes se encontraba culpable, el partido lo sancionaría. Sin embargo, después de doce años de gobierno, el partido no puede reducir el problema a un puñado de dirigentes que sólo atinaban a afirmar que detrás de las denuncias puede estar la derecha, incluso el capital financiero global que se frota las manos con la crisis de una de las

principales petroleras del mundo ante la perspectiva de su privatización como salida a los graves problemas que enfrenta.

En realidad los compromisos del PT con la derecha y la corrupción venían de mucho antes. Las campañas electorales del PT se financiaron con donaciones principalmente de grandes empresas nacionales de construcción que nacieron bajo el desarrollismo de Getulio Vargas y Juscelino Kubitshek. Dichas empresas multinacionales esperan, como pago, ganar licitaciones para las grandes obras del Estado (Zibechi, 13 de marzo de 2015). Manuela Moraes (2011) concuerda en que la actuación en el exterior de las constructoras creció, durante los últimos diez años, gracias al financiamiento público del BNDES y al lobbismo del gobierno de Lula. Dicho crecimiento causó conflictos sociales y destrucción ambiental. Moraes, además, se basa en datos del Tribunal Superior Electoral para confirmar tal sistema de financiamiento.

De acuerdo con Coronado (2011), la internacionalización de estas empresas inició en 1970. La dictadura militar recomendó la creación de obras grandes, con autopistas y usinas hidroeléctricas. Esto garantizó el aumento de las ganancias y la formación de conglomerados. Afirma que la actuación del BNDES ha acelerado este proceso. Ha aumentado el financiamiento a las constructoras brasileñas en el exterior. La diplomacia brasileña también influyó en este proceso. Siguiendo a Coronado, “documentos revelados por la Folha Transparencia, muestran cómo Itamaraty intercedió a favor de la Odebrecht y Andrade Gutiérrez en la construcción de hidroeléctricas en Venezuela y Colombia. Las negociaciones fueron impulsadas por los embajadores en esos países y fueron clasificadas como ‘promoción comercial’” (Coronado, 2011).

El ex presidente Lula intervino personalmente en la negociación de contratos de grandes obras públicas como el metro de Caracas, en Venezuela, y de puertos, autopistas, usinas hidroeléctricas y petroquímicas en Bolivia, Cuba, Nicaragua y Perú. Todas ellas financiadas por el BNDES mediante la contrapartida de empresas brasileñas de ingeniería para la realización de las obras. Lula también actuó en la protección de los intereses de estas empresas en el exterior en casos de conflicto con los gobiernos locales. Un ejemplo fue cuando la Odebrecht fue expulsada de Ecuador después de irregularidades constatadas en una autopista y dos hidroeléctricas que la empresa construyó. Las actuales actividades del ex presidente muestran qué tan cercano es su vínculo con los empresarios de

construcción civil. Lula hace giras por América Latina a bordo del avión de la Odebrecht, visitando obras en Cuba y Venezuela.

También Manuela Moraes concuerda con que Lula se empeñó en los negocios de la construcción civil y en que las constructoras financiaran las campañas electorales del PT. Afirma que el gobierno de Dilma no es diferente.

De cara a las obras de la Copa del Mundo de 2014, del Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC) y de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA), la donación de las constructoras para la campaña de la actual presidenta, llegó a 37 millones de reales. Y una vez más, la Camargo Corrêa fue la mayor donadora, con 8.5 millones de reales, lo que representa una pequeña contribución frente a los billones recibidos del gobierno para realizar obras en Brasil y en América Latina (Moraes, 13 de noviembre de 2011).

Otro trazo fundamental de la expansión de estas constructoras por el continente son las graves denuncias de fraudes en los procesos de licitación y construcción, además de los conflictos con las poblaciones locales, debido a los impactos negativos de las obras. Así ocurrió en el TIPNIS Bolivia, con nueve marchas de las poblaciones afectadas.

Raúl Zibechi también afirma que ese esquema de financiación no nació con el PT. Sin embargo, dicho partido lo institucionalizó. “Otros casos posteriores confirman que estamos ante un modo aceptado de financiación de los partidos, no sólo del PT, que se repite a escala de los estados y los municipios” (Zibechi, 13 de marzo de 2015).

El caso de corrupción en Petrobras también afectó fuertemente a los grandes empresarios. De acuerdo con Zibechi, el crecimiento del capitalismo brasileño se cimentó en un sector empresarial cuyos negocios se focalizan en la construcción, la alimentación y la metalurgia. De estas empresas, en particular las constructoras tienen sólidos vínculos con Petrobras, y no podrán seguir operando del mismo modo que hasta ahora. Esto afecta la gobernabilidad tanto de Lula como del PT (Zibechi, 13 de marzo de 2015).

Siguiendo a Zibechi, Lula da Silva creó alianzas políticas y sociales que le aseguraron la gobernabilidad. En el parlamento, formó una base aliada de varios partidos. Estaba forzado a tejer un sustento para su gobierno.

Para fines de año, Lula había conseguido que once de los quince partidos con representación parlamentaria se comprometieran con el gobierno. Esto representaba 376 diputados: 73% de la cámara (Zibechi, 13 de marzo de 2015).

Cuando Lula asumió el gobierno, no se modificó nada; los compromisos lo ataban. Se hizo una política económica creíble conservando el mismo carácter del segundo gobierno de Fernando Henrique Cardoso y ampliando las reformas estructurales a favor del mercado. No se desprivatizó ninguna empresa. Sólo se modificó el escenario coyuntural externo con un gran crecimiento de las economías a las cuales exportaba la economía brasileña y con un comportamiento favorable de los mercados internacionales de crédito. Esto le permitió al Gobierno, sin modificación alguna de la estrategia, la elevación de las tasas de crecimiento sin presiones inflacionarias y mayores recaudos, lo cual posibilitó un tipo de política social compensatoria. Sin embargo, durante ese periodo de escenario externo favorable (2002-2007), la profundización de las reformas liberales agravó los problemas estructurales de la economía: reprimarización de las exportaciones, una relativa desindustrialización y fuerte crecimiento del pasivo externo.

De esa manera, cualquier retroceso del escenario coyuntural externo conduciría a que estos problemas estructurales crecientes se manifestaran de forma agudizada. Este escenario se modificó radicalmente con la crisis de la economía mundial en 2007-2008, cuando el Gobierno intentó contener los impactos de la crisis con la exoneración tributaria de algunos sectores, la expansión del crédito para financiar el consumo familiar y, con ello, garantizar mercado para la producción que se pretendía mantener. Se trató de una tímida política económica anticíclica, no muy ortodoxa, pero inmersa en la misma estrategia neoliberal de desarrollo. Lo mismo que ocurrió en otros países progresistas.

Dada la larga duración de la crisis global, esta política mostró sus límites: déficit fiscal y sobreendeudamiento de las familias. Esto restringió el avance del consumo y comprometió grandes porciones de sus rentas para el exclusivo pago de servicios de deuda. Ya en 2014, la respuesta a los efectos de la crisis sería un ajuste ortodoxo, eliminando aquel leve asomo de heterodoxia que la política económica anticíclica había permitido hasta ese momento. La respuesta fue el ajuste recesivo, una respuesta ortodoxa de política económica. Otra estrategia de desarrollo presupone otra con-

figuración del poder económico y político. Dada la alianza política y de clases que los gobiernos del PT construyeron, nunca podría haber sido diferente (Hernández, 2015).

Levinas agrega que el acceso a los mercados financieros fue la gran noticia de la explosión de consumo masivo y en busca de más capital humano en una sociedad que mantiene debilidades estructurales y profundas desigualdades. Esa es la marca del social-desarrollismo; la inversión social es exigua: saneamiento básico insuficiente, vivienda digna inexistente para contingentes significativos, preservación del medio ambiente olvidada, agua potable sólo para una parte de la población, salud pública (preventiva y curativa) deficitaria, la educación promueve las oportunidades desiguales y, lo peor, la estructura de la seguridad social está amenazada por la deconstitucionalización de sus principios. Para no mencionar la violencia fuera de control que ciega miles de vidas cada año (Levinas, 2015).

La crisis que afectó a los hidrocarburos llegó a Petrobras y potenció los problemas. Siendo la principal empresa Latinoamericana, hay una conexión nada despreciable entre la crisis de Petrobras y la contracción del producto interno bruto brasileño durante el 2015. En comparación con el 2014, Petrobras redujo sus inversiones casi 40%, con consecuencias sobre toda la economía. Si se incluyen los efectos indirectos (sobre empresas subsidiarias, los proveedores relacionados con la industria del petróleo, la retracción a la baja en general de la población afectada) y las inversiones totales que las constructoras dejaron de realizar (no sólo en las áreas de petróleo y gas), el efecto negativo llega a casi dos por ciento del PIB. El salario real promedio (en las periferias de las grandes ciudades) es 7% más bajo que el año pasado; la retracción económica global, de casi tres por ciento del producto interno bruto y hay un contingente de casi 800 000 trabajadores menos en el mercado de trabajo. La política económica que impulsó J. Levy desde principio de año 2016 profundizó la fragmentación de los intereses sociales, los cuales, frente a la coyuntura, buscan resolver por su cuenta sus circunstancias (Amílcar Salas Oroño, 2015).

Los gobiernos progresistas convirtieron a América Latina y el Caribe en una zona de mayor estabilidad política y económica para la reproducción de la acumulación. La región está asediada por la contradicción entre la producción y extracción de plusvalor, y la realización del valor, por una parte, y las crisis de acumulación que conlleva, por otra. Esto implicó una estabilización del capitalismo en la región para mantener la acumulación.

El neoliberalismo mantiene esta estabilización dentro de los marcos establecidos por el sistema bajo la forma conservadora neoliberal.

De acuerdo con Francois Houtart, con Lula ya están presentes las políticas neoliberales: El resultado fue la reprimarización y la desindustrialización relativa, es decir un aumento de la vulnerabilidad frente al exterior. Ayer como hoy, la respuesta a la crisis, tal como en el periodo 2007-2008, fue la exoneración tributaria, la expansión del crédito y la protección de mercados garantizados. El conjunto significó una tímida política anticíclica en un océano liberal. A medio plazo, eso acentuó el déficit fiscal, provocó el endeudamiento de las familias y entrenó un ajuste ortodoxo.

Zibechi afirma, desde la reflexión política, que es probable que se haya sobornado a muchos de los diputados conservadores, y que la base aliada se convirtió en un modelo de gobernabilidad petista, el cual se desgastó. Cardoso, por ejemplo, llamó a este régimen *presidencialismo de cooptación*. Por un lado, el parlamento se inclinó a la derecha y el PT perdió fuerza. En 2014 eligió sólo 70 diputados y perdió São Paulo. “Entre los demás partidos hubo cambios en estos doce años: algunos están en franco proceso de extinción, como el PFL, ahora demócratas; muchos perdieron fuerza, mientras el PMDB mantiene notable continuidad, quizá por su inveterado oportunismo” (Zibechi, 13 de marzo de 2015).

Aunado al deterioro del PT, Zibechi afirma que nuevos partidos ingresaron a la cámara. El número de partidos ascendió a veintiocho, casi el doble que en 2003. Esta pulverización de la representación se relaciona con la crisis de los partidos. El parlamento elegido en 2014 fue el más conservador desde el golpe de 1964. Los sindicalistas sólo tuvieron 46 representantes. La crisis de 2008 y sus coletazos se conjugan con las movilizaciones de junio de 2013. No se trata de desgaste del gobierno, sino de algo más profundo: el fin de un ciclo virtuoso, de crecimiento económico y paz social. “El primero estuvo impulsado por el alza de los precios de las *commodities* y las importaciones de China, que dieron margen presupuestario para políticas sociales compensatorias, mientras la integración de sectores sociales antes excluidos a través del consumo generó el espejismo de que pertenecían a las clases medias” (Zibechi, 13 de marzo de 2015).

Por otro lado, continua Zibechi, el dirigente del Movimiento de los Trabajadores Sin Techo (MTST), Guilherme Boulos, afirmó que hubo un amplio proceso de conciliación de clases en la sociedad brasileña durante los primeros seis años de Lula. Para Boulos, la situación se sostuvo debido

a las grandes ganancias del sector financiero, de las constructoras y del agronegocio. Al mismo tiempo, hubo un aumento tanto en el salario mínimo como en el crédito a los trabajadores, además de programas sociales como Bolsa Familia y Mi Casa Mi Vida (Zibechei, 13 de marzo de 2015).

La crisis impidió el crecimiento que hubo hasta 2010 y disminuyó el margen de maniobra para la conciliación de intereses. El fin de la integración desató la protesta social y la expectativa de mejoras. Los manifestantes pusieron a los servicios sociales como un ejemplo de que el país no había cambiado sustancialmente (Zibechei, 13 de agosto de 2015).

En cierto momento, ya en el contexto internacional, el capital financiero global, cuyos mandos se sitúan en Wall Street y la Citi londinense, decidió pasar a la ofensiva ante los crecientes desafíos que afronta dese los BRICS: el yuan ha desplazado al euro y al yen, y es la segunda moneda en el comercio internacional; China y Rusia tendrán pronto un sistema de pagos paralelo a la Sociedad de Financiamiento Mundial para la Telecomunicación Interbancaria (SWIFT, por sus siglas en inglés). Los dirigentes del PT no percibieron el nuevo clima, y si lo hicieron no tomaron ninguna medida. Siguió diciendo, como Lula, que la crisis del 2008 fue para Brasil apenas una "olita" y, sobre todo, que el país "no tiene enemigos". Lo cierto es que el capital financiero derrotó al primer gobierno de Dilma, al impedir un mayor intervencionismo estatal en la economía.

Según Ortellado, dice Zibechei, la presidenta no pudo reducir las tasas de interés y subsidiar las tarifas públicas "por la influencia del sistema financiero en la política y en la economía".

Los primeros meses del gobierno de Dilma representan la consolidación de esa derrota, desde el momento en que colocó al frente de la economía al neoliberal Joaquim Levy. "El retorno a políticas ortodoxas es una necesidad para equilibrar las cuentas, pero es una derrota política, fruto de la incapacidad de implementar un modelo económico alternativo", sostiene Ortellado (Zibechei, 13 de marzo de 2015).

Dilma Rousseff había perdido gran parte del apoyo entre los pobres, en las clases medias y entre su electorado tradicional, de manera acelerada. El PT y la presidenta estaban debilitados, deslegitimados. Prometieron una cosa en la campaña electoral y ejecutaron otra apenas al asumieron su segundo mandato: una gestión petista del capitalismo acreditada por la dere-

cha y sus portavoces en los medios. Una política económica de austeridad, de ajuste fiscal rígido y control de las cuentas públicas, está hundiendo al país en una recesión de proporciones inconcebibles.

Los protagonistas en los mercados subestimaron el ajuste del ministro de Hacienda Joaquim Levy y su equipo. La presidenta defendió públicamente con énfasis la política de su nuevo equipo económico; reconoció que el país no reaccionó a lo que antes había puesto en práctica. El ajuste garantizó por un corto periodo el mandato presidencial y retrasó las políticas sociales. Para Maringoni, el cambio en la política económica debilitaría la base del mercado financiero (Maringoni, s. f.). Si el ajuste terminaba, el gobierno caería. La contracción, los recortes, el brutal superávit y toda la catilinaria del neoliberalismo ortodoxo llegaron para quedarse.

La derecha esperaba qué diría la opinión pública. Según la encuesta Datafolha, 71% de los entrevistados considera el gobierno malo o muy malo, mientras que sólo 8% evaluó la administración Rousseff como excelente o buena ("Encuesta de Datafolha...", agosto de 2015). Se trata de uno de los peores índices de aprobación desde Fernando Henrique Cardoso. Ante los ataques, Dilma ejecutó acciones como la ley contra la corrupción y el plan de campañas de *marketing*, las cuales la han perjudicado. Asimismo, por cambiar el programa que prometió para conseguir las urnas, disgustó a las mayorías, particularmente a las clases medias. El malestar de esta última se fue acumulando desde hace años. Por lo demás, de las carencias, la clase media se resintió porque casi no recibía beneficios del Estado. Sin embargo, el descontento fue popular y de masas. Alcanzó a los trabajadores, a los precarizados; es decir, a la base de la pirámide (Maringoni, s. f.).

Dilma no pudo enfrentar a los movimientos de clases medias en redes sociales, las cuales saben canalizar la rabia de la juventud contra la corrupción generalizada hacia la derecha. El consevadorismo se atrincheró en las redes y medios en busca del desafuero de Dilma.

Enemigos del programa Bolsa Familia y del proyecto social, Revoltados Online es el más antiguo, grande y agresivo contra la presidenta y contra el Movimiento Sin Tierra, al cual consideran el brazo armado del PT. Su líder, Marcello Reis, fue pastor evangélico durante diez años. Su grupo en Facebook ya supera los 700 000 seguidores y los mensajes que deja son una amalgama ideológica donde entra desde la religión hasta el militarismo. Impulsan el impea-

cbment y piden la intervención militar. Luego está el Movimento Brasil Livre (MBL), ultraneoliberales, críticos con la Bolsa Familia y con todo lo que se relacione con lo público. Su dirigente es Kim Kataguiri, un joven de apenas 19 años alardea tener como referentes a Margaret Thatcher y a Ronald Reagan. Este grupo está coordinado por 150 jóvenes, en su mayoría universitarios, cuyas edades van de los 18 a los 31 años. El movimiento Vem para Rua (“Sal a la calle”) es el más joven de todos, fueron los organizadores de la masiva cacerolada contra Dilma que se escuchó en 12 ciudades del país el domingo 8 de marzo. Su líder, Rogério Chequer, es un empresario de 46 años sin ningún tipo de experiencia en activismo social. A pesar de pedir a la gente que salga a la calle, él no había pisado una sola manifestación hasta el año pasado (¿Quiénes están...? marzo de 2015).

Otro sector quizás mayoritario son quienes protestan por trabajo y por continuar consumiendo. Este es el equivalente de desarrollo y progreso que el gobierno ha vendido en los últimos doce años, con el apoyo de las élites dirigentes. Resulta que el endeudamiento llegó, y con él los límites del modelo. Los malos servicios públicos, la inflación, el desempleo y el fin del crédito frenaron el consumismo. La izquierda, vinculada con el gobierno, cooptada, burocratizada, optó por el silencio. Se limitaron a defender el actual pacto de gobernabilidad. Sin politización cotidiana, sin una gramática política para manifestar objetivamente su rebelión, los brasileños se entregaron a la agenda conservadora.

En 2013 el PT perdió las calles; en 2014-2015, el Congreso. Quedó patente que sacrificó a los trabajadores y al capital productivo en nombre de las finanzas. La apuesta, sin embargo, fue por el programa de *austericidio*, que lleva al país rumbo al desastre de la recesión y el desempleo. Estamos viéndolos pagar el precio de optar por ese camino, cada vez peor para las mayorías. El atolladero económico, político y social parecía no tener fin. Las clases medias creadas por el lulismo volvieron al modelo conservador.

Según Valerio Arcary, la fatiga del lulismo facilitó la reorganización de una derecha con base social ampliada en la clase media. El 13 de marzo de 2015 ocurrió la mayor manifestación reaccionaria del último medio siglo. La convocatoria se extendió por internet. Originalmente, grupos de una nueva y extrema derecha, sin trayectoria, estuvieron a cargo. Recibieron apoyo del PSDB. Aécio Neves incluso publicó un discurso (Arcary, 18 de marzo de 2015).

El discurso del miedo se apoderaba de la clase media. Aunque lo cierto era que la situación económica tenderá a agravarse, pues la gestión del PT ha hecho que la economía cada vez dependa más de factores externos. En realidad, las políticas neoliberales incidirán aún más en la crisis. Como lo expresa Fernando D’Angelo:

En ese escenario, el mercado financiero amenaza recurrentemente al gobierno con una posible y avasalladora retirada de capitales, que puede llevar a una crisis de la balanza de pagos y a una crisis económica de grandes proporciones, vista la constante amenaza de retiro del grado inversor por las agencias del rating.

El camino elegido por el PT, según todo lo indica, de pragmatismo inmediatista, en nada contribuyó a cambiar la situación de dependencia. Por el contrario, contribuyó para continuar reforzando y agravando la dependencia de la economía brasilera. En lo que se refiere a las medidas de corto plazo, en ese escenario de fragilidad externa y elevada deuda interna, la perspectiva es de continuidad de la elevación de la tasa de interés (Selic) y de nuevos rodajes de medidas de ajuste, exigiendo a los trabajadores más sacrificios (D’Angelo, septiembre de 2015).

Las políticas neoliberales influyeron en que los poderosos de la clase dominante no pretendieran afectar la gobernabilidad. Tampoco esta es la política de Obama en Washington. Joe Biden convocó a Dilma Rousseff para la Cumbre de Panamá. La nueva derecha insistió en la misma táctica. Según Arcary (18 de marzo de 2015), la operación Lava jato enfureció a la clase media. El estancamiento económico, la presión inflacionaria, la desvalorización de la moneda y los despidos masivos en la industria impactaron a los trabajadores.

La resistencia organizada paralizó al gobierno. Incluir a un sector más colaborador del PMBD en el núcleo duro de la administración de Dilma no aligeró la gravedad de la crisis. No tuvieron mejor idea que anunciar un paquete de medidas contra la corrupción y una reforma política. La crisis económica, se agudizó, y el ajuste fiscal aumentó la insatisfacción popular. La mayoría de la clase media se oponía a Dilma, quien resolvió mantener los ataques contra la clase trabajadora y la juventud. La cuestión central era hacia dónde iría el PSDB y cuál era el lugar de la oposición para impulsar la movilización social contra dichos ataques (Arcary, 18 de marzo de 2015). Este es el escenario que captó la derecha y sobre el cual operó con

lucidez. Los viejos esquemas de alianzas y la vieja economía basada en la exportación de *commodities* ya no pueden sostener el modelo; pero el PT, Dilma y Lula aún no fueron capaces de poner en pie otra cosa. Peor aún, se comportaron como en 2003, cuando había margen político para hacer ajustes que permitieran relanzar la economía.

El PT carecía de capacidad de respuesta. En opinión de Zibechi, el PT no logró integrar en su análisis a los millones de brasileños en las calles de 353 ciudades durante un mes. Insiste en que la superficialidad con la que el partido y sus intelectuales interpretaron lo sucedido (culpar a la derecha o sentir que era un brote juvenil fugaz) los llevó a cometer errores. Por ejemplo, continúa, se empeñaron contra Marina Silva durante la campaña electoral hasta sacarla del escenario. Con ello, cegaron alianzas. Llegaron a decir que todo lo que no fuera PT era derecha. Con ello, “quedaron prisioneros de la confrontación con una derecha social, económica y política que hoy es más fuerte y tiene la iniciativa. Meses después aplicaron la misma política que esperaban de Silva” (Zibechi, 13 de marzo de 2015). Stédile señaló que las empresas secuestraron la democracia brasileña: las diez mayores financian gran parte del parlamento. Así, la reforma política depende del suicidio de dicho parlamento. De ahí su imposibilidad.

El Movimiento de los Sin Tierra convocó movilizaciones en todo el país, evidenciando su debilidad. En dichas movilizaciones participaron más de veinticinco mil personas, quienes exigieron una reforma agraria y cambios al modelo de explotación agrícola (Zibechi, 13 de marzo de 2015).

James Petras sostiene que la derechización del gobierno es ilimitada:

La política interna que es cada vez más reaccionara. Los recortes fiscales, las limitaciones sobre los poderes sindicales, las exoneraciones de impuestos que le van a dar a los grandes capitales. No hay nada positivo entre los gobernantes en Brasil, siguen por un camino cada vez más derechizado, buscando la forma de conseguir apoyo entre los grandes sectores del capital extranjero e interno, cumpliendo las recetas del Fondo Monetario disfrazadas como políticas de austeridad.

El PT, Dilma, Lula, están metidos en un círculo cada vez más derechizado buscando la forma de evadir los castigos judiciales. Ellos creen que profundizando la política reaccionaria pueden evitar las presiones para renunciar.

Todo se encamina a una crisis generalizada, donde el gobierno busca aliados en la derecha, la derecha tiene su propia agenda, y las fuerzas populares siguen abandonando el PT y buscando una alternativa que esté más de acuerdo con sus necesidades (Petras, 2015).

Parece evidente que sólo una amplia movilización social puede modificar algo la relación de fuerzas; más que eso: se descarta un ciclo de luchas como el que deslegitimó el modelo neoliberal entre fines de los noventa y comienzos del nuevo siglo.

Es posible que Brasil sea el espejo donde toda la región puede mirarse (Bolivia, Argentina, Venezuela, Ecuador, Nicaragua). En todas partes se requiere, como dice Boulos, “un nuevo modelo político y económico”; un modelo capaz de abordar la desigualdad, que no se conforme con reducir la pobreza sin tocar las estructuras. Pero eso, como señala el dirigente de los sin techo, “no se alcanzará por medio de disputas institucionales”, sino a través de “la intensificación de las luchas populares”.

El principal obstáculo para que despegue un nuevo ciclo de luchas no es la supuesta pasividad de la gente, ni la hegemonía de los medios o las arremetidas de las derechas, sino el propio progresismo que, aferrado al poder, recela de las calles desbordadas porque teme que vayan por ellos.

Trasnacionales de Brasil en América Latina y resistencias populares

En este contexto, nos interesa analizar la ambigüedad de la imagen de Brasil respecto a Latinoamérica. Es un poder imperial que pretende ser unipolar en la región donde, al mismo tiempo, se da el expolio por trasnacionales y burguesías de territorios —selvas y bosques— en Brasil y países vecinos, donde han vivido desde siempre los pueblos originarios, y un discurso ecologista y soberanista. Hoy, la amazonía esta amenazada de muerte por intereses madereros, de la agricultura y ganadería industrial, de las represas hidroeléctricas, por la búsqueda y extracción de hidrocarburos y la construcción de cientos de carreteras, siguen destruyendo territorios o dispersando a sus habitantes a una velocidad cada vez mayor. En su expansión por Latinoamérica, vemos que este capitalismo sigue siendo depredador, sigue amenazando a la vida, sigue desposeyendo y despojando, sigue efectuando

las desigualdades, los colonialismos, la continuidad de los patriarcalismos, racismos y las explotaciones atroces (Prada Alcoreza, 2014).

Una cuestión derivada directamente de la anterior se relaciona con los impactos de los actuales procesos interestatales y geopolíticos en los movimientos sociales. Brasil Potencia es posible gracias a la alianza de un sector decisivo del movimiento sindical y del aparato estatal federal con la burguesía brasileña y las fuerzas armadas. En los últimos años, una cantidad cada vez mayor de empresas brasileñas comenzó a actuar en el exterior. Varios factores contribuyeron a esto; entre ellos destaca el nuevo posicionamiento del gobierno, que pasó a incentivar directamente a tales empresas a través del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES). En los últimos años, las antiguas y nuevas multinacionales brasileñas han podido contar con la contribución del gobierno. Éste, a través del BNDES, cambió su posición y pasó a apoyar el proceso de internacionalización.

Entre los años 1940 y 1980, Brasil se fue transformando de una economía agroexportadora en una economía industrial. En estas décadas se implantó un parque industrial moderno y diversificado, el cual creó un ambiente propicio para el surgimiento y el fortalecimiento de la internacionalización. En esta etapa, la internacionalización sucedió para vender materias primas generadas en el Brasil (como el caso de la empresa Vale) o para buscar materias primas faltantes en el territorio nacional (como Petrobras). Entre 1980 y 2000, la economía brasileña enfrentó una crisis de crecimiento. Tuvo que lidiar con un alza inflacionaria y una elevada deuda externa, entre otros problemas.

Varias empresas, especialmente las constructoras, buscaron el mercado internacional para aprovechar su parque industrial, su estructura montada y el conocimiento acumulado en grandes obras, así como para dirigir y mantener sus cuadros de ejecutivos y empleados. Ejemplo de ello son los casos de Odebrecht y Camargo Corrêa, quienes desarrollaron ventajas específicas. A comienzos del nuevo milenio, la economía brasileña volvió a crecer y el mercado interno se fortaleció, lo cual permitió una expansión de sus multinacionales. Los factores que contribuyeron a esto fueron: la estabilidad monetaria, el fortalecimiento de la economía interna, la disminución de la miseria –mejor distribución de ingresos–, el crecimiento de la bolsa de valores, el aumento expresivo de las exportaciones y la clara

opción del gobierno federal por fomentar la formación de grandes grupos con potencial para ocupar el mercado internacional.

Las ventajas de Brasil, como las creadas y desarrolladas por las propias empresas que posibilitaron su internacionalización, permitieron que Petrobras, Gerdau y Odebrecht trabajaran en ventajas empresariales específicas. Se montaron centros de investigación, innovación y nuevas tecnologías, y se crearon modelos de gestión eficientes. Al mismo tiempo, puede mencionarse un grupo de empresas que se han desarrollado como resultado de ventajas específicas del Brasil (recursos naturales y modelos de gestión propia). Estos factores ayudan a explicar su presencia en todos los continentes.

Estas empresas fueron acompañadas por el actual Banco Nacional de Desarrollo Económico (BNDES), creado en 1952, el cual financió la industrialización. Petrobras obtuvo el monopolio de la exploración, producción y refinamiento de petróleo. Eletrobras, de 1962, construyó plantas generadoras y líneas de transmisión de alta tensión (Dalla Costa, Gelinski Júnior y Wichinevsky, 2014).

El plan de metas “50 años en 5”, impulsó la industrialización en la década de los cincuenta. Siguiendo a Dalla Costa, este plan “contemplaba inversiones en las áreas de energía, transporte, industrias de base, alimentación y educación”. Dicho plan se concentraba en inversiones estatales en infraestructura (transporte y electricidad), aumento de la producción de bienes intermedios (acero, carbón, cemento y cinc), y las industrias en los sectores de consumo durable y de capital (Dalla Costa, *et al.*, 2014).

El crecimiento del PBI de las décadas 1950-1980 propició el arranque y crecimiento de las empresas que ahora luchan ilegalmente por ocupar un lugar en el escenario internacional. Se redujeron los bienes básicos en las exportaciones totales. Sin embargo, el aumento del peso relativo en las exportaciones de bienes manufacturados compensó esta caída (véase cuadro 1). Las empresas brasileñas internacionalizadas se dirigieron hacia el mercado externo para exportar materia prima abundante, procurar materia prima escasa, y aprovechar la infraestructura, experiencia y los técnicos altamente capacitados (Dalla Costa, *et al.*, 2014). Los ochenta comenzaron con serios problemas económicos: alza inflacionaria, aumento en la deuda externa y bajo crecimiento del PIB. Además, comenzó a dificultarse que los militares se sostuvieran en el poder (Dalla Costa, *et al.*, 2014). Con el lanzamiento del Plan Real en 1994, la inflación bajó a niveles próximos a

los de los países desarrollados. Brasil se expandía por América Latina y el mundo, y más aún cuando se impuso el neoliberalismo y la “democracia”

Cuadro 1
Países con más empresas brasileñas, 2014

Estados Unidos	41
Argentina	35
Chile	30
Colombia	23
Uruguay	23
México	22
Perú	22
China	21
Reino Unido	19
Paraguay	17
Venezuela	17
Portugal	16
Francia	13

Fuente: (Dalla Costa, et al., 2014)

El Programa Nacional de Desestatización (1990-1992) también contribuyó con el cambio de la economía de Brasil. Durante el mandato de Collor de Mello sólo se privatizaron dieciocho empresas. Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) transfirió gran parte de las estatales a grupos privados. Desde mediados de los noventa hasta 2013, la economía brasileña favoreció a las empresas internas, lo cual contribuyó al proceso de internacionalización. Muchos afirman que Lula consiguió la mejor evolución del PIB *per cápita* y de la inclusión social (Dalla Costa, et al., 2014).

Paralelamente, un grupo significativo de empresas de los BRICS y otros países emergentes está insertándose en el mercado mundial. El Brasil, en-

tre los demás, está en una posición intermedia. Dalla Costa menciona que existen doce empresas brasileñas entre las cien compañías globalizadas pertenecientes a este grupo de naciones. En comparación con China, India y los países desarrollados, el desarrollo de Brasil comenzó tarde. El BNDES fue un actor clave en este proceso: financió conglomerados, incentivó fusiones, adquisiciones y empresas conjuntas, y prestó recursos para la compra de competidores en el exterior (Dalla Costa, et al., 2014). Petrobras, Gerdau y Odebrecht desarrollaron ventajas empresariales específicas. Montaron centros de investigación, innovación y nuevas tecnologías, y crearon modelos de gestión eficientes que ayudan a explicar su presencia en todos los continentes.

En la lista que divulga la revista *Fortune*, cinco empresas brasileñas figuraron entre las quinientas mayores compañías del mundo: Petrobras, Vale, Itaúsa, Bradesco y Banco do Brasil. Estos monopolios tuvieron, por un lado, el respaldo de Lula y del Estado; por otro, financiamiento del BNDES. Se intentó justificar dicha acción en nombre de la integración de los pueblos latinoamericanos. Los datos de la edición de 2008 del *ranking* de las transnacionales brasileñas editado por la fundación Dom Cabral mostraron que el año de 2007 marcó el inicio de esta expansión internacional de los grandes monopolios brasileños. En 2007 aumentó exponencialmente el flujo de inversiones hacia los países vecinos. Gerdau, Friboi, Votorantim, Vale y Petrobras operaron en México, Colombia y Argentina. “Los activos externos de las veinte mayores transnacionales brasileñas crecieron 30% en 2007, en relación con el año anterior, sobre todo en los sectores de minería, acero, petróleo, gas y de construcción civil. Entre las diez mayores, hay tres constructoras: Camargo Corrêa, Odebrecht y Andrade Gutierrez y, además de ellas, la Votorantim Cimentos” (Souza, 2009).

Muchas transnacionales brasileñas se apoderaron del patrimonio latinoamericano: Petrobras en Bolivia, Queiroz Galvão y Odebrecht en Perú, Coteminas en Haití y Vale en Chile y Guatemala (Souza, 2009). El desprestigio entre los pueblos de América Latina, aunque opacado por los medios “progresistas”, iba *in crescendo*, pero desarticulado.

El respaldo del Estado brasileño y la corrupción se notaron, por ejemplo, durante la gerencia de Rafael Correa en Ecuador. Odebrecht ganó la licitación para construir la hidroeléctrica de San Francisco. La obra, financiada con dinero del gobierno ecuatoriano junto con el BNDES, después de investigaciones y una auditoria, presentó fraudes e incumplimientos.

Cuando Correa expulsó a la empresa del país y dijo que no pagaría la deuda con el BNDES “la gerencia de Luiz Inácio llamó al embajador brasileño en Quito de vuelta y dejó bien claro que la constructora tenía todo su apoyo” (Souza, 2009).

Otro ejemplo es el caso de la usina hidroeléctrica de Itaipú, construida en la frontera entre Brasil y Paraguay. El Tratado de Itaipú, conocido como Itaipú Binacional, se firmó en condiciones desfavorables para Paraguay. Las obras se entregaron a la empresa brasileña Mendes Júnior. El excedente de la cota de producción de la usina que corresponde a Paraguay se vendió a Eletrobras a un precio ínfimo. Los paraguayos usan sólo 5% de la gigantesca porción energética a que tienen derecho; por tanto, “los militares brasileños sabían muy bien que un tratado en estos términos significaría simplemente la usurpación de las riquezas de Paraguay” (Souza, 2009).

Paraguay llegó a pedir la revisión del contrato. Dado que Luiz Inácio resistió, el obispo Fernando Lugo aceptó otro acuerdo. Este autorizaba a Paraguay vender energía en el mercado brasileño y un pago tres veces mayor por la energía para Eletrobras (Souza, 2009).

Estas experiencias nos obligan a explicar cómo funciona el capital en Brasil y América Latina y las resistencias que se dan en la región en el actual momento histórico. Las contradicciones más peligrosas de nuestro tiempo surgen del imperativo de mantener un crecimiento exponencial que sostiene a los gobiernos en una situación donde las tensiones y crisis sociales, económicas, políticas y medioambientales se están volviendo cada vez más graves. Los grupos conservadores se aprovechan de ello y crean escenarios favorables, se modernizan y vuelven a la carga proponiendo cambios estructurales.

La extendida alienación que mucha gente vive se transforma de un estado pasivo de impotencia a un movimiento activo de resistencia incapaz de desplazar la actual arquitectura del capitalismo a otra cosa distinta. Desde esta perspectiva, crecen en Latinoamérica las resistencias populares al extractivismo (de transnacionales de los BRICS, en particular de Brasil y China) y los vínculos o rupturas entre las organizaciones de estos países desde el punto de vista del capital y la defensa territorial.

Mientras los progresistas en el gobierno aprenden la gobernabilidad de los conservadores y la vieja derecha, éstos retoman de la izquierda la importancia del patrimonialismo y clientelismo corporativo. Así, controlan subjetividades para una dominación de espectro completo. Es necesario

conocer cómo se da este proceso. Debemos saber si es posible que el emblema del cambio de la izquierda sea sustraído por una derecha que busca nuevos rostros, símbolos, discursos y líderes jóvenes. Estos últimos deben estar más capacitados por el imperialismo colectivo para desplegar sus campañas en los escenarios aún neoliberales construidos por la propia izquierda. Examinaremos qué están haciendo las organizaciones y movimientos sociales para contrarrestar esta nueva ofensiva del capital con rostro indígena y un discurso pachamamista, intercultural y del bien vivir.

Desde el punto de vista de los sectores populares, los países amazónicos vienen de décadas de políticas sociales que han intentado acompañar la acumulación con paliar momentáneamente la situación de pobreza generada por sus propias políticas estatales. Estos países hoy son países con un poco menos de pobres; pero el modelo neoliberal, con sus diversas estructuras, modalidades y coincidencias –como la desposesión y la deforestación brutal–, sigue en pie. De este modo, una parte de esas personas no tienen otro modo digno de sobrevivir que no sea a través de trabajos precarios, pues ya está confirmado que la inversión extranjera sólo crea escasos nuevos empleos (Zibechi, 4 de mayo de 2014).

En la medida en que aquella estructura de control del trabajo, de recursos y de productos consistía en la articulación conjunta de todas las respectivas formas históricamente conocidas, se establecía, por primera vez en la historia conocida, un patrón global de control del trabajo, de sus recursos y de sus productos en torno a y en función del capital. De ese modo, se instauraba una nueva, original y singular estructura de relaciones de producción en la experiencia histórica del mundo: el capitalismo mundial muy desigualmente distribuido. En la mayoría de países la acumulación llamada originaria se hizo permanente y con ella la violencia expropiadora y expoliadora.

La colonialidad eurocentrada se dio con la imposición definitiva del nuevo capital financiero, del control tecnológico, militar, comunicativo, en el dominio del capitalismo global colonial moderno. En un sentido preciso, en lo social se trata de la imposición mundial de una desocupación estructural, plenamente fraguada con la financiarización estructural y de cómo se produjo la imposición de una definida maquinación sobre todos los países (y sobre toda la población), con el respaldo y la sumisión de muchos de los demás países. Esta imposición produjo la dispersión social de los trabajadores y la desintegración de sus instituciones; es la imposición

definitiva de la tecnocratización o instrumentalización de la “racionalidad moderna”. Estamos inmersos en un proceso de completa reconfiguración del colonialismo y la colonialidad global del poder, del patrón de poder hegemónico en el planeta.

Con el neoliberalismo en Latinoamérica, a fines de los ochenta del siglo pasado, se dieron varios fenómenos.

- La aceleración y profundización de una tendencia de reconcentración del poder a través de la reprivatización de los espacios públicos, del Estado, del control del trabajo, de los recursos de producción y de la producción-distribución.
- La polarización social extrema y creciente de la población en el contexto mundial.
- La exacerbación de la explotación de la naturaleza.
- La hiperfetichización del mercado, más que de la sola mercancía.
- La manipulación y el control de los recursos tecnológicos de guerra, comunicación y de transporte para la imposición global de la tecnocratización e instrumentalización de la colonialidad y de la idea de desarrollo y progreso.
- La mercantilización de la política, de la subjetividad, de la memoria y de la experiencia de vida de los individuos, principalmente de las mujeres.
- La exacerbación universal de la dispersión individualista de las personas y de la conducta egoísta disfrazada de libertad individual, lo cual, en la práctica, equivale a la universalización de una brutal persecución individual de riqueza y de poder.
- La fundamentalización de las ideologías religiosas y de sus correspondientes éticas sociales, que legitima el control de los principales ámbitos de la existencia social.
- El uso creciente de las “industrias culturales” (sobre todo de imágenes, cine, televisión y video) y la radicalización en la comunicación vía internet para la producción industrial de un imaginario de miedo y de mistificación de la experiencia, con el fin de legitimar las ideologías y la violencia represiva.

En este contexto, se impone discutir alternativas, debatir la desconexión (Samir Amin) y el freno al progreso y profundizar las relaciones Sur-Sur, desde los gobiernos, pero principalmente desde los colectivos y los pueblos. Debe generarse una escisión política, económica y de modelos de desarrollo con el Norte capitalista con su colectivo imperialista. Habrá que historiar cómo se da este proceso, para ubicarnos en las particularidades que hacen las definiciones políticas de gobiernos y movimientos sociales. Se debe analizar cómo las derrotas populares y quienes participan en ellas deciden el curso posterior de la política estatal. Sin embargo, también veremos cómo la experiencia y la memoria traen grandes enseñanzas para el futuro.

El gobierno más cercano y asociado de modo subordinado al modelo Brasil fue Bolivia, donde aún debe investigarse la controvertida actuación de Petrobras⁹ frente a la renegociación de contratos hidrocarburíferos y el tratamiento a las refinerías. Asimismo, son recurrentes los conflictos, como los que sucedieron en la reserva ecológica del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécore (TIPNIS), en Bolivia, donde sería construida una autopista. La resistencia a carreteras de penetración a la Amazonía desestabilizó al gobierno del MAS, que terminó por cooptar, reprimir o fracturar a los pueblos. Los indígenas de la región afirman que no fueron consultados sobre la obra, lo cual es una exigencia constitucional; además, la construcción traerá consecuencias negativas para el ecosistema, lo cual afectará a poblaciones indígenas.

⁹ En setiembre de 2010, Petrobras consiguió 69 970 millones de dólares en la mayor venta realizada de acciones en el mercado mundial de capitales. Luego de este lanzamiento, su valor de mercado se colocó en 270 000 millones de dólares. Con ello se volvió la segunda mayor petrolera del mundo, sólo después de Exxon (313 000 millones de dólares) y delante de Petro China (266 000 millones de dólares). De acuerdo con Petrobras, estos recursos serán utilizados principalmente para hacer viable la exploración de pré-sal. Para esto, el consejo de administración aprobó el Plan de Negocios 2010-2014, con inversiones totales por 224 000 millones de dólares y tiene una proyección a 2020 de 5.4 millones de BEP por día. En 2011, las inversiones de Petrobras sumaron 87 500 millones de reales y su ganancia neta llegó a 33 300 millones de reales. Petrobras comenzó su trayectoria buscando materia prima, porque el país no dispone de grandes reservas *onshore*. Últimamente, tras desarrollar tecnología propia de exploración en aguas profundas y ultraprofundas, continúa en el mercado externo vendiendo su *know-how* tecnológico. En América, desde 1972, desempeña actividades de exploración, producción y comercialización. El año 2010, Petrobras alcanzó la marca de dos mil patentes registradas, tanto en Brasil como en el exterior. Le siguió en esta lista la universidad Unicamp, con 629 patentes, menos de un tercio del total de la estatal Petrobras.

El investigador boliviano Pablo Villegas afirma que:

Brasil controla más del 60% de reservas y producción de hidrocarburos de Bolivia, controla la política hidroeléctrica que va a quintuplicar la potencia del país para que esa energía se exporte en gran parte a Brasil; la política de transporte, que es la construcción de IIRSA, con financiamiento brasilero y empresas brasileñas. Brasil construye las represas del río Madera que le van a dar una gran influencia en nuestro territorio; Brasil es nuestro acreedor bilateral más grande. Y en la cuestión agraria, al mismo tiempo que el gobierno en sus primeros años tenía un discurso revolucionario, antiimperialista, antineoliberal, y a favor de la madre tierra, firmó con Brasil los acuerdos que mostramos en el libro para la producción de biocombustibles, transgénicos y otras barbaridades como la introducción de ganado en la provincia Vaca Díez, por lo que podemos decir que la influencia de Brasil también es central en la política agraria boliviana (Villegas, 2013).

Abundando sobre el tema, el líder fabril boliviano, Óscar Olivera, en una entrevista efectuada durante el Foro Alternativo Mundial del Agua, en Marsella, declaró que el Estado boliviano se está subordinando a las transnacionales brasileñas. Los intereses brasileños quieren partir el territorio indígena para tener un corredor del Atlántico al Pacífico para exportar sus mercancías a China. Se entregaron dos terceras partes del parque nacional Isoboro-Secure a intereses petroleros (Repsol, Petrobras y Total). Además, se detectaron minerales en la zona. “Por otro lado, se quiere hacer una carretera para abaratar los costos del transporte de los hidrocarburos y minerales. También está impulsada por intereses cocaleros de la federación de Evo Morales, que han agotado sus terrenos para el cultivo de la hoja de coca y quieren expandir esta actividad de manera ilícita” (Fernández y Marcos, 2012).

La destrucción del territorio indígena del parque nacional supondrá la destrucción de más de medio millón de árboles. Olivera afirma que en 17 años, más de 70% de la flora de la zona estará destruida. El gobierno ha hecho oídos sordos a los estudios de impacto ambiental. Algunas comunidades desaparecerán. “La matriz minera, relacionada directamente con el agua, está conduciendo a una ocupación de territorios por parte de las transnacionales” (Fernández y Marcos, 2012).

Olivera continúa afirmando que el caso de Bolivia es similar al de otros países, como Ecuador. Compara la actitud de Correa con la de Morales: “autoritaria, vertical, revanchista, de desprecio a la oposición social y política, desprecio a los indígenas, a los trabajadores de la prensa”. Coloca en esta misma categoría a los discursos de Cristina Fernández, quien promulgó una ley de criminalización de la protesta. “En Perú, más de lo mismo pero más rápido, porque Morales tardó cinco años en mostrar su verdadera cara, pero Humala tardó apenas cinco meses” (Fernández y Marcos, 2012).

Colonización y violencia fueron constituyentes de la historia latinoamericana y se reproduce internamente en la región. Esto impide hablar de un definido periodo poscolonial (término retomado de la intelectualidad de la India), pues la recolonización fue lo permanente. En ese sentido, en las últimas tres décadas es importante investigar cómo se establece y se totaliza la política neoliberal recolonizadora en estructuras institucionales, y cómo la potencialidad de la lucha obrera, indígena, de defensa de los recursos naturales y la regional son envilecidas consecutivamente por la corrupción, la coerción y el clientelismo.

El sub-imperialismo brasileño, considerando su papel subordinado en la estrategia de expansión militar colonial y control imperial expresado en el IIRSA, se volvió una realidad incontrastable. Muchas veces las poblaciones perjudicadas por las obras chocan, no sólo contra los gobiernos locales, sino también con las empresas extractivistas y las constructoras. Cuestionan la viabilidad de las obras y la actuación de las constructoras en perjuicio del medio ambiente y de los pueblos originarios. En los países vecinos, las organizaciones indígenas y ambientalistas afirman que los estudios de impacto ambiental muchas veces no se realizan. De hacerlo, el plan de compensación no se concretaría: no se indemniza a las familias afectadas o las obras de compensación nunca ocurren o se ejecutan de manera precaria. Es por ello que, al conocer los impactos negativos de las obras, la población del territorio indígena Isoboro-Secure se rebeló contra la construcción de la autopista (“Constructoras brasileñas...”, 22 de octubre, 2011).

De acuerdo con Machado, la inversión del BNDES en proyectos de obras en la región se duplicó entre 2009 y 2013: de 726 millones a 1400 millones de dólares. Su destino principal fue Argentina (2128 millones), seguido de Venezuela, Cuba, República Dominicana y Perú. A partir del

ascenso del PT al gobierno las multinacionales brasileñas consiguieron mayores beneficios. Odebrecht, por ejemplo, “tiene una carpeta de proyectos estimada en más de 8100 millones de dólares en sectores que abarcan desde la industria petroquímica, la agricultura y la energía hasta la infraestructura”. Las empresas brasileñas incrementaron sus carteras de proyectos en sectores como minería, construcción, infraestructura y consumo masivo (Machado, 20 de septiembre, 2014).

La cercanía geográfica es ventajosa, ya que Brasil es un país con un producto interno bruto doce veces la economía del Perú y cuarenta más que la de Bolivia. Se estima que Brasil pasará de ser sexto socio comercial de Perú a convertirse en el mediano plazo en el tercero. De acuerdo con Machado, en septiembre de 2013 el jefe de la secretaría general de la presidencia en Brasil, Gilberto Carvalho reconoció públicamente que “Brasil reproduce en relación con sus vecinos el mismo comportamiento del gran imperialismo del primer mundo con respecto a nosotros”. La declaración se dio tras un proceso de investigación abierto por la nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia en 2006. Petrobras llegó a controlar 45.9% de las reservas de gas, 39.5% del petróleo y las dos refinerías de dicho país. Siguiendo con Machado, sus procedimientos fueron cuestionables: “la contratación por parte de Petrobras Bolivia, bajo sustanciales remuneraciones profesionales, de varios ex gerentes de la empresa estatal boliviana YPFB” (Machado, 20 de septiembre, 2014).

Para Machado, el capitalismo brasileño actual controla un porcentaje importante de las principales fuentes de divisas de los países de la región. Sostiene inversiones, por ejemplo, en la minería peruana, en los sectores ganaderos y frigoríficos de Uruguay, en la soja paraguaya y en la energía derivada del proyecto entre Brasil y Paraguay de la represa de Itaipú (Machado, 20 de septiembre, 2014).

Siguiendo con la investigación de Machado, hay tres mecanismos que permiten la expansión de las transnacionales brasileñas por todo el subcontinente. Por una parte, el BNDES exige la participación de las transnacionales brasileñas en la ejecución de megaproyectos de la región como condición para financiar a estos últimos. Por otra, el Estado protege los capitales financieros que buscan para sus inversiones altas tasas de beneficio. Por último, la doctrina de la diplomacia brasileña se basa en la defensa y el posicionamiento de los intereses de sus grandes transnacionales en el

extranjero; considera a estas empresas como parte de los intereses nacionales de Brasil (Machado, 20 de septiembre, 2014).

Oscar Olivera afirma que la matriz económica basada en la producción y el extractivismo no ha cambiado en Bolivia. Le parece claro que el gobierno está subordinado a las transnacionales brasileñas que imponen una política de destrucción en función de sus intereses energéticos (como la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana, IIRSA). Estas últimas han incursionado en territorio colombiano, ecuatoriano, peruano, paraguayo y boliviano. Están en busca de megaproyectos hidroeléctricos. Sin embargo, éstos, puntualiza Olivera, ocasionan problemas medioambientales y llevan al desalojo de comunidades y a lastimosas formas contractuales de mano de obra (Fernández y Marcos, 2012).

La matriz minera, continúa Olivera, está relacionada directamente con el agua. Para él, ésta condujo a que las transnacionales ocuparan el territorio. Le parece urgente pensar en formas de autonomía colectiva.

No se trata de esperar un líder, un mesías o un partido político. Tiene que ir más allá del Estado y de la institucionalidad vigente. Hay que pensar en formas de autonomía, empezando por lo más concreto, por lo más cercano. Son espacios donde no interviene el Estado, no sujetos al intercambio mercantilista, que dan esperanza para construir un mundo nuevo, aunque sea pequeño. Hay que ir poniendo cercos pequeños al capital, a la inequidad. En la unión de esos pequeños espacios que va dejando el capital puede ser posible la construcción de un mundo diferente (Fernández y Marcos, 2012).

Odebrecht se ubicó en el puesto 16 de los más de 200 000 proveedores del Estado. Entre 2006 y 2011, los compromisos entre el Estado y la transnacional sumaron más de 6500 millones de soles. Ganó contratos millonarios en Perú, entre los cuales destacan tres tramos de la transoceánica y dos obras del proyecto Olmos, en la región Lambayeque.¹⁰

¹⁰ “En la década de 1980 Odebrecht incorporó varias empresas competidoras [...] En la década de 1990, merece destacar su entrada en el mercado de los Estados Unidos, un nuevo desafío tecnológico. Ya en la década del 2000, el crecimiento de las organizaciones Odebrecht llevó a la diversificación de los negocios y a la creación de seis empresas: Odebrecht Energía, Odebrecht Engenharia Industrial, Odebrecht Infraestructura, Odebrecht América Latina, Odebrecht Venezuela y Odebrecht África, Emiratos Árabes e Portugal, instituidas a partir de criterios geográficos o con base en mercados sectoriales. Odebrecht está presente en trece países del continente americano, ocho africanos, seis asiáticos y cuatro europeos. En cada región y país desarrolla una serie de actividades, tanto de construcción de infraes-

Pese a que se denunciaron irregularidades en la construcción de los tramos 1 y 2 del metro de Lima, el consorcio Tren Eléctrico, conformado por Graña & Montero y Odebrecht, pretendió adjudicarse la obra de la línea 2 (tren subterráneo) que uniría los distritos de Ate Vitarte y Callao a lo largo de 35 kilómetros. La inversión final del contrato alcanzó 6500 millones de dólares. Empresas asiáticas, alemanas y estadounidenses, entre otras, compraron las bases (Ositrán, 2013). Odebrecht tenía calculado ganar doce veces lo invertido, incluyendo financiamiento de campañas, coimas y otros gastos que lo llevaron a multiplicar los presupuestos mediante nuevas adendas a lo ya presupuestado.

Los cuestionamientos al consorcio Tren Eléctrico fueron diversos y se vienen tomando en cuenta por el poder judicial. Más aún si la propia Contraloría de la República detectó que la construcción del tramo 1 del Metro de Lima –que Alan García inauguró aún sin culminarse– tuvo un costo mayor al presupuestado inicialmente. La construcción de 21.48 kilómetros de viaducto elevado con dieciséis estaciones a cargo de la brasileña Odebrecht y la peruana Graña & Montero costó –según cálculos preliminares– 110 millones de dólares (26.5%) más de lo presupuestado.

En el 2010, las obras del tren eléctrico se fijaron en 410 millones de dólares, de los cuales 300 millones fueron cubiertos con un préstamo de la Corporación Andina de Fomento (CAF) y el resto por el Tesoro Público; al final, este costo se elevó a 520 millones de dólares. Por otro lado, las inspecciones que efectuó la Contraloría General de la República en el tramo Villa el Salvador-Grau del tren eléctrico revelaron que la obra presentaba riesgos en su infraestructura. En su momento, la Contraloría confirmó las

estructura como de asociación con empresas locales. Para conseguir estos resultados, la compañía empleó a 110 431 personas en el Brasil, 31 842 en otros países de América Latina, 15 068 en África, 845 en Estados Unidos, 447 en Europa y 403 en el Asia y Oriente Medio, con un total de 159 036 empleados (Odebrecht 2012). De acuerdo con el ranking de la Fundación Dom Cabral (2014), Odebrecht es la segunda mayor empresa con subsidiarias en el exterior, presente en veintiocho países. Su competitividad internacional se basa en las SFA desarrolladas a lo largo de su historia, principalmente la combinación entre know-how en construcción de grandes proyectos e investigación, innovación y lanzamiento de nuevos productos y gestión de procesos. Braskem (de propiedad de Odebrecht, en asociación con Petrobras) ya produjo más de 650 patentes y cada mes envía diez nuevos proyectos para análisis y registro. Braskem posee un centro de innovación y tecnología que cuenta con unidades en el Brasil y Estados Unidos donde trabajan trescientos profesionales especializados en el desarrollo de nuevos productos y aplicaciones (Dalla Costa, *et al.* 2014).

irregularidades detectadas en su edificación como las rajaduras halladas en la unión de varias columnas, fierros oxidados por su abandono en el tiempo, ausencia de un estudio de impacto ambiental y el forzado acoplamiento de una nueva estructura sobre la obsoleta base de columnas a medio terminar que se abandonaron durante el primer gobierno aprista.

Finalmente, por presión de la prensa, se tuvieron que hacer las “reparaciones”. A pesar de estos serios cuestionamientos, este consorcio transnacional recibió de Alan García la *buena pro* del tramo 2, que actualmente aún se construye con un presupuesto de 583 millones de dólares. Esta obra se impuso en contra de la opinión del Ministerio de Cultura y de la Municipalidad de Lima, entidades que en su momento denunciaron que esta obra afectaba varios monumentos del Centro Histórico de Lima, como el Cementerio Presbítero Maestro y el último baluarte de la Muralla de Lima.

Sobre las supuestas ventajas específicas de las empresas, Dalla Costa resalta a Petrobras, Gerdau y Odebrecht, con subsidiarias en catorce, diecinueve y veintiocho países, respectivamente. Señala que Petrobras se volvió famosa por el Centro de Investigación y Desarrollo “Leopoldo Américo Miguez de Mello” (Cenpes), que inició sus actividades el día 4 de diciembre de 1963 en Río de Janeiro y que actualmente, cuenta con un área total de 300 000 m². Es uno de los complejos de investigación aplicada más importantes del mundo. Cuenta con laboratorios avanzados y salas de simulaciones e inmersión en procesos de la industria energética. De las investigaciones del Cenpes surgió la tecnología para prospección y exploración en aguas profundas y ultraprofundas, la misma que mantiene a Petrobras en condiciones de hacer filiales conjuntas con las mayores empresas internacionales del sector (Dalla Costa, *et al.*, 2014). Petrobras centra su mayor ventaja competitiva en la investigación y desarrollo de nuevas tecnologías.

Las respuestas a estas políticas no han sido internacionales por la fuerza del fetiche progresista, por la debilidad de los revolucionarios y por que recién se vienen conociendo las intrincadas redes de la corrupción continental promovidas por los gobiernos de Brasil.

No se puede esperar nada del Foro de São Paulo ni las cumbres de los pueblos y de los movimientos sociales financiadas por los gobiernos progresistas. Están permeados por la ideología de la globalización económica y por la confianza en sus gobiernos liberales o en los partidos en el poder. Ello entraña una pérdida de control sobre su autonomía y asuntos

básicos; resulta en la emergencia de un paradigma de acción colectiva de sometimiento e incluso corrupción, e incide en diferentes ámbitos de socialización y de construcción de lo político.

Los dos paros nacionales convocados por las centrales sindicales el 2015 en Brasil, muestran con urgencia la necesidad de un polo clasista, antigubernamental y antiburocrático. Las acciones que ocurrieron los días 15 de abril y 29 de mayo lamentablemente no se configuran como puntos de inflexión en la lucha obrera en Brasil. Tampoco las organizaciones de la izquierda antigubernamental lograron aparecer frente a las masas trabajadoras como una alternativa independiente frente al PT y a los sectores de la derecha.

En ese momento aparecía la necesidad de no mezclar las banderas clasistas con las banderas de la burocracia sindical de la CUT, CTB y otras centrales que defiendan directamente el gobierno de Dilma y los empresarios corruptos. La cuestión es que, pasados menos de dos meses, la CUT, con la cual varios sectores de la izquierda buscaron “unidad de acción”, implementó directamente parte de los ajustes del gobierno de Dilma. A través de los importantes sindicatos que dirigen, están implementando el Plan de Protección del Empleo (PPE, el cual en realidad protege a los empresarios), pero fueron derrotados por amplia mayoría de los trabajadores en algunas fábricas.

Frente a este escenario, diversas organizaciones pugnan por la formación de un polo clasista, antigubernamental y antiburocrático, que pueda influenciar las bases de los grandes bastiones de la clase obrera brasilera, todavía bajo dirección de la burocracia. El Segundo Congreso de la Central Sindical y Popular (CSP-Conlutas) podría haber sido un importante momento de organización de este polo pensando políticas concretas. Sin embargo, la dirección del Partido Socialista de los Trabajadores unificado (PSTU), que es mayoría en la CSP-Conlutas, insistió en la consigna de “huelga general, ya”, sin un debate concreto de cómo prepararla y qué relación de denuncia y exigencia habría con las centrales sindicales oficialistas. El resultado es que el conjunto de los luchadores y luchadoras de todo el país que estuvieron en ese Congreso terminaron desarmados frente a la actual situación.

De acuerdo con Guarnieri, en su primer congreso, el Movimiento Revolucionario de Trabajadores (MRT) hizo un llamado a toda la izquierda a construir un polo clasista, antigubernamental y antiburocrático en todo

el país. Para él, la Central Sindical y Popular (CSP-Conlutas), las intersindicales y todos los sindicatos y corrientes opositoras de izquierda podrían convertirse en un polo que exigiera a las centrales sindicales romper con el gobierno de Dilma e integrarse a un plan de lucha efectivo para enfrentar los ajustes. Ese polo, afirma, también podría dirigirse a la clase obrera brasilera, que las burocracias sindicales aún no logran dominar, y llamarla a que enfrente a sus directivos para que no se les obligue a pagar por la crisis (Guarnieri, 2015).

Las centrales sindicales y estudiantiles atadas al gobierno, continúa Guarnieri, buscaron defender la democracia contra la “onda conservadora” (ajustes fiscales, agendas conservadoras en el Congreso). Intentaron englobar a toda la izquierda en este frente único. Por ello, en el paro del 29, Vagner Freitas, presidente de la Central Única de los Trabajadores (CUT) hizo un llamado a que todos pararan en apoyo a la agenda positiva de Dilma (Guarnieri, 2015).

A pesar de su importante poder de movilización y organización, el Movimiento de los Sin Tierra, en especial en São Paulo, ha buscado ser un puente entre la izquierda antigubernamental y los sectores ligados al gobierno. Busca unificar todos los frentes en la lucha contra la ola conservadora y defender la democracia. Esto, afirma Guarnieri, impide el surgimiento de una tercera alternativa. El Sindicato de Trabajadores del Subterráneo de São Paulo (metroviarios), el Sindicato de Trabajadores de la USP, la oposición del sindicato de profesores del estado (Apeoesp) y todos los sindicatos y corrientes opositoras dirigidas por la CSP-Conlutas e Intersindicales podrían concretar dicho polo. Todas estas acciones pondrían como objetivo ganar influencia en la base de las centrales sindicales. “Podrían aparecer nacionalmente como una tercera voz que no sea ni la derecha ni la defensa del gobierno y las burocracias que implementan los ajustes. Una salida de los trabajadores y por izquierda” (Guarnieri, 2015).

Para Guarnieri, en el llamado a la conformación de este polo, “los trabajadores deben ser sujetos de su propia lucha, sin defender a este gobierno y sin caer en las variantes de derecha que están siendo presentadas” (Guarnieri, 2015). Pensamos que en las tensiones entre el capital y la subordinación se ubican las posibilidades de lo nuevo, de la lucha, de la subalternidad que se rebela. La comprensión de estas contradicciones habilita una mirada que, a contracorriente de lo que el poder constituye como sentido común, visibiliza las resistencias y alternativas que hoy en

distintas partes del mundo están trastocando y desgarrando las relaciones de dominación.

Flórez-Flórez afirma que la década del ochenta se cerró “con serias objeciones al potencial de los movimientos latinoamericanos: en una región donde todavía no ha terminado de llegar la modernidad debido a que se consolidó un capitalismo colonial, poco pueden hacer sus movimientos para cuestionarla. Sus acciones, si acaso, son para alcanzarla con autonomía” (Flórez-Flórez, 2005). Aunque muchos discrepen, estamos frente a luchas periféricas ancladas a la modernidad colonial; luchas que se limitan a cubrir necesidades básicas, ganar autonomía ante el Estado, alcanzar el desarrollo económico, consolidar el sistema representativo. Están matizadas con respuestas a la globalización, considerándola como geoestrategia del poder imperialista, que se opone a aquellas aspiraciones.

COLOFÓN: EL GOLPE DE ESTADO

La estrategia de ser y no ser PT, o sea, de aparentar una cosa y en realidad ser otra, fue trazada por José Dirceu, su presidente en la época, para elegir Luiz Inácio en 2002. Así el palabreado “ético” y de “defensa de los trabajadores” era el PT del discurso y la firma de la Carta a los brasileños, asegurando la sumisión al FMI y al Banco Mundial, era el PT real; las denuncias de corrupción de FHC eran el PT del discurso y la alianza con Sarney era el PT real; la promesa de reforma agraria radical era el PT del discurso y la alianza con el agronegocio era el PT real; la promesa de hambre cero era el PT de discurso y la invitación al agente del FMI y diputado del PSDB, Henrique Meireles, para administrar el Banco Central era el PT real; la afirmación de que en el congreso había más de 300 picaretas (embusteros) era el PT del discurso y el montaje de un mensajón para comprar el apoyo de partidos y parlamentarios era el PT real; la necesidad de control de la media era el PT del discurso y la destinación de millones de reales para los monopolios de prensa era el PT real; la propuesta de una reforma política era el PT del discurso y la utilización de recursos de la Petrobras para formación de patrimonio personal y hacer el juego sucio electoral era el PT real; la campaña electoral de Dilma Rousseff era el PT del discurso y la gestión de Dilma Rousseff es el PT real (Arruda, 2016).

Precisamente por la demencia política que se menciona en el epígrafe, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, fue removida de su cargo a través de un golpe de Estado legislativo. Fue una ofrenda a los regímenes de derecha

en el mundo de hoy en día, que ya no tienen nada de democráticos. Sacaron del camino a un neoliberalismo lánguido y pusilánime (el “progresismo”), y apostaron por uno radical que procede a la acumulación por despojo y la recolonización. Fue una operación bien diseñada, preparada meticulosamente por la burguesía de Brasil e implementada por la élite corrupta del poder político que representa directamente a las transnacionales.

De hecho, el vicepresidente de Rousseff, Michel Temer, es testaferro de los principales bancos de inversión, de las transnacionales y de la lumpenburguesía brasileña, estrechamente vinculada al mercado de valores, instituciones financieras y las empresas de energía. Lo paradójico es que la depuesta presidenta Rousseff fue absuelta de todos los cargos de corrupción, mientras que su sucesor se enfrenta a las investigaciones en curso. Esta comedia tragicómica expone a la dirección y a destacados miembros del Partido de los Trabajadores como párvulos aficionados en esta orgía de saqueo capitalista. Fue un golpe operado por el Congreso Nacional a través de un *impeachment* que determinó la anulación del mandato legítimo de la presidenta, allanando el camino para la instauración de un Estado autoritario sustentado en el Poder Judicial, el Ministerio Público y los medios que se encargaron de deslegitimar masivamente al PT.

El PT, ante la ausencia de un programa de cambio fundamental, más allá de un discurso moralizante y la defensa de mínimas reformas desarrollistas burguesas, no pasó de la defensa de sus prebendas en el Congreso y otros espacios institucionales ante el impasse provocado por las secuelas de la revelación de la corrupción. Después de trece años de control por el Partido de los Trabajadores de la presidencia brasileña, el vicepresidente Michel Temer (quien fue parte de la coalición del PT con los elementos más corruptos de la clase capitalista brasileña en plataformas electorales conjuntas) lideró a la mayoría del Congreso, para acusar a Rousseff.

Fue durante la dependencia del PT, como gestor de las políticas del poder en Brasil, en la financiación de sus campañas políticas y del enriquecimiento personal a través de la donación a contratistas y élites empresariales, cuando se abrió el partido a la clase media y con ella a las prácticas corruptas de los partidos capitalistas, que los llevaron a ser capturados y procesados. El PT, para ganar las elecciones, se convirtió en un partido burgués más con su programa de bienestar social, el cual dependió del ciclo de crecimiento capitalista extractivista inestable.

La clase capitalista tácticamente se hizo con el poder estatal a través de las maquinaciones políticas y judiciales, de los corruptos del vicepresidente de Brasil y sus secuaces en el Congreso. La toma de control se basó en una serie de casos de corrupción por parte del PT. El hecho es que ni a Temer ni a todo el Congreso brasileño les importó estar tan deslegitimados como los acusados, pues han estado profundamente inmersos en el escándalo por miles de millones de dólares saqueados de Petrobras. Sin embargo, lo hizo en un contexto de mayor deslegitimación de un gobierno en declive y recesión económica, que socavó el apoyo público para el gobierno del PT.

Tras el golpe, las transnacionales menos beneficiadas salieron del closet del mercado de valores para tomar el control de las palancas del poder. Para empezar, tienen en la mira la codiciada Petrobras. El objetivo es que el capital extranjero y la lumpenburguesía, desde la bolsa y las medidas políticas, tomen el control tanto de los sectores estratégicos como de toda la economía. Se trata de reestructurar radicalmente la economía brasileña, con un cambio masivo del apoyo a los salarios, al gasto social y a la propiedad pública hacia mayores beneficios empresariales. Se vislumbra un desmantelamiento del sector público y la transferencia de las grandes empresas de Brasil a las multinacionales extranjeras y la lumpenburguesía nativa.

Cuando Pedro Parente, de la transnacional Bunge, fue puesto en la Secretaría de Economía, inició rebajando la inversión pública en 25 % que aumentó con la liquidación de Petrobras. Decidido por terminar con el papel del Estado en la economía, la colocó bajo los dictados exclusivos del capital privado. Los principales beneficiarios serán extranjeros. Quedó socavada la competitividad del sistema nacional del sector industria y transporte, con un fuerte aumento de los precios internos de los combustibles para acrecentar los beneficios de Petrobras. Además, se oculta el hecho de que estos bienes públicos ya habían sido entregados a privados. Parente privatizó las estaciones de servicio, producción y distribución de etanol, así como los fertilizantes y la petroquímica. Completó la obra de Dilma, pues desde el 2015 ya estaba vendiendo los bienes públicos al capital privado, en su mayoría extranjeros.

El objetivo principal ha sido sustituir el sector estatal como operador principal en los campos de petróleo y gas en aguas profundas. El premio mayor será el acceso a sus ricos campos de petróleo *off-shore*. A mediados de 2016, una licencia de petróleo en alta mar a gran escala se vendió a

la multinacional noruega, Statoil. Se desplegó el saqueo y una orgía de privatizaciones: infraestructura, transporte, servicios públicos e industrias básicas. Esto acompañó al recorte brutal de las pensiones públicas, los sueldos así como el presupuesto del sector público en salud y educación y los trabajadores públicos.

La idea es reducir los impuestos a las empresas, aumentar las ganancias y atraer capital. Para conseguirlo, se apuesta por la desnacionalización de la industria, el abandono del proyecto de desarrollo económico autónomo y el retorno a una política exterior subordinada a los intereses de Estados Unidos. Esto pone fin a la política de articulación con los países de América del Sur y África, el debilitamiento del Mercosur y los BRICS y la cancelación de los proyectos militares, nucleares, cibernéticos y espaciales que constituyen los principales proyectos estratégicos.

El proyecto de la derecha es congelar el gasto social durante veinte años mediante una enmienda a la Constitución que elimina los derechos universales a la salud, la educación y la previsión. Con esta operación se implanta un régimen de restricciones a los derechos laborales y a la seguridad social; se congelan las inversiones en educación, salud, ciencia y tecnología. Dicha austeridad, lejos de recuperar el retroceso actual de la economía, agravará el cuadro, al aumentar el desempleo y la pobreza.

Sin embargo, todavía debe demostrar que puede imponer directamente sus severas políticas destinadas a reconcentrar la riqueza y los ingresos para el cinco por ciento superior, despertando resistencias. La represión a decenas de miles de trabajadores de la industria, trabajadores rurales sin tierra y los pobres urbanos, junto con la campaña contra los salarios y las pensiones, aumentará sin duda los conflictos de clase dentro de Brasil. Se espera, con dudas en su capacidad, que las tres principales confederaciones de trabajadores se preparen para resistir a un régimen ilegítimo, afectando su capacidad de implementar la agenda.

Se halla la posibilidad de que la escalada de la represión estatal y la violencia criminal convenzan al capital extranjero de sacar la parte superior de los activos más rentables de Brasil. El proyecto de la derecha, al encontrar resistencias, transitará del autoritarismo a la dictadura. Como bien lo analiza Pablo González Casanova, la “democracia” vuelve a ser privatizada por las grandes corporaciones y utilizada por la clase política para disponer, desde los puestos de elección popular, de todas las ventajas y concesiones para ellos y sus jefes políticos y clientelas, en especial en periodos de crisis. Señala:

De un lado si el éxito de la dominación en crisis se debe a la cooptación y colusión de cuadros y clientelas subordinadas y subrogadas que circulan a través de todo el sistema gubernamental abierto y encubierto, combinada con mezclas, alianzas y amalgamas de una macropolítica de corrupción y represión que funciona desde los grandes mandos de la globalización neoliberal y “desde la sombra” hasta los gobiernos y grupos criminales abiertos y encubiertos que juegan sus respectivos papeles entre autonomías y sujeciones, entre soberanías y servidumbres, amalgamadas o coludidas (González Casanova, 2016).

Agrega el maestro que hoy:

las sedes imperiales están organizando una burguesía global, cuyos enlaces consolidados reciben el apoyo necesario para enriquecerse y acumular, siempre que del ingreso nacional total, las corporaciones se queden con la mayor parte, mientras que a sus socios periféricos se les da “luz verde” en la corrupción y la represión, también bajo su control, un “enlace globalizador” de las corporaciones financieras, armamentistas, mineras, agroindustriales, constructoras, y de los variados servicios que les dan para la construcción de infraestructuras y meganegocios en las ciudades y territorios de la periferia, al tiempo que los gobiernos nativos adquieren cuantiosas deudas interiores-exteriores, que no destinan al desarrollo del país, sino a la importación de materiales y productos que los prestamistas producen y de que se deshacen en ventas negociadas para el descomunal enriquecimiento y la buena marcha de las corporaciones y sus deudores (González Casanova, 2016).

Mientras este proceso ya avanza, en las elecciones municipales brasileñas de octubre de 2016 el PT sufrió una nueva derrota. Esto expresa un debacle de las izquierdas, fruto del derrumbe ético político, de la política neoliberal de Rousseff, quien no sacó al país de la recesión y el desempleo, y del golpe blando propiciado por una alianza del gran capital financiero y al agronegocio, los grandes medios de comunicación de masas, sectores significativos del Poder Judicial y la alta burocracia estatal con unos Estados Unidos. Estos últimos están descontentos, principalmente, con la política exterior brasileña. Sin embargo, el factor decisivo es la crisis del PT y la persecución de sus dirigentes.

En tanto que el poder judicial calló sobre los procesos contra Aécio Neves [senador del PSDB y ex candidato a la presidencia de la República], los tucanos, el PP [Partido Progresista] y el PMDB estaban tanto o más

vinculados que el PT en la operación Lava Jato. Habría que agregar el manejo electoral del nuevo poder, el cual redujo el tiempo de campaña y la acumulación de errores tácticos y estratégicos de tipo electoral por la oposición a Temer. Por ejemplo, la inercia del PT durante muchos años se tradujo en la despolitización de las propuestas; se impuso el patrimonialismo o el carisma personal. Las campañas se resumieron a intereses personales y de grupos locales. En eso la derecha ganó.

Los medios de comunicación burgueses fueron vencedores, porque consiguieron una mala imagen del PT. El mayor triunfo de este último fue sobrevivir. A pesar de que este triunfo de la derecha no significa necesariamente el avance de los valores neoliberales sobre las aspiraciones igualitarias, la segunda ronda de las municipales confirmó lo que se advirtió en la primera. El PT y el PSOL (al que le cayeron los daños colaterales) fueron vapuleados en casi todo el país. Perdió la mitad de lo que obtuvo en 2012, con graves daños en São Paulo, antes su baluarte histórico.

Los estragos llegaron al interior del PT. En todo el territorio del país apareció el reclamo por un congreso extraordinario del partido para cambiar la dirección y la política. Respecto a las anteriores elecciones municipales del 2012, el PT perdió diez millones de votos y 242 prefecturas, es decir, 45% de sus alcaldes y 60% de sus consejeros (Amaral, 2016).

CAPÍTULO III

BRASIL: EXTRACTIVISMO TRANSNACIONAL, CORRUPCIÓN Y SOMETIMIENTO AL IMPERIO EN LA DISPUTA HEGEMÓNICA REGIONAL

Esas son prácticas comunes entre todos los políticos burgueses, pero como ellos se presentaron como representantes de los trabajadores, representantes populares; son particularmente vulnerables porque han tomado una posición moralizante y cuando descubren que los moralistas están en los burdeles tiene un impacto mucho más negativo.

JAMES PETRAS

Las transnacionales brasileñas

Las empresas multinacionales de Brasil¹¹ tienen un lugar central en la explotación de recursos naturales, transferencia de riqueza y en su transformación en potencia estatal. Hay una interacción entre Estados y multinacionales. El Estado estructura el campo jurídico y político nacional e internacional para que ellas actúen, las financia y les ofrece apoyo tecnológico. A su vez, crea las bases para tener mayor participación e incidencia en las instituciones y foros multilaterales. Tras el Estado, las empresas multinacionales que actúan dentro y fuera del país influyen en las políticas públicas en ambos espacios y crean una imagen de país. La penetración de agentes de las empresas en el aparato estatal y a la inversa es una constante en América Latina. Ruy Braga, al referirse a la imposición de la terceriza-

¹¹ Brasil tiene catorce grupos en la lista de multinacionales emergentes. Constructoras Odebrecht, Camargo Corrêa y Andrade Gutierrez influyen en la política externa brasileña.

ción laboral de la Cámara de Diputados, sentencia que estas medidas son parte de una misma ruta:

Dilma dejó de ser neodesarrollista a partir del segundo año de su primer mandato. Su gobierno privatizó los puertos, los aeropuertos, intensificó la liberación de créditos para proyectos dudosos y ahora está haciendo de todo para reducir el costo del trabajo. El gobierno se volvió contra los intereses históricos de los trabajadores. Lo que yo veo es la intensificación de un proceso y no un cambio de ruta. Si había alguna duda, ahora la gente se da cuenta que el gobierno está rendido al mercado financiero (Braga y Wanderley, 2015).

Tenemos, así, que esta relación dinámica entre capital y Estado se extiende a la actuación internacional de Brasil, la cual estamos intentando explicar, desde el desempeño de empresas multinacionales brasileñas y su creciente impacto negativo sobre comunidades locales, trabajadores y el medio ambiente en casos de conflicto y las conmociones sociales que generan en distintos territorios. Casos emblemáticos son la expulsión de la empresa Odebrecht del Ecuador, la carretera por el Tipnis que marcó la inconsistencia ideológica del gobierno de Evo Morales. También están ejemplificados en conflictos que involucran a Petrobras, la Vale y empresas constructoras en Perú. A pesar de no ser un fenómeno nuevo, el debate sobre multinacionales de “países emergentes” todavía es reciente en las reflexiones de las relaciones internacionales y está íntimamente ligado con la discusión sobre la ascensión de esos países en el orden mundial como nuevos centros de poder económico y político.

Coincidimos con la preocupación de Carlos Walter Porto acerca de si la izquierda latinoamericana nos está llevando a un proceso emancipatorio. ¿Se trata de la continuidad del proceso de explotación y exclusión ahora reconfigurado? Sus dimensiones son teóricas, políticas y civilizatorias, afectan a toda la región y van más allá de la reducción del debate al desarrollismo, a los intereses nacionales o a la interacción y sus tendencias opuestas. Son más profundas las implicaciones para la vida y la política de los de abajo y para el pensamiento crítico latinoamericano (Porto-Gonçalves, Carlos Walter, 2009).

La llegada al gobierno de sectores de izquierda coincidió con un proceso de reconfiguración de los poderes regionales económicos globales, especialmente con el ascenso económico de China y de los BRICS (Brasil,

Rusia, India, China y Sudáfrica), el cual abrió oportunidades para la consolidación de un mundo multipolar al aumentar exponencialmente la demanda hacia Sudamérica de recursos naturales. El ascenso de estas economías se vio como una oportunidad política y económica para el subcontinente, ya que el crecimiento sostenido de estas economías ha sido, al mismo tiempo, relativamente descentrado de Estados Unidos y Europa.

Carlos Walter Porto y Betancourt lo dicen así:

El impacto de estas transformaciones geopolíticas y la implementación implica una transformación de los territorios y las territorialidades de miles de pueblos en el continente de cara a una adecuación espacial, frente a las “nuevas oportunidades geopolíticas”, creando las bases para un nuevo ciclo de acumulación que hunde sus raíces en la sobreexplotación de la naturaleza, y cuyo medio de extracción es la penetración de una infraestructura técnica de comunicación y energía. Estamos entonces ante un panorama de reconfiguración espacial del continente, al servicio de la explotación de los recursos naturales, en el marco de una política regional desarrollista e integracionista, cuya bandera más sobresaliente la constituye el IIR-SA, pero que incluye todas las infraestructuras y economías proyectadas sobre el continente (Porto-Gonçalves y Betancourt, 2013).

Para Ana García (2013), la internacionalización de las empresas brasileñas atraviesa por consensos y conflictos producto de su inserción externa basada en la exportación de bienes primarios, *commodities* agrícolas y minerales, fortaleciendo políticamente estos sectores. Esto se debe a que las políticas de apoyo no consideran las cuestiones sociales, ambientales y laborales como elementos fundamentales del desarrollo; los intereses de las empresas y el “interés nacional” se confunden. Empresas que representan a “Brasil” en el exterior mezclan el papel del país y el de las empresas; esto afecta negativamente el imaginario de la sociedad. Por lo menos tres países vecinos e ideológicamente afines al Estado brasileño han tenido conflictos sociales y políticos que exigen ser investigados desde el terreno y a profundidad, con los propios sujetos involucrados y en una perspectiva total.

En términos teóricos, nuestra preocupación está inscrita en el debate acerca de cómo caracterizar la forma de capitalismo actual, extractivista colonial. Buscamos comprender sus lógicas y estructuras inherentes, sus condiciones de posibilidad históricas y entender el futuro de la política de las resistencias anticoloniales. La intención es confrontar teorías que

surgen de las potencialidades culturales devenidas de la experiencia y de la memoria sociales, las cuales nos remiten a la naturaleza, potencialidades y límites de los nuevos poderes globales y de los llamados gobiernos progresistas, de la ampliación de las elites en el poder y de los movimientos de resistencia al extractivismo. La acumulación por desposesión tiene como base la explotación intensiva de los recursos naturales y plantea a los Estados involucrados la gestión del capital y por tanto de los intereses de las grandes potencias y burguesías en la lógica de acumulación capitalista.¹²

Ello se expresa tanto en la política interna de los últimos gobiernos de Brasil como en su política exterior latinoamericana respecto a recursos, como la minería, el petróleo, el gas natural, la frontera agrícola, infraestructura económica. Los proyectos son cada vez más potentes y hacen que todo lo que interfiera en sus objetivos tienda a ser aniquilado como obstáculo al crecimiento. El poder político de los nuevos grupos de poder crecía junto con su poder económico, mientras los Estados utilizan la redistribución social de la renta para conseguir una legitimidad política que el neoliberalismo de derecha nunca tuvo. Nos inscribimos en el punto de partida propuesto por Fiori:

No mundo das grandes potências e dos demais Estados e economias nacionais, não existem bons e maus, nem melhores ou piores, em termos absolutos. O que existe são Estados que, em determinados momentos da história, assumem posições mais ou menos favoráveis à paz e à “justiça internacional”. Mas, até mesmo nesses casos, há de se distinguir a retórica da ação concreta, porque todas as grandes potências já foram colonialistas e anticolonialistas, pacifistas e belicistas, liberais e mercantilistas, e quase todas elas, além disso, já mudaram de posição várias vezes ao longo da história (Fiori, 2004, p. 57).

Un segundo debate es acerca de las alternativas, de si será posible o no salir del neoliberalismo neopopulista que se está consolidando y si cederá tanto ante la resistencia popular, como frente a los límites y contradicciones del propio capital y las ecológicas sociales y políticas. No sólo está cuestionada la idea de “progreso”, sino la temporalidad de los gobiernos y el *boom* de los *commodities* que descalifica a la oposición de sus víctimas des-

¹² La academia latinoamericana es proclive a las pseudoconcreciones (*Kosik*) del tipo poscolonialismo, posneoliberalismo, fin de la historia, de las ideologías, del sujeto, entre otras. Ello obliga a cuestionar la supuesta teoría y muchos conceptos desde la praxis.

acreditándolas como ecologistas, oenegeístas, campesinos improductivos o indígenas primitivos. Pensando desde abajo, las opciones se reducen a quienes defienden a los gobiernos progresistas; quienes piensan que desde las grietas se pueden desarrollar acciones y proyectos anticapitalistas (como John Holloway), y otros que creen que se deben convocar a todas las víctimas del neoliberalismo para insurrecciones o guerras, conquistar el poder y transformar ciertas relaciones (véase el movimiento griego Syriza y el español Podemos) (Holloway, 2014; Bello, 2014).

En esta misma perspectiva teórica, otra vez partiendo de la concepción del poder de Fiori, creemos que es posible discutir el concepto de capitalismo colonial:

Desde mi punto de vista, el “poder” tiene precedencia lógica e histórica con relación al capital, y cumplió un papel originario y decisivo en la constitución del propio capitalismo europeo. Más que eso, desde mi perspectiva, el capitalismo nació de las luchas de poder intraeuropeas, y de la forma como los “poderes territoriales” europeos se sirvieron y se articularon con sus “economías nacionales” para llevar adelante sus guerras de conquista, con el objetivo de acumular todavía más poder. Una articulación pragmática que acabó transformándose en un mecanismo regular, continuo y ascendente, la verdadera llave de la explicación del “milagro europeo” y de su éxito conquistador, responsable por la “globalización” del propio sistema interestatal que los europeos inventaron (Fiori, 2014).

En los años precedentes, hemos intentado explicar desde los países andinos (Perú, Bolivia, Venezuela, Colombia y Ecuador) la ampliación/reconfiguración del bloque en el poder, en el contexto de la gran transformación que se produce en nuestra región en décadas, con respecto a las resistencias (Lora, 2003; Lora, 2004; Lora, 2009; Lora, 2013). En esta ocasión, pretendemos acercarnos a explicar e interpretar las lógicas de las relaciones de poder entre Latinoamérica y Brasil (y los BRICS),¹³ en una nueva división del trabajo en el poder entre los propietarios del capital y quienes lo gestionan, básicamente ex dirigentes políticos de izquierda (Lula, Evo, Ortega) o de origen “nacionalista” (Humala) o intelectual (Co-

¹³ El término BRIC surge en el año 2001, creado por Goldman Sachs para hacer referencia a las economías emergentes. Su primera reunión se realizó en el año 2006, con la presencia de Brasil, Rusia, India y China. A partir del año 2010 se invitó a Sudáfrica. Se espera que se sumen otras cinco partidarios del poder multipolar.

rrera) o de derecha (Alan García, Toledo, Humala, en Perú; Uribe y Santos en Colombia o Bachelet en Chile, entre otros) y de algunas grandes corporaciones de trabajadores (PT, MST en Brasil, COB y CSUTCB en Bolivia, CGTP en Perú, los forajidos en Ecuador).

La burguesía es parte esencial del nuevo escenario regional que complica la explicación de la confrontación/conciliación entre el progresismo-nacionalista y el imperialismo occidental con las derechas tradicionales. En el contexto de una permanente acumulación originaria étnico clasista de corte colonial, que no ha dejado de recrearse bajo la forma neoliberal y de engendrar resistencias, un intelectual africano reafirma viejos postulados de Samir Amin. Otros compartimos la idea de que el colonialismo es la extensión a las colonias de las relaciones capitalistas y que “No hay capitalismo por un lado y colonialismo por el otro, sino que son las dos caras de un mismo proceso. La desaparición del colonialismo significa a corto plazo una crisis mortal para el capitalismo. De igual modo, el final del capitalismo significa la desaparición del colonialismo” (Bouamama, 2014).

Las estrategias de expansión y disciplina política del imperialismo colectivo (Amin, 2005) a escala continental, suponen el abarcamiento geográfico-espacial del despojo y profundidad en lo social –hasta la propia conciencia–. La intención es identificar nodos estratégicos y líneas de avance en el terreno con el fin de aplicar políticas de seguridad, defensa y ocupación. Dicha estrategia crea un escenario de pérdida de soberanías que confronta a los proyectos democráticos y progresistas en varios países.

En ese contexto, los países que integran la Alianza del Pacífico (México, Colombia, Perú y Chile), caracterizados por su neoliberalismo a ultranza y la corrupción, claramente funcionan como aliados y puntas de lanza de Estados Unidos. Reciben beneficios bajo la forma de ayuda y cumplen en parte las funciones que antes asumida directamente el personal estadounidense. Esto incluye acciones para contrarrestar a Unasur y ALBA a través de países como Colombia y Honduras, y ahora el propio Brasil y Argentina. La estrategia global de Estados Unidos pretende unir ejércitos latinoamericanos –Colombia, Perú y Honduras– con los de la OTAN y otras regiones, donde también crean espacios de expansión hegemónica: Irak, Afganistán, Libia, Ucrania; o las permanentes presiones financieras, tecnológicas, comunicativas o políticas.

En el siglo XX –periodo de dominio indisputado de Estados Unidos en los ámbitos antes señalados–, Estados Unidos concibió a Brasil como

un potencial aliado de segunda línea, sin acceso a tecnologías militares de punta, y destinado a actuar como auxiliar en la geoestrategia expansiva en América del Sur, en particular durante el periodo de la guerra Fría. Brasil, con historia imperial y sus ocho millones de kilómetros cuadrados –muchos de ellos sustraídos a los vecinos–, siempre estuvo en el dilema de ser potencia hegemónica regional o estar supeditado al imperio norteamericano. Ello está presente en todos los acontecimientos que marcaron al continente.

Su preocupación fundamental, sin embargo, fue mucho más con los países del Cono Sur, y por la ancestral disputa con Argentina, por la hegemonía regional. Dicha disputa significó permanentemente una alianza con Chile y su alejamiento de los otros países andinos. La situación irá cambiando durante el siglo XX. Esa preocupación con respecto a la Argentina y a sus vecinos de habla hispana explica también las varias intervenciones directas e indirectas de Brasil en los desdoblamientos políticos de los países vecinos de esta región, en particular con Bolivia y Paraguay.¹⁴ Después de la Segunda Guerra Mundial, Brasil muchas veces operó como punta de lanza de la política norteamericana de la guerra Fría, dentro del continente.

Pero en general, el Estado y la sociedad brasileña durante mucho tiempo se colocaron de espaldas o fueron indiferentes al mundo latinoamericano, con excepción de las fuerzas y de los intelectuales de izquierda que siempre vieron y preconizaron una identidad y una unidad continental, en particular frente al imperialismo norteamericano. Sin embargo, fue Brasil quien propuso, por primera vez, la idea y el proyecto de una integración político-económica de los países del Cono Sur a principios del siglo XX, aun limitados por la política imperial panamericana, que incluía a Estados Unidos y a todos los demás países de América expresados en la OEA.

Con la Revolución cubana cambiaron las cosas; se mostraron potencialidades antes encubiertas. En la década de los sesenta, la llamada política exterior independiente de los gobiernos de Jânio Quadros y João Goulart (1961-1964) se propusieron aumentar el margen de maniobra y la autonomía de la política exterior brasileña, y se enfocaron hacia las relaciones Sur-Sur, con énfasis en América del Sur, África y Asia.

¹⁴ Los vecinos Paraguay y Bolivia son vistos como territorios para ocupar y fuentes de recursos. En ambos la presencia de Brasil va creciendo respecto a la expansión del cultivo de la soya, la construcción de hidroeléctricas, compra de hidrocarburos y la ocupación del mercado.

De hecho, Brasil buscó reorientar al continente sudamericano, después del fin del régimen militar. En la década de los ochenta, y en la primera década del siglo XXI, cuando Brasil propuso y lideró la creación de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) en 2008, y del Consejo de Defensa de América del Sur en 2010. Dichas alianzas promovieron proactivamente la ampliación de la zona económica del Mercosur, que ya incluía a Argentina, Uruguay, Paraguay y Venezuela, y que debería asociar en un futuro próximo a Bolivia, Ecuador y Surinam. En el 2017 nadie podría arriesgar un juicio respecto al porvenir. Existía interés por crear contrapesos con respecto a otros bloques regionales, acompañado de una tendencia que se generalizó después de la experiencia europea de la Segunda Guerra.¹⁵

En la segunda mitad de los años ochenta, después del fin de los regímenes militares en Argentina y Brasil, los nuevos gobiernos de los dos países retomaron la vieja idea de la unificación política y de la integración económica del Cono Sur. Optaron por un objetivo conjunto y cooperativo: la construcción de una “zona de co-prosperidad económica” sudamericana, junto con la articulación de un bloque de poder regional capaz de actuar en conjunto dentro de la política internacional. Se buscaba enfrentar la oposición, división, enfrentamiento y boicot permanente de los Estados Unidos, junto a las elites conservadoras y liberales y grupos de interés internos del propio continente, con su defensa insistente de un “cosmopolitismo de mercado”, que ofrecía ganancias inmediatas. Su objetivo era bloquear de todas las maneras posibles la consolidación de un liderazgo y hasta un bloque de poder regional capaz de afectar la hegemonía hemisférica norteamericana (Fiori, 2014). Pareciera que las reglas y las tendencias del sistema interestatal capitalista aparecen como implacables y poco tie-

¹⁵ A principios del siglo xx fue el barón de Río Branco, y después de la Segunda Guerra Mundial, el presidente Perón. La gran novedad estratégica del proyecto, es el abandono de la competencia geopolítica que orientó el desarrollo económico y militar de los dos países por más de un siglo. Pero existe un hecho histórico que pesa decisivamente en la decisión de crear un bloque económico y político en el Cono Sur del continente: el factor económico. Ahí se encuentra la región económica de más alta productividad del continente, integrada por la cuenca hidrográfica del Río de la Plata. En ese tablero geopolítico y geoeconómico del Cono Sur, Argentina lideró el primer gran fenómeno económico de América del Sur, entre 1870 y 1940; luego, Brasil encabezó la segunda gran transformación del continente entre 1937 y 1980, completando al final, un siglo más de alto crecimiento continuo dentro de esta región de América del Sur, algo inusitado en el mundo.

nen que ver con la mayor o menor buena voluntad de los gobernantes de cada época.¹⁶

Los países de América Latina atravesaban la crisis de la deuda y el fracaso de las políticas de ajuste, consecuencia de una recolonización más. El principal problema que enfrentaban al asumir la presidencia, fue el de economías en crisis con hiperinflación, provocadas por las exigencias del endeudamiento. Fueron obligados a adherirse a los principios del Consenso de Washington¹⁷ e introducir una serie de reformas neoliberales: con la reforma del Estado o con nuevas Constituciones, que autorizaran la privatización de empresas estatales, bajo la asesoría del Gobierno norteamericano, el FMI y emisarios que personalmente asesoraban las reformas antinacionales. Al no desprivatizar, ni desactivar las políticas neoliberales y al dejar intacta la propiedad privada, la continuidad de la acumulación estuvo asegurada.

Además de las potencias coloniales, la geografía y la economía sudamericana siempre conspiraron contra la formación de un sistema estatal y económico regional integrado y competitivo. Una Amazonía que une, pero con una selva que divide, barreras naturales que obstaculizan su comunicación e integración física, además de la Cordillera de los Andes, el Pantanal brasileño-boliviano y el Chaco boliviano, la Guyana Francesa.¹⁸

¹⁶ En primer lugar, si Brasil opta por el camino del mercado y acepta la condición periférica del sistema internacional, con fuertes defensores internos, también estará condenando al resto de América del Sur a la condición de periferia de la economía mundial, abandonando cualquier fantasía de proyecto autónomo de proyección de poder y de liderazgo internacional.

¹⁷ “El término ‘Consenso de Washington’ fue acuñado en 1989 por el economista John Williamson para describir un conjunto de diez fórmulas relativamente específicas el cual consideró que constituía el paquete de reformas ‘estándar’ para los países en desarrollo azotados por la crisis, según las instituciones bajo la órbita de Washington, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Las fórmulas abarcaban políticas en áreas tales como la estabilización macroeconómica, la liberación económica con respecto tanto al comercio como a la inversión y la expansión de las fuerzas del mercado dentro de la economía doméstica.” (Wikipedia, s.f.).

¹⁸ Ecuador, Perú y Bolivia son países divididos: andes y valles interandinos, y la llanura amazónica (y costa en Perú) donde se concentra la actividad extractiva y de exportación. En Perú, el interior andino y amazónico (80%) queda extremadamente aislado y atrasado social y económicamente. A la inversa, en Bolivia la llanura amazónica concentra las inversiones. Gran parte del territorio de Brasil, el país más extenso y con mayor diversidad de recursos, está ocupado por selvas; sólo 7% –es decir, cerca de 600 000 km²– posee tierras arables y Perú proporcionalmente mucho menos.

Parece quedar claro que ningún país está condenado de antemano a cualquier tipo de camino o trayectoria económica, pues intervienen estructuras, sujetos y acciones. Basta ver el caso de Brasil que dio un salto enorme durante el siglo XX. A inicios del siglo, era tan sólo un país agrícola, un Estado con grandes desigualdades regionales y con un poder económico y militar muy inferior al de Argentina y México. Hace muy poco, Brasil disputaba el título de la sexta mayor economía del mundo. Tiene un enorme potencial de crecimiento debido a su extraordinaria dotación de recursos hídricos, energéticos, alimenticios y de factores estratégicos indispensables para un país que se propone ser un gran exportador de *commodities* y busca desarrollar su propio terreno industrial y tecnológico.

Brasil se mantiene como el país de América Latina que más ingresos registra por inversiones extranjeras directas (IED). Según un informe divulgado por la Conferencia de la UNCTAD en 2013, Brasil recibió 64 000 millones de dólares en IED, cifra inferior a los 65 300 millones de dólares de 2012; la primera caída desde 2009. Los últimos gobiernos están concesionando el país para mantener *decentes* tasas de crecimiento del PBI (Conferencia de las Naciones Unidas, 2013).

Este es el contexto en el que nacen las lumpenbuergeoisías latinoamericanas. El principal sujeto de la estrategia globalizadora imperial que tiene antecedentes coloniales y a la vez es producto de las nuevas políticas imperiales. Si vemos tres procesos diferentes en sendos momentos históricos, veremos que el proceso permanente de construcción del capitalismo colonial y de la lumpenbuergeoisía es similar en los países de Latinoamérica; sólo varían los tiempos y la intensidad. Gabriel Salazar expone cómo se configura su identidad de clase en Chile:

La elite dirigente chilena, la oligarquía, en su origen mismo fue de origen peninsular. Español. Buscaron su estatus, su prestigio, en la lógica imperial. Se aristocratizan en la lógica del imperio español. Sus intereses mayores de clase están afuera, en España. Después los van a cambiar hacia Francia. Su identidad de clase, en última instancia, apuntaba al imperio de turno. Entonces, necesariamente, adoptan políticas librecambistas, para permitir la entrada de los intereses extranjeros al país. Abren el camino para la penetración del capital extranjero, que no llega por la industria sino que llega como compañías comerciales. La clase política civil chilena impidió el desarrollo de la industria nacional (Salazar, 2016).

En Latinoamérica, paulatinamente, hacendados, mineros y comerciantes van transformándose en una lumpenbuergeoisía respecto a la burguesía de los países colonizadores. Sin dejar de ser extractivista, ahora es una oligarquía parasitaria que vive del Estado a través de la deuda y subsidios, que se apropia de territorios y yacimientos, vive cotidianamente de las rentas, es monopólica, cerrada, mafiosa y ultraprottegida, sumisa con el imperio, entreguista de la economía local a las transnacionales y al capital financiero a cambio de garantizar sus espacios y su poder. Un rasgo común es su carácter eminentemente extractivo y lucrativo de la riqueza nacional, su carácter saqueador y su voracidad y aidez de súper ganancias al menor costo, su violencia para confrontar la resistencia, su exuberante nivel de vida y capacidad de consumo, muchas veces superior al de las burguesías de los países capitalistas centrales.

Con el neoliberalismo, desde 1980 hasta la crisis del 2008-2009, se desató un periodo inédito de expansión de las multinacionales y los grupos. Han concentrado su poder de manera tal, que menos empresas son capaces de proveer más bienes y servicios. Asimismo, a medida que avanza la globalización económica, el número de multinacionales ha tendido a crecer, a pesar de la centralización de capitales. Según dejan ver las estadísticas de las utilidades, las *top companies* han crecido también considerablemente. Actualmente existen unas 70 000 multinacionales que tienen alrededor de 690 000 subsidiarias. Son estas entidades las que necesitan el mundo como mercado. Controlan aproximadamente dos tercios del comercio internacional, transacciones que son muchas veces intracorporativas. Actualmente, están en una fase de contracción, debido a la recesión global que empezó en setiembre del 2008.

El caso de Perú es relevante. Más adelante veremos cómo se interrelacionan Estados, empresas, poderes, finanzas, inversiones y se articulan con la vida política. Estas relaciones dan fe del sesgado crecimiento económico de Latinoamérica y de la importancia que para amasar sus caudales han tenido la subsidiariedad del Estado, los contratos de estabilidad tributaria y las bajas tasas del impuesto a la renta. La oligarquía peruana, de acuerdo con los análisis de Bravo Bresani, hace 50 años, se encontraba entre los técnicos y administradores, comerciantes e industriales (muchos enriquecidos por su falta de escrúpulos políticos) quienes sabían cambiar influencias contra dinero; antiguos propietarios y aristócratas decadentes apoyados por grupos financieros que luego de arruinarlos los protegían

o los rescataban de los usureros para obtener su incondicionalidad; blancos y cholos, extranjeros y peruanos nuevos y antiguos perezosos, cínicos, ambiciosos. Su rasgo común es su constante variación y su habilidad para maniobrar (Bravo Bresani, Bourricaud, Favre, Piel, 1969).

Poco más tarde, de acuerdo con Carlos Malpica, el grupo de poder básico era el extractivista. Estaba constituido por las grandes empresas agrarias, mineras y pesqueras: casas comerciales, empresas marítimas y de aviación dedicadas a la producción, transporte y comercialización de materias primas exportables. El segundo grupo, estaba integrado por bancos y financieras; el tercero, por empresas que controlaban la energía, comunicaciones, productoras de materiales de construcción, especialmente cemento; el cuarto, por las compañías comerciales; el quinto, por el sector industrial; y el sexto, por las urbanizadoras.

Después de esto, los grupos de poder en el Perú cambiaron en lo posterior a las dos fases del gobierno militar, el inicio de la apertura económica con Morales Bermúdez y el segundo Belaundismo; luego con Alan García (1985-1986) y más tarde con Fujimori, Toledo y el segundo Alan. Este protegió a Los “doce apóstoles”, grupos que se habían beneficiado de políticas nacionalistas (orientadas a favorecer intereses de peruanos sobre los extranjeros, como fue la intervención del Estado en el Banco de Crédito, a favor de los Romero y en perjuicio de los inversionistas italianos), de la asociación con el Estado y de las protecciones y subsidios. Otra vez, el extractivismo tenía su eje en su relación con los bancos, industrias, minería, pesca, construcción y los medios, la gran prensa. Entre sus componentes se contaban: el grupo Romero, Raffo, Nicolini, Bentín, Piaggio, Picasso, Wiese, Ferreyros, Benavides de la Quintana, Brescia, Piazza y Delgado Parker.

La lumpenburguesía era frágil y se destruía en parte y renovaba en cada crisis económica o política. Francisco Durand ha explicado que de los doce apóstoles principales, con Fujimori quedan solamente tres: Romero, Brescia y Benavides. Las empresas más grandes y fuertes volvieron a ser extranjeras, subordinando de diversas formas al capital nacional, mientras el Estado ha sido casi eliminado como actor económico. Hoy, los diez grupos económicos más importantes (Romero, Repsol, Sudameris, Buenaventura, Grupo México, Backus, Wong, Brescia y Graña y Montero) representan 15% del producto interno bruto y concentran 22% de la facturación nacional.

Les siguen Benavides, Hochschild, Rodríguez Banda (Gloria), Ikeda, Fierro, Ferreyros, Wiese, Rizo Patrón y otros. Muchos de los nuevos ricos provincianos emergentes están ligados a la narcoeconomía, a la cual han estado vinculados los gobiernos desde hace treinta años. Según el ranking, los nuevos burgueses son familias como: Añaños con el comercio de refrescos, Oviedo (Pomalca, Tumán), Huancaruna (café, azúcar), Acuña (Universidad César Vallejo), Aquilino Flores (Topitop, que ahora es comerciante de ropa China), por poner algunos ejemplos.

Lo fundamental es identificar la trama de relaciones que parte del poder empresarial y se proyecta al Estado. Las empresas multinacionales, que son un poder mundial (como Telefónica, Telmex, Ambev, SABMiller, Yanacocha, Antamina, Repsol YPF, Endesa, Saga Falabella o Ripley), van adquiriendo centralidad junto a los grupos de poder económico nativos. Estos últimos han desarrollado la capacidad de actuar a nivel continental o mundial, como Benavides de la Quintana, Romero, Brescia. Pero también hay grupos, varios de ellos emergentes, cuyas empresas líderes (Gloria, Ajegroup, Big Cola) poseen una mayor y creciente proyección internacional; es decir, tienen una base de acumulación más internacional. Las relaciones entre los distintos agentes son generalmente de competencia, aunque a veces los grupos y las multinacionales, o grupos de varios países latinoamericanos, se unen en *joint ventures* para desarrollar grandes proyectos y diversificar el riesgo.

De acuerdo con Renán Vega Cantor, que examina el caso colombiano, esta burguesía en la segunda mitad del siglo XX –lo mismo que en Perú– tiene una nueva forma de acumular ilegalmente capital. Esto explica en gran medida la pretendida estabilidad macroeconómica que se sustenta en la existencia de un gran cúmulo de capitales ilegales en la construcción de viviendas, turismo, hotelería, bancos, casas de cambio, industria, comercio, salud, ganadería, actividades deportivas, casinos, farándula, universidades y mucho más. Se configura un nuevo bloque de poder, en el cual sobresalen los grandes grupos económicos y el capital financiero, junto con los empresarios de la cocaína y de la mercantilización de migrantes, mujeres y niños, órganos, secuestros, extorsiones, incluyendo a las Fuerzas Armadas, a los partidos tradicionales y a las jerarquías eclesásticas.

Una premisa y resultado es la acumulación por desposesión que supone la expulsión violenta de los campesinos, indígenas y afrodescendientes de sus tierras, de sus riquezas hídricas y de la biodiversidad en curso de

mercantilización. Ha impulsado los cultivos permanentes de plantación, ha fomentado nuevas exportaciones primarias (palma aceitera, caucho, agrocombustibles, pesca, cultivos selectos, entre otros). Además, ha respaldado los megaproyectos como la IIRSA, los cuales favorecen al capital transnacional. Es el principal impulsor en el plano institucional de la flexibilización laboral, mediante la persecución violenta y sistemática de los sindicatos y de los trabajadores organizados, la imposición de regresivas “reformas laborales”, la eliminación de las pocas conquistas históricas de los trabajadores, la generalización de la precarización, el desempleo, el subempleo y la informalización. En pocas palabras, es la implementación a vasta escala del terror laboral. Se ha reglamentado la apertura incondicional al capital extranjero, claramente favorable a las multinacionales, muchas de las cuales han fomentado proyectos paramilitares con el objetivo de garantizar la buena marcha de los negocios para el capital transnacional y sus súbditos locales (Vega Cantor, 2012)

En Bolivia, igualmente, con cada cambio de gobierno hay cambalaches: unos salen de la plutocracia y entran otros. En el siglo XXI, se llama *pluriburguesía* a las nuevas elites económicas emergentes, que se han enriquecido con el gobierno “plurinacional” de Evo Morales, por estar relacionados con él partido en el gobierno, el MAS. La pluriburguesía reproduce una historia larga del Estado boliviano como impulsor y creador, bajo formas corruptas, de estas elites económicas. Son principalmente de origen indígena mestizo, aunque sectores criollos *jailones* continúan haciendo buenos negocios, como en periodos previos. Está conformada por funcionarios públicos, pero también empresarios, militantes del partido y familiares.

Dentro esta élite económica paraestatal se halla la burguesía chola, particularmente de origen aymara, dedicada al contrabando y al narcotráfico. También hay sectores criollos tradicionalmente dominantes, *jailones* blancos o “blaqueados”, hoy rearticulados en las estructuras de poder del proceso de cambio (Crespo, 2015). Jeffery Webber señala:

En el epicentro de la fórmula de gobernanza que sostiene a la administración del MAS hoy, hay una alianza entre el capital agro-industrial de las tierras bajas del este y el capital transnacional en los sectores mineros e hidrocarbúricos, de un lado, y la incipiente burguesía indígena de la minería cooperativa, el comercio, el contrabando y los narcóticos. Los grandes capitalistas operando en Bolivia entienden políticamente que viejas formas de ejercicio de la

dominación sobre la sociedad, mediante el racismo explícito y los partidos políticos conservadores, ya no es sostenible, y están dispuestos a compartir el poder con capitalistas indígenas en ascenso (Webber, 2015).

En estas ilustraciones andinas, podemos estimar la complejidad de la lumpenburguesía latinoamericana siempre en la línea que marca la ilegalidad, plural y diversa por sus actividades y origen étnico clasista.

En el caso de Brasil, María Pinassi sostiene que, al frente del gobierno federal, el PT condujo programas para impulsar la economía. Entre ellos destacan los programas de aceleración del crecimiento (PAC), los cuales amplían enormemente el poder del capital financiero, del agro-negocio, de la minería, del sector energético y de la construcción civil. Con el petismo se fortaleció el monocultivo, la producción de *commodities* –soja, caña de azúcar, pinos, naranja– y de bienes manufacturados para exportación –cortes animales, etanol, celulosa, resina, jugos–.

Se actualizó el viejo modelo agrícola basado en la gran unidad productiva y en el desmonte, racionalizado por medio de una larga utilización de tecnologías basadas en máquinas, en semillas transgénicas autoproducidas, en el consumo de insumos químicos y de veneno. Bajo el control de las grandes transnacionales del sector, el modelo hegemónico por el agro-negocio penetró y dominó el país. Se benefició del proceso de desmantelamiento de la mal afirmada industria nacional, de la reestructuración productiva, del desempleo estructural, del achicamiento de las entidades sindicales, de la incidencia generalizada del trabajo informal y precario, sobre todo en su modalidad análoga a la esclavitud, y de la súper explotación del trabajo infantil y femenino.

Las burguesías internas y externas, fuertemente perfeccionadas, se enriquecen locamente a la sombra del poder del Estado donde encuentran facilidades para avanzar sobre las tierras, bosques, manantiales, reservas minerales, es decir, sobre todos los recursos naturales y humanos, con voracidad y apetitos renovados (Pinassi, 2015).

Estas burguesías y sus Estados entran en colusiones para delinquir, construyen un crimen organizado que hoy esté en debate. En algunos casos, son procesados judicialmente.

Cuando comenzó la adopción de las políticas del Consenso de Washington, uno de sus principales efectos fue un súbito fortalecimiento del sector privado. Como resultado de las privatizaciones y de un proceso

de crecimiento comandado por grandes corporaciones privadas, el poder económico se concentró de manera extraordinaria. En muchos países, incluso, se habla de una nueva oligarquía, de ejecutivos todopoderosos, de los nuevos dueños del país y del reinado de las multinacionales. Actividades que siempre fueron públicas se privatizaron en manos de una lumpenburguesía transnacionalizada. Todo ello incrementó considerablemente la influencia corporativa privada sobre los medios de comunicación, la sociedad civil, el Estado y los partidos. Como hemos visto, sin embargo, esto ha tenido expresiones y resultados distintos según los países y los tiempos.

Acaso haga falta crear otro término. Quizá *lumpenburguesía* no sea el más adecuado para el conjunto de la burguesía, pero sí para un sector importante. Entendemos que se refiere a un sector de clase social moldeable y dócil con intereses propios y al mismo tiempo al servicio de los intereses y estrategias del imperialismo, convencida de las virtudes de las políticas neoliberales, carente de conciencia nacional y susceptible de servir de punto de apoyo económico y político a la burguesía de los países centrales. Es una clase improductiva y regresiva en términos de acumulación. A fines del siglo XX, la globalización y el neoliberalismo fueron las doctrinas de esta dependencia, para mantener sus privilegios monopólicos en algunos sectores, incluyendo la narcoeconomía y otras formas ilícitas de economía criminal, para conseguir tasas de acumulación extraordinarias.

El sistema político y los partidos mismos están marcados y sujetos a lo que establece esta renovada lumpenburguesía, que mantiene una estructura de control en la política. En regiones y municipios son los dueños del poder político, de las leyes, de la “opinión pública” y la verdad mediática. Los partidos están a su servicio, desde las derechas hasta sectores de la izquierda parlamentaria. Con el neoliberalismo, fue mayor la avidez por el control político directo de estos empresarios, así como por el desplazamiento del Estado de algunas funciones. También aumentó su hegemonía a través de sus organismos cúpulas y partidos, los cuales ejercen una considerable influencia tanto económica como política. Asimismo, fortalecieron su carácter monopólico y oligopólico y su vinculación intensa con el capital financiero e impusieron la concentración de la propiedad y la gerencia en los miembros de los núcleos familiares en forma hereditaria.

Estos empresarios nativos y transnacionales utilizan a pragmáticos intelectuales conservadores o populistas de la clase media, con potencialidades y capacidades técnicas o políticas. En ocasiones prefieren la captura

del poder por los mismos de su clase o articulan la concentración de los dos poderes: el económico, en manos de grupos de poder y multinacionales, y el político en sus gestores (el Congreso, el Ejecutivo, el Judicial y la Presidencia), sin importar su origen clasista o ideológico. El sector privado se ha singularizado por dirigir siempre la economía, aun en los mejores tiempos del estatismo. Hoy, la prédica es eminentemente antiestatista, pero siguen dirigiendo los Estados.

Se evidencia en la presencia empresarial o de técnicos ligados a los empresarios en puestos claves, quienes toman decisiones que fortalecen a las corporaciones y les generan variadas y jugosas rentas mediante las privatizaciones y exoneraciones tributarias, endeudamiento y subsidios, protección de la propiedad privada y precarización laboral. Cuando administran directamente, se resuelve el problema de las elites económicas de competir por el acceso y la influencia sobre el Estado. La peculiaridad de estas burguesías es que han sido en gran medida un obstáculo al capitalismo industrial. Buena parte del endeudamiento externo de los países se debe a las políticas que se implementaron para favorecer el simple saqueo, el extractivismo y el rentismo.

Su poco o casi nulo sentido emprendedor y modernizante, como en el caso de la oligarquía terrateniente agraria, la convierten en una rémora económica en extremo lucrativa, con bajos niveles de productividad y altísimos niveles de explotación del trabajo. El resto de las facciones burguesas –salvo sus sectores transnacionalizados– se distingue por su escasa vocación inversionista y su constante interés por incrementar la ganancia, gracias a la perversa articulación de la terciarización, la precarización laboral y los bajos salarios. A lo largo del tiempo, se han experimentado continuos procesos de desnacionalización. En nuestros días, se encuentran estrechamente vinculadas a los intereses foráneos; tanto, que las tenues contradicciones entre burguesías nativas y extranjeras son prácticamente imperceptibles.

Otro límite ocurre en el mercado de trabajo. Existe una tendencia a la baja en la inversión privada, así como fuertes oscilaciones de ésta hacia las actividades improductivas pero necesarias para el capital. Utilizan a la población sobrante (aunque contribuya con la intermediación) y por tanto trabajan para el capital. Sus políticas acarrearán la pérdida de fuentes de empleo industrial a favor de la construcción. Asimismo, en su afán por incrementar sus tasas de ganancia, inciden de manera perversa en dos sen-

tidos: por un lado, determinan la elevación de los costos de los bienes de consumo y son los principales responsables de la economía inflacionaria especulativa; por el otro, golpean a la población con despidos, cierre de empresas productivas y bajos salarios.

La lumpenburguesía ha creado su propia estructura de control sindical y gestión, sustituyendo progresivamente a la vieja estructura corporativa por otra neocorporativa apoyada en el lumpenproletariado que se apoderó del pensamiento obrero y de la visión contestataria. En algunos países progresistas, asume el control del espacio de la “lucha contra el neoliberalismo”; promueve leyes a favor de los trabajadores siempre que no afecte la estructura monopólica de las áreas estratégicas que controla y donde ya no se puede hablar de libre sindicalización.

Este mismo esquema se traslada a la ciencia, la cultura, los medios, las artes, donde se mantiene el envilecimiento. Los monopolios nativos son cada vez más transnacionalizados o compartidos, pues resulta una condición para sobrevivir en cualquier lugar del mundo. De lo contrario, sólo le espera la desaparición del escenario económico. El gran fracaso del capitalismo colonial consistió en darle un papel protagónico a ese sector privado. El Estado apenas consideró la posibilidad de imponer a estos empresarios una adaptación a las metas de los planes de desarrollo nacional. En definitiva, han actuado de acuerdo con sus intereses, absolutamente divorciados de los potenciales intereses nacionales.

Crean las bases de nuevas crisis, pues las estructuras son frágiles, con mercados internos de mercancías y capitales, que así como crecen en ciertas coyunturas en otras se esfuman. Las políticas económicas tienen un rasgo desnacionalizante y un papel beligerante en la economía por parte del sector privado e impiden la aplicación de medidas de saneamiento macroeconómico. Por ejemplo, los equilibrios fiscales son inlogrables debido a las trabas que imponen los grupos económicos frente a los impuestos progresivos. Por lo tanto, el Estado se ve obligado a aplicar impuestos regresivos.

Igualmente el Estado debe inhibirse de imponer políticas correctivas, como la adquisición de bonos de la deuda en condiciones ventajosas para la nación. Esto hace que la mayor parte de las orientaciones económicas se implementen en función de los intereses del sector privado, en perjuicio de las mayorías sociales y de los intereses nacionales. Esto los lleva al límite de perder sus gobiernos por otros que después serán reciclados.

El comportamiento de esta burguesía y lumpenburguesía nativa obligará a los países latinoamericanos a volcarse en la permanente búsqueda de otros agentes dinamizadores y modernizantes. El capital privado extranjero sigue viéndose como la panacea que sacará del estancamiento y ofrecerá apoyo a la balanza de pagos por concepto de entrada de divisas, el logro de productos a precios competitivos a nivel internacional, la posibilidad de desarrollo tecnológico, la generación masiva de empleos y una eficiencia generalizada en la economía. Esto tampoco ocurre, pues así como llegan cuando la economía mejora, se van cuando se deteriora y agota. Lo más grave, es que generan más corrupción, pues buscan ventajas y utilizan cualquier método para conseguir mayores ganancias, lo cual afecta negativamente la política fiscal y acrecienta el endeudamiento.

Las burguesías nativas han transitado un largo periodo histórico con importantes transformaciones en su interior pero con muy pocas en torno a su papel como agentes de desarrollo y dinamismo económico. Su evolución está marcada por etapas bien diferenciadas. En la segunda mitad del siglo pasado, se verificaron cambios. Durante la década de los sesenta, se caracterizó por ser una clase protegida, subsidiada y con fuertes vínculos con el Estado. En los setenta, se transformó en un sector fuertemente monopolizado, volcado a las importaciones y extremadamente lucrativo; esto le permitió acumular enormes fortunas.

En los ochenta se neoliberalizaron; optaron por el Estado mínimo y aspiraron a ocupar los lugares que éste les dejó. Intentaron legitimar un modelo burocrático-privatista por la vía gremial y política con un apéndice populista-clientelar. En los noventa creció con la incorporación de una burguesía plebeya, de narcotraficantes y de los nuevos políticos, generalmente corruptos que compiten más abiertamente por el poder político. No obstante, seguirán presentando las trabas estructurales de nacimiento, serán más parasitarios que dinámicos, monopolísticos y concentradores y su aporte a la generación de empleos, a la diversificación de la economía y en general al desarrollo, será irrelevante.

Es una tensión entre extractivismo-industrialización, crecimiento y estancamiento que está en pleno curso y en donde todavía no hay una definición clara. En dicha tensión, la opción más autonomista y soberana apunta para un camino más largo y difícil que el camino “natural” de los mercados. Esto supone la existencia de una coalición de poder con la capacidad de enfrentar y vencer la inmensa resistencia liberal y terrateniente

de amplios sectores de las elites políticas, empresariales e intelectuales brasileñas. La elevación del nivel de conflictividad social, con manifestaciones masivas, y la reaparición de huelgas parecen apuntar al inicio de un nuevo ciclo de luchas de los movimientos sociales. Las relaciones capital-trabajo en el Brasil de las últimas décadas no se han modificado; al contrario, sectores de trabajadores perdieron mucho de lo conseguido en grandes luchas.¹⁹ Es decir, el alto crecimiento de la clase media no pasó de ser un mito (Monteiro, 2013).

La diplomacia brasileña también ha servido para la expansión de esta burguesía. Ha sido protagonista en diversos momentos políticos internacionales de primer orden, como en el Grupo de los 69 en la Ronda de Tokio, o al coordinar la cuestionada fuerza de la ONU en Haití. Sin embargo, su mayor despliegue en política exterior es la campaña para obtener un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU. Brasil legitima su discurso como postulante a este organismo, formado por las principales potencias del planeta, con el argumento de que representará los intereses de toda América Latina en materia de seguridad. Esta afirmación ha despertado distintas inquietudes en la región, ya que no se ha contado con los países del entorno.

Según el politólogo paulista Armando de Moraes, el liderazgo brasileño en Unasur se ha visto en diversos momentos de máxima tensión regional. Señala como ejemplos significativos la mediación brasileña en la crisis entre Colombia, Venezuela y Ecuador, a raíz de los bombardeos colombianos en Angostura, en 2008, o a raíz del acuerdo entre Colombia y Estados Unidos para el libre acceso de tropas estadounidenses a bases militares en territorio colombiano, en 2009. La intervención del entonces presidente Lula da Silva propició la creación del Consejo de Seguridad Sudamericano, algo que ha permitido desde entonces coordinar las políticas de seguridad entre los países de la región. Con esta propuesta, Brasil definió de forma clara su voluntad de establecer un régimen de seguridad regional, en perjuicio de la Organización de Estados Americanos —donde Estados Unidos juega un papel fundamental—, dejando fuera de los asuntos de seguridad y defensa regionales a Washington.

¹⁹ Sin embargo, en general el salario mínimo es uno de los más altos de América Latina y algunos sectores, como las trabajadoras domésticas, ganaron en salarios y derechos.

José Mujica señaló que Brasil mantiene “una actitud imperialista”. Con respecto a los foros internacionales de comercio, las delegaciones brasileñas han desarrollado también un papel importante. Ha asumido unilateralmente el papel de vocero regional sin haber contado con el consenso del resto de los países vecinos. Para De Moraes, “la Unasur resulta útil a Brasil siempre y cuando este organismo esté acorde con sus objetivos, pero al mismo tiempo los diplomáticos de Itamaraty, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, se cuidan de negociar su política comercial con los restantes socios, lo cual obstaculiza cualquier política como bloque regional” (De Moraes, 2014).

Según el consultor económico brasileño Alberto de Souza, el aumento de las relaciones comerciales entre países adherentes del Mercosur —creado en 1991— no ha sido uniforme. Señala que si bien es cierto que ha aumentado considerablemente el intercambio comercial en la región, las asimetrías de los países más pequeños respecto a los dos gigantes suramericanos, Brasil y Argentina, han generado notables diferencias productivas y negociadoras en la región. Ello ha permitido que estos dos países acaparen en su conjunto más de 95% de las importaciones y exportaciones realizadas por el Mercosur desde su creación.

Fruto de dichas desigualdades, Brasil, principalmente, y Argentina, en segundo lugar, proveen a los restantes miembros de la unión aduanera los bienes con mayor grado de industrialización. De ello obtienen grandes ventajas comparativas con respecto a sus socios menores y a otros vecinos como Bolivia o Ecuador. Se presentaron casos de chantaje (los latifundistas brasileños amenazaron con la expropiación y con cortar créditos de BNDES) y expulsión (por represa San Francisco, y antecedentes por concesión petrolera en Yasuni).

Según De Souza, ello sucede mientras continúa creciendo la importancia de las ventas brasileñas en las compras totales de sus socios, y la participación del resto de miembros en las importaciones realizadas por Brasil se va reduciendo considerablemente. Argentina, que se disputaba hace unos años el liderazgo del Cono Sur con Brasil, ha visto cómo en los últimos tiempos importantes sectores de su economía han sido absorbidos por grandes empresas brasileñas. Brasil ha mantenido, desde la fundación del Mercosur, una posición de liderazgo; ha incrementado los niveles de dependencia hacia su economía por parte de países como Ar-

gentina, Uruguay y Paraguay. Venezuela es el último país en incorporarse al Mercosur (Decio Machado, 2014).

Recordemos que en un primer momento, las empresas brasileñas se internacionalizaron con la venta de materias primas que abundaban en el país. Ejemplo de este fenómeno es la firma Vale. Desde sus inicios, se internacionalizó debido a que su producción cubría la demanda externa de la Segunda Guerra Mundial. Por otra parte, algunas empresas se internacionalizaron en búsqueda de recursos naturales. Tal es el caso de Petrobras, que obtuvo del exterior el petróleo que no encontraba Brasil, hasta que lo descubrió dentro del país en abundancia (Dalla, Gelinski y Wichinevsky, 2014).

En un segundo momento, hacia 1980 y 1990, un grupo de empresas se internacionalizó debido a la crisis económica que sufría Brasil. Entre éstas, destacan las contratistas, las cuales:

Durante el periodo del milagro brasileño desarrollaron la capacidad de atender una demanda procedente de un crecimiento del PBI de 7% anual durante un largo periodo. Para no perder el know-how desarrollado, no desmontar la estructura y no despedir la mano de obra calificada, tales grupos con el apoyo estatal se orientaron a la internacionalización. Se trata de Odebrecht, Camargo Corrêa, Andrade Gutiérrez, además de otros grupos, como la constructora OAS y Queiroz Galvão (Dalla, Gelinski y Wichinevsky, 2014).

Con el inicio del milenio, y el crecimiento del mercado interno, algunas empresas se prepararon para internacionalizarse o fortalecer su papel en el exterior, como Gerdau, Vale y Petrobras. Mientras tanto, algunas empresas optaron por el apoyo oficial del Banco Nacional de Desarrollo de Brasil para su crecimiento. Otras se fusionaron o hicieron adquisiciones para constituir bloques con fuerza internacional. Tal es el caso de Brahma y Antártica, que se fusionaron como Ambev/Imbev, o de Perdigão y Sadia, que se fusionaron en BRF - Brasil Foods (Dalla, Gelinski y Wichinevsky, 2014).

Particularmente entre los años 2003 y 2010, durante el gobierno de Lula, se cimentó la formación de conglomerados con actuación al exterior. Esta tendencia implicó el apoyo de BNDES para el crecimiento de un grupo selecto de firmas. Sin embargo, también generó polémica por destinar recursos públicos a empresas particulares, privilegiando a ciertos grupos (Dalla, Gelinski y Wichinevsky, 2014).

Las principales empresas brasileñas son: JBS, Constructora Norberto Odebrecht, Gerdau, Coteminas, Ibope, Vale, Sabo, AmBev, Metalfrío, Artecóla (Artecóla, MVC y Arteflex), Marfrig, Global food, Seara, Aerolíneas GOL, Camargo Correa, WEG, Itaútec, Coimex, Trading, Embraer, Marcopolo, Mahle Metal Leve, DHB, Grupo Brasil, Tupy, Aerolíneas TAM, All American, Petrobras, Perdigão, Moura, Aracruz, Banco Itaú, CSN, Votorantim, Agrale, Natura, Suzano, Sadia, FFS Filmes (Portela, 2015). Entre los productos más sobresalientes que ofrecen estas empresas se encuentran: materia prima mineral, petróleo, obras de infraestructura, carrocerías de ómnibus, equipamiento para camiones, autopartes, material de construcción, papel y celulosa, alimentos y bebidas (Dalla, Gelinski y Wichinevsky, 2014).

Según Dalla, Gelinski y Wichinevsky, a pesar del éxito de estas transnacionales y de que las empresas brasileñas se aproximan más a las de China e India que las de Rusia y México, aún tienen desafíos por sortear. Por su parte, Decio Machado indica que la diplomacia brasileña ha presionado notablemente en favor de sus transnacionales.

Durante la Asamblea Constituyente en Bolivia, cuando se debatía la reforma agraria en el país, Brasil advirtió que cortaría préstamos de BNDES para la adquisición de tractores si pasara algo con las propiedades de latifundistas brasileños en el departamento de Santa Cruz. Otro ejemplo: cuando el movimiento popular en Ecuador exigió la salida de Petrobras de un bloque petrolero concesionado irregularmente en el interior del Parque Yasuní, Brasil realizó presiones dejando claro que si no se mantenía la concesión se acababan los préstamos BNDES (2014).

Raúl Zibechi cuestiona las prácticas de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana, pues su carácter antipopular debe enfrentarse. La región no debe seguir dejándose arrastrar por los mercados de *commodities* y el capital financiero. El autor menciona que a pesar del discurso que esta iniciativa difunde, la integración no avanza. Agrega que la construcción de infraestructura regional también forma parte del proceso de internacionalización de las multinacionales brasileñas. Básicamente, las grandes constructoras, las cuales, apoyadas por los préstamos del BNDES, crecieron 3000%.

Según Zibechi, “más de 70% del financiamiento de las obras es público y una parte importante corresponde al BNDES, aunque la crisis en Brasil lo está disminuyendo. Casi 90% de los proyectos son del área de transporte, la mitad en carreteras, lo cual se lleva la mitad de la inversión. Otro tercio de la inversión total está destinada a energía, en particular usinas hidroeléctricas, que son las obras más criticadas por los pueblos” (2015).

En los últimos años, además de los ambientales y sociales, han ido apareciendo otros focos de interés y crítica, se ha concentrado la atención en la falta de estrategias de largo plazo por parte de la IIRSA. Además, se ha hecho notable la expansión de su cartera de proyectos en 72% y el aumento cuatro veces mayor de la inversión que se estimaba. Coincidiendo con Zibechi, “hay que desmitificar al Partido de los Trabajadores (PT) de Lula, que desde el gobierno neutralizó la ALBA, reprodujo el patrón hegemónico en el mundo, no contradice a los Estados Unidos y promueve un desarrollo regional basado en sus empresas” (2015).

El Laboratorio de Estudio de Movimiento Sociales y Territorialidades de la Universidad Federal Fluminense encontró que “en los ejes de la IIRSA existen 1347 poblaciones territorializadas: 664 comunidades indígenas, 247 comunidades campesinas, 146 de afrodescendientes, 139 comunidades de poblaciones tradicionales (pescadores, mariscadores, junqueros), 60 organizaciones sociales (sin techo, desempleados) y 59 organizaciones ambientales” (Zibechi, 2015).

Estas comunidades no consideran que la IIRSA tome en cuenta sus intereses. Por el contrario, les parece que representa una forma de neocolonización. En efecto, este nuevo colonialismo implica una agresión para las comunidades de la región, en beneficio de “un bloque de poder financiero e industrial en el cual el empresariado brasileño/paulista ocupa un lugar central” (Zibechi, 2015).

De este modo, las empresas que cuentan con la protección de la iniciativa pueden actuar, aun sin obedecer los lineamientos transnacionales. Ejemplo de ello fue la constructora brasileña Odebrecht, la cual fue expulsada de Ecuador en 2007 al actuar ilícita y deficientemente. Ante esto, Brasil bloqueó la cooperación internacional con Ecuador, cuyo presidente aseguraba instaurar límites. Sin embargo, en la actualidad, la empresa brasileña ejerce cuatro contratos con ese país, multiplicando sus propios beneficios y sin rendir cuentas (Machado, 2014).

Casi el total de infraestructuras que se consideran en el IIRSA han estado a cargo de multinacionales brasileñas, aunque organizaciones indígenas y ambientalistas de la región cuestionan tanto estas obras como las represas hidroeléctricas. Por su parte, el BNDES financia estos trabajos, con la finalidad de privilegiar a las empresas brasileñas, ya que el país que recibe el préstamo queda condicionado a contratarlas (Machado, 2014).

En Brasil se concentran las decisiones que más pesarán en el futuro de la integración o sumisión sudamericana. Tiene aún la capacidad y la posibilidad de construir un camino totalmente nuevo dentro de América del Sur, con base en la desconexión, similar al de la propia economía norteamericana, con el mismo peligro de transformarse en un caso más de imperialismo regional. O puede, combinando industrias de alto valor agregado y nuevas tecnologías, con la producción de alimentos y *commodities* de alta productividad, volverse autosuficiente desde el punto de vista energético y asumir el papel de locomotora y ejemplo de la economía suramericana, ejerciendo un liderazgo solidario dentro del continente.

Brasil tiene un papel preponderante en IIRSA, que formalmente es una iniciativa para la creación de infraestructura física en transporte, energía y comunicación; un proyecto de interconexión entre los países sudamericanos y el resto del mundo dirigido por el empresariado mundial, para que las transnacionales puedan trasladar procesos de producción a América del Sur. La IIRSA es un instrumento extractivista; se dirige hacia las fuentes de materias primas y de ahí a la exportación extracontinental. Su principal actividad se ha reducido al desarrollo de proyectos de infraestructura neocolonial.

Los analistas críticos han cuestionado sus objetivos; se centran en el déficit democrático, en las decisiones sobre el desarrollo y en la ejecución de los proyectos. Aún no hablaban de la corrupción y sólo percibían la no participación social. Todo se manejaba en las alturas con algunos operadores, para ocultar los enormes malos manejos. Las instituciones con una estructura tecnocrática impiden que los políticos influyan en los proyectos, o que éstos se discutan dentro los parlamentos nacionales. Sólo reciben atención de la política interna cuando los impactos causan protestas o problemas ambientales graves. Esto se conecta a otra crítica acerca de la baja prioridad de la sostenibilidad ambiental y social de los proyectos y la deficiente estructura de su financiación.

No sólo era el sometimiento del Estado el destino de la inversión a las empresas de Brasil, las implicancias iban más allá. De ahí que, una crítica más es acerca de la subordinación de los países sudamericanos a Brasil, quien transforma los recursos naturales que importa de otros países sudamericanos en bienes de consumo y después los reexporta en la región y al resto del mundo. Contribuye a la continuación de un sistema económico mundial donde la influencia del capital cada vez más supera y subordina la influencia de los Estados en las relaciones internacionales. La introducción de las políticas neoliberales en Latinoamérica ha reducido las barreras al comercio internacional. No obstante, de acuerdo con de Geus (2013), el bajo nivel de integración física en Sudamérica complica la producción en la región porque hace más costoso producir para el mercado mundial. Lo que no ve de Geus son las nuevas formas de territorialidades, los regionalismos colonialistas sutiles como los acuerdos de minería trasfronteriza, los mercados energéticos trasfronterizos y la regiones descentralizadas que se conciben en el marco de la IIRSA, es decir, desprendidas de sus soberanías nacionales y dando prioridad a sus características exportadoras y a los mercados internacionales.

Pero además, Brasil es un referente para los gobiernos y pueblos latinoamericanos y por eso es más neurálgico. Al perder protagonismo como alternativa, es preocupante que al mismo tiempo una parte de la última generación de movimientos sociales haya perdido su autonomía política e ideológica en este nuevo escenario. Tanto en Ecuador, Perú y Bolivia, como en Brasil (entre otros países), las organizaciones de trabajadores se han quedado en la apuesta por demandas mínimas: redistribución, reducción de secuelas, menor agresividad social y estatal, despojo más suave. Pacífica o violentamente buscan atajos ante el cúmulo de dificultades para sobrevivir en sus territorios; sin embargo, los antiguos referentes críticos se convierten en administradores estatales, mediadores de los grandes poderes, sólo susceptibles a los problemas de la pobreza y el supuesto crecimiento de las clases medias. En el mejor de los escenarios, buscan amortiguar los efectos del modelo, pero en todos los casos lo hacen sin cuestionarlo y reprimiendo las resistencias y al pensamiento crítico, retrocediendo en lo emancipatorio, porque ya se integraron al sistema para reproducirlo y gestionarlo.

Al interior del país también se ampliaba el extractivismo legitimado por las políticas sociales. Brasil, uno de los exponentes extractivistas, produce

soja, maíz, caña (para producir azúcar y agrocombustibles), eucalipto y carne. Esto se realiza en monocultivos que representan 85% de la tierra cultivada. Las empresas transnacionales son propietarias de aproximadamente 30 millones de hectáreas. Generan crecimiento basado en la apropiación de recursos naturales y la producción de *commodities*. Las consecuencias de esta explotación exacerbada son vulnerabilidad y desigualdad social. La gente dedicada al campo pierde sus vínculos con el mercado de tierra; asimismo vemos la destrucción y el encarecimiento de la mano de obra agraria y la disminución de alimento para la población brasileña (Fernández Ortiz, 2014).

“Bolsa Família”, el mayor programa de transferencia de renta del mundo, el cual beneficia a 50 millones de brasileños, representa un desembolso anual de 10 000 millones de dólares. Para lograr esta distribución del ingreso, la dirección del Partido de los Trabajadores (PT) consideró que era necesario aliarse con una parte de la oligarquía. Esto creó un vacío de representación y diez años de parálisis de la resistencia. El efecto electoral se expresa en la base de la pirámide, con la expansión del crédito para el consumo y el empleo formal. Con estas experiencias vemos que no existe originalidad en la economía política y la política económica de Bolivia y Ecuador.

Brasil, entre otros motivos, pertenece a los BRICS porque la agricultura y los sectores asociados (como la silvicultura, explotación forestal y pesca) contabilizaron 6.1% del producto interno bruto, un desempeño que pone la agroindustria en una posición destacada en la balanza comercial, a pesar de las barreras y las políticas de subsidios adoptadas por los países de capitalismo avanzado. Brasil es el tercer exportador más importante de productos agrícolas del mundo, sólo por detrás de Estados Unidos y la Unión Europea. En aeronáutica, tienen el ARJ-135, jet desarrollado por la empresa brasileña Embraer, la más grande en su tipo después de Airbus y Boeing.

La industria automovilística del acero, la petroquímica de las computadoras, la aeronáutica y los bienes de consumo duraderos contabilizan 30.8% del PIB. El país es responsable de tres quintos de la producción industrial de la economía sudamericana y participa en diversos bloques económicos, como Mercosur, el G-20 y el Grupo de Cairns. Brasil comercializa regularmente con más de una centena de países; 74% de los bienes exportados son manufacturas o semimanufacturas. Sus mayores

socios comerciales son la Unión Europea (26%), Mercosur y América Latina (25%), Asia (17%) y Estados Unidos (15%). Posee cierto grado de sofisticación tecnológica, ya que en el país se desarrollan máquinas que van desde submarinos hasta aeronaves.

Por lo demás, está presente en la carrera espacial con un Centro de Lanzamiento de Vehículos Ligeros, y es el único país del hemisferio sur que integra un equipo de construcción en la Estación Espacial Internacional (EEI). También es pionero en la búsqueda de petróleo en aguas profundas, en donde se encuentra 73 % de sus reservas. Además, fue la primera economía capitalista en reunir en su territorio a las diez mayores empresas ensambladoras de automóviles. Más tarde se le unirá México.

El turismo es una actividad económica importante en varias regiones del país. Con cinco millones de visitantes extranjeros en 2010, Brasil es uno de los principales destinos turísticos internacionales en América del Sur, y ocupa el tercer lugar en América Latina en términos de flujo de turistas internacionales. Sin embargo, Brasil –como el resto de países de América Latina– se mantiene en una lógica extractivista y rentista. El pago de la deuda pública consume más de 42.04% de los presupuestos federales. En la previsión para el año de 2014, esto implicaba casi la mitad de lo invertido. Su destino principal es la caja de los compradores de títulos públicos, en su mayoría bancos o fondos de inversión, incluyéndose los fondos de pensión.

Sólo en la ejecución presupuestaria de 2014, según la Auditoría Ciudadana de la Deuda, el país gastó cerca de 65% de los gastos federales. Otro tema fundamental es la Desvinculación de las Recetas de la Unión (DRU), ley que regularmente retira recursos de la sanidad, salud, educación e infraestructura para “contingencias”. Buena parte de las veces, ésta ocurre a favor de los financistas, quienes vacían la capacidad de inversión del país, que no pasa de un irrisorio 18% al año, contra una media de 25% de los demás miembros de los BRICS. Un sector importante de la burguesía es rentista, vive de una renta fija, de dividendos, de aplicaciones y no del trabajo directo, sino explotando la fuerza de trabajo de los demás. En Brasil, el capital financiero opera por dentro del presupuesto del Estado, tasando el valor de la riqueza y consumiendo un volumen significativo de impuestos. Nunca antes en la historia del país los bancos, las constructoras, el agro-negocio, el latifundio y el comercio ganaron tanto (López, Manuel, 2015; Nelson Barbosa, 2013).

Armando Boito sostiene una hipótesis interesante, aunque discutible, acerca de un frente político neodesarrollista que se enfrenta al oligárquico. Existen dudas acerca de si ese frente es antineoliberal y si se enfrenta a la oligarquía brasileña. Estos gobiernos (Brasil, Bolivia, Argentina, Perú y otros) se ajustan más a la propuesta del PNUD y el Banco Mundial respecto a una alianza entre el Estado, los empresarios y la sociedad civil. No son sino particulares modalidades del neoliberalismo. Dice Boito:

Algumas das características importantes da atual frente política: a) essa frente é dirigida pela grandeburguesia interna brasileira [...] b) tal frente envolve classes trabalhadoras que se encontram excluídas do bloco no poder –baixa classe média, operariado, campesinato e trabalhadores da massa marginal [...] c) a frente entretém uma relação de tipo populista com essa massa marginal; d) a frente se constituiu no principal recurso político do qual se valeu a grande burguesia interna para ascender politicamente no interior do bloco no poder e e) ela enfrenta, no processo político nacional, aquilo que poderíamos denominar o campo neoliberal ortodoxo, campo esse que representa – essa é a nossa hipótese de trabalho – o grande capital financeiro internacional, a fração burguesa brasileira perfeitamente integrada e subordinada a esse capital, setores dos grandes proprietários de terra e a alta classe média, principalmente aquela alocada no setor privado mas, também, no setor público (Boito, 2012).

Necesitaremos esclarecer esta cuestión, tomando en cuenta las reflexiones de Wilson Cano respecto a que las inversiones industriales son básicamente en bienes primarios y productos semi manufacturados (Cano-Gonçalves, 2010). El centralismo es otro de los males. El gobierno federal de Brasil concentra casi sesenta y seis por ciento del impositivo logrado por la recaudación, mientras los estados y municipios reciben poco. Los 5564 municipios viven de limosnas.

El actual contexto es un periodo turbulento marcado por una nueva ofensiva norteamericana en medio del caos sistémico, el envilecimiento civilizatorio, la militarización del planeta y los conflictos armados en gran escala. Los de abajo pierden perspectivas emancipatorias y abandonan la construcción y reconstrucción permanentes del mundo nuevo donde les toca enfrentar el mayor desafío imaginable: defender la vida ante el proyecto de muerte de los de arriba. Las simpatías que nos despiertan las derrotas del imperio, por más pequeñas que sean, oscurecen los horrores que

también suponen las potencias emergentes agrupadas en el BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica). En estas, como en países progresistas de Latinoamérica, se evita examinar y debatir la corrupción, represión y matanzas de trabajadores e indígenas o negros, a los que ha condenado o ha dado escasa relevancia.

Esto enseña la hechura étnico-clasista de las nuevas hegemonías; recobra importancia la geopolítica de arriba y de abajo, transformando la geopolítica, una disciplina creada por los estados imperialistas para dominar las periferias, en un recurso de los movimientos antisistémicos. Latinoamérica fue construida sobre el genocidio (pueblos originarios) y la esclavitud. Las dos dominaciones se mezclan, ganando importancia en tugurios y periferias.

Las clases dominantes y burocracias de China y Rusia, como las de Brasil, India o Irán, cada vez menos creen en la posibilidad de desarrollar sus capitalismo nacionales. Otras economías más pequeñas lo siguen, y lo hacen para no hundirse en el desastre al que lo quiere condenar Occidente. El carácter global, profundamente interrelacionado del sistema del cual forman parte condiciona los procesos. Hoy, parecería que todos los países sólo confían en el capital extranjero.

De allí la importancia de revisar el actual momento histórico que viven los BRICS en América Latina desde una perspectiva que articule la creación de nuevas zonas de influencia en Ecuador, Perú, Bolivia y otros países, y las resistencias sociales que provocan, considerando una articulación de perspectivas que relacionen lo macro lo meso y lo micro. Necesitamos ver desde abajo, el otro lado. ¿Cómo se confrontan estas dos concepciones y qué hacen los gobiernos y los movimientos sociales al respecto en Ecuador, Perú y Bolivia? La relevancia del tema y la inexistencia de investigaciones hacen urgente descubrir las potenciales nuevas contradicciones y también las posibilidades de alternativas. Son dos los aspectos los que dan relevancia: desde arriba y desde abajo. El primero es la necesidad del estudio y la reflexión sistemática respecto a la formulación de una política exterior brasileña integracionista y de avanzada para los países y pueblos de Latinoamérica, viendo el caso del Perú.

¿Por qué estudiar las relaciones entre pueblos y estados? Porque en los nuevos desequilibrios y los cambios que se están produciendo se conocen los escenarios donde actúan las resistencias y de modo muy particular las tendencias de fondo que mueven el mundo en un periodo de especial turbulencia. Hemos visto que el mundo atraviesa un periodo de cambios

profundos y los modos de dominación se transforman con cierta rapidez, reconstruyendo viejas estructuras. Seguir el rastro de dichas mutaciones es sumamente importante para la resistencia.

Epistemológicamente partimos de reconocer la importancia de analizar los conflictos, las contradicciones, identificando las posibles nuevas dinámicas articuladas a las transformaciones, en una nueva realidad: la continuación de la guerra contra los pueblos a los cuales se pretende despojar, expropiar y explotar en las zonas de influencia brasileña. En este caso, se trata de iluminar sobre la novedad que supone, para los pueblos sudamericanos en particular, la presencia de un vecino con que oscila entre convertirse en alternativa y profundizar cambios sistémicos, abandonando la vocación imperial en las fronteras de su territorio.

El ascenso de Brasil como potencia regional y global iba de la mano con el nacimiento de un nuevo bloque de poder que estaba reconfigurando el carácter del conflicto en ese país, pero también en la región. Pero hay que ir más allá del debate geopolítico centrado en la dicotomía unipolaridad-multipolaridad. Debemos centrarnos en las estrategias de poder coloniales, pues aquella no es una representación totalmente adecuada para develar la complejidad del mundo.

La emergencia de la potencia de Brasil, como uno de los BRICS, en su momento significó una ampliación de la cooperación antagónica. Esto no sólo mejoró los términos de intercambio, sino que estaba modificando la estructura de poder mundial. La presencia de los BRICS reestructuraba el poder global. Empero, no salieron de los horizontes del capitalismo; más bien lo reforzaban modificando su composición interna. Esto proviene desde el gobierno de Getúlio Vargas, quien, empujado por la lucha de clases a resolver el problema de las demandas de una manera conservadora, tomó medidas nacional-populares, democráticas, sociales y defensoras del derecho del trabajo; empero, perpetuando un sentido conservador.

Sus medidas terminaron manteniendo los latifundios e impulsaron a la burguesía industrial a realizar su proyección de revolución tecnológica social. Hay ejes que se preservan, mejorándolos, haciéndolos, incluso, más irradianes y efectivos. Uno de estos ejes, quizás crucial, es el de la geopolítica regional. Apunta José Luis Fiori:

não existe meio-termo: os países inteiramente dependentes da exportação de produtos primários ou de recursos naturais – mesmo no caso do petróleo – serão

sempre países periféricos, incapazes de comandar sua própria política econômica e incapazes de comandar sua participação soberana na economia mundial (Fiori, 2013).

Del pragmatismo burgués pasamos al pragmatismo obrero en los gobernantes del PT, quienes expresan la continuidad de una forma de gubernamentalidad: la de un corporativismo pragmático, que institucionaliza los pactos en un Estado garante de las revoluciones industrial y tecnológica, atrapadas en modelos extractivistas dominantes, en el circuito vicioso de la dependencia. Lo que pasa en Brasil no es distinto de lo que pasa en el resto de América Latina y el Caribe, sobre todo en lo que respecta a los llamados gobiernos progresistas. Es una integración conservadora, autoritaria y expansiva, que se opone a la integración emancipadora de los pueblos. Una integración, si se quiere reaccionaria, que busca llevar a cabo la concentración y centralización del capital, a escala regional. Bolivia es una miniatura caricaturesca de lo que ocurre en Brasil.

La relación histórica imperialismo-colonialismo parecería más cierta que la de subimperialismo respecto a otras representaciones lógicas y geométricas planas, que no logran captar en un contexto imperial la densa y compleja realidad regional y mundial en constante cambio, con sus historias, formaciones sociales concretas y el mapa complejo de esta geografía plural. La geopolítica imperialista u otras pretensiones hegemónicas pueden realizarse en medio de resistencias que pueden modificar las consecuencias de los dispositivos de poder imperiales. Por ello, es mejor ver al mundo constituido y constituyéndose, a la vez. Esto quiere decir que el mundo no es sólo el mundo instituido como representación; el mundo es además experiencia, percepción, memoria, praxis, devenir, en su proliferación plural de formas.

El mundo no puede ser plenamente dominado, salvo en las representaciones imaginarias y estructurales, así como en las instituciones imaginarias de la sociedad; menos aún es posible dominar el devenir. Los dispositivos del poder entran en contradicción, dominan institucionalmente; empero, no logran detener el flujo de la potencia social, de la cual dependen (Prada, 2014). Los imperialismos han dominado militar e institucionalmente el mundo con la violencia y, representativamente, en el ejercicio normativo de la imposición de leyes, sostenidas por la imposición de las fuerzas dominantes. Sin embargo, nunca pudieron abolir la proliferación alterativa de las dinámicas moleculares sociales, que son de nuestro interés en esta investigación.

A pesar de que la región ha vivido el periodo con los ingresos fiscales más altos de la historia, el crecimiento en este lapso no ha sido sostenido. Se mantienen las fluctuaciones inestables que han caracterizado a la economía desde los años ochenta del siglo pasado. En concreto, a pesar del discurso transformador, lo que en realidad se ha dado es el paso a un profundo proceso de modernización del capitalismo inspirado en una tecnocracia, que ni siquiera trasciende los esquemas de desarrollo de Corea del Sur o Singapur. Además, incluye una creciente participación estatal, y se consolida en la práctica un modelo económico empresarial neocolonial que se impuso como dominante.

La ilusión del desarrollo es un fetiche que esconde la acumulación por desposesión, una acumulación originaria permanente y múltiple. Explotando masivamente los recursos naturales y a los trabajadores, se mantiene décadas después de iniciada la explotación de la Amazonía, los Andes y las costas. Los actuales gobiernos progresistas apuestan por más petróleo, por la megaminería, la pesca, los bosques, los agrocombustibles, los transgénicos, so pretexto de la productividad. Es más, como se repite oficialmente en Brasil, Perú, Bolivia o Ecuador, con más extractivismo se pretende salir del esquema de acumulación extractivista, de raíces coloniales, presente desde los orígenes de las repúblicas.

Gran parte de las actividades extractivas –así como las grandes industrias– sólo se están haciendo con el concurso del capital transnacional. Lo único que al parecer ha cambiado es el lugar relativo desempeñado por el Estado: si antes se inhibía en términos relativos, ahora es uno de los aceptados a participar del excedente. El objetivo es una mayor participación del Estado en la renta de los recursos naturales petrolera y minera, agropecuaria y pesquera. En los países del grupo Pacífico, ni siquiera se disputa ese mínimo. Este extractivismo del siglo XXI, a contrapelo de los discursos soberanistas, resulta recolonizador. En la medida en que se amplía y profundiza el extractivismo, se agrava la devastación social y ambiental. Mientras crece la resistencia social en los territorios afectados, los gobiernos responden con la criminalización de la protesta. Los derechos colectivos de las comunidades indígenas y campesinas son atropellados.²⁰

²⁰ Un punto que no puede quedar al margen es la Iniciativa Yasuní-ITT en Ecuador. Surge desde la sociedad ecuatoriana, en un país atado a los ingresos hidrocarbúricos, siguiendo la línea de resistencia y propuesta que acompañaba a la sociedad de fines de los años setenta. Con los primeros signos de devastación en las zonas petroleras se empezó a alertar

En síntesis, la propuesta tecnocrática de todos los gobiernos —de derecha y progresistas— responde a un intento por modernizar el capitalismo. De hecho, las acciones desplegadas supuestamente por estos últimos a favor del cambio estructural ni siquiera se han intentado. Profundizan una mayor polarización entre los grupos más acomodados y el grueso de la población, al tiempo que ahondan la dependencia de nuestros países al capital transnacional, últimamente representado en mayor proporción por el capital de los BRICS. De este modo, en cada uno de estos surgen nuevos poderes económicos en los espacios abiertos que van reemplazando a los anteriores o llegan a acuerdos con los tradicionales grupos de poder. Se consolida, entonces, un nuevo modelo de dominación burguesa, que ha logrado una máquina burocrática legalizada, dócil y activa, la cual pretende normalizar, disciplinar y ordenar a la sociedad, restringiendo sus manifestaciones. Ha sido la impronta de la conciencia social.

El saldo nos dice que el capitalismo goza de muy buena salud: el extractivismo se consolida, el rentismo se expande y, en consecuencia, no se han reducido los mecanismos de explotación de los seres humanos, y menos aún de la naturaleza. La propuesta es llamada desarrollista y se discutió en gran parte del siglo XX. Busca la eficacia tecnocrática, la provisión de infraestructura y el incremento del consumo, a partir de la recuperación del Estado.

¿Qué hacer cuando el Pentágono ensaya hoy —en Venezuela, Perú y Honduras, por ejemplo— una nueva fase de agresión bélica encubierta con eje en la desnaturalización del Estado-nación, que incluye la utilización de una quinta columna y elementos no estatales y no militares contra las fuerzas armadas y el Estado? El objetivo es minar la soberanía con acciones de desestabilización, creando descontento en las masas populares y generando un ambiente de zozobra y confusión, acompañado por un ambiente de guerra económica. Esto último incluye la especulación y el desabastecimiento de productos de primera necesidad, en particular alimentos y medicinas. La derecha está recuperando un contradictorio poder económico; y a través de este, el político. Conspiraciones y manipulación mediática complementan sus acciones. Las protestas de los gobiernos petistas no son suficientes para frenar estas agresiones y sus aliados regionales esperan más.

sobre las consecuencias de esta dependencia. La iniciativa se truncó por la incapacidad del gobierno más que por la falta de apoyo internacional. Nuestros gobernantes no se atreven, al menos, a planificar el extractivismo.

Las advertencias de Thomas Piketty son algo que también ocurre en los BRICS: el capital-propiedad ha vuelto a aumentar enormemente, en el contexto actual de crecimiento lento y de aumento de las ganancias del capital financiero (varias veces mayores a las del capital productivo). ¿Por qué? Porque esto hace que la relación entre el patrimonio acumulado y el nivel de producción aumente a favor del primero. Esto favorece, también, a los herederos de grandes fortunas, pues esa riqueza crece más que la economía. Cuestiona de manera radical un vínculo directo entre el desarrollo económico y redistribución del ingreso, destacando la importancia de las instituciones políticas y fiscales en los impuestos e ingresos y la distribución histórica de la riqueza (Piketty, 2014). Naturalmente, la concentración de riqueza y la exclusión mayoritaria frena la economía e incide en una concentración mayor de riqueza. Si en nuestros países no avanza el privilegio de la producción y los negocios, la especulación multiplicada, salvaje, ocupa el lugar de la producción y de la economía propiamente dicha para derivar en la especulación de casino.

Este es uno de los hechos contemporáneos que han estimulado poderosamente la fuerza y número de los movimientos sociales, una de cuyas primeras divisas o reivindicaciones es el de la justicia social, es decir, en contra de la extrema desigualdad. Por eso, nos atrevemos a decir que el gran punto de inflexión de la política contemporánea es el crecimiento y multiplicación de los movimientos sociales, que tienden a proporcionarnos un potencial diferente e incluso revolucionario de la sociedad actual. Las reglas de la política comienzan a modificarse seriamente. Los movimientos sociales autonomistas merecen la más alta prioridad en las reflexiones de las perspectivas de cambio que se vienen. Organizarse en grupos y colectivos, que puedan desarrollar mutuamente en la práctica acciones efectivamente transformadoras, sirve para enfrentar con eficacia las amenazas que pesan sobre la humanidad y para convertir la circunstancia en la oportunidad del cambio.

Nos preguntamos si Brasil mantendrá su poder y su liderazgo en América Latina o si se traducirá en oposición y rechazo a su presencia. ¿Cuál es y será su carácter y naturaleza? ¿Podrá proyectar poder fuera de sus fronteras nacionales? ¿A través de qué medios: inversiones, coerción, cooperación, difusión de sus ideas y valores, o a través de su capacidad de transferir dinamismo económico y alternativas hacia su zona de influencia? Un ejemplo nos permitirá pensar en un futuro posible: el caso de Perú.

Extractivismo y corrupción de trasnacionales brasileñas en América Latina: el caso peruano

Entre cuentas ocultas se encuentra la dimensión de la corrupción, fomentada por las empresas brasileñas y sus aportes, comisiones y coimas (a los partidos políticos y a varios gobiernos de América Latina y el Caribe), y la fuente de financiamiento ideológico. Una vez en el poder, Luiz Inácio Lula da Silva y el PT encontraron, en los gerentes de las grandes constructoras de su país, a los mejores socios que se alinearon a los objetivos del Foro de Sao Paulo y empezaron a financiar campañas electorales y a reforzar a gobiernos “progresistas” y luego al conservadurismo neoliberal. Pero el dinero invertido volvería a ellos incrementado, después, con los contratos con los estados presididos por sus beneficiados y si no a otros de la propia derecha. El conglomerado empresarial OAS, por ejemplo, le “donó” un millón de dólares al precandidato del Partido Patriota de Guatemala, entre otros.

A cambio de multimillonarias concesiones, empresas investigadas ahora en Brasil, como Camargo y Correa, OAS, Techint o Queiroz Galvão, contrataron para cada país *lobistas* y después oficinas especializadas en “estructuras”, quienes se instalaron en las capitales y empezaron a negociar y repartir donaciones o porcentajes a los candidatos y después a los gobiernos aliados y neoliberales ortodoxos. Esto incluía publicistas de campaña con experiencia de operadores políticos y los intermediarios de los grandes consorcios. En la contraparte, había presidentes, ministros, altos funcionarios, asesores, empresarios y un selecto grupo de miembros del poder judicial, abogados y comunicadores.

Elegimos el caso peruano como el patrón para examinar la corrupción porque en Perú las empresas de Brasil se confabularon con cuatro diferentes gobiernos neoliberales: Fujimori (1990-2000), Toledo (2001-2006), Alan García (2007-2011) y Toledo (2012-2017). Fueron veintisiete años de grandes negocios que en lo que sigue detallaremos (considerando que aún estamos en medio de las investigaciones).

En Perú, con Fujimori ya tuvieron decenas de contratos, pero desde fines del segundo periodo de Fujimori, las contradicciones al interior del Estado se agudizaron. Dentro de las fuerzas armadas y al interior de los ministerios correspondientes a la seguridad (Defensa, Interior) crecieron

los conflictos entre fujimontesinistas e institucionales, entre los activos y los purgados por la mafia, entre conservadores y reformistas. Luego de la renuncia de Fujimori el Gobierno de transición de Paniagua (2001) contando con un equipo judicial confiable identificó por lo menos cuatro mil corruptos. Pero dada su escasa capacidad operativa, sólo proceso y apreso a 7%. Políticos y empresarios continuaron en la corrupción. Lo cierto es que el Ejecutivo, en el gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006), no tenía tela de dónde cortar. Las fuerzas armadas como institución y la nueva clase política sirvieron a la corrupción. Reformar estas instituciones implicaba su desaparición. Alán García optó por reducir el presupuesto judicial y controlar los aparatos decisivos para expandir nuevamente la corrupción, incluyendo a la economía criminal del narcotráfico.

Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Odebrecht habría pagado en esos países al menos 788 millones de dólares en sobornos entre 2002 y 2016 (lo que no corresponde con la millonaria realidad).

Los escándalos de corrupción y el aumento de la narcopolítica que sacuden la región están poniendo en evidencia la verdadera naturaleza antidemocrática del sistema político liberal representativo; en específico, de las lumpenizadas clases económicas y políticas, independientemente de sus ideologías. Las prácticas más extremas de corrupción incluyen el tráfico de influencias, el soborno, la extorsión, el financiamiento electoral y el fraude económico y político. Cuando la clase política esta asociada con el narcotráfico y el poder económico, con las empresas *offshore* y los paraísos fiscales, se multiplica la impunidad por medio de la destrucción o cooptación privada del poder judicial. De este modo, los poderes políticos, electoral, judicial, congresos y gobiernos regionales y locales se desnaturalizan totalmente, además de que se someten al mayor poder: el económico internacional.

Entre las prácticas menos extremas de corrupción están el uso discrecional de recursos públicos para obras superfluas, en detrimento de inversiones para satisfacer necesidades básicas de la población, como salud y educación. Si bien las magnitudes de la corrupción pueden variar mucho, la esencia del acto es el mismo. En su núcleo está el principio de sacar ventajas privadas en detrimento del bien común.

Los desafíos para enfrentar la corrupción en la región son enormes y varían de país a país. En primer lugar, está el grado de autonomía del Poder Judicial para investigar y punir a los involucrados. Lo mismo el nivel de independencia y garantía de los medios de comunicación para informar

sobre los casos de corrupción. En tercer lugar, está el grado de conciencia e intolerancia ciudadana y capacidad de movilización para presionar para obtener investigaciones, criminalización de los involucrados y reformas de prevención de la corrupción. En el periodo posterior a la caída de Fujimori debió continuarse con la investigación, entendiendo mejor la naturaleza relacional del fenómeno de los sobornos: la mano que da y la que recibe; las artimañas para recibir los pagos; las cláusulas de los contratos de obras públicas; las fallas del sistema de control; el funcionamiento de las redes de apoyo legal y político de estas prácticas; las empresas *offshore* y los paraísos fiscales.

Odebrecht paga sobornos en este país a dirigentes políticos con el fin de obtener contratos de obra pública, como carreteras, gasoductos, líneas de metro, entre otras. En Perú, el escándalo alcanzó a los gobiernos de Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Alan García. Entre las acciones en curso está la decisión de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria de embargar cuentas bancarias, bienes inmuebles y vehículos de Odebrecht y otras siete empresas brasileñas (entre ellas las constructoras Camargo Correa y OAS). De igual manera, está la emisión de una orden internacional de detención contra Toledo por la Fiscalía General de Perú.

Todavía no se sabe cuáles serán las consecuencias políticas del escándalo Odebrecht. Sólo estamos en sus inicios. Por ahora se está discutiendo la apertura de una investigación regional sobre el caso con delegados de las fiscalías de los quince países involucrados en el escándalo de los sobornos de Odebrecht. Una investigación tentacular sobre el sistema de corrupción de Petrobras en Brasil permitió echar luz sobre las prácticas de la mayor constructora de la región.

Desatada en 2014, la operación Lava jato reveló que las empresas brasileñas de la construcción, Odebrecht en primera fila, habían montado un cártel para alterar los jugosos mercados de subcontratación del grupo petrolero Petrobras sobornando a dirigentes de todo el espectro político.

La justicia de una decena de países, desde México a Argentina, pasando por Perú, Panamá y Uruguay, solicitó información a los fiscales brasileños para investigar localmente sobre los contratos del grupo. Durante más tres décadas, la empresa mantuvo este esquema de corrupción masiva, pagando sobornos milionarios a funcionarios gubernamentales de tres continentes. En Brasil se esperan nuevas revelaciones explosivas en el

corto plazo: Odebrecht acordó con la justicia brindar información a cambio de una reducción de las penas para 77 ejecutivos de la firma, entre ellos su expresidente Marcelo Odebrecht, actualmente encarcelado.

Otra entidad estratégica difícil de reformar es el Ministerio de Relaciones Exteriores, obligada a participar en las pesquisas internacionales, que también sufrió los estragos de la corrupción y el entreguismo. Con Toledo, tuvo que tomar decisiones frente al Plan Colombia, ante la política rapaz de los Estados Unidos y su máxima expresión: el ALCA. Estuvo obligado a tomar posición ante los conflictos internacionales como China-Estados Unidos, o Israel-Palestina o Cuba-Estados Unidos; enfrentar los problemas mal resueltos de las fronteras con Chile y Ecuador, entre otros. Cuando vemos panorámicamente lo ocurrido en otras dependencias vitales, como el Ministerio de Economía y Finanzas, el del Interior, el Poder Judicial, la Fiscalía, la Sunat (impuestos) e incluso instituciones de la sociedad civil, concluimos que Toledo, Alan García y Ollanta Humala prosiguieron el proyecto neoliberal fujimorista, donde el Ejecutivo controlaba todas las instituciones y poderes. Fujimori subastó al Estado peruano y lo convirtió en un Estado corrupto y corruptor, con una edificación diseñada para el mercado global, y una marcada orientación a servirse de lo público para los fines privados de unos pocos, a enriquecerse él y sus allegados junto a los poderosos (narcotraficantes, militares, empresarios o políticos). El sistema existe y tiene como expresiones centrales la captura de la administración del Estado por los privados, los grupos de cabildeo, y el crecimiento de economías informales e ilegales; como también la existencia de partidos y ligados a *lobbies*, mafias y a sectores ilegales y de políticos que ejercen su poder como verdaderos “padrinos”.

La corrupción (entendida como el mal uso del poder público para obtener ventajas ilegítimas) se ha expandido enormemente en la región. Existe un *ethos* cultural de la corrupción en Latinoamérica que radica en el “patrimonialismo,” que consiste en el empleo de los fondos públicos para engrandecer el patrimonio privado. El historiador Jorge Basadre llamaba *sultanismo* a que el gobernante usara al Estado para su provecho. El presidente actúa como el dueño del país; el erario público y sus bienes son lo mismo, no hay distinción. Todo se adecúa a su voluntad: negocios, grandes obras y contratos. Cada vez actualizan las formas de corromper; hoy son las asociaciones público-privadas, APP, con sus sofisticados tecnocráticos.

La corrupción es uno de los más serios problemas que enfrenta hoy la región. En diciembre de 2016 se difundió en los medios desde los Estados Unidos que Odebrecht había apelado al pago de campañas electorales y coimas a políticos, partidos, funcionarios y comunicadores. El Departamento de Justicia de Estados Unidos estimó una cifra aproximada de 788 millones de dólares para conseguir la concesión de licitaciones públicas Brasil, Panamá, República Dominicana, México, Guatemala, Ecuador, Perú, Venezuela, Colombia, Argentina, Guatemala e incluso África. Los impactos políticos y económicos del caso son incalculables, los múltiples implicados e interesados los están amortiguando por medio del control de la información y movilizándolo sus piezas tácticas.

Más allá del escándalo y su magnitud, el proceso Odebrecht revela la fragilidad institucional estatal, la inexistencia democrática, la mercantilización electoral, la ausencia de una ética progresista, el funcionamiento de los poderes, los usos y herramientas del hacer, la geografía de la corrupción, la dinámica de colusión entre los intereses de las grandes corporaciones transnacionales extractivistas y de las grandes obras con las élites político-administrativas de numerosos estados recolonizados del mundo. Al mismo tiempo, muestra que implantar y cumplir con las leyes y los aparatos que pugnan contra la impunidad delictiva parece un desafío insuperable en América Latina. Todo esto va más allá del progresismo, de la izquierda y derecha oficiales. Es la consecuencia del despliegue del capitalismo en su nueva fase de acumulación, empantanada ya en el despojo compulsivo de lo que hasta ahora pertenecía al dominio público, al Estado, o seguía bajo el control de las comunidades locales, y que está siendo, en tiempos de la gobernanza neoliberal, llevado a cabo por la alianza entre los Estados inversores, sus transnacionales y los periféricos receptores como cómplices necesarios y sus oligopolios privados.

Hasta el momento, sólo en países donde las policías federales tienen cierta independencia han investigado y hecho conocer al mundo este caso de megacorrupción internacional. Brasil con el PT en la mira ha salpicado a todo el régimen de partidos, y hasta el momento sólo en Colombia y en Perú hay personas juzgadas o imputadas.

La corrupción, es de sentido común, va más allá de Odebrecht y no obstante que los defensores del neoliberalismo niegan los vínculos entre ambos procesos, lo que identifica a estos regímenes es el neoextractivismo, como parte de una estrategia de desarrollo económico colonial neoliberal

adoptada por la mayoría de los gobiernos de América del Sur, con especial intensidad a principios del siglo XXI. Apoyada argumentalmente en la necesidad de la inversión y crecimiento, de alimentar las arcas públicas en pos de la aplicación de políticas redistributivas, se basa en la intensificación al interior de la matriz productiva de aquellas actividades de explotación de la naturaleza para la obtención de recursos no procesados, dirigidos de forma prioritaria a la exportación.

Si bien en su modo de operación el neoextractivismo se basa en el extractivismo convencional, difiere de éste en el papel protagónico que adquieren los Estados recolonizados en la privatización de empresas, territorios y recursos naturales, en un proceso productivo cuya mayor plusvalía es captada por las transnacionales extranjeras y nativas y una menor proporción los Estados centrales, que aplican tributaciones especiales y regalías, con diversos mecanismos de regulación, permitiéndose la obtención de un porcentaje mayor de ingresos para las arcas estatales. Parte de estos recursos sirven para la puesta en marcha de programas sociales y otras iniciativas públicas que dotan a los gobiernos de cierto grado de legitimidad ante las denuncias de estragos provocados por esta estrategia de apropiación.

En Perú se encuentran cuestionadas decenas de obras como la interoceánica, el metro capitalino, el Gasoducto Sur Peruano y otras grandes inversiones. El embajador brasileño en el Perú, Carlos Laxary Texeira, afirmó hace algunos años que las inversiones brasileñas en ese país ya superaban los 6000 millones de dólares y con un crecimiento de 10% anual. Incluyen proyectos futuros camineros, mineros, industriales, de producción de cemento, medicamentos y modernización de puertos (*El comercio*, 7-07-2014).

Los negociados intergubernamentales no interferían en la autonomía política interna e internacional. García y después Humala oscilaban entre el poder tradicional y acercarse a Unasur. Decidieron lo primero. Compartieron con los progresistas institucionales el culto al crecimiento, al desarrollo, al empleo precario y la reducción de la pobreza. Sólo quedó una izquierda marginal, débil, permisiva o cómplice de la expansión capitalista y la represión a la resistencia popular. Al mismo tiempo, la lucha de las comunidades indígenas-campesinas contra las mineras con sus altibajos son un referente defensivo de la agresividad de las transnacionales de los BRICS que va en aumento.

Según un reporte de la CEPAL (2015), el Perú ocupa el sexto lugar del ranking de países con la mayor recepción de inversión extranjera directa (IED) en la región. El 2012 ingresó la cifra récord de capitales por el orden de 12 240 millones de dólares, 50% más que el 2011, cerca de mercados de Chile y Colombia. Entre los países que originan esta avalancha, destacan España, Reino Unido, Estados Unidos, Chile y Colombia. No obstante, desde el 2003, Brasil escaló posiciones en este cuadro, por lo que se estima que el país que mira al Atlántico ocupará el tercer lugar al 2016 en IED en el Perú.

Seguendo a Gamarra, veintinueve de las empresas más importantes de América Latina son brasileñas. Quince se encuentran en Perú. Ello es una muestra del capital que invierte Brasil en este país.

Cálculos de la diplomacia de Itamarati aseguran que al 2020 los capitales cariocas podrían sumar 20 000 millones de dólares. Según Antonio Castillo, consejero comercial de la Embajada del Perú en el Brasilia, se podría hablar de hasta 36 000 millones de dólares, si se llegan a concretar los proyectos en energía, hidrocarburos y gas, a los cuales se sumó el montaje del polo petroquímico, que posibilitará la llegada de inversión en industrias derivadas de los fertilizantes y los policarbonatos (Gamarra, 2013).

El incremento de empresas fue evidente. El magnate Marcelo Odebrecht, consideró que Perú era propicio para hacer grandes inversiones en la región: construcción, energía e hidrocarburos, concesión de carreteras y otros rubros. La firma de la Alianza Estratégica Perú-Brasil hizo posible lo anterior y redujo trabas para la inversión privada. Incluso, el Observatorio Económico del BBVA del 2011 indicó:

Perú resalta como el segundo eje de operaciones para la expansión comercial brasileña que mira al Pacífico, por la facilidad comercial que brindan los Tratados de Libre Comercio que unen al Perú con las potencias del Asia, donde se mueve 54% del comercio global. En este sentido, destacan los convenios de estabilidad jurídica y tributaria para las grandes empresas, que aseguran la rentabilidad de la inversión de largo plazo (Gamarra, 2013).

Desde el 2005, según el mismo informe del BBVA, las inversiones brasileñas en el Perú han crecido a un ritmo de 30%, a partir del arribo de empresas que han pasado de ser gigantes regionales a líderes globales en

sectores de infraestructura estratégica y materias primas: Petrobras, Valde Rio Doce, Gerdau y Votorantim Metais. El Grupo Gerdau elevó su inversión en 154 millones de dólares, que forman parte de su plan para consolidar, en el mediano plazo, su participación en el mercado siderúrgico. Por su parte, Vale do Rio Doce, que opera desde el 2010 la planta de fosfatos de Bayóvar (Piura), invertiría alrededor de 560 millones de dólares en el desarrollo del proyecto, que posee reservas por 238 millones de toneladas en fosfatos, insumo que sirve para elaborar fertilizantes.

En el rubro de hidrocarburos, la estatal Petrobras, la empresa más rentable de América Latina, posee una cartera de proyectos futuros por 1000 millones de dólares. El más importante de todos es la modernización de la refinería de Talara. Además, la petrolera brasileña invertiría 180 millones de dólares en la exploración del Lote 58 (Cusco) para confirmar el potencial de reservas de gas natural.

En el rubro construcción, destacan firmas como Odebrecht, Camargo Correa, OAS, Quiroz Galvao y Andrade Gutiérrez, que en la última década se han encargado de participar en importantes obras de infraestructura vial, como las carreteras IIRSA Norte, Centro y Sur, el metro 1 y 2 de Lima, y Parque Vía Rímac. Con una longitud de 21 km, participó Odebrecht como cabeza del Consorcio metro de Lima. Exigió una inversión de 410 millones de dólares.

En 2003, la empresa Ambev inició como una fábrica de refrescos; en 2005, ingresó en el mercado de la cerveza. Finalmente, consideraba abrir una nueva planta en 2014 para el mercado internacional. En 2008, la aerolínea TAM surgió con traslados locales. Más tarde, reportaba 90% de los pasajeros que viajaban entre Lima y São Paulo, consecuencia de los viajes corporativos (Gamarra, 2013).

Del mismo modo, en teoría, el transporte resulta imprescindible para la distribución industrial. Para justificar grandes obras, las empresas extranjeras decían estar aproximándose a la economía peruana por la conveniencia de su rápido crecimiento. No bastaba con el fomento al turismo que inició más de una década atrás, sino que la IIRSA debía potenciar la conectividad de Brasil con el Pacífico, a través de un transporte multimodal. Esto significaría la instauración de ferrovías que puedan transportar hasta 5000 contenedores. El empresario Humberto Speziani sugiere la creación de hidrovías, la modernización de los puertos y la integración energética entre Perú y Brasil. Esto porque considera que el polo hidroenergético de Inam-

bri puede aumentar ocho veces la reserva energética de Perú. Esta quimera se hizo plausible el 2017.

Las obras quedaban paralizadas. En Perú, están implicados cuatro gobiernos en la corrupción: Alberto Fujimori, Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Alan García. Con este último, una empresa de capital brasileño aumentó tanto sus contratos como los costos de los convenios iniciales. Con Alejandro Toledo, entre 2009 y 2011, la compañía obtuvo dos contratos con Cajamarca por más de millón y medio de soles. Al salir Alan García, esta empresa, Engevix Engenharia, dejó de celebrar contratos con el gobierno (Huaman, 2015).

Pero quizás la más importante prueba de corrupción la representa el caso Lava jato. Según Albán:

En marzo del 2014 se dio inicio a la investigación, que en aquel momento vinculaba a pequeñas empresas de lavado de autos (de allí el nombre “Lava Jato”) con un caso de lavado de activos. Sin embargo, poco después el Ministerio Público Federal y la Justicia Federal de Paraná (estado donde se inició la operación) encontraron indicios de la existencia de una red de empresas que coludían para ganar licitaciones de Petrobras por montos mucho mayores de los que normalmente se pactan en el libre mercado (2015).

Según la AFP (Agence France-Press), Andrade Gutierrez y Odebrecht fueron detenidos por la red de corrupción que se reveló tras Petrobras. Esta empresa, controlada por el Estado, se adjudicó obras estatales entre 2004 y 2014. Además, se supo que el objetivo de los sobornos era el financiamiento de partidos políticos (France Press, 2015).

Por otra parte, Lula da Silva recibió una donación de más de un millón de dólares, para el Instituto Lula, por parte de la constructora Camargo Corrêa. Del mismo modo, esta empresa destinó aproximadamente medio millón de dólares para una empresa privada del expresidente. La policía brasileña hizo público que la constructora ha sido partícipe de los contratos con Petrobras y ha pagado sobornos para beneficiar a la esfera política. Del mismo modo, Camargo Corrêa destinó 300 000 dólares para la consultora del exministro José Dirceu y más de 50 millones a varios partidos políticos (Agencia EFE, 2015).

La corrupción peruana se reproduce en América Latina. “Lo más relevante son los supuestos pagos de coimas relacionadas con la construcción

de la carretera Interoceánica Sur, efectuados a funcionarios de los gobiernos de Alejandro Toledo y Alan García” (Chávez, 2015).

A poco de dejar la presidencia, Alejandro Toledo inauguró el puente de integración entre el estado de Acre y la región Madre de Dios. Más tarde, esto tuvo efecto en la construcción de la Interoceánica Sur. Sobre este megaproyecto, Salazar señala que, con intención de maximizar el comercio entre Brasil y Perú, tendrían que construir sus 2400 kilómetros con celeridad. Este proyecto además prometía la unión del Atlántico con el Pacífico, formando parte de la IIRSA. Sin embargo, la alta inversión que demandaba fue causa de denuncias en contra de autoridades y empresas de ambos países. Por otra parte, adujeron que los estudios previos a la realización del proyecto subestimaban costos. Otra causa de insatisfacción es que las empresas que ganaron las licitaciones fueron Norberto Odebrecht, Andrade Gutierrez y Camargo Corrêa, precisamente las más beneficiadas por el BNDES (Salazar, 2016). Ejemplo de lo anterior es Odebrecht, la cual recibió el mayor apoyo entre quince empresas dedicadas a la infraestructura. Tuvo a su cargo más de setenta obras, en Perú y otros seis países. Entre 1998 y 2014 realizó más de la mitad de los proyectos que apoyó el BNDES, y en ocho años recibió más de 60% del presupuesto de apoyos.

El nuevo registro incluye proyectos que contrataron entre abril del 2007 y 2015 Alan García y Ollanta Humala. Ello expresa la continuidad de la corrupción con los montos de apoyo. Los contratos de las obras en Perú coinciden con el plazo del registro y se hace evidente su predilección por las empresas que se encargaron de la Interoceánica. Sin embargo, debido a la vinculación de estas empresas con el caso Lava jato, el incremento del pago anual por obras fue causa de suspicacias (Salazar, 2016). Mediante adendas, se enriquecían empresas y gobernantes.

Milagros Salazar indica, en su reportaje “Cuotas y pagos millonarios de la Interoceánica”, las apropiaciones empresariales y propinas políticas, que:

En el tramo 2, liderado por Odebrecht, el costo subió en 207%, pasando de US\$ 213 millones a US\$ 653 millones, según montos iniciales referidos por la CAF, que otorgó préstamos al gobierno peruano para el megaproyecto, y cifras del incremento actualizadas a marzo de 2015 por Ositran, que es el regulador estatal en infraestructura de transporte público. En el tramo 3, que también estuvo a cargo de Odebrecht, el costo subió en 105%, subiendo de US\$ 294 millones a US\$ 602 millones. Mientras que en el tramo 4, encabezado por

Andrade Gutiérrez, Camargo Corrêa y Queiroz Galvão, el monto se disparó en 237%, de US\$198 millones a US\$667 millones (Salazar, 2016).

La inversión de la obra tuvo un costo adicional de más de 1200 millones de dólares por estos tramos, según las empresas, “debido a la geografía de la zona”, como si esta hubiese cambiado de improvviso. Ante esto, Odebrecht negó que el BNDES hubiera hecho alguna aportación para los tramos dos y tres de la Interoceánica. Arguyó que para su construcción Odebrecht acudió a los consorcios Graña y Montero, JJ Contratistas Civiles, ICCGSA (Ingenieros Civiles y Contratistas Generales) y Conirsa. Era una alianza de lumpenbuergeois.

Sin embargo, en 2011 la Contraloría realizó un examen a los contratos de los tramos 2, 3 y 4. El resultado fue que se utilizaron las mismas fórmulas para los tramos 1 y 5 de la Interoceánica Norte a cargo de las mismas constructoras, anulando el argumento de que las zonas geográficas fueran diferentes.

Del mismo modo que en la Interoceánica, la construcción del tramo 1 para el metro de Perú, a cargo de Odebrecht, implicó un importante aumento del presupuesto de 410 millones de dólares, a los que se añadieron 100 millones más (Salazar, 2016).

Por su parte, los gobiernos han limpiado los obstáculos para las concesionarias, como fue el caso de Toledo, quien benefició con el certificado de reconocimiento de derechos sobre el pago anual de obras a Camargo Corrêa, Andrade Gutiérrez y Queiroz Galvão. Éste permitía que el Estado se responsabilizara del pago con los intereses que fijara el titular.

Según expone Salazar, otra prueba de las desviaciones en el sistema es que el grupo Camargo Corrêa aparece en el registro de la Policía Federal por las coimas que pagó a funcionarios para licitar obras, apoyar campañas políticas y financiar cuentas al exterior, lavando dinero. Asimismo, Carlos Fernando Namur revela la comunicación entre funcionarios acerca de pagos por licitaciones y discusiones sobre la conveniencia política de obras en Perú y otros países.

El reporte también resalta el título de un archivo perteneciente a la USB de Gavina Bianchi, de Grupo Camargo Corrêa. El documento describe los pagos relacionados con la Interoceánica Sur, durante los gobiernos de Alejandro Toledo y Alan García. El título podría traducirse como “Predicción Capilés tramo IV-Interoceánica”. La palabra *capilés* significa propinas o coimas (2016).

Con base en el informe policial, Salazar explica la ruta de las coimas:

De un total de US\$180,373.536 recibido por Camargo Corrêa, se pagarían sobornos de la siguiente manera: 3% o US\$ 5.411.207 (del monto total) a la rúbrica general y 0.5%, o US\$ 901,868, destinados a “JR” (en el documento no se menciona el nombre completo, sólo estas iniciales). Así, los totales de “Capilés” que tendría por pagar Camargo Corrêa serían de US\$ 6.313.075. Estos montos serían desembolsados en momentos clave del inicio de construcción de la Interoceánica en los últimos meses de gobierno de Alejandro Toledo, registra el documento (2016).

Además, en el documento de grupo Camargo se encuentran las cantidades y condiciones de pago: una parte menor en efectivo y la otra por medio de la operación Cabo. Esta modalidad desvía recursos hacia el exterior para lavar dinero. En este caso, se halló una remesa vinculada con una cuenta en Londres (2016).

Los archivos también exhiben los montos junto con los nombres correspondientes. Así, se encuentra el nombre de Toledo y Marcos de Moura Wanderley, representante legal de Camargo Corrêa en las negociaciones con el gobierno peruano para la Interoceánica Sur. Cabe resaltar que, según la Oficina Nacional de Procesos Electorales de Perú, Camargo contribuyó a la campaña de Toledo, fundador del partido peruano Posible. No obstante, se declaró que se hizo de forma transparente por medio del sistema interbancario. La “democracia” es puesta a prueba cuando los empresarios y gobiernos extranjeros colocan presidentes. Pero no son solo ellos pues también la narcoeconomía se va haciendo narpopolítica, jugando en el circo mercantil electoral.

También quedó registrada la aportación de Queiroz Galvão, con aproximadamente 65 000 dólares. Esto ocasionó insatisfacción por su proximidad con el escándalo “Castillo de Arena”. Pero los datos del informe policial de Interoceánica también involucran al gobierno de Alan García, por los incrementos en la inversión del proyecto. Hay registro de montos correspondientes al 2007 donde aparecen las cuotas mensuales para realizar la obra, sumando un total de 1 050 000 dólares, mientras el monto inicial del tramo 4, a cargo de Camargo Corrêa, era de 198 millones de dólares.

Siguiendo a Salazar, en este mismo año incrementó la tensión entre las empresas y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Las conce-

sionarias requerían ingresos superiores a los 810 millones presupuestados para la carretera. A pesar de que constructoras y funcionarios del ministerio trataron de negociar los costos adicionales, las empresas exigían mayor porcentaje para los gastos generales del que el ministerio estaba dispuesto a desembolsar. En 2008, cuando Suito y la ministra Zavala desocuparon sus cargos, Enrique Cornejo hizo que se fijaran los gastos generales casi en el porcentaje que las empresas requerían y disminuyó el porcentaje de utilidad.

Era más que evidente la constante falta de transparencia en los manejos del BNDES y las empresas. A pesar de las inconformidades, en Perú continúan expandiéndose las maniobras del BNDES, por su carácter de entidad financiera para la infraestructura y los proyectos energéticos. Desde 1998 hasta 2014, el banco apoyó al menos cuatro ocasiones las obras de infraestructura en Perú, a cargo de empresas brasileñas, incluyendo desde luego a Odebrecht y Andrade Gutierrez. La primera, para la construcción de una hidroeléctrica en la región amazónica; la segunda, para la extracción de fosfatos. También se utilizaron recursos del banco para pagar el gasoducto Camisea, alrededor del cual se tejió otra trama de corrupción que no termina de develarse.

BNDES y las transnacionales atentaban contra las poblaciones y el medio ambiente. Un ejemplo fue la extracción de fosfatos que propició críticas por el daño medioambiental que causó en los puertos al no contar con un método adecuado para transportar el material a los almacenes. Además, el acceso a las tierras mineras fue violento para las comunidades campesinas que ahí se establecían. Por ello, el banco refutó que su colaboración fue mínima, pues financió sólo a Andrade Gutiérrez. No obstante, aportó más de 70 millones de dólares para el proceso de desalinización del agua que requiere la extracción de fosfato. De modo que su participación fue importante.

Por una parte, el banco estuvo interesado en otros proyectos, como la Ferrovía Transcontinental, que supuestamente pretendía agilizar la actividad mercantil entre China Brasil y Perú. Asimismo, representantes del BNDES y del Ministerio de Transportes y Cancillería de Brasil se reunieron para iniciar negociaciones con Perú, del mismo modo que se reunieron representantes del banco con el gobernador de Acre. Así, el banco medió notablemente entre las empresas brasileñas y el gobierno peruano.

Para que la farsa fuera completa, se hacían espectáculos mediáticos para legitimar las grandes obras. El cristo de 22 metros que Odebrecht le regaló a Alan García es ejemplo de esta prolifera relación. Aunque supuestamente se siguió un protocolo para justificar el obsequio, al día siguiente se le otorgó a la misma empresa la construcción de la línea 1 del metro de Lima (Salazar, 2016).

El secretario de Palacio, Luis Nava, asistía al jefe de Estado, pero también a las empresas Petrobras y Odebrecht, por medio de su despacho jurídico. Sus ingresos aumentaron considerablemente en esos años. Es claro que el Estado había hecho la elección de sus proveedores: sólo en 2010, Petrobras recibió más de 3000 millones de dólares por sus servicios. Mientras, en Perú, entre 2007 y 2011, las filiales de Odebrecht tuvieron contratos por arriba de 180 millones de dólares.

En suma, a partir de la Interoceánica, las empresas brasileñas que recibieron más apoyo fueron las que imputaron mayor incremento en los costos de inversión. Además, protagonizaron los peores escándalos de corrupción.

Siguiendo a Briño Watchdog (2015), quien defiende a la empresa privada, el BNDES se encuentra en observación. Los brasileños desean conocer el destino de sus contribuciones, debido a que éstas han financiado proyectos extranjeros. Por ejemplo, el banco aportó el mayor porcentaje para que Argentina adquiriera veinte aviones, a través de una subsidiaria argentina. No obstante, autoridades internacionales investigan el caso por sobrefacturación y soborno.

Los financiamientos brasileños han repercutido en la esfera diplomática y dañado la imagen de las empresas. Watchdog rememora la expulsión de Odebrecht en Ecuador y los procesos jurídicos que presidió por una hidroeléctrica que financió el banco. La subordinación del BNDES a las empresas se firmó cuando Odebrecht ayudó al banco exigiendo el fin de la disputa y pagando millones para tal fin.

No obstante, mientras las empresas y el Estado pactaban acuerdos, las poblaciones que vivían en situaciones más difíciles se veían afectadas. Retomando el caso de Ecuador, la hidroeléctrica ocasionó la merma en las actividades económicas y el abastecimiento de agua. Por su parte, los indígenas orientales en Bolivia repudiaron un proyecto brasileño de construcción que se oponía a la Constitución Nacional y, como nunca antes en el gobierno de Evo Morales, fueron agredidos por la policía.

Debido a los daños que han ocasionado las políticas de Brasil, la imagen del BNDES, así como de los proyectos brasileños, se ha desgastado por falta de transparencia. Esto ha dado ocasión a otros países para superponerse como inversionistas. China, por ejemplo, se encargará de financiar la carretera que causó crisis en Bolivia, cuando el proyecto estaba en manos de Brasil.

Watchdog reporta que, por esta causa, el BNDES se empeñó en mejorar el acceso a su información, aunque quedaron resquicios, como en la construcción de la línea 5 del metro de Caracas. Los datos entre Brasil y Venezuela difieren por aproximadamente 150 millones de dólares. El banco modificó la información en su sitio de internet. Ante esta situación y el caso Petrobras, la organización Transparencia Internacional se dio a la tarea de investigar las negociaciones ilícitas y sobornos de empresas brasileñas en Estados Unidos, Panamá, países de Sudamérica y África.

En 2015, los medios revelaron que se les decretó prisión preventiva a Marcelo Odebrecht y a Otávio Márques de Azevedo, de la compañía Andrade Gutiérrez, por ser sospechosos de pagar coimas millonarias a las cabezas de Petrobras, a través de bancos en Suiza, Panamá y Mónaco. La investigación dio inicio a principios del 2014. Unos meses después, consiguieron las pruebas documentales gracias a tres funcionarios.

La empresa petrolera admitió la desviación de recursos. El Ministerio Público sospecha que Odebrecht y Andrade Gutierrez cometieron fraude con el consorcio petrolero y, junto con otras constructoras, se han involucrado en operaciones ilegales desde 2002, hasta las gestiones de Lula da Silva y Dilma Rousseff (Notimex 2015).

Como se ha hecho evidente, Petrobras resultó de suma importancia para el partido que gobernó en Brasil, así como para empresas privadas, pero la investigación del caso Lava jato evidenció su esquema de desvío de fondos con fines económico políticos. María Isabel Álvarez afirma que cuando Petrobras empezó a consignar sus mayores obras a empresas brasileñas, inició un sistema de sobornos. De estos recursos, la mayor parte fueron destinados a las campañas electorales del Partido de los Trabajadores.

La operación Lava jato implicó a cientos de personas y muchas empresas que son investigadas desde marzo del 2014. Algunos empresarios, como Leonardo Meirelles, ofrecieron evidencias sobre la corrupción de la cual formaron parte. Mientras tanto, las propiedades de los sospechosos fueron intervenidas, como la de Zaida Sisson, esposa de un exministro

aprista (2015). Habrá mundanos chivos expiatorios para aparentar que el poder judicial funciona en el Perú de la impunidad.

Javier Albán señaló que, según el Ministerio Público Federal, el grupo de empresas en coalición con Petrobras tenía previstos los montos de cada licitación. Conocían quién ganaría cada vez y sellaban sus acuerdos con funcionarios de Petrobras. Pagaban sobornos de hasta 5% del precio del proyecto. Ejemplo de esta simbiosis es que la refinería Abreu e Lima de Petrobras, cuya licitación fue para un consorcio de Odebrecht, fue presidida por Lula da Silva e inaugurada por Rousseff. El presupuesto de la construcción se elevó desproporcionalmente. De este modo, la participación entre estos mandatarios y Marcelo Odebrecht se manifestó en Lava jato (Albán, 2015).

Por todo lo anterior, se abrieron investigaciones contra políticos y ex funcionarios vinculados con los partidos brasileños más importantes, donde destaca el Partido de los Trabajadores. Asimismo, se investigó al ex director de abastecimiento de Petrobras y fue condenado (Albán, 2015).

Por una parte, según el reporte de Bloomberg, la justicia brasileña recuperó dinero de las cuentas en el extranjero y de los bienes que expropiaron a los responsables de corrupción. Por otra, Petrobras deterioró su imagen y registró pérdidas millonarias en 2014 por la devaluación de sus activos, entre otras causas. La empresa tuvo que posponer o cancelar proyectos y despedir a miles de empleados. Además, “En febrero, su CEO fue reemplazada por Aldemir Bendine, quien un mes después anunció que la petrolera procedería a vender activos para poder sanear sus cuentas” (Albán, 2015).

También otras empresas tuvieron y tienen complicaciones. En diciembre de 2014 se les prohibió participar en licitaciones. Las más afectadas fueron Odebrecht, Petrobras y Camargo Corrêa, pues la agencia calificadora Fitch las evaluó negativamente, lo mismo que la agencia Moody's. Por otra parte, según reportó Bloomberg “el grupo de empresas investigadas aportó cerca de R\$344 millones (casi US\$110 millones) a partidos políticos sólo en el 2014” (Albán, 2015).

La necesidad y la utilidad de muchas de estas obras han sido cuestionadas. Como se han encargado de demostrar diversos autores latinoamericanos (Gudynas, Svampa, Acosta, Escobar, Lander, entre otros), los mayores ingresos que supuestamente podrían percibir las economías de los países donde se ceba el sistema capitalista global, no se contabilizan

enormes “externalidades” tales como la pérdida de biodiversidad, el deterioro de ecosistemas y de los servicios y funciones ambientales que prestan, la desestructuración y paulatina disolución de culturas ancestrales, ni los recursos económicos que será necesario destinar para descontaminar los vectores ambientales (agua, aire, agua y suelo).

Según Maristella Svampa, las políticas del neo-extractivismo progresista (en referencia a los gobiernos latinoamericanos de izquierda que adoptaron este modelo) deben ser reevaluadas. “En la medida en que no se ha realizado un balance objetivo que dé cuenta de los activos y pasivos que provocarán las nuevas explotaciones extractivas, la afirmación sobre mayores ingresos debe al menos relativizarse” (Svampa, 2012). En realidad, la “maldición de la abundancia”, a la que se refiere acertadamente Alberto Acosta,²¹ se ha cumplido con su factura de profundización de las dinámicas uniformizadoras y ampliadoras de los cercamientos privatizadores del capitalismo global. Incluso ha sido así en aquellas circunstancias histórico-políticas más favorables a una posible ruptura con el orden económico imperante.

¿Pero es que de este balance catastrófico para las posibilidades de un desarrollo sustentable en América Latina y en el mundo no han sido conscientes los gobernantes de la región, en su mayoría progresistas y de izquierdas? Todo tiende a hacernos pensar que sí lo han sido, pero que aquí ha operado la visión pragmática o corrupta o una aceptación del “desarrollo colonial”. En lo sustantivo, sobre todo, ha operado lo que Marx llamaría la “subsunción bajo el capital”, y que Wolin ha descrito posteriormente como la gran simbiosis entre el capital y el Estado (Wolin, 2008), convertido en gran empresa extractiva. Por tanto, las nuevas élites políticas latinoamericanas, en un principio radicalmente refractarias a constituirse en piezas subordinadas al engranaje global, acabaron siendo cooptadas por y para la supervivencia del capital en una de sus fases críticas (que Harvey achaca más a la sobreacumulación de capital y otros a la sobreproducción de mercancías).

La pregunta aquí es obligada: ¿de qué nos sirven los Estados como propietarios (soberanos) de nuestros bienes comunes estratégicos cuan-

²¹ Alberto Acosta describe la condena que sufren los países ricos en materias primas a vivir permanentemente en el esquema primario-exportador, subordinado al metabolismo capitalista internacional operado desde los Estados centrales en cogobernanza con las corporaciones transnacionales y los grandes organismos internacionales.

do, cediendo el usufructo de nuestros territorios de manera prácticamente ilimitada a las grandes transnacionales, se convierten en meros administradores/legitimadores del pillaje? El avance de los grandes espacios de liberalización comercial y financiera, que ocurre actualmente bajo la forma de Acuerdos de Libre Comercio y de Inversiones (TTIP, CETA, TPP, entre otros), es tan sólo la expresión más mediatizada de las nuevas apuestas del capital global para dar el golpe de gracia a la soberanía de Estados (cuyas élites administrativas han sido vastamente cooptadas), a los derechos humanos (en especial los económicos, sociales y ambientales) y al derecho internacional en general.

La pista de Odebrecht nos lleva por tanto hasta el verdadero meollo de la cuestión detrás del inmenso nubarrón de corrupciones: el expolio programado que se lleva dando en toda América Latina por parte del entramado trans-estatal-corporativo, en perjuicio no sólo de las poblaciones donde se localizan los recursos extraídos sino, de manera agregada y en la asunción de nuestra cada vez mayor interconexión y dependencia, del imperio. Sin lugar a dudas, el espacio paradigmático de esa operación de expolio a gran escala es la Amazonía, y su puntal y mayor exponente ya operativo, la Iniciativa de Integración Regional Sudamericana (IIRSA). Un mega-proyecto iniciado justo a comienzos del milenio compuesto de centenas de proyectos viales, hidrocarbúricos, mineros, agro-forestales, hidrológicos y de ocupación y destrucción progresiva del ecosistema amazónico y las culturas que lo habitan que se ha desarrollado contra todas las advertencias científicas y sin consulta ciudadana alguna. La columna vertebral del IIRSA, la Carretera Interoceánica Brasil-Perú, ha tronchado ya por la mitad el que es el segundo mayor pulmón del planeta, su segunda reserva de agua dulce (quizás la primera, cuando se pueda calcular el volumen total de aguas subterráneas que posee) y su principal sumidero de carbono. Estamos obligados a poner en entredicho el concepto de desarrollo y su sustento que es el entramado económico y de intereses geopolíticos que lo sostiene y nos arrastra cada día más hacia nuestro colapso como especie.

Para numerosas comunidades indígenas en Latinoamérica, el Estado, frecuentemente en alianza con corporaciones transnacionales, mantiene una visión colonialista del mundo en pleno siglo XXI, particularmente en el área de extracción de recursos naturales en la agricultura, minería, el petróleo y el gas. Como escribe la profesora Manuela Picq de la Universidad San Francisco de Quito en Ecuador:

La expropiación unilateral de tierras para la minería es una continuación de la Doctrina del Descubrimiento. Conceptualizó el Nuevo Mundo como terra nullius [tierra que no pertenece a nadie, N. del T.], autorizando a las potencias coloniales para que conquistaran y explotaran tierra en las Américas. [...] Actualmente la idea de tierras 'vacías' sobrevive en prácticas extractivistas (Dangl, 2014).

Es necesario conocer el impacto territorial, económico, social, político y medioambiental —principalmente en la vida y resistencia de los pueblos— de la expansión brasileña y la extensión del extractivismo rentista fuera de las fronteras. Además, debe analizarse en el contexto latinoamericano y de los BRICS visto desde las contiendas con las viejas potencias coloniales. Asimismo, consideraremos las tensiones entre los países agrupados en el ALBA y la Alianza del Pacífico.

CAPÍTULO IV

¿NOS QUEDAMOS EN LA MERA RESISTENCIA, COMENZAMOS A CONSTRUIR UN MUNDO NUEVO O AÚN ES POSIBLE LA REVOLUCIÓN?

El problema de fondo es que el actual sistema político es inherentemente antidemocrático porque se articula en torno a principios y finalidades que no corresponden al interés mayoritario de la población sino a los de los pequeños grupos que controlan y se benefician de la mayor parte de la riqueza que se produce en el país. Es esto lo que se halla hoy en el centro de la lucha política en curso.

La verdadera participación es la invención de ese sujeto imprevisible que ocupa hoy las calles, ese movimiento que no nace sino de la democracia misma. La garantía de permanencia de la democracia no pasa por cubrir todos los tiempos muertos o los espacios vacíos con formas de participación o contrapoder sino por la renovación de los actores y sus formas de actuar; por la posibilidad, siempre abierta, de una emergencia de ese sujeto elíptico.
J. Rancière, "Los usos de la democracia", en *Los bordes de lo político*, La Cebra, Buenos Aires, 2011, p. 85.

La acumulación primitiva permanente, la reestructuración de la reproducción y las crisis de reproducción

Lo que sostiene Rancière nos parece correcto. Los propios pueblos movilizados son quienes descubrirán desde su experiencia cuáles y cómo se darán las salidas emancipatorias. Silvia Frederici (2013) hace bien en partir de las modificaciones en el capitalismo para buscar los cambios sociales

y estatales. Para ella, la reestructuración de la economía capitalista mundial ha adoptado algunas estrategias básicas para dar respuesta al ciclo de luchas sociales que entre los años sesenta y los setenta transformaron la organización de la reproducción y las relaciones de clase.

La globalización produjo un salto histórico en la expansión del mundo proletario, tanto mediante un proceso global de cercamiento que ha provocado la separación de millones de personas de sus tierras, sus trabajos y sus derechos consuetudinarios, como mediante el aumento del empleo de las mujeres. La globalización se nos aparece como un proceso de acumulación primitiva, que ha asumido formas variadas.

En el Norte, la mundialización de la acumulación ha asumido la forma de deslocalización y desconcentración industrial, así como de la flexibilización, la precarización laboral y el método “justo a tiempo”. En los antiguos países socialistas, se produjo la desestatalización de la industria, la descolectivización de la agricultura y la privatización de la riqueza social. El colocar el interés privado por encima de cualquier otro ha desatado la corrupción y el fin del liberalismo representativo en la política.

En el Sur colonizado, se dio el saqueo, el despojo colonial, la “maquilización” de la producción, la liberalización de las importaciones y las privatizaciones de la tierra. El objetivo es el mismo. Mediante la destrucción de las economías de subsistencia y la separación de los productores de los medios de subsistencia, provocando la dependencia de ingresos monetarios a millones de personas, incluso a aquellas imposibilitadas para adquirir un trabajo asalariado, la clase capitalista ha relanzado el proceso de acumulación y recortado los costes de la producción laboral. Dos mil millones de personas han sido arrojadas al mercado laboral demostrando la falacia de las teorías que defienden el *fin del trabajo*, que el capitalismo ya no necesita cantidades masivas de trabajo vivo, porque presumiblemente descansa en la creciente automatización del trabajo.

La desterritorialización del capital y la financiarización de las actividades económicas, posibilitadas por la revolución informática, han creado las condiciones económicas por las cuales la acumulación primitiva se convierte en un proceso permanente. Esto mediante el movimiento casi instantáneo del capital a lo largo del planeta, al haber derribado una y otra vez las barreras levantadas contra el capital por la relativa y fragil resistencia de los trabajadores a la explotación.

El Estado ha llevado a cabo una desinversión sistemática en la reproducción de la fuerza de trabajo, implementada mediante los programas de ajuste estructural y el desmantelamiento del Estado de bienestar. Las luchas llevadas a cabo durante los años sesenta han enseñado a la clase capitalista que la inversión en la reproducción de la fuerza de trabajo no se traduce necesariamente en una mayor productividad laboral. Con las innovaciones tecnológicas puede ser más productiva la sustitución por los más aptos. Como resultado de esto, surgen ciertas políticas y una ideología que pretende resignificar a los trabajadores como microemprendedores. Supuestamente, estos últimos son responsables de la inversión en ellos mismos y únicos beneficiarios de las actividades reproductivas que materializan.

En consecuencia se ha producido un cambio en los ejes temporales entre reproducción y acumulación. Los trabajadores se ven obligados a hacerse cargo de los costes de reproducción en la medida en que se van reduciendo los subsidios en sanidad, educación, pensiones y transporte público. Además, sufren un aumento de los impuestos, con lo cual cada articulación de la reproducción de la fuerza de trabajo ha devenido un momento de acumulación inmediata. La apropiación empresarial y la destrucción de bosques, océanos, aguas, bancos de peces, arrecifes de coral y de especies animales y vegetales han alcanzado un vértice histórico.

Inmensas áreas agrícolas y aguas –el hogar y los medios de subsistencia de extensas poblaciones–, el mar y el espacio están siendo privatizados y puestos al alcance de la agroindustria, el turismo, la extracción mineral o la pesca industrial. De este modo, para Frederici la globalización ha revelado, sin lugar a dudas, el coste real de la producción capitalista y de la tecnología. Ello hace imposible hablar, tal y como Marx hizo en los *Grundrisse*, de “la gran influencia civilizadora del capital” que surge de su “apropiación universal tanto de la naturaleza como de la relación social misma”; ahí, “la naturaleza se convierte puramente en objeto para el hombre, en cosa estrictamente útil; cesa de reconocerse como poder para sí; incluso el reconocimiento teórico de sus leyes autónomas aparece sólo como una artimaña para someterla a las necesidades humanas, sea como objeto del consumo, sea como medio de la producción”. La capacidad del hacer queda encubierta por fetiches, ocultando la posibilidad de transformación desde abajo.

Tras los desastres ecológicos producidos por los negocios corporativos, cuando los océanos agonizan, atrapados entre islas de basura, y el espacio se ha convertido en un vertedero, en un depósito armamentístico y de desechos nucleares, esas palabras no pueden sonar más que como execrables reflexiones. Este desarrollo ha afectado, en diferentes grados, a todas las poblaciones del planeta.

Aún así, el nuevo orden mundial se define como un proceso de recolonización. Una geoestrategia del múltiple poder imperial que lejos de comprimir el planeta en una red de circuitos interdependientes, lo ha reconstruido como un sistema de estructura piramidal. Ha aumentado las desigualdades y la polarización social y económica, y ha profundizado las jerarquías que históricamente han caracterizado las divisiones raciales, sexuales e internacionales del trabajo, las cuales se habían visto apenas socavadas gracias a las luchas anticoloniales y feministas. El mejor ejemplo es Brasil, que ha aportado al neoliberalismo ortodoxo recolonizador, con la “bolsa familia”, la pérdida de autonomía de muchos movimientos y la paralización de las luchas, como se puede apreciar en las entrevistas que aparecen en el último capítulo.

El colonialismo en el Sur se expresa, de acuerdo con Zibechi, en la ocupación de territorios por la minería a cielo abierto y los monocultivos, seguida de la expulsión de comunidades enteras, del estrechamiento de sus posibilidades de mantenerse en el territorio por la presencia de actores armados y la usurpación de sus tierras. Varios países se han lotizado o concesionado enormes territorios a multinacionales de la minería, los hidrocarburos, la soja. Éstas ocupan las mejores tierras, las aguas más limpias, y destruyen a los pequeños productores rurales.

Nunca desapareció el colonialismo. Por tanto, es absurdo hablar de poscolonialismo, categoría calcada de los teóricos de la parcial experiencia descolonizadora hindú. Más bien, en varios países de América Latina la recolonización fue permanente; se encimaron unas estructuras coloniales a otras que se mantuvieron o renovaron. La más fuerte fue la del extractivismo. Es lo que denominamos capitalismo colonial. Esto significó el establecimiento estructural de relaciones asimétricas y corruptas entre las empresas transnacionales, las monopólicas, los Estados y las poblaciones. Es un nuevo patrón de anomalías económicas, expresadas en viejas relaciones de producción articuladas a otras capitalistas y geopolíticas para la creación de territorios especializados en la provisión de bienes naturales,

intervenidos y operados bajo el control de empresas transnacionales. Estas últimas crean economías de enclave, espacios socio-productivos coloniales, estructuralmente dependientes, sin relaciones con el entorno, economías “verticales” que sólo se articulan con las economías de las poblaciones para proveerse de trabajadores y alimentos.

La minería y los monocultivos desconocen a las poblaciones y al medio ambiente local, generan graves problemas de agua-aire-suelos –escasez o contaminación– y rompen los ciclos biológicos. Se registra una tendencia a la desterritorialización y desintegración social. Las comunidades pierden acceso a ciertas zonas de producción y la presencia extractiva fomenta la migración campo-ciudad y los movimientos internacionales de población. La redefinición de los territorios es consecuencia de la intervención vertical de las empresas. La desintegración comunal genera espacios locales transnacionalizados.

El nuevo extractivismo adquiere vida e interviene en las comunidades, pueblos y regiones donde se instala; engendra conflictos sociales y provoca divisiones. Pero también busca generar adhesiones a través de la corrupción, de contratos directos y dádivas u ofertas a individuos y comunidades particulares. Bajo la forma de acción social empresarial, apuntan a dividir a la población, a fin de lograr legitimidad para acallar a los sectores que se les oponen. Las empresas desarrollan vínculos estrechos con universidades e instituciones; hacen donaciones a escuelas y a clubes deportivos. Reorientan la actividad económica y se convierten en agentes de socialización directa con acciones sociales, educativas y comunitarias para conseguir un control general de la producción y reproducción de la vida de las poblaciones.

El extractivismo está promoviendo una completa reestructuración de las sociedades y de los Estados de América Latina. Aunque se les llame “reformas estructurales”, estamos ante cambios que ponen en cuestión algunas realidades de las sociedades, como el proceso regresivo en la distribución de la tierra y territorio. Esto es válido para países progresistas y para la ortodoxia neoliberal. La incipiente representación electoral se mercantiliza y debilita aún más y en los espacios del extractivismo deja de existir. Los Estados se subordinan a las grandes empresas al punto de que los pueblos no pueden contar con las instituciones para protegerse de las multinacionales. Las grandes empresas mineras, sojeras y de especulación urbana vulneran la soberanía de las naciones. A través de intervenciones

políticas, modifican las legislaciones, al punto que fuerzan a los Estados a otorgar importantes beneficios fiscales a las empresas, garantizar sobre precios y la estabilidad de las ganancias, y eximir las del pago de impuestos, derechos de importación y otras obligaciones que rigen para los ciudadanos. Colocan a los países en situación de desamparo, lo cual implica el fin de las soberanías (Sandoval, 2015).

Silvia Frederici se expresa en el análisis a nivel global. Revisa lo que ocurre en Europa Oriental, Occidental, en América Latina, Oceanía, Asia y África. El centro estratégico de la acumulación primitiva lo ha conformado el mundo colonial, mundo de plantaciones, esclavismo y de haciendas serviles: históricamente, el corazón del sistema capitalista. Es estratégico porque su reestructuración ha proporcionado los cimientos y las condiciones necesarias para la reorganización global del mercado de trabajo. Ha sido aquí, de hecho, donde hemos sido testigos de los primeros y más radicales procesos de expropiación y pauperización y de la desinversión más ingente del Estado en la fuerza de trabajo.

Poblaciones enteras se han visto desmonetizadas, al mismo tiempo que se les han arrebatado las tierras para concedérselas a proyectos gubernamentales o a inversores extranjeros. La población objetivo de esta desposesión se ha convertido en sujeto de una nueva diáspora, que arroja a millones de personas del campo a las ciudades, que cada vez más se asemejan más a campamentos de miserables. Esta descripción hablaría de un planeta de guetos y de un régimen de *apartheid* global.

Mediante la deuda y el ajuste estructural, los países de la periferia se han visto obligados a desviar la producción alimentaria del mercado doméstico al mercado de exportación, convertir tierras arables y cultivables para el consumo humano en terrenos de extracción mineral, deforestar tierras, y convertirse en vertederos de todo tipo de desechos así como en campo de depredación para las corporaciones cazadoras de genes. Por tanto, concluimos que en los planes del capital internacional existen zonas del planeta destinadas a una reproducción cercana a cero. De hecho, la destrucción de la vida en todas sus formas es hoy tan importante como la fuerza productiva del biopoder en la estructuración de las relaciones capitalistas. Dicha destrucción se dirige a adquirir materias primas, *desacumular* trabajadores no deseados, debilitar la resistencia y disminuir los costes de la producción laboral.

La reproducción de la fuerza de trabajo mundial parecería no tener límites. Se refleja en los millones de personas que frente a la necesidad de emigrar se arriesgan a enormes dificultades y a la perspectiva del secuestro, de la muerte o la cárcel en todo su recorrido. Ciertamente la migración no es sólo una necesidad, sino también un éxodo hacia niveles más altos de resistencia, un camino hacia la reapropiación de la riqueza robada. Esta es la razón por la cual la migración ha adquirido un carácter tan autónomo que dificulta su utilización como mecanismo regulador de la reestructuración del mercado laboral. Pero no hay duda alguna de que si millones de personas abandonan su país hacia un destino incierto, a cientos de kilómetros de sus hogares, es porque no pueden reproducirse bajo las condiciones necesarias.

Frederici también escudriña en las causas de la crisis capitalista desde su interrelación global y la indiferencia de la clase capitalista internacional frente a la pérdida de vidas que produce el capitalismo, prueba de que el capital ya no necesita el trabajo vivo. Más cuando, en realidad, violencia y la destrucción a gran escala de la vida ha sido un componente estructural del capitalismo desde sus inicios, como necesaria contrapartida a la acumulación de la fuerza de trabajo, acumulación que inevitablemente supone un proceso violento. La recurrente crisis reproductiva se encuentra enraizada en esta dialéctica de acumulación y destrucción de trabajo.

También la expansión del trabajo no contractual y otros fenómenos que deberían ser considerados como abominaciones en un “mundo moderno” –como las encarcelaciones masivas, el tráfico de sangre, órganos y otras partes del cuerpo humano– deben leerse dentro de este contexto. El capitalismo promueve una crisis reproductiva permanente. Si esto no ha sido más visible, al menos en muchas partes del Norte global, es porque las catástrofes humanas que ha causado han sido en su mayor parte externalizadas, confinadas a las colonias y racionalizadas como un efecto de una cultura retrógrada o un apego a tradiciones erróneas y tribales.

Pero observado desde el punto de vista de la totalidad de las relaciones capital-trabajo, este desarrollo demuestra el esfuerzo continuo del capital de dispersar a los trabajadores y minar los esfuerzos organizativos de los obreros dentro de los lugares de trabajo. Combinadas, estas tendencias han abolido los contratos sociales, desregulado las relaciones laborales y reintroducido modelos laborales no contractuales. Con ello, han destruido los resquicios de Nos recuerda que la producción de poblaciones sin derechos

—esclavos, sirvientes sin contrato, peones, convictos— permanece como una necesidad estructural de la acumulación capitalista. El mundo no puede estar peor. La competición por el empleo es dura, y las relaciones sociales son cada vez más estériles. La inestabilidad impide la construcción comunitaria.

No sorprende, pues, que entre las consecuencias sociales de la reestructuración de la reproducción, hubiera un incremento del número de suicidios juveniles, así como un repunte de la violencia contra las mujeres y los niños, incluyendo el feminicidio y el infanticidio. Es imposible, entonces, compartir el optimismo de aquellos que, como Negri y Hardt, han argumentado en los últimos años que las nuevas formas de producción creadas por la reestructuración global de la economía ya proveen la posibilidad de formas más autónomas y más cooperativas de trabajo.

Resistencias y movimientos sociales en el Sur contra el Estado colonial

En los países de origen colonial no se dio una homogeneización de la población en términos de experiencias históricas comunes. El Estado apenas adoptó la forma de poder público impersonal y no hubo una inclusión de la sociedad que pudiera sentirse representada en un Estado. Las relaciones sociales se fijaron sobre bases coloniales, encima de un modo de producción colonial y superponiendo la idea de raza, convertida en el factor básico de la llamada colonialidad del poder en la construcción del Estado-nación. Quedarse sólo con la idea de raza, como lo hace Quijano, es dejar de lado, entre otros temas fundamentales, el debate sobre el imperialismo y el carácter instrumental o no del Estado. También queda de lado la peculiaridad de un patrón de acumulación basado en la violencia, el despojo y el desborde de las actividades subrepticias que ilegítimamente violentan los territorios y las comunidades que los habitan, con el creciente imperio de la violencia estatal, paraestatal y criminal. La economía es cubierta por una legalidad mercantilizadora y el Estado por una débil legitimidad construida por escasos consensos. Brasil nace como colonia de población y al mismo tiempo los poderes coloniales se instalan sobre ella.

La función estatal de garante del interés general, cuando el Estado aparece colocado por encima de las clases, se reduce cada vez más. Caen los

feiches y organizarlo de manera representativa con elecciones y contrapoderes se vuelve una ficción. La ciudadanía no decide; sus supuestos representantes lo hacen para ellos mismos. El pueblo vota cada vez menos, pues el Estado de derecho es más inservible que antes. La libertad se ha reducido a los privilegiados y la denominada democracia sólo ejecuta la voluntad del poder. De este modo, la filosofía liberal queda vaciada de contenido. De allí que la emancipación humana sea una noción que adquiere cada vez más fuerza al promover una sociedad justa, libre de poderes y dominaciones, orientada a la igualdad, a la autodeterminación, a las autonomías, a la emancipación, al respeto de la dignidad, al reconocimiento y a una vida digna para todos.

Lo permanente es la apropiación de la praxis social por el capital que tiende, así, a transformar a las personas en simples ejecutantes de prácticas cuyos pormenores se tornan oscuros u opacos para su conciencia. Por otra parte, la praxis social no puede vivir sin ellas en cuanto agentes efectivos de esas mismas prácticas. Requiere del control de estas últimas, con lo que eso supone de iniciativa, de libertad, de creatividad. Por eso, la apropiación de la praxis social tiende a extenderse a toda la vida social, agravando la contradicción entre heteronomía y autonomía, entre privación e involucreamiento, que es inherente a su momento central: la apropiación capitalista del proceso de trabajo. No es posible concebir una sociedad, vista como relaciones y prácticas sociales, sin hombres que controlen el hacer. Ello marca la imposibilidad de una sociedad integralmente capitalista, completamente sometida a las exigencias de la reproducción del capital.

En Latinoamérica, los sujetos son, como la estructura a la que pertenecen, irreductiblemente diversos y heterogéneos. No puede sentirse reflejados en un partido o en un Estado, en homogeneidades forzadas desde arriba. Los movimientos que construyen son distintos a los viejos aparatos sindicales: centralizados, con una férrea división/separación entre base y dirección, con jerarquías de funcionarios (o sea, características bien parecidas a las que tienen las instituciones estadocéntricas). Se agrupan en un bloque social, algunas veces muy complejo, de alianzas jerarquizadas entre diferentes clases, fracciones, capas o categorías sociales racializadas, algunas veces rivales entre ellas. Estas alianzas se constituyen bajo la dirección de aquella que ocupa una posición hegemónica; y donde la unidad se asegura por imitaciones de partidos, una red de organizaciones y por una ideología común.

Los sujetos descolonizadores y emancipadores rehúyen la uniformidad. Para que las heterogeneidades y diversidades se sientan incluidas, establecen formas de coordinación flexibles, tan laxas que, muchas veces, los analistas de arriba no aciertan a identificar. En la experiencia de Brasil, la generación de movimientos otorga especial importancia a la creación de espacios donde los diversos se encuentren y se reconozcan; donde elaboren códigos y lenguajes comunes con base en sus diferentes modos de hacer y estar en el mundo. Han aprendido, no sin dificultades, que las diferencias no deben congelarse en asimetrías de poder, porque es la mejor forma de excluir, de reproducir las opresiones que conocemos y sufrimos. Destaca la importancia que los disidentes le otorgan a la autonomía y soberanía, que los regímenes progresistas se han encargado parcialmente de mutilar. Mientras que los otros, más cercanos a la Alianza Pacífico, prefieren la violencia saqueadora y represora. Colombia, Perú, Chile y México son muestras de militarización de la gestión pública.

No puede haber una descolonización en general; debe ser en corto, directa, en el territorio, sin mediaciones ni instituciones. Debe construir poder propio. La descolonización es un proceso extendido en el tiempo. No puede ser breve. Es un proceso ininterrumpido de rupturas hacia afuera y hacia adentro. La descolonización y la emancipación no tienen un punto final; son un horizonte de transformación colectiva e individual, material y simbólica.

En las últimas tres décadas, todas las relaciones sociales, y en particular las que atañen al Estado, se han reconfigurado profundamente a nivel global, modificando, estructuras, sujetos, dinámicas, movimientos y fuerzas. La expansión capitalista neoliberal —acompañada de la financiarización, el saqueo y la corrupción— afecta la complejidad del Estado, su capacidad de intervención social, sus disputas internas y correlaciones de fuerzas, sus formas de dominio donde dejan de intervenir viejos sujetos y aparecen nuevos tipos de actores, de acciones y procesos, de fenómenos e impactos múltiples y diversos. Pero será en los tres lustros del siglo XXI que se profundiza el extractivismo y se modifican una vez más los contextos de dominación y resistencias. Con la caída de los precios de las materias primas, que afectó a las economías nacionales, otra vez se incrementan los conflictos sindicales y los derivados de expectativas frustradas.

Los países sudamericanos están reprimarizados, mineralizados, *hidrocarbúricos*, *soyanizados*. Los territorios pasan a manos de las transnacionales;

pero en un ciclo que termina en mejores precios, ni siquiera se logró una redistribución del ingreso duradera, y menos integración. Los movimientos fueron sujetos por los Estados. Indígenas, piqueteros, ocupadores de fábricas, ahora son reemplazados por los ambientalistas, las autodefensas, la criminalización de los luchadores. Los crímenes del sicariato de políticos y narcopolíticos se extiende por doquier. Los movimientos sociales quedaron satisfechos con los escasos nuevos derechos, y apenas responden a las agresiones gubernamentales. La tragedia sociambiental erosionará las bases ecológico-territoriales de la soberanía política y la extranjerización del aparato productivo. También desintegrará las cadenas productivas, las cuales van destruyendo las condiciones de vida, creando aun débiles resistencias articuladas.

Con el neoliberalismo se actualizó la polarización colonial en el nuevo escenario geopolítico global. Afectó la capacidad de los Estados y trabajadores latinoamericanos de tomar las decisiones más relevantes. Con la reactualización del extractivismo, se impuso la expropiación territorial, el modo de producir colonial, la pérdida de soberanía y el fin de la formal democracia liberal que se reduce a elecciones intervenidas por los ejecutivos. El declive interno del poder imperial potencia su agresividad internacional y la imposición de la guerra para mantener un poder político y económico que ahora pasa a formar parte de (y se sustenta en) la reproducción de redes de poder global imperiales, empresariales y financieras.

Se constituyen grupos tecnocráticos y burocráticos extranjeros y nativos, mediadores, *lobbyistas*, con intereses específicos dentro de los Estados. Estos últimos están interconectados con grupos económicos locales, empresas transnacionales, agencias multilaterales, narcotraficantes, entre otros. En esta forma de activación y despliegue espacial y territorial del poder, se desnacionalizan y corrompen los Estados y se reproducen las articulaciones social y geográficamente asimétricas que se cristalizan en una polaridad global. Más aún con la participación de la narcoeconomía en la configuración de la narcopolítica.

En este nuevo siglo, el formato emancipatorio de muchos partidos y movimientos se mantuvo en el del siglo XX con nuevos sujetos (indígenas, campesinos, pobladores, ciudadanos) y se redujo, en general, al referente Estado, objetivo central por controlar en tanto supuesta herramienta para cambios descolonizadores, anti-imperialistas, constructores de derechos o directamente visualizándolo como núcleo para el desarrollo de una socie-

dad no capitalista. En el seno de varias luchas sociales transformadoras durante buena parte del siglo XX el Estado-nación fue visto como expresión de dominación de clase y como organización sociopolítica transitoria.

También se vio como agente autoritario, jerárquico y de control social ante las luchas autónomas y libertarias. Sea como espacio por conquistar para su posterior disolución y construcción del socialismo, sea como enemigo frontal, el Estado se ha visto, en las teorizaciones abarcadoras más consistentes sobre el tema, como proceso y como relación social o como relación objetiva de poder. Estas fuerzas y procesos específicos están anclados en el espacio, tomando en cuenta la particularidad de los lugares y las implicaciones de la territorialidad del Estado, asociadas con su soberanía y en la historia de sus transformaciones en diferentes momentos constitutivos.

Desde fines del siglo XX, con la llegada del presidente Chávez al Gobierno de Venezuela, la opción electoral volvió a tener una aparente centralidad estratégica. Se desataron triunfos populares electorales en gran parte de Latinoamérica. Sin embargo, en los tres lustros transcurridos de este siglo, la experiencia progresista desde varios gobiernos apenas ha logrado rasguñar las estructuras fundamentales del poder y así se han desmontado los discursos sobre el Estado plurinacional, ambientalistas y del buen vivir, de los derechos humanos y de la naturaleza, de la integración desde abajo, etcétera.²²

²²⁵⁵ La crítica de Bihl a Mandel nos ayuda a entender el Estado capitalista y la particularidad de los estados coloniales. “Me parece que las tesis de Pashukanis proporcionan una explicación más completa de la autonomía relativa del Estado capitalista. Sin excluir para nada esta función de síntesis institucional de los intereses colectivos de la clase capitalista como tal, más allá de las divergencias entre sus miembros en la competencia que les enfrenta, estas tesis muestran en efecto que dicha autonomía se basa más fundamentalmente en la relación social (el capital) a través de la que esta clase logra apropiarse de la fuerza de trabajo social, de los medios de producción y, por tanto, de la riqueza social, que supone una serie de actos de intercambio mercantil y de relaciones contractuales, mediatizando tanto las relaciones entre sus propios miembros como las relaciones entre estos últimos y los miembros de las clases dominadas (trabajadores)... Sobre todo, contrariamente a la oposición un tanto escolástica entre ‘capitalista total ideal’ y ‘capitalista total real’. Las tesis desarrolladas por Pashukanis permiten comprender qué forma adopta esta autonomía (relativa) del Estado capitalista con respecto a la clase capitalista: precisamente la de un poder público impersonal, formalmente distinto no sólo de la clase capitalista, sino de todas las clases sociales y más en general de todos los sujetos privados, individuales o colectivos. Pashukanis aclara de este modo una paradoja sorprendente de la sociedad capitalista: el Estado adopta en ella

Bringel y Falero (2014) señalan algunas de las razones globales de la actualización y debilitamiento del Estado latinoamericano en relación con el proceso de transnacionalización: 1) Las nuevas Constituciones que legalizan el creciente peso de las empresas transnacionales u oligopólicas locales y su capacidad para generar dependencia, definir cursos de acción de los gobiernos o lograr excepciones en el territorio de los Estados; 2) Incremento del poder de los organismos multilaterales y de determinadas agencias globales (como las calificadoras de riesgo o Transparencia Internacional) para (re)dirigir la política económica y para incidir en la gestión pública; 3) Firma de tratados asimétricos de protección de inversiones que limitan el curso de acción de los gobiernos, principalmente aquellos de regiones periféricas que suscriben acuerdos con los países y regiones centrales de acumulación global.

De acuerdo con ellos, esto lleva a la emergencia de nuevos formatos de relación entre movimientos y Estado; pero también, muchas veces, a una mayor desconexión entre los movimientos sociales y el resto de la sociedad. Ello ocurre principalmente cuando muchos de ellos dejan de lado el trabajo de base para volcarse principalmente en la incidencia política en las instancias institucionales. Habría que preguntarse, de este modo, hasta qué punto el mayor foco de los movimientos en la presión política hacia los Estados o su sometimiento a ellos, supuso un retroceso en su acumulación de fuerzas locales y en la constitución y reproducción de sus bases sociales, o si, por otro lado, se trató de una estrategia articulada en planos diferenciados de acción política.

En las entrevistas que presentamos aparecen desde luchas vinculadas con el trabajo hasta aquellas entre los de arriba y los de abajo. Muy lentamente y con dificultad, reaparecen los combates provenientes de sindicatos o de movimientos sindicales que tienen el formato básico urbano heredado del siglo XX, aunque muchas veces renovadas en nuevas hechuras que hoy se concentran en los trabajadores estatales. Conviven en este campo luchas salariales y de derechos laborales, por empleo y por la protección social con nuevas formas de lucha ligadas a empresas recuperadas, reivindicaciones sobre el trabajo rural basadas en cooperati-

una forma –la de poder público impersonal– que contradice directamente su contenido de clase, es decir, su función general de aparato al servicio de la clase dominante, encargada siempre y en todas partes de asegurar la perennidad de las condiciones generales (materiales, institucionales, ideológicas) de su dominación” (Bihl, 2015).

vas, luchas por asuntos concernientes a la vida cotidiana y de resistencia ante el despojo, luchas ecologistas, entre otras. Se incluye también aquí las luchas del precariado y aquellas vinculadas al “no trabajo” y a conseguir un techo; es decir, aquello que dio lugar a los movimientos de desocupados (el “movimiento piquetero” en Argentina) y por vivienda en varios países de la región en el marco de una profunda reestructuración (regional y global) del conflicto laboral. Hoy en día se habla de las “luchas de resistencia” que corresponden a un carácter defensivo en la correlación de fuerzas en el periodo actual, factor que no niega la posibilidad de construcción de nuevas alternativas de transformación social. Es más, en la actualidad, el imperialismo y sus aliados internos arremeten de manera violenta contra los pueblos del mundo, en particular contra las naciones oprimidas y poblaciones indígenas y afrodescendientes. Han ido desde el saqueo de recursos, pasando por una mayor explotación del trabajo por medio de las reformas laborales, por las agresiones militares, intervenciones en golpes de Estado e intervenciones de todo tipo con asesores, contratistas, financiación, hasta la imposición de una supuesta racionalidad más avanzada en contra de otras culturas para el control ideológico y la pretensión de monopolizar el conocimiento por medio de las patentes. Además, recurren a una mayor criminalización de los pueblos que resisten, tachándolos de “terroristas” para justificar sus genocidios. Destaca la embestida económica contra gobiernos “progresistas”, que los desafían, por la vía financiera o desde el control del intercambio a través del sabotaje.

En oposición a esta arremetida, encontramos una diversidad de manifestaciones de resistencia del pueblo contra el imperialismo y sus aliados: resistencias armadas en retroceso, movimientos sociales contra la globalización, los tratados de libre comercio y las privatizaciones, hasta los movimientos ecológicos, de desempleados y de género, las resistencias indígenas de los precarios. Encontramos hasta campañas de resistencia contra el consumo de mercancías imperialistas, en las cuales además se expresa su rechazo por la financiación de grupos paramilitares y diversos tipos de traficantes.

En Buenos Aires, al comenzar el siglo XXI, los pobladores se lanzaron a las calles para conformar asambleas barriales. A pesar de que inicialmente fue un fenómeno puramente capitalino, el movimiento se extendió a otros lugares del país. Esto muestra que ante la alianza desembozada de

los gobiernos de las naciones oprimidas con el imperialismo, los pueblos se han movilizado hasta llegar al punto de expulsar presidentes: en los últimos años, han caído gobiernos en Argentina, Ecuador, Bolivia, Perú y Guatemala, pero sin resultados emancipatorios.

Lo cierto es que en los hechos encontramos una diversidad de formas de lucha y de organización del pueblo en los procesos de resistencia. En toda esta situación de diversidad de la resistencia del pueblo, y ante la condición actual, es fundamental que el pensamiento político sea repensado desde la práctica, desde la experiencia de los luchadores de abajo que combatieron, acompañaron o se colocaron al frente de los procesos de transformación social y comprendan juntos dicha realidad para poder darle mayor perspectiva a los actuales procesos de resistencia.

Dos temas que siguen en debate tienen que ver con la relación entre imperialismo y resistencias y entre estas últimas y uso de la violencia frente a otras violencias. El imperialismo –al igual que el capitalismo en general– debe ser permanentemente combatido, pues conduce al establecimiento de bases, a intervenciones, anexiones, a la intensificación de la opresión nacional y, por consiguiente, también a la acentuación de la resistencia. De ahí la importancia que no deja de cobrar el pensamiento de Fanon o de José Carlos Mariátegui. La resistencia en las naciones oprimidas por el imperialismo es una constante. Se da por la agudización de las contradicciones sociales. Dicha situación puede expresarse como estacionaria o en desarrollo. Además, desde el punto de vista histórico, se puede hablar de periodos de auge o de repliegue. Los procesos de resistencia y los de liberación nacional no son mutuamente excluyentes; en un periodo histórico, uno de los aspectos se presenta como principal.

En las décadas anteriores el pueblo conquistaba reivindicaciones económicas y políticas, y se tenía como máxima su ascenso al poder. En la época actual domina la controversia, se lucha principalmente por no perder algunos de los derechos ya adquiridos y por mejorar la vida cotidiana. De hecho, una situación temporal cuya superación depende de los sujetos que intersubjetivamente creen consensos emancipatorios. Estar preparados ante un aumento del caos o la presencia de una crisis económica en un país o en el sistema imperialista o de hechos revolucionarios como el surgimiento de un gobierno que enarbole un programa revolucionario y transformador.

En el caso particular de los pueblos de América, el concepto de resistencia está en la historia. Existe desde la resistencia de los pueblos originarios contra la barbarie de la conquista, hasta el rechazo de las actuales medidas institucionales que buscan arrasar violentamente con los pueblos física y culturalmente por sus riquezas, basados en tratados militares o de “libre comercio”. Para entender a qué se está refiriendo cuando se habla de un periodo de resistencia, es necesario diferenciar entre guerra de resistencia y luchas del pueblo como resistencia. La guerra de resistencia corresponde al momento de una invasión directa de un país imperialista a una nación. En general, la resistencia al imperialismo es una actividad que corresponde a los pueblos. Pero caracterizar las luchas del pueblo como “de resistencia”, corresponde a un carácter defensivo en la correlación de fuerzas de la lucha de clases en un periodo determinado. Sin embargo, decir que la resistencia corresponde a un carácter defensivo no niega la posibilidad de construcción de alternativas de transformación social. Al contrario, es una necesidad. La resistencia corresponde a una fase de la lucha de clases, en particular en momentos de repliegue de la revolución, donde caben múltiples manifestaciones. Algunas de ellas pueden ser de carácter espontáneo o con propósitos inmediatos.

Por una parte, no debemos evadir el debate acerca de la violencia, precisamente por que cualquier intento emancipatorio tendrá una violenta respuesta. Y por otro lado, que hace el pueblo ante la violencia de la imposición capitalista para imponer el despojo, el saqueo, la opresión, la destrucción? Es por ello que se debe relacionar la resistencia con el concepto de violencia revolucionaria, principalmente ante la violencia desde el poder, pues hay quienes separan la resistencia de las manifestaciones de violencia. La resistencia popular es una sola, y puede ir por vías pacíficas o violentas. En este último caso, no se puede reducir la violencia sólo a la lucha armada y/o al poder, pues la resistencia está integrada tanto por lo armado como por las acciones de las masas con el recurso a la violencia. A su vez, la resistencia civil puede contemplarse como violenta o no violenta.

Sobre esta última, podemos mencionar la desobediencia al pago de impuestos, las huelgas de hambre, las marchas del silencio, el no consumo de mercancías imperialistas, o las jornadas de trueque comercial, etc. En una condición concreta, una forma de resistencia es la principal, sin que por ello se excluyan las demás. En síntesis, caracterizar las luchas del

pueblo como “de resistencia”, implica que éstas tienen un carácter amplio, diverso, y pueden o no estar en función de proyectos revolucionarios. A su vez, alberga diversas formas de organización, de lucha y de presencia de las clases sociales.

En Brasil, algunas experiencias de los movimientos de resistencia tienen como fin la solución inmediata de problemas concretos de un sector de la población. Otras pugnan por reivindicaciones específicas, sin que se interesen por una transformación total de la sociedad. Tal es el caso de los movimientos ecológicos, feministas, étnicos, campesinos o el llamado “movimiento antiglobalización”. Estos son procesos sectoriales y limitados; mas no por ello dejan de ser importantes. Sólo parcialmente son espontáneos, pues encierran en sí mismos el germen de lo consciente. A su vez, la educación política es importante para darle perspectiva al movimiento y elevar la conciencia política del pueblo.

Las resistencias espontáneas cada vez son menos y tienen un límite político que podría llevarlas al fracaso con gran facilidad. Aun así, el asalto a la reproducción no ha pasado incontestada. La resistencia ha adoptado diferentes formas y muchas de ellas se han mantenido en la sombra hasta que se han convertido en fenómenos de masas. En todo el mundo, están creciendo los movimientos, desde los años noventa pero son discontinuos. Han desafiado todas y cada una de las facetas de la globalización —mediante manifestaciones masivas, ocupaciones de tierras, construcción de economías solidarias y de otros métodos de desarrollo de los comunes—, más importante todavía es la expansión de levantamientos masivos prolongados y movimientos en la estela *Occupy*, que han barrido gran parte del mundo. Los de abajo se movilizan de nuevo, y una nueva generación se dirige a las plazas decidida a reclamar su futuro, eligiendo formas de rebelión que pueden tender puentes entre las principales brechas sociales. Esta sería una primera forma de influir en el cambio: agudizar el derrumbe, potenciar el caos. Un periodo de perturbaciones es doloroso, pero puede también ser productivo. Más aún: la transición a un nuevo orden será siempre dolorosa, porque somos parte de lo que se derrumba. Pensar en transiciones lineales y sosegadas es un tributo a la ideología del progreso.

Si no se le da perspectiva emancipatoria y se buscan consensos rebeldes a esta diversidad de movimientos, se corre el riesgo de que el capital recicle, absorba y utilice algunas manifestaciones de rebeldía, como la disputa por el rescate de las artesanías indígenas, que son imitadas y mercantiliza-

das con gran facilidad, así como el acervo de medicina natural, o las experiencias de las escuelas agroecológicas, que pueden terminar comercializando sus productos dentro de la moda de productos *limpios* o *ecológicos* en boutiques o absorbidos por grandes empresas. Por la falta de organización y coordinación de las luchas del pueblo, se da el caso que los regímenes reaccionarios manipulan a las masas, buscando su enfrentamiento, como en los asuntos en los cuales se atizan contradicciones entre empleados y desempleados, o entre ambientalistas y trabajadores, a pesar de que ambos sectores sociales son explotados por el mismo sistema capitalista.

No obstante,, a pesar de dichas limitaciones, hay valiosos aportes de las actuales manifestaciones de resistencia. Entre ellas, se puede resaltar la diversidad organizativa y variadas formas de lucha que se mencionan en las entrevistas. Hay aportes a la construcción de experiencias económicas, políticas y culturales ante el deterioro de la vida cotidiana y las agresiones externas: comedores populares, cooperativas de autogestión, redes de trueque comercial, formas de poder popular como pautas de control territorial, autodefensas, rondas, defensa ante el despojo o la destrucción medio ambiente.

Todo esto muestra tanto la posibilidad como la necesidad de construir nuevas formas de relaciones. Si no se le da una perspectiva política emancipatoria a estas ricas experiencias, el poder puede absorberlas. Sin tal perspectiva, tienen un límite en el tiempo y en su desarrollo. Los actuales procesos de resistencia han mostrado nuevos aspectos y reivindicaciones, que desde miradas liberales o esquemáticas de la izquierda no se habían desarrollado en otros procesos de transformación social.

Queda la pregunta de si es necesario y posible o no establecer un puente entre estos procesos de resistencia. Entre la lucha por el poder político y la construcción del poder desde abajo. Se presentan en la actualidad posturas especulativas que consideran que no hay que hacerlo; que basta con resistir a situaciones inmediatas. Otros proponen el antipoder construido desde abajo y que incluso, se dice que es posible generar poder desde lo puramente cotidiano. En la época actual, se valorizan los procesos con una dinámica esencialmente local y regional, donde no se busca el poder, sino la sola oposición al poder.

Es decir, algunos proyectos han dejado de lado la visión tradicional de la izquierda en cuanto al poder, en la cual se aspiraba a la toma del poder central para poder decidir desde allí la suerte de toda la nación. Se dividían

entre quienes proponían la lucha armada y quienes optaban por la lucha electoral. Desde otra perspectiva, se planteaba construir el poder tomando como punto de partida y de acción las instancias locales y regionales de organización popular. Otros daban relevancia al poder local, donde los procesos de resistencia están avanzados, para ir no sólo sentando bases para los procesos de transformación, sino para ir prestando atención a la solución de los problemas concretos de las masas.

Los críticos del antipoder consideran que para superar la actual fase de resistencia del pueblo, se requiere no perder la perspectiva del poder político. Y recomiendan que los dirigentes de dichos procesos y los pueblos no excluyan experiencias anteriores y actuales de la práctica por la transformación social. Decir que estamos en un periodo de repliegue de la revolución a nivel mundial, y que las luchas actuales del pueblo se caracterizan principalmente como resistencia, conlleva consecuentemente a apoyar sus diversas manifestaciones, utilizar todas las formas de lucha y a proyectarlas para el avance de los procesos de transformación.

Las luchas vinculadas con la transformación del Estado no siempre van más allá de lógicas electorales y de reformas políticas, algunas las pueden contener pero relacionadas con el siempre efímero poder constituyente. Primero estarían las luchas por construir nuevos tipos de Estado distintos a los Estados-nación, como los Estados plurinacionales. También están las luchas por la autonomía o la autodeterminación de regiones, el pluriculturalismo o la intraculturalidad y el buen vivir; otros mas agregaran los plebiscitos y referéndums. Hoy, particularmente, los movimientos indígenas tienen como bandera central la descolonización y la transformación estructural de la forma Estado tal y como se conoce en la modernidad en Bolivia y Ecuador. Estas luchas suelen estar acompañadas de un ciclo rebelde que, a su vez, desemboca en dinámicas instituyentes propulsoras de nuevas constituciones políticas. Sin embargo, terminan con reformas mínimas, cooptación estatal de los movimientos y la continuidad conservadora neoliberal.

Otras mas son las luchas vinculadas con derechos sociales y políticos parecen fundamentales para la profundización del proceso de democratización política y social de América Latina. Tienen un fuerte sentido de lo público y de apuesta democratizante frente a crecientes proyectos de conversión mercantil de los derechos, como las luchas estudiantiles de Chile o las luchas más recientes en Brasil en el 2013 por el transporte urbano.

Si miramos las demás luchas de manera transversal vemos también cómo emergen derechos de nuevo tipo, como el derecho a la alimentación y la soberanía alimentaria.

Hay luchas vinculadas con la reproducción de la vida, la memoria y la identidad. De manera paralela, y a veces convergente con el eje anterior, se incluye aquí un amplio abanico de acciones desplegadas por “verdad y justicia” ligadas a organizaciones de derechos humanos: la recuperación de la memoria y derechos de reconocimiento y de identidad, incluyendo la libertad sexual, la identidad sexual y el matrimonio homosexual, la interrupción voluntaria del embarazo o contra la violencia de género.

Las prácticas de resistencia solo activan la lógica normativa del neoliberalismo y caracterizan al Brasil del siglo XXI: formas cooperativas y colaborativas de producción, consumo, salud, educación o hábitat que surgen en ámbitos diversos, nuevas prácticas democráticas que emergen de la lucha misma, comunidades activas en formación. El difícil compromiso voluntario en una práctica colectiva democrática es el único medio para los individuos de vivir al abrigo de las enormes presiones mercantiles, las ofertas clientelares estatales, las presiones competitivas y las obsesiones del tener “siempre más”. No obstante, muchas veces las demandas son retomadas o gestionadas por los Estados de modo mixto (Estado-movimientos) e incluidas en las teorías del BM o el PNUD. Con ello, terminan subordinadas a la lógica del *statu quo*. En México existe una larga experiencia.

Sin embargo, creemos que las luchas más importantes del actual momento histórico son la del territorio y los recursos naturales. Son absolutamente centrales en la América Latina contemporánea, estas luchas de base territorial, resultando en conflictos y antagonismos que abarcan ejes como la biodiversidad, la minería, el extractivismo con despojo, el agua o la construcción de infraestructura. En su defensa de los bienes comunes, disputan los sentidos y los modelos de desarrollo. Cuentan con una gama de actores, como por un lado el Estado, los medios, los viejos y nuevos oligarcas nativos (ahora asociados a intereses transnacionales diversos) y por otro los pueblos, los grupos étnico-clasistas, los de abajo, quienes defienden su sobrevivencia.

La actuación de empresas transnacionales y diferentes lógicas de intervención directa del capital en los territorios suelen ser blanco de luchas por la defensa de la tierra, la producción comunitaria, la pequeña y mediana agricultura alimentaria y por el territorio. Luchas reactivas y localizadas

de perjudicados por presas hidroeléctricas, por empresas específicas, infraestructura y carreteras, por la minería transnacional. Son movimientos más articulados con una dimensión local o regional.

La presencia de un conflicto central en nuestras sociedades, enmarcado por los movimientos sociales durante buena parte del siglo XX, puede conducir a la generación de un proyecto de sociedad con capacidad de agregación. Principios de unificación son posibles, pero siempre considerando el respeto por este marco general de diversidad de conflictos y actores, que transcurre de forma paralela a un cambio más amplio, de carácter sociocultural y generacional. La conflictividad social va creciendo en intensidad y extendiéndose más allá de los movimientos enunciados, principalmente los indígenas y socioambientales. Se convierten en antagonismos polarizados bajo formas violentas de confrontación.

Considerando las escasas diferencias entre gobiernos neoliberales y progresistas, es necesario abordar los procesos entendidos dentro de ciclos políticos, pero también a partir de las nuevas experiencias y la lógica de posicionalidad que ocupan en diferentes momentos los sujetos. Todas las gestiones de gobierno en la región que pueden encontrarse en el proceso sociopolítico combinan dinámicas de consenso y coerción, autoritarismo selectivo y violencia extendida en el tejido social, gestión empresarial con o sin intento de transformación de la forma Estado heredada y con ambivalencias y tensiones maleables con los movimientos sociales. Se ha entrado en un período de conflictividad y bloqueos importantes que actúan como freno a la potencialidad de otras transformaciones más profundas. Esto se traduce en la violencia de Estado y en la represión expuesta o invisibilizada, que puede ser esporádica, complementaria o selectiva o masiva. La forma en que esta gestión despliega hoy la capacidad de coerción tiene más bien un carácter acotado o selectivo.

Se habló de resistencia desde las acciones producidas por pueblos y comunidades que en países colonizados lograron confrontar al invasor y mantener condiciones básicas de sus culturas. En ese período, la discusión teórica y política se centró en la contraposición reforma o revolución. Dentro del marxismo y las corrientes políticas que lo adoptaron, produjo una gran polarización. La crisis del socialismo de los países de la Europa del Este, cuyo mayor símbolo fue la caída de la Unión Soviética y del Muro de Berlín, la muerte de Mao y el periodo especial en Cuba, desplazó este tipo de confrontación teórica e ideológica.

El anuncio del fin de la historia, del fin de las ideologías y grandes narrativas y del fin del trabajo y la supuesta culminación en la totalizante sociedad capitalista tuvo su contraparte en las ideas posmodernas, posmarxistas y en las movilizaciones de organizaciones y movimientos sociales en el mundo. Reivindicó la resistencia a la dominación del capitalismo en su expresión neoliberal, dando cuenta de las contradicciones y antagonismos que encerraba en su seno un sistema agotado.

Resistencias y movimientos sociales produjeron una articulación tanto práctica como teórica en las diferentes aproximaciones que se elaboran para su análisis. América Latina se convirtió en pionera de estas experiencias. Sin embargo, en su forma más concreta, se produjo en las acciones colectivas de movimientos sociales que posibilitaron el acceso a algunos de sus gobiernos, como en los casos de Venezuela, Bolivia y Ecuador. Los gobiernos se distancian de los pueblos al adoptar acriticamente el modelo neoliberal pero se mantiene entre algunos intelectuales la defensa del fetiche del progresismo.

Los foros internacionales sólo alimentaron el reformismo, como es el caso del Foro de São Paulo. Las filosofías latinoamericana y de liberación, ética y teología de la liberación, la decolonialidad, la poscolonialidad, los estudios subalternos y algunas corrientes del marxismo tomaron fuerza dentro de esta perspectiva. Así y todo, los movimientos sociales de América Latina, aunque divididos, aún marcan las pautas políticas e ideológicas respecto a los nuevos significados de las resistencias, el poder y la gobernanza.

Después de 1994 conocimos otros modos de influir en la transición, que permitirían enriquecer las consideraciones anteriores. Se trata de la creación, aquí y ahora, de un mundo nuevo; no como prefiguración, sino como realidad concreta. El zapatismo está intentando derrumbar el sistema y crear un mundo nuevo en los territorios donde se asienta. No es el mundo que imaginamos en nuestra vieja metáfora de la transición: un Estado-nación donde se construye una totalidad simétrica a la capitalista, que pretende ser su negación.

Con el zapatismo las relaciones sociales y en ellas la vida cotidiana se transforma, desde las escuelas y clínicas hasta las formas autónomas de gobierno y de producción. Cuando el caos sistémico se profundice, este nuevo mundo creado por el zapatismo será una referencia ineludible para los de abajo. Ellos piensan que tenemos por delante un panorama marcado por la perturbación, de guerras interestatales e intraestatales, que se

suman a la cuarta guerra mundial en curso del capital contra los pueblos. Algunas situaciones caóticas que se avizoran y pueden coincidir con el caos climático y sanitario en desarrollo.

En la historia, las grandes revoluciones se produjeron en medio de horrendas guerras y conflictos como reacción desde abajo cuando todo se derrumbaba. Durante la guerra Fría se difundió la idea de que los contendientes no usarían armas nucleares que aseguraran la destrucción mutua. Está naciendo una nueva metáfora de la transición posible: cuando el sistema-mundo comience a desintegrarse, generando descomposición y caos, los pueblos deberán defender la vida y reconstruirla. Al hacerlo, es probable que adopten el tipo de construcciones creadas por los zapatistas.

En medio del desconcierto, los pueblos suelen apostar por principios de orden, como algunas comunidades indígenas de nuestros días. La dispersión actual de las manifestaciones de resistencia es otra limitante, pues le quita contundencia al proceso en general. Para superar esta problemática, la coordinación de los procesos de resistencia es vital. Si, entre otras, no se resuelven estas limitantes de la resistencia actual, no puede dársele perspectiva; ello significa no superar la actual fase, en la cual la correlación de fuerzas es desfavorable a los procesos de transformación.

La resistencia pasiva asociada al zapatismo intenta crear un nuevo *ethos*. Sus defensores sostienen, que más que confrontaciones directas, las formas de resistencia cotidiana logran obstaculizar la imposición de nuevas políticas, la imposición de formas culturales y usos religiosos, etcétera, que tienden a destruir sus bases simbólicas y culturales. Sus detractores dirán que las formas de estos movimientos sociales están encapsuladas y son limitadas en la historia, espacialmente al dejar de lado la confrontación activa y directa contra la autoridad establecida.

La resistencia pasiva es una forma de resistencia quizás no tan visible, que no implica una confrontación directa con el poder establecido, pero que lo cuestiona y lo corroe por dentro para plantear un discurso de rebeldía y resistencia. Este último lo formulan los propios grupos en espacios protegidos, en espacios de sus propias culturas. A partir de ello, actúan y cuestionan el poder tanto estatal como eclesiástico. Es una forma de resistencia que reside en la interacción rutinaria entre los grupos de poder y las clases dominantes y los subalternos. Se va construyendo día a día, a partir de las actuaciones individuales y grupales, que fluyen en la renegociación constante, en los límites y la capacidad de terminar en términos generales

los propósitos de perseverar y asegurar su forma de vida. El proceso de movilización social generalizado es una forma de resistencia, por etapas y abierta.

La resistencia cotidiana es una forma de intervenir en el sistema para que haga el menos daño posible. Entonces, se deben buscar, a partir de la cultura subalterna de confrontación, espacios, resquicios e intersticios en el sistema de poder que permitan la actuación, que cuestiona constantemente al sistema de poder que intentan imponer las clases dominantes. Reside muchas veces en formas de insubordinación y evasión mucho más que de confrontación directa, que cuestiona los mismos mecanismos del poder. Requieren de una interiorización muy profunda de su diversidad cultural a partir de la cual actúan y se hacen presentes en todo momento. Implican altos niveles de impugnación del sistema establecido. Es una forma de corroer el sistema burocrático, confrontarse con él y proteger sus propios intereses. Por otro lado, en lugar de confrontar directamente al poder, tienden a huir. La deserción en masa es una forma de resistencia cotidiana, como rehusar combatir en el ejército como una estrategia de protección.

La resistencia es abierta. No hay líderes externos fuera de las propias reglas de la comunidad. Las formas de confrontación al poder establecido provienen de los líderes de la comunidad protegidos por el pueblo que los ha elegido. Reciben el bastón de mando y los símbolos primordiales para elevar los niveles de organización y de confrontación con la sociedad mayor.

Por un lado, a partir de los lenguajes ocultos, los dialectos y los símbolos, se puede generar una conciencia de otredad que permite al otro actuar en otros tiempos en una forma mucho más activa y directa; por otro lado, el silencio. El uso del silencio o la indiferencia frente al patrón, no contestar cuando le hablan, agachar la cabeza, y utilizar el lienzo como un escudo, como una forma de afrenta, permite de alguna manera hacer patente su contestación frente al otro. En estas culturas de resistencia, la familia y la mujer tienen un papel fundamental como transmisoras de costumbres, normas, lenguajes. Lo aprenden a través del acto, de la práctica. La gran capacidad creativa y el humor son otras armas en esta forma de lucha para carcomer las estructuras de poder, de manera no visible. Van creando una conciencia de posibilidad de gestación de confrontación exitosa con el

poder. Implica una gran capacidad para manejar redes amplias de comunidad, de barrio, de vecindad, que desde la familia protegen al sujeto.

Abarca períodos muy amplios. Se ven claramente procesos de resistencia anteriores a las confrontaciones activas. Amplían las nociones de temporalidad y de espacio e incluyen otros elementos. En la formación de las confrontaciones, tanto abiertas como de resistencia cotidiana, tiene mucho que ver el momento y la gran capacidad de los actores para elegir el momento correcto. El EZLN buscó el momento correcto para salir del encierro, hacer una marcha y, simbólicamente, entrar a la ciudad y al espacio legislativo. En la coyuntura electoral actual decidieron confrontar al Estado en sus espacios electorales, no para participar en esa lógica, sino para desarrollar conciencia práctica de la farsa.

La estrategia fetichista de la guerra electoral. La imposibilidad democrática en el capitalismo

Al anular una y otra vez el poder estatal, para volver a hacerlo surgir de su seno, el sufragio universal, ¿no suprime toda estabilidad, no pone a cada momento en tela de juicio todos los poderes existentes, no aniquila la autoridad, no amenaza con elevar a la categoría de autoridad a la misma anarquía? (Marx, 1980, p. 186)

La democracia, es un régimen político donde la ciudadanía posee y ejerce la soberanía, donde el poder lo tienen los pobres y ellos deciden el orden de las cosas. Es lo más cercano a lo que intenta construir el zapatismo. Los avances democráticos siempre fueron una conquista de las luchas de masas y no una concesión de los poderosos. El liberalismo representativo es el fetiche creado por las élites minoritarias políticas y económicas que al mismo tiempo que eliminan los movimientos de masas, las expulsan de la vida política activa y permanente construyen la llamada gobernanza como política oligarquico liberal. Y en esta lógica los regímenes progresistas quedaron atrapados en esos saberes y proyectos.

Beinstein presenta el liberalismo representativo del siguiente modo:

En términos prácticos [el pueblo] está obligado a decidir entre candidatos viables con chances reales de imponerse que ni siquiera necesitan seducir a estructuras políticas extendidas con sus afiliados, caudillos locales y corrientes internas o a los aparatos sindicales. Su viabilidad depende de su capacidad de marketing, del favoritismo del poder mediático, de la voluntad de ciertos jefes del aparato estatal y sobre todo de la disponibilidad de fondos de campaña rapiñados al Estado u otorgados por los grandes grupos económicos. Esta “democracia” nos deja incluso la posibilidad de dejar en paz nuestras conciencias y votar por candidatos testimoniales cuya posibilidad de triunfo es nula. Se trata en síntesis de un grupo de poder que en parte se autoelije y en parte es elegido por otros grupos de poder que establecen condicionamientos, bloqueos, correcciones, reprimendas dictadas por las dinámicas de sus componentes que no imponen una racionalidad general, una reproducción durable del sistema sino la preservación de privilegios, impunidad o la obtención de ventajas económicas (Beinstein, 2015).

Rancière es contundente. En su principio, como en su origen histórico, la representación es lo contrario de la democracia. La democracia electoral está fundada sobre la idea de una competencia igual de todos. La representación es un principio oligárquico: los que están de esta manera asociados al poder no representan a una población sino al estatuto o la competencia que funda su autoridad sobre esta población: el nacimiento, la riqueza, el saber u otros.

El sufragio universal es un compromiso formal entre los principios oligárquico y democrático. Los regímenes oligárquicos todavía tienen necesidad de una justificación igualitaria. La elección no es más que un simulacro. Existen circunstancias donde tiene sentido reafirmar este poder “formal”. Pero la elección presidencial es la forma extrema de la confiscación del poder del pueblo empleando su propio nombre (Rancière, 2012).

Si desde el surgimiento del liberalismo político tras la Revolución Francesa, la burguesía ya se planteaba esta preocupante pregunta, hoy en día, con el triunfo electoral de la centroizquierda en algunos países latinoamericanos, se reactualiza el debate. Desde la derrota sandinista —precedida por la experiencia allendista—, pocos guardaban expectativas en una salida electoral; con las experiencias, se generalizó la certidumbre ante este camino al poder. Cuando el neoliberalismo parecía que había consolidado la dictadura burguesa contra la voluntad popular, la intranquilidad de esta clase creció. Han tenido que recurrir a diversas formas fraude, anular el

sufragio y promover la anarquía. Las irregularidades electorales en Colombia, Perú, México y otros lugares, y las intervenciones en Haití y Honduras exteriorizan que en estos lugares se vive un caos encubierto, una representatividad intervenida, que tiene detrás las armas imperiales y la colonialidad del poder.

Una visión liberal del México actual como la que sigue podría imputarse a cualquier país de América Latina:

Mucha riqueza, pocos beneficiarios. Crecimiento estancado, país aletargado. Intereses atrincherados, reformas diluidas. Poca competencia, baja competitividad. Poder concentrado, democracia puesta en jaque. Un gobierno que en lugar de domesticar a las criaturas que ha concebido, ahora vive aterrorizado por ellas (Dresser, 30 de enero de 2009).

La teoría clásica de la “democracia” liberal moderna es reiterativa y hasta recurren al republicanismo. En la actualidad, en el mundo carece de un referente empírico (si no pensemos en el poco democrático régimen electoral en los Estados Unidos o el gobierno mediático en Italia). En ese sentido, nadie sabe bien a qué realidad se remite. ¿En qué consiste hoy la democracia liberal cuando ya todas las relaciones sociales y el contexto político la representatividad liberal ha sido transformada y se ha destruido el sustento real de la misma?

Gimate-Welsh (2006) elabora una síntesis del especulativo debate actual sobre la “democracia” liberal representativa y deliberativa. Refiere dos concepciones opuestas: la racionalista, idealista o utópica frente a la procedimental o positiva. Aunque estas tendencias existen, ambas enfatizan ciertos aspectos y recurren a las dos teorizaciones. La mayor parte de intelectuales y algunos políticos optan por la segunda; enfatizan requerimientos poliárquicos mínimos como la aspiración por una competencia honesta y justa, elecciones periódicas, libertad de expresión, asociación e información y que los candidatos compitan libremente y de manera equitativa.

Se pueden incluir los aspectos deliberativos entre actores en aras de una mejora de la calidad democrática. No obstante, entre estos, la legítima (aunque eurocéntrica) preocupación de Habermas por los intereses múltiples no visualiza el mundo recolonizado, ni cómo el fascismo social excluyente que acompaña a la globalización ha cambiado la situación. Ha colocado la lucha política central en quienes no son escuchados, visibili-

zados y reconocidos como interlocutores iguales y legítimos en el debate. Intelectuales, más audaces que los subrepticios neoliberales Habermas o Giddens, llegaron a plantear que el capitalismo globalizado marca la gran época democrática.

Siglos de debate; pero aquí nos interesan las más de dos décadas en las cuales muchos intelectuales y académicos se han dedicado a buscar el tipo ideal democrático en América Latina, el ideal Estado capitalista. Casi todos coinciden en que este es un proceso que tuvo varias premisas que podemos simplificar: a) un Estado nacional de competencia; b) un pueblo homogenizado económicamente y con valores individualistas; y c) un gobierno con amplias funciones públicas que responde al monopolio de la fuerza, la defensa de la soberanía y con influencia y control democrático a través del Estado de derecho expresado en la división de poderes.

En contraposición, en la región vemos países donde la “democracia” es producto de la articulación de poderes monopolizados internos e internacionales que engloban perversamente lo económico, político, jurídico, religioso, militar, mediático, tecnológico e ideológico. Algunos movimientos populares y países vienen descolonizándose en varios de estos aspectos, creando temor y respuestas más agresivas entre las clases dominantes que junto a las ciudades conservadoras y sus clases medias constituyen su principal respaldo y referente social. En esos países existen peligrosas tendencias comunitaristas indígenas que, al igual que la derecha conservadora, pretenden estructurar un mundo tradicional culturalmente homogéneo que impida la emergencia de movimientos políticamente antagónicos, al negar la lucha de clases.

Bajo un conjunto de condiciones políticas, institucionales y éticas mínimas es posible que cualquier candidato gane las elecciones; sin embargo, el pensamiento y su lógica liberal (aún hegemónica) mientras sean adoptados como tal trascenderán las opciones ideológicas e incluso momentos históricos de cambio. La esperanza de la ilustración –que no es equivalente al capitalismo– de hacer gravitar todo el tejido social a partir del espacio público de la ciudadanía, por ahora, es una ingenuidad aunque quede como una aspiración. Es verdad que existen instituciones, pero cada vez son menos ciudadanas y están atrapadas en una colonialidad del poder.

El problema reside en que la ciudadanía y la sociedad civil (producto de la lucha de clases en el Estado capitalista) nunca homogenizaron los derechos políticos. Sólo en ciertas coyunturas y reducidos espacios se consti-

tuyeron en sus permanentes catalizadores. Mientras, los gobiernos tienden a depender y defender los intereses de los grupos de poder económico, la defensa de la economía capitalista es el resguardo de la estabilidad política. El derecho, las constituciones y la institucionalidad jurídica no son más que expresiones del capitalismo y la correlación de fuerzas antagónicas en los diversos niveles del poder. Únicamente los sujetos sociales pueden sostener las constituciones y las leyes, a favor o en contra de una de tales fuerzas.

Mientras que en México, Perú o Colombia las elecciones presentan a sujetos individuales desestructurados y muchas veces engañados, en Bolivia o Ecuador las identidades individuales se expresan en actos colectivos generalmente ambiguos. El sujeto electoral al que aspiran es la ciudadanía colectiva. Un problema radica en que en todos estos países el Estado aún es visto multidimensionalmente como patriarcal, patrimonialista, oligárquico, discriminador y discursivamente antiimperialista.

La democracia nació limitada por el capitalismo y llegó a su agotamiento junto a él. Señala Zizek (2008) que la filosofía política, desde su origen, es un esfuerzo por anular la fuerza desestabilizadora de lo político, por negarla o regularla de una manera u otra.

Como bien señala Hirsch (1996), con las presiones del proceso internacional de valoración de capital, con mayor claridad dejan de ser efectivos los derechos de control y participación democrática nacional. Más allá del Estado nacional casi no existe alguna institución política algo representativa. El Estado en América Latina y el Caribe está sometido a la existencia de poderes producidos por un capitalismo colonial asociado a la recolonización, a la colonialidad y al nuevo sometimiento racista de las mayorías de origen africano o indígena. Por tanto, ¿qué posibilidades le queda a la democracia de desarrollarse en un solo país o en la región? Ninguna. En el actual momento histórico, sólo desde el capitalismo colonial es posible explicarnos las otras relaciones coloniales.

Alessandro Pizzorno –pensando en el capitalismo avanzado– anota que estamos frente al pasaje de un sistema de representación pública a otro público-privado. En sus palabras:

Es como la extensión de esta nueva posición del Estado en las confrontaciones de los intereses privados, donde se injertarán las características del orden jurídico de la globalización. Estas pueden resumirse al indicar la movilidad del universo normativo y la expansión de las formas de antolegislación, así como el

esparcimiento de la actividad jurídica autónoma en detrimento de la actividad legislativa. Se trata obviamente de aspectos íntimamente conectados (Pizzorno, enero de 2006).

Hoy, el poder económico monopoliza los poderes estatales ejecutivo, judicial, legislativo, electoral y mediático. El Estado es una agencia y la clase política es privatizante; presidentes y ministros son gestores del capital y los congresistas lobbystas de las transnacionales y los Estados que los representan. La democracia tiene las puertas cerradas por causa del sistema representativo que entreabre sus puertas sólo para buscar legitimidad.

Pero, ¿qué ocurre con la ciudadanía en la región? El capitalismo no sólo despoja a los hombres de la política –después de expropiar a los productores de su propiedad–, tanto o más importante, les arrebató su identidad étnica, nacional, religiosa, cultural, social y subjetiva; suprime pertenencias y solidaridades, hábitos y costumbres; convierte a los hombres en moléculas suyas, los reconstituye ontológicamente. Con el neoliberalismo, quien actúa como el sujeto más decisivo es el propio sistema y el Estado, gobernados por sus direcciones políticas que ejecutan el proyecto privatizador, represivo y domesticador.

Esto explica el porqué de la resistencia a quienes representan al capitalismo por desposesión de pueblos autoreconocidos como indígenas, politizados, mercantilizados y con deteriorados espacios de lazos más o menos sólidos de solidaridad. Sin embargo, explica cómo han podido responder ante la agresión del capitalismo neoliberal sobre sociedades de países indígenas. La resistencia en países indígenas es diferenciada y proporcional respecto a la fortaleza o debilidad del capitalismo y también del Estado. De allí que en Ecuador y Bolivia, donde el capitalismo y el Estado no estaban tan consolidados, el progresismo populista encuentre en los movimientos sociales y después societales la potencialidad de cambio.

El populismo es un componente del hacer político representativo liberal. Miguel Sanz Alcántara opina que el partido Podemos está influido por Laclau y Mouffe, quienes

asumen este planteamiento y llevan al extremo el concepto de ‘autonomización’: las relaciones sociales no forman parte de un sistema unitario en lo económico y lo político, sino de un campo entrecruzado de antagonismos que pueden o no relacionarse pero que requiere la autonomización de las esferas de lucha: no

hay, por ejemplo, vínculos necesarios entre antisexismo y anticapitalismo [...]. Sólo es posible construir esta articulación a partir de luchas separadas, que sólo ejercen sus efectos equivalenciales y sobredeterminantes en ciertas esferas de lo social (2015).

Sanz Alcántara indica que la lucha se manifiesta únicamente en los ámbitos ideológico, discursivo y cultural. Por otra parte, Laclau y Mouffe consideran que el capitalismo moderno ha fragmentado la identidad colectiva. El efecto es la diversificación de clases sociales y de conflictos, es decir la multiplicidad de identidades colectivas heterogéneas. Sin embargo, algunos consideran que los efectos del capitalismo, bajo ciertas condiciones, pueden ser reversibles, mientras autores del posmodernismo encuentran que los daños son intrínsecos al capitalismo moderno (2015).

En contraparte, la siguiente frase condensa un pensamiento que servirá de guía a los políticos populistas:

La izquierda debe comenzar a elaborar una alternativa creíble frente al orden neoliberal, en lugar de tratar simplemente de administrar a este último de un modo más humano. Esto, desde luego, requiere trazar nuevas fronteras políticas y reconocer que no puede haber política radical sin la identificación de un adversario. Es decir que lo que se requiere es la aceptación del carácter inerradicable del antagonismo (Laclau y Mouffe, 2010, p. 17).

Según Sanz Alcántara, ambos autores destacan la naturaleza ideológica y discursiva de la lucha y que ésta funge como auténtica esfera totalizante para encauzar la acción política. Para ellos, y todos aquellos que escriben dentro del postmarxismo, forma parte del discurso: lo ideológico y lo material, tanto en articulaciones lingüísticas como no lingüísticas (2015).

Todo ello implica que, en la lucha política, el intelectual ejerza un papel central, como es el caso de Lula da Silva y Evo Morales. Al respecto Ellen Meiksins Wood afirma que el proyecto político necesariamente atribuye un rol central a los intelectuales, cuyo deber es construir “agentes sociales” a través del discurso y la ideología. El proyecto descarga en ellos la tarea de la construcción de ‘agentes sociales’ por medio de la ideología y el discurso, la construcción de pueblo y de sus antagonistas cada vez recreados de acuerdo a las coyunturas.

Así, se establece una relación directa entre líder carismático y pueblo. Frente al poder absoluto del imperio y su orden neoliberal, sólo puede

existir otro poder absoluto: la totalidad del pueblo. Ésta se expresa a través de un líder carismático. Las consecuencias negativas de este planteamiento para la política democrática son: el antagonismo amigo-enemigo lleva a la eliminación del otro antagónico y la relación del líder carismático con el pueblo destruye la posibilidad democrática. El Estado engulle el espacio público y lo convierte en el espacio privado del gobernante, quien se sitúa así como los viejos monarcas absolutos: por encima de la sociedad. El Estado entonces se convierte en un instrumento para el enriquecimiento de funcionarios y allegados del grupo dominante en el poder mediante la generalización de la corrupción, que interviene en la esfera económica. Los últimos sucesos en Brasil y Bolivia, con sus notables diferencias, nos convencen de estas críticas. Lula cayó en su misma salsa ideológica (Bolsa familia, Petrobras) y Evo siguió en camino (Evo Cumple, Fondo indígena).

Debido a que las posturas de Laclau y Mouffe consideran la acción política sólo dentro del campo discursivo, cultural e identitario, no ofrecen una propuesta coherente para la construcción de sujetos políticos con permanencia y acción en lo material. Sin embargo, Laclau habla sobre la construcción del pueblo. Indica que ésta conlleva la concreción de este campo político cuando el líder simboliza al grupo. El mismo autor reconoce que el populismo es la unión de posturas heterogéneas, por lo cual el sujeto político debe abarcar la mayor cantidad de sectores en conflicto con la autoridad, a través de la ambigüedad. Desde este enfoque, discursivamente inventan enemigos, Lula da Silva y Evo Morales representaban la lucha contra la oligarquía, el neoliberalismo y el imperialismo.

Nadie va a definir los sujetos del cambio revolucionario. Menos aún se hará a través de un significante vacío que llenan los intelectuales. Los movimientos de clase se hacen a sí mismos, aunque no bajo condiciones de su propia elección. De ellos nacen y se desarrollan las teorías. No es a la inversa. Sin embargo, no se puede negar la autonomía de la política y su capacidad de limitada influencia. Esas condiciones están hoy expresadas en movimientos alrededor de la reproducción expandida del trabajo salariado. Los movimientos alrededor de la acumulación por desposesimiento constituyen el centro de la resistencia.

El encuentro del vínculo orgánico entre los seguidores de Laclau, que es el punto de la clase media, es una tarea que se proponen académicos como Verónica Gago, Diego Sztulwark y Diego Picotto, quienes señalan:

Tres son los problemas centrales de esas “soberanías novedosas”: el primero, es que tienen una comprensión muy tradicional y simplificada de la fuerza del neoliberalismo: en lugar de apreciarlo como un dispositivo gubernamental cuyos mecanismos funcionan a nivel global y a nivel micro político—incluso cuando queda deslegitimado como ideología— se lo ve como mera cosmovisión favorable a los grupos dominantes. El segundo, es que considera al tejido social desde arriba, es decir, subordinándolo a la lógica estatal (en lugar de entenderlo a partir de una dinámica cuya autonomía resulta fundamental para producir transformaciones). Y el tercero consiste en que las instituciones, las de estas “nuevas soberanías”, aunque voluntariosas, operan necesariamente dentro de las estructuras de governance del mercado mundial. Estos problemas quedan completamente de lado en la secuencia populista fundamental: demanda insatisfecha/articulación discursiva de esas demandas y constitución de un conflicto de intereses/representación, siempre discursiva, de nuevo tipo/políticas innovadoras (Gago, Sztulwark y Picotto, 2014).

Con un sujeto político que contiene intereses sociales no definidos (que pueden llegar a ser contradictorios) no es posible poner en marcha un frente común con objetivos claros destinado a la movilización y la conquista popular de libertades y derechos. Lo que cuadra con un espacio político populista es la indefinición, la ambigüedad del discurso y la reducción de los antagonismos de clase en su seno. La construcción del populismo tiene ese riesgo: arma a un sujeto político impreciso, espoleado por las emociones, pero que puede oscilar de izquierda a derecha si no se efectúa un cambio cualitativo de su subjetividad práctica, del ethos, de su conciencia interior. Por otra parte, no es posible conseguir este cambio en el marco limitado y superficial de la movilización electoral. Mas aun si estos regímenes vivieron y viven décadas de campaña electoral permanente.

Esta creencia en la posibilidad de “usar” el Estado contra la minoría dirigente, procede también del planteamiento de autonomía de las estructuras de la sociedad, un producto “relacional” de la articulación de diferentes elementos.

Los intelectuales reconocen unánimemente que los gobiernos pierden capacidad de regulación de los conflictos y de integración al tiempo que se incrementan las desigualdades y fragmentaciones sociales. Las antinomias y exclusiones con las cuales nacen los contratos sociales se exacerbaban y los Estados se enfrentan a irresolubles problemas. La efímera presencia de re-

giones óptimas de valorización de capital —como en su momento lo serían los casos de Brasil o Chile— o la aparente homogeneidad ciudadana en algunas partes del Cono Sur muchas veces confunden el pensar político. Allí también las instituciones y métodos llamados democráticos existen como ficción, pues principalmente son mecanismos para imponer los intereses del capital internacional y la reproducción de las élites del poder. En ese sentido, son compatibles y mutuamente se protegen.

Hoy la representación liberal es, en la vida cotidiana, un mecanismo de exclusión y expulsión social, una herramienta de dominación, explotación y subyugación. El Estado, tras las apariencias, aún es autoritario y sólido para conseguir la expansión del capital trasnacional. Ante el avance de la resistencia muestra su verdadera faz tras el discurso e ideología liberal, su compleja red de dominio y subordinación, control y cooptación, educación y fetichismo, propaganda y alienación, violencia y terror. Cuando la clase política, con sus pactos, se apodera de la representación, la usa como dogma y mecanismo de dominio a través de las clases medias y sus intelectuales.

Con el neoliberalismo, el orden corporativo entró en crisis; se reordenaron sus estructuras: nuevos poderes políticos y económicos, pérdida de legitimidad de los mecanismos de representación debido al dominio total del interés privado y la resistencia al mismo. La hegemonía y la legitimidad se renovaron o se transformaron, acompañadas de nuevas ideologías o teorías más orientadas a los procedimientos y cambios institucionales para mejorar la llamada democracia liberal (en otros países se reorientaron hacia un nuevo fundamento jurídico constitucional matizado de posmodernidad).

Comúnmente, se piensa que la representación liberal y la dictadura se oponen: donde existe la una no coexiste la otra. Empero, la realidad es diferente: la “democracia” es una forma de dictadura. En los “países democráticos” existe una clase que domina sobre las otras: la burguesía trasnacionalizada domina a los explotados y oprimidos. Articula el equilibrio de la conflictividad con la representación, que conlleva un proceso electoral que tiende a ocultar las relaciones y antagonismos étnicos y de clase en la sociedad. Este sufragio, a la vez que legitima al sistema, la política y las acciones de la clase dominante, canaliza, confina y controla la actividad política de las clases medias y trabajadores. Así, el aparato estatal se reduce a un instrumento del dominio de la clase burguesa sobre los explotados y

oprimidos, independientemente de quiénes sean los individuos en el poder (Avakian, 30 de julio de 2000).

Los proyectos de constitución política son adaptados al neoliberalismo, para el cual ha llegado la hora de eliminar todo riesgo de que las mayorías sociales hagan oír su voz. El proyecto de devolución del poder a la sociedad civil significa dárselo a los empresarios y partidos del sistema, la desaparición misma del espacio público y de la participación política ciudadana, que queda sustituido por el espacio privado del mercado y de la “sociedad civil” (Moreno, 2001).

La gobernanza es un eufemismo que esconde al gobierno mundial-regional-local a nivel macro-micro. Las formas de gobierno dictatorial que se agazapan tras neologismos están más relacionadas con lo particular que con el tradicional gobierno del Estado de los países recolonizados. Mientras se trata de descargar al Estado de sus viejas funciones, se reduce el concepto de sociedad civil al plano institucional y de grupo construido bajo los poderes y sobre el individualismo ciudadano y el reconocimiento multicultural (otro instrumento de dominio) que busca el consenso ideológico en torno a la idea del mejoramiento de la sociedad.

La sociedad civil ha sufrido cambios regresivos. El concepto sociedad civil designa las relaciones sociales, actividades y procesos donde cotidianamente se reproducen las comunidades en organizaciones, instituciones, normas, poderes y saberes que incluyen las relaciones de clase, étnicas, nacionales, raciales, coloniales, religiosas, generacionales, demográficas, familiares, ideológicas, lingüísticas, entre otras, como base y objeto del poder político (Limia, 1998).

En Brasil las ciudades y ciudadanos también han mutado: mientras más grandes —principalmente por las migraciones— más se privatiza el espacio público y se pierden los lazos sociales. Ahí se territorializa la globalización, despojando a poblaciones precarias en beneficio del capital con sus diversas formas y flujos que empiezan con la desposesión y continúan con la especulación, construcción y territorialización. La acumulación y la dominación se reproducen escalonadamente de las metrópolis a las ciudades intermedias y pequeñas de la región. Aparecen nuevas subjetivaciones, entre frustraciones, segregaciones, polarizaciones y violencias, caos y conflictos. No emergen ciudadanos sino bolsones de una nueva cultura urbana de marginales al sistema o de resistencia muy articulada a algunas universidades, barrios, ONG, movimientos urbanos ciudadanos y trabajadores.

En el capitalismo, la política impide la ciudadanía. Aquella ha sido monopolizada por las corporaciones económicas y políticas; es extraña a la deliberación parlamentaria y está al margen de la ley. Como bien anota Fernández Liria: “No es que no haya política, lo que no hay es democracia y, mucho menos, división de poderes, república o Estado de derecho. Lo que no hay es un marco legal para ‘convencer’ a las leyes, es decir, un auténtico orden constitucional” (Fernández y Alegre, 2007).

El problema de los analistas políticos y expertos en democracia de derecha e izquierda es que son parte del tejido mitológico basado en una ficción fatal: que la democracia y el capitalismo se implicaban mutuamente. Vivir en un Estado de derecho y en democracia es una experiencia por realizar. En Brasil, Bolivia, Venezuela y Ecuador existió el intento popular de construir Estados de derecho y democracia pero solo acabaron con las ilusiones de ciudadanía y democracia de hacerlas realidad.

La idea de reconstruir la sociedad constitucionalmente, por medios ideológicos y políticos tiene graves problemas cuando analizamos las nuevas Constituciones y constatamos que se han dejado espacios para reconstruir el capitalismo, para la reimposición del poder económico desde la propiedad de la tierra y las prerrogativas de terratenientes y transnacionales, la centralidad del mercado y las demás políticas neoliberales. No sólo en estas Constituciones se deja a los argumentos del mercado la última palabra, sino que los políticos de la centroizquierda que dirigen los ejecutivos y manipulan los parlamentos mantienen un proyecto de poder político compartido con la derecha y hasta proponen (como en Bolivia) construir un capitalismo andino.

La lógica que pretenden imponer es que si no se protege a los empresarios y se construye más capitalismo se acabarían las posibilidades de redistribuir. Sigue imperando la lógica de la economía sobre la política, de la garantía de la propiedad y la ganancia de unos pocos. Los pilares del liberalismo quedan asentados y en lugar seguro: el individualismo propietario sobre los intereses colectivos y la delegación del ejercicio de la soberanía y la independencia en la representación respecto a la voluntad popular. Para los dirigentes políticos de estos países, algunos intelectuales poseedores del saber aportan la racionalidad sobre una masa de afrodescendientes o indígenas irracionales.

Los regímenes progresistas, electoralmente instaurados cuando sirven y gestionan al capital, son una forma de nuevo autoritarismo. En el lengua-

je de Pavlovsky “La democracia capitalista es contingente de la hegemonía capitalista y el capitalismo tiene una visión instrumental de la democracia. Las democracias neautoritarias funcionan con la capacidad de defender algunos intereses contra otros” (Pavlovsky, septiembre del 2000). Esto significa el beneficio y la prosperidad de las élites financieras contra el empobrecimiento y marginalidad de la mayoría de la población.

Algunos reducen el ejercicio democrático a la transparencia de los procesos electorales o a la alternancia en el poder. Sus críticos –en la misma lógica– diran que estos rasgos no son el punto más alto ni el elemento esencial de la democracia. El problema no es quiénes gobiernan o se turnan en el mando –unas veces un partido y otras veces otro–, sino cuáles son los instrumentos sociales para que los ciudadanos ejerzan control político sobre el que gobierna, independientemente del partido al que pertenezca. Empero, tampoco es un problema de control. Si fuera así, estaríamos afirmando que la sociedad es un sistema compuesto por subsistemas y sus interrelaciones y que al aumentar la complejidad social crece la precariedad de la dominación.

En realidad, la democracia es un problema de poder popular, de su autoridad e influencia. En las sociedades neoliberales, la deconstrucción de la comunicación subjetiva resignifica al sujeto y no necesariamente potencia a los pueblos. La comunicación es una relación de dominación de clase, donde la hegemonía burguesa construye el conocimiento, transforma su verdad en un régimen de verdad y utiliza la información para una mejor comprensión del mundo racionalmente entendido, alienado de acuerdo con sus intereses. Los imperios, las transnacionales y oligarquías controlan los medios masivos de comunicación.

Parece claro que monopolio, dominio de las transnacionales y democracia son incompatibles. Al concentrarse el poder en la oligarquía, ésta necesita apoderarse de los resortes del Estado. Pueden aceptarse decenas de partidos; cada cual ofrece mayor legitimidad siempre que se garantice la política única en la que los ejecutores del poder acaten las decisiones del poder. La representación liberal es el paraíso del capitalismo, le basta el monopolio del poder, de la violencia y de la libertad de expresión. Ni siquiera ya son necesarios programas o una Constitución para gobernar, pues la necesidad económica exige aplicar las medidas formuladas por el capital. Es aceptable todo aquello que no afecta al capital. Se reconocen las

libertades, los derechos laborales y los servicios del Estado, pero quedan recortados al mínimo.

El derecho a reunirse o manifestarse es un asunto de orden público, las huelgas son ilegales por anticipado. La precariedad del trabajo, las listas negras y el despido penden sobre los obreros, y el crimen de dirigentes sociales se vuelve necesidad. El miedo y la guerra psicológica, la biopolítica, la militarización y las tecnologías de guerra sucia se han naturalizado. Al Estado policía que se someta al imperio se le llamará “democrático” y contará con todo su apoyo. Mientras, la izquierda, al hacerse parte del poder, llama mafias a los sindicatos y terroristas a los enemigos del neoliberalismo.

Los partidos se han convertido en máquinas electorales que sólo funcionan para los comicios. Están estructurados verticalmente como entidades de cargos públicos y militancia de prebendas. De los programas electorales se retiran los aspectos que asustan a los votantes; hacen de las elecciones el centro de la vida política y el poder por el poder se convierte en la antesala de la corrupción. Para ser candidato hay que tener los recursos para hacer campañas, sin importar con quién se haga las alianzas. Es un problema de racionalidad mercantil y recuperación de la inversión. Detrás del juego parlamentario está la lucha de clases y el poder del capital. Los poderes fácticos paralelos, que cogobiernan en muchos lados, sólo permiten convivencias vigiladas. Las *mayorías* son una construcción y quien tenga los mejores arquitectos y recursos, quien tenga mayor control sobre los medios y pueda construir cinturones mediáticos son quienes tendrán más posibilidades de triunfar. Lo que el imperio y la televisión o internet califiquen de democrático, será lo democrático.

En el actual momento histórico, en un mundo imperializado, los factores externos determinan la macro y la micropolítica. Un nuevo autoritarismo, donde la estructura y la toma de decisiones tienen continuidad, donde únicamente los sectores que gozan de bienestar pueden desarrollarse plenamente. Para Borón, en la lógica democratista, vivimos mucho menos que un régimen democrático.

Como sea, permanece el hombre o mujer masa como tal, sin embargo, individualista. Y tenemos siempre las clases sociales. Y la desigualdad, que ahora se ha potenciado. Y el desencanto, los descreimientos, el escepticismo, renovados. El ensimismamiento burgués, el aburguesamiento de la burguesía, repitiendo-

se constante, mientras los grandes sectores populares miran por su existencia, cuando no por sobrevivir, simplemente. Todos, los burgueses y los populares, son ciudadanos “de baja intensidad”, están hoy como personas encasilladas cuando no reducidas a la calidad de consumidores, clientes, usuarios más ricos o más pobres (y principalmente numerados), y hasta excluidos como tales, sin salud, educación, trabajo, justicia efectivos [...] la realidad de los grandes poderes económicos, los organismos más las organizaciones, todos fantasmales, y los bancos, y las corporaciones multinacionales, y más bancos, y bancos más grandes, más súper empresas numerosas, las megafusiones, los igualmente poderosos medios, inescapables, las redes electrónicas (Strasser, 1999).

La imposibilidad de negar una tradición epistemológica y teórica liberal, relacionada con la colonialidad del poder y del saber lo orilla a calificar a este régimen de mixto. Afirmo que el régimen está contaminado con formas no previstas, tradicionales, y, sin embargo, amparada por una legitimidad también híbrida. En resumen, para Borón la democracia es el eje de la sociedad. Por ser representativa, la penetran otras formas de gobierno antiguas, con un sujeto –ciudadano– en progresiva retirada hasta casi desaparecer. Aun así, para él la democracia existe, pero débil, inerte y anémica. Mantiene potencialidades y la ocasión de que se establezca una cultura política *ad hoc*. Sostiene la idea de que el esqueleto de la democracia son las elecciones y la legitimidad, que la institucionalidad precede a lo popular. Colige que la “democracia real” es más liberal, limitada e institucionalista que popular y defensiva, representada por un sujeto pasivo y un objeto desviado.

La democracia liberal no es una idea absoluta que avanza progresivamente –con algunas desviaciones–. No es un encandilamiento conceptual prejuicioso de la realidad; es, una realidad inseparable del poder, de las clases, de las nuevas estructuras imperiales, del vasallaje de una oligarquía transnacionalizada, violenta, saqueadora y corrupta, con sistemas constitucionales y legales represivos y autoritarios, de ideologías estatales excluyentes y servilmente aplastantes, de medios de comunicación embruteedores, de la permanente racionalización ideologizadora de la conducta de los vencedores.

Sin embargo, precisemos más esta categoría tan manoseada por los liberales: asesores, consultores, expertos en tercer sector, en sociedad civil o en ciudadanía. Un tema transformado en mitología donde la democracia es

un sistema político con indefinidas variaciones en el plano de lo real. Para otros es un sistema de ideologías, de ideas erróneas que aparecen como falsa conciencia, asociadas a intereses de clase en conflicto. Un fetiche, que confrontado con la forma política real es cada vez más indistinguible.

Vista como ideología, la matriz se busca en Aristóteles con sus técnicas y normas adecuadas al gobierno de todos. En esta visión, los conceptos de *todos*, *pueblo* y *mayorías* pueden ser puestos en discusión por su relatividad histórica. Al clasificar las ideologías aristotélicas nos encontramos con visiones de democracia vinculadas con el sistema político, y otras que la vincula con sus principios. La democracia es considerada la esencia misma de la sociedad política o la autoconstitución de la sociedad política a través de un contrato social. Para Aristoteles la democracia es el gobierno del pueblo.

En un segundo conjunto, estarían la democracia como realización misma de la libertad política y la democracia como realización de la igualdad política. Aquí también el cálculo subjetivo y la propaganda ponen en entredicho la idea de libertad de elección. La igualdad, es una ficción de propiedades que implica la sustituibilidad de iguales en sus funciones políticas, que algunos pretenden que la democracia hará realidad. También la democracia puede entenderse como la realización de la solidaridad, en oposición a la intolerancia y a la violencia. La democracia tiene que ver más con las estructuras materiales; si nos quedamos sólo en lo ideológico podemos permanecer en la metafísica (Bueno, 1997).

La moderna doctrina liberal de la democracia separa las esferas económica y política y las desligan del Estado capitalista. Las relaciones entre particulares es la esfera privada; las relaciones entre el todo, hacia el nosotros, pertenecen a lo público. Esta separación de ámbitos permite entender la democracia liberal y aceptar, por tanto, que el mundo de la injusticia, del dominio, de la explotación, del racismo, de la violencia habría sido creado por la democracia. Si la democracia es la distribución del poder entre el pueblo de ciudadanos, la ciudadanía es la conquista de los derechos civiles y sociales mínimos por gente comprometida con las leyes vigentes y la defensa de ese orden. ¿Cómo se llega a la ciudadanía? Los deliberativos dirán: por la colaboración, la negociación y el diálogo. La ciudadanía moderna es dividida en civil, política y social. Pero cuando a esta concepción agregamos otros elementos, el Estado, la clase y la etnia, el panorama se modifica radicalmente, y el Estado de derecho queda como un estrecho horizonte del sistema. Las limitaciones ciudadanas son enor-

mes; sin embargo, dado que el elector, cuando vota, compone al soberano, puede decidir el destino común.

En América Latina, la violencia popular y las rebeliones contra las dictaduras de la derecha y los gobiernos impuestos por el imperio han posibilitado que las elecciones aun sean aceptadas a regañadientes por el poder global como mecanismo político de cambio gubernamental. La rebeldía étnico-clasista ha ocupado un lugar inédito en las sociedades y junto a la solidaridad internacional impiden hasta donde pueden los golpes militares intervencionistas. La crisis de acumulación, las guerras en otras regiones y la pérdida de hegemonía norteamericana en América Latina marcan el nuevo contexto para el debate entre lo electoral y otras propuestas de cambio.

¿Nuevos sujetos de cambio para un nuevo e inédito ciclo de rebeldía?

“El conjunto de variados grupos o clases de hombres, mujeres y seres naturales que la lógica del capital, su tecnociencia y medios masivos de comunicación clasifican como lo otro-del-capital, como su alteridad opositiva explotada, excluida, oprimida, manipulada o depredada, sigue siendo una base material preferencial para la posibilidad de construir un nuevo discurso y una nueva organización emancipatoria abarcativos de la diversidad, que articule lo otro-del-capital en lo conscientemente antagónico al capitalismo y toda otra forma de opresión.”

Alan Rush, “Marxismo y posmarxismo. Polémica Laclau-Mouffe versus Geras. Primeras hipótesis y especulaciones”. Herramienta, 18.

De acuerdo con Boaventura de Souza Santos, las realidades y los discursos que coexisten en Brasil se pueden reducir a tres narrativas. La primera es la colonial, reproducida sobre formas, cambiantes hasta hoy, de la exclusión social y desigualdad extrema, de las oligarquías latifundistas, del caciquismo violento, y de las élites políticas restrictas y racistas. Podemos agregar el de la recolonización constante. Otra es la de la reivindicación de la democracia participativa, de los últimos veinticinco años que condujo a la Constitución de 1988, en los presupuestos participativos sobre políticas urbanas en centenares de municipios, en el *impeachment* del presidente

Collor de Mello en 1992, en la creación de consejos de ciudadanos en las principales áreas de políticas públicas, especialmente en salud y educación, a diferentes niveles de la acción estatal. La última discurre sobre las políticas de inclusión social adoptadas por Lula da Silva a partir de 2003, las cuales condujeron a una significativa reducción de la pobreza, a la creación de una clase media con elevada vocación consumista, al reconocimiento de la discriminación racial contra la población afrodescendiente e indígena y a las políticas de acción afirmativa, y a la ampliación del reconocimiento de territorios, *quilombolas* e indígenas (Souza, s.f.).

De acuerdo con él, las dos últimas están en retroceso a favor de la primera. Esto parece cierto; sin embargo, al margen de que para muchos intelectuales todo se reduce a discursos y no a prácticas, discrepamos en incluir como grandes avances a la democracia o al crecimiento de las clases medias. Hubo inclusión pero, como ya vimos, no como clases medias. Al parecer el posmarxismo se ha instalado entre todos los que se precian de ser intelectuales rebeldes, limitando sus capacidades de análisis.

Los países andino-amazónicos viven un proceso de reindianización y reivindicación de la afrodescendencia, una nueva dinámica de relaciones de las especificidades culturales. En ella se produce una reidentificación como pueblos originarios con variados matices. Además, se da una reelaboración de lo simbólico estrechamente relacionado con la defensa y reapropiación de territorios y con la continuidad de la historia comunitarista. Los indígenas ecuatorianos y bolivianos nos enseñan que para que haya una coherente y constante resistencia política se requiere de una sostenida consciencia étnico-clasista y reapropiación cultural, que sigue en proceso. Está probado por siglos que la modernidad también destruye las solidaridades humanas, la naturaleza y la biodiversidad. Entonces, se trata de resignificar lo social desde el territorio, desde la tierra y la cosmogonía, de las altas culturas agrícolas, de sus lógicas colectivas de socialidad y de nuevas políticas que respondan a las demandas culturales y se opongan a la fragmentación y homogenización imperial.

Hasta hoy, la multiculturalidad se ha basado en la dominación y el conflicto, en violentos mestizajes, en la colonialidad del poder/saber. El patrón colonial siempre renovado ha hecho coincidir lo blanco con el poder, la riqueza y la defensa del Occidente cristiano; en el otro extremo tenemos lo oscuro, asociado con la pobreza, el trabajo gratuito, la sujeción y la resistencia. Como sostienen los indígenas colombianos, “o cambiamos este

país o desaparecemos”. Los últimos días de noviembre de 2001 tuvieron los indígenas un congreso con el lema: “por la vida y dignidad para los pueblos indígenas, y para los colombianos también”. Su punto de partida es que los poderosos jamás harán un nuevo país. De ahí que su meta sea construir una alternativa con los afroamericanos, con los obreros y campesinos, con la gente que quiere paz, justicia, dignidad y trabajo. Son pueblos en resistencia que pugnan por la defensa de la autonomía territorial (Congreso de los Pueblos Indígenas, 2001).

Después de la guerra Fría y la caída de Europa del Este –como hemos visto a grandes trazos–, vivimos una época de debates sobre la validez de los grandes paradigmas y de las grandes teorías. De este debate ideológico se ha derivado el fin de las ideologías, el fin de la historia, para explicar el triunfo del liberalismo. Por ello, es preciso examinar un poco lo que sostiene Huntington, para evitar confusiones y desechar la ideología del vulgar culturalismo que eleva las diferencias culturales a un choque de civilizaciones. Para este profesor de Harvard, estratega y asesor del imperio, la occidentalización del mundo es un espejismo. Las otras civilizaciones son capaces de apropiarse de la ciencia, la técnica, el libre comercio y hasta de la democracia; sin embargo, ello no impide que de ellas surjan fuerzas civilizatorias que en los conflictos se unan por parentesco de lengua o religión.

Los conflictos futuros serán culturales. Las naciones-estado continuarán siendo los más poderosos agentes en los acontecimientos globales. Empero, los grandes conflictos serán entre naciones y grupos de diferentes civilizaciones; entidades más abarcadoras, una mixtura orgánica de etnias, pueblos, naciones y culturas. Pero unidas por lenguas, tradiciones, imaginarios, valores, instituciones, narrativas. En realidad, este asesor geoestratégico pretende elaborar una teoría de contención de los potenciales nuevos enemigos.

Si bien es cierto que tiene algo de realidad, el conflicto es complejo y es direccionado desde arriba, abarca las contradicciones entre imperio y colonias por la desposesión, entre clases, entre naciones-estados, entre etnias y entre otras agrupaciones sociales, donde lo cultural está también en conflicto. En otras palabras, para Huntington las civilizaciones particulares deben ser homogenizadas, atomizadas o eliminadas debido a su potencialidad de conflicto. La ideología de la globalización, al entrar en crisis, se impone por las armas, mostrando que existe un bloque internacional y

transnacional que comparte esos objetivos. Quieren subordinar la geografía a la producción. En ese contexto, promueven un multiculturalismo táctico, pues la autonomía indígena es riesgosa para la expansión del capital.

Se trata entonces, por un lado, de fragmentar, pulverizar las tradiciones, la resistencia, las potencialidades de lucha de las masas excluidas; por otro, de acabar con las identidades y las reidentificaciones —como la reindigenización—, pero también con las identidades antisistémicas o las meras potencialidades antagonistas que se observan en el plano universal. Creyeron haberle dado fin a la ideología, y ahora buscan hacerlo con la cultura. Caro favor le hacen al Imperio las propuestas duras del posmodernismo, las cuales aceptan el fin de los grandes relatos, cuando ahora están en ebullición y son más peligrosos para el poder. El respeto por la especificidad del otro no es más que la afirmación de su propia superioridad; más aún si anteponen el contenido eurocéntrico del proyecto multicultural. La respuesta —creemos— será diversa y al mismo tiempo universal pues la democracia, la solidaridad y el comunismo son objetivos comunes.

El sujeto desenraizado entra al vacío de la universalidad abstracta. La ideología de la clase media —la mejor aliada del neoliberalismo— es la conspicua expresión de la deformación de los antagonismos sociales, la falsedad encarnada, la disociación individualista, los continuos desplazamientos, el oportunismo. Es el ideal de la sociedad civil que pretende el neoliberalismo. Los intelectuales son sus mejores emisarios; creen aportar las luces racionales a las desoladas masas. No entienden que la democracia es la condición real del pueblo que trasciende los procedimientos racionales. La democracia social es requisito de la democracia-método, cuya intención es superar el antagonismo entre lo público y lo civil, que tiene como condición sujetos que pugnen por la socialización de la propiedad y la reconstrucción estatal.

Parafraseando a uno de sus críticos, Zizek (2008), el proletariado representa a la humanidad, no por ser la clase más baja y explotada, sino porque su misma existencia es una contradicción viviente y encarna el desequilibrio fundamental y la incoherencia del todo social capitalista. Quien ahora ocupa ese lugar es el indígena, la mujer y los excluidos que al ciudadanizarse se constituyen en clase peligrosa. La rebeldía indígena va asociada a la rebeldía de género. Una de las más importantes víctimas del proceso de destrucción cultural recayó doblemente en la mujer. Su potencial subversivo es enorme y concierne a la familia y a la colectividad.

Ante ello, la cultura occidental mercantiliza todas las relaciones sociales, y hasta el cuerpo, y ha incrementado drásticamente la prostitución y su negocio. Se ha reforzado la marginación femenina. Al reducirse el gasto social, se traspasan costos del sector remunerado al no remunerado, donde generalmente se encuentra la mujer. Asimismo, se le ubica en procesos intensivos de trabajo que utilizan disciplina, saberes, cualificación, sumisión, imbuidos por la cultura patriarcal que permite gran productividad. La mujer también se ubica en la economía “sumergida” y en la precarización.

La familia monoparental, ubicada en la feminización de la pobreza, las conduce a la prostitución en sus múltiples variedades: desde mises y modelos, pasando por las comercializadas por internet, las que se anuncian en los diarios (masajistas, damas de compañía), quienes son vendidas por catálogo, las que trabajan en *tabledances*, karaokes, bares y otros centros nocturnos, hasta las que simplemente son ultrajadas y asesinadas; o las que existen en las calles o en los prostíbulos. Según el semanario francés *Le Nouvel Observateur*, el mercado del sexo hace una década movía siete mil millones de dólares al año y ocupa el tercer lugar en los negocios ilícitos transnacionales, luego de la venta de drogas y armas.

En países como Tailandia, Filipinas, Indonesia y Malasia, la prostitución supone ingresos que fluctúan entre 2 y 14 % del PIB. Respecto a América Latina, el turismo sexual de Europa, Estados Unidos y Japón tiene como destinos preferidos al Caribe y Brasil. Se calcula que medio millón de mujeres y niñas colombianas están involucradas en el mercado del sexo fuera del país. Los orígenes están en las políticas neoliberales y sus secuelas: el desempleo, las políticas gubernamentales de exportación de personas para reducir la presión social, los conflictos, la represión, el machismo, el racismo (Tamayo, 2001).

La dimensión cultural de la mundialización no es suficiente para frenar el avance de la mujer y del componente étnico-clasista. Trasciende la homogenización de procesos productivos, técnicas industriales, modos de consumo, estilos de vida; la destrucción de la identidad, más allá del racismo y la discriminación, los procesos que desintegran y marginan a culturas y civilizaciones. La OMC, por ejemplo, convierte a la cultura en mercancía, conquistando mercados e imponiendo su hegemonía, modelando la conciencia popular con fetiches y creando necesidades. También está la atomización de las resistencias, el ataque a los vínculos comunitarios, el cual facilita las salidas escapistas apoyando a las religiones, eliminando el senti-

do crítico, monopolizando la información, controlando la universidad y la investigación; en fin, conformando un sujeto *ad hoc* con el sistema. De ahí la necesidad de construir un nuevo ethos, una cultura comunista.

Es innegable la importancia que ha cobrado el discurso y los medios que estructuran conceptos y los resignifican para construir opinión pública. La televisión y la red ofrecen *in situ* una concepción del mundo. Se construyen realidades virtuales de “presencias y ausencias”. Las megaempresas dominan la comunicación mundial y occidentalizan al mundo, consolidando una ética individualista y consumista sin sustento estructural. Todo ello forma parte del propio discurso de la democracia representativa como instrumento de dominación, obstaculiza la lucha y la implantación de derechos, asfixia y engulle la voluntad democrática y las tradicionales formas de socialización humanitarias y solidarias; perenniza así las desigualdades y discriminaciones.

En América Latina aparecen teóricos de una nueva generación socialdemócrata —seguidores de Ernesto Laclau, del que antes hablamos—, populistas de izquierda quienes pretenden construir repúblicas democráticas en el capitalismo, radicalizando el pluralismo democrático. Los supuestos ejemplos del éxito de sus teorías fueron los gobiernos progresistas de Latinoamérica y en Europa: Syriza y Podemos. Los nuevos socialistas reivindicados.

El PT pretendió ser su inspiración de los otros —después del peronismo— e intentó silenciar a los trabajadores con la ilusión del ascenso social: no desaparecer la clase, sino transformarla en una turba de menesterosos. El neo-desarrollismo y sus políticas compensatorias (Bolsa familia), más que un remedo nekeynesiano de la pobreza, negó la existencia de la clase, transformándola en una horda de necesitados para quienes se renueva la relación social basada en el favor colonial. O sea, el PT ciertamente será recordado por las generaciones futuras por convertir a la miseria del trabajador brasileño en virtud (Pinassi, 2015).

Tras el relativo fracaso “socialista” en Brasil, Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Ecuador, el movimiento social está en la búsqueda de alternativas. Cooptados y divididos, aun construyen puentes entre los movimientos activos y conscientes, para levantar organizaciones las cuales desde su formación promuevan, junto a la intelectualidad colectiva, que sus miembros trabajen por la equidad, la justicia social, los principios republicanos de libertad, igualdad y fraternidad, y la tolerancia a la diversidad. Wright Mills

(1968) con gran lucidez señalaba que la democracia es el autocontrol colectivo sobre la mecánica estructural en la historia. La democracia es una herramienta de recomposición comunitaria de la sociedad (bajo dirección de sus organizaciones y con apoyo estatal y gestión pública directamente social) para establecer una sociedad de hombres libres que respete y promueva la individualidad, eliminando los privilegios de las minorías.

Los procesos electorales orientados por el populismo, con guerras relámpago, resueltas en victorias rápidas y demoledoras, se equivocan en sus propios términos. El terreno de batalla que el mismo liberalismo había designado para medirse —el de las encuestas electorales y el *marketing* político— se puede volver en contra y a favor de una derecha que usa las mismas herramientas. El principal costo de esta estrategia: la renuncia a una organización capaz de dar un sentido orgánico, territorial y sectorialmente coherente, a una situación desbordante en términos de voluntad de participación. Para el populismo, la organización sólo obstaculizaría una comunicación más amplia con las mayorías sociales no movilizadas. Los estrategas apuntan a esos mismos estratos sociales, donde los politólogos llevan años localizando los grandes depósitos de votos en pos de una supuesta comunicación no mediada con el malestar de “la gente normal”.

El nivel de conciencia del pueblo sobre la realidad y los esfuerzos colectivos para superarla es el arma principal para emprender una empresa de regeneración. Nada que ver con pintar una idílica superación sin esfuerzo social de la postración en que nos han hundido las políticas de austeridad.

¿Qué sujeto podrá siquiera recuperar la capacidad de decisión perdida, denunciar el despojo, desconocer la deuda, acabar con la corrupción, romper con la continuidad de las políticas neoliberales y con la hegemonía del capital financiero? ¿quién podrá poner los derechos sociales en el centro de las políticas públicas (trabajo, vivienda, salud y educación) y liberarlos de las cadenas de ajuste, para restituir la centralidad de los derechos de la mayoría como justificación del pacto social de convivencia. Sin derechos sociales que garanticen una vida digna, no hay posibilidad de convivencia pacífica y Estado de derecho. Tampoco hay posibilidad de rescatar el patrimonio colectivo de su secuestro por la oligarquía, incluyendo los servicios públicos levantados con el esfuerzo colectivo. Los patrimonios colectivos son la condensación de la capacidad de cooperación social, un indicador de convivencia y solidaridad.

Al parecer, el único medio de oposición a esta privatización estatal permanente son efectivamente las formas masivas de manifestación autónoma del pueblo. El único modo de que no sólo exista el Estado, el modo representativo absorbido por el Estado, es que haya formas de existencia autónomas de otro poder. No una multitud reunida por una voluntad homogénea, sino un movimiento fuerte de acción que encarne el poder de todos y de cualquiera. Ese el principio mismo de la existencia de la democracia y de la política. Eso es lo que hoy es fundamental. Hay que salir del juego de la pelea entre grupos con poder y el Estado como únicos actores de la política. Hablar del poder de cualquiera es tomar partido por lo universal. El poder de cualquiera quiere decir que hay una capacidad que no puede ser acaparada por ningún grupo que diga que le pertenece. Ningún grupo representa la capacidad universal, la política.

Toni Negri piensa que el mismo proceso de trabajo en condiciones capitalistas crea las condiciones del comunismo futuro. Hay otros que dicen que tienen que madurar las condiciones objetivas, que hay que crear instancias de vanguardia y que después vendrá la revolución buena de verdad. Rancière dice que no. Para él está la presencia popular alternativa con respecto a la confiscación del poder de todos por parte del Estado o de poderes vinculados con poderes financieros:

La primera condición de otro futuro es que amplíemos aquí y ahora esferas de iniciativa de un pensamiento compartido, de modos de decisión compartida, de focos de autonomía que den poder a cualquiera. ¿Dónde están las condiciones de otros futuros que no sean la reproducción del presente? En el presente. ¿Dónde va a llevar esto? No se sabe (Fernández Savater, 2015).

Lo que sí sé sabe es que lo que puede llevar a otra cosa distinta al presente es la constitución de otros focos de poder y expresión autónomos, de otras formas de uso de las capacidades de los anónimos; es decir, mantener o renovar las formas de existencia de un poder que no es un poder oligárquico. Expresa Rancière que se debe atender a los procesos de subjetivación que están en marcha en las relaciones sociales y en las relaciones de poder, o que son movilizadas contra las formas de dominio a las cuales se confrontan los individuos en sus lugares de trabajo tanto como en el ámbito doméstico, en el trato con las instituciones tanto como en el espacio público-político.

Señala Rancière en sus *once tesis* que siempre habrá gente que irá a la calle y dirá “nosotros somos el pueblo”, y esto es la democracia. No que todo el pueblo esté reunido, sino que allí se presente “una figura del pueblo” que es la puesta en acto de una capacidad que no es la de ningún grupo determinado, de ninguna vanguardia determinada, de ninguna ciencia política determinada, sino la capacidad de todos, de cualquiera. La política no es el ejercicio del poder. Debe ser definida por sí misma, como una modalidad específica de la acción, llevada a la práctica por un tipo particular de sujeto, y derivando de una clase de racionalidad específica. La relación política hace posible concebir al sujeto político, no a la inversa. Lo peculiar de la política es la existencia de un sujeto definido por su participación en opuestos. La política es un tipo de acción paradójica. Rancière parte de la práctica para teorizar la democracia y el sujeto.

Con Rancière, la política es una ruptura específica de la lógica del *arkhé* (fundamento), dado que no presupone simplemente la ruptura de la distribución “normal” de las posiciones entre quien ejerce el poder y quien lo sufre, sino también una ruptura en la idea de las disposiciones que hacen a las personas “adecuadas” a estas posiciones. La democracia no es un régimen político. Es una ruptura de la lógica del *arkhé*; en otras palabras, la anticipación de la regla en la disposición por él. La democracia es el régimen de la política en tanto forma de relación que define a un sujeto específico.

Su concepción de pueblo es distinta a la de los posmarxistas “populistas de izquierda”. El pueblo, que es el sujeto de la democracia, y por lo tanto el sujeto matricial de la política, no es el conjunto de los miembros de la comunidad o la clase obrera o la población. Es la parte suplementaria en relación a cualquiera de las partes contables de la población que hace posible identificar la cuenta de los incontados con la totalidad de la comunidad. La esencia de la política es la acción de sujetos suplementarios inscritos como un plusvalor en relación con cualquier cuenta de las partes de una sociedad.

Si la política es el trazado de una diferencia evanescente en la distribución de las partes sociales, entonces su existencia no es de ninguna manera necesaria. Por el contrario, la política sucede siempre como un accidente recurrente en la historia de las formas de la dominación. El objeto esencial del litigio político es la existencia misma de la política, la configuración de su propio espacio, lograr que el mundo de sus sujetos y sus operaciones re-

sulten visibles. La esencia de la política es la manifestación del disenso, en tanto presencia de dos mundos en uno. El “fin de la política” y el “retorno de la política” son dos maneras complementarias de cancelar la política a través de una relación simple entre el estado de lo social y el estado de los aparatos estatales. “Consenso” es el nombre vulgar de esta cancelación.²³

El pensamiento crítico debería de tener como punto de inicio una forma específica de “realidad”: la realidad de las formas de lucha que se oponen a la ley de la dominación. Primeramente y de un modo principal, debería de consistir en la práctica y en la investigación acerca del poder de configurar mundos alternativos inherentes a esas formas.

Rancière desarrolla un concepto de subjetividad radicalmente inmanente que supone la constante redefinición del estatus mismo del sujeto, el cual se constituye a partir de su relación relativa respecto del orden social. Pero, al mismo tiempo, ese sujeto debe ser comprendido, definiendo una subjetividad que se determina a través de la serie de operaciones que lo constituyen en un campo sensible determinado.

Existe política, justamente, cuando quienes pertenecen a uno de los grupos así clasificados por el orden del Estado se desclasifica, considerándose perjudicado en esa clasificación. Esto supone, ciertamente, un movimiento en apariencia paradójico; quienes pertenecen a un grupo social, o a una minoría, afirman su diferencia en cuanto grupo, pero, al mismo tiempo, reivindican su igualdad. Al reclamar otro estatuto para sí, reivindican su igualdad de derechos ante la comunidad. Se constituye así un sujeto que no se define por una supuesta “cualidad esencial” sino, al contrario, por su capacidad para redefinir su relación respecto de la comunidad. En este sentido, la igualdad es una igualdad política, su condición de posibilidad es la de la vida política y no existe sin la comunidad. Pero, al mismo tiempo, esa misma comunidad no puede ser concebida como una entidad esencial.

²³ Rancière piensa la política como ruptura, como práctica específica de un sujeto, como condición de la democracia y ésta como forma de vida. Implica un análisis, una crítica filosófico-política de las operaciones a través de las cuales, en la actualidad, la política es “borrada”, dominada, encarcelada, invisibilizada, imposibilitada y clausurada por una lógica del principio, del *arhé*, del fundamento, de la ausencia de título, de la división de la comunidad, del consenso del mercado y la ley. Es decir, es una crítica del control de un orden policial que administra los espacios, los tiempos, los cuerpos y las voces (Rancière, s. f.).

En Rancière la apuesta es de otra índole. El autor obliga a romper con las pretensiones de una política teleológica. En cambio, piensa que la política tiene que ver con la contingencia, con interrupciones de la experiencia sensorial, del régimen de lo sensible, que bregarán por la parte de los sin-parte, pero que serán acciones intermitentes, con intentos continuos de verificación de la igualdad. Sin embargo, no piensa en la posibilidad de una sociedad emancipada en tanto fin de la política. Por ello mismo, el sujeto de Rancière es elíptico, su praxis es contingente, se resiste a su transformación en el Gran Sujeto y a portar una identidad plena. La subjetivación es un proceso nunca acabado que se construye y reconstruye permanentemente en la acción política y que se resiste a toda identificación como modo de resistir al orden policial.

Es así que puede hacer progresivamente suyos principios como los de diversidad, de democracia participativa (para la regeneración democrática de las democracias de delegación mediante redes de participación, gobernanza y fiscalización ciudadana sobre las decisiones), de autogestión cooperativa (propia de la economía solidaria o del bien común), de igualdad y de capacidades, de género, de ecosistema sostenible, de economía integral (como respuesta de una colectividad en un mundo global), de subsidiaridad (lo hace mejor el más cercano con más medios), sociedad-red (somos interdependientes) y visibilidad (diplomacia, paradiplomacia y nodo de red).

El soberanismo, además de una apuesta por el sujeto comunitario en claves de democracia radical, puede ser un proyecto de desarrollo integral que, además de la soberanía política, apueste por la soberanía económica –un modelo autocentrado en economía abierta–, por las soberanías ecológica y alimentaria, por la soberanía mediática –una opinión pública propia en el pobre y dependiente sistema comunicativo–, por una soberanía cultural, sociolingüística y educativa o por una soberanía en sus relaciones laborales.

Como señala John Holloway: estamos creando grietas en el muro del capital y tratando de promover su confluencia; estamos construyendo lo común, estamos comunizando. Somos el movimiento del hacer contra el trabajo; del valor de uso contra el valor; de la dignidad contra un mundo basado en la humillación. Estamos creando aquí y ahora un mundo de muchos mundos. “El pensamiento crítico frente a la hidra capitalista”.

O como sostiene Zibechi: sigue siendo necesaria una estrategia que aborde el complejo de inferioridad sufrido por el colonizado, y se pregunta: ¿De qué sirve la revolución si el pueblo triunfante se limita a reproducir el orden colonial, una sociedad de dominantes y dominados? Por ello, afirma, abordar la cuestión de la subjetividad es un asunto estratégico-político de primer orden, sin el cual el dominado volverá a repetir la vieja historia: ocupando el lugar material y simbólico del colonizador y reproduciendo el sistema que combate. Los que viven en la zona del no-ser no pueden ser autónomos en la sociedad opresora, ya que la violencia es vida cotidiana y la sociedad no los reconoce como seres humanos.

Por ello, los colonizados, los de abajo, deben crear espacios seguros a los que los poderosos no puedan acceder. Asimismo, las autonomías de los pueblos indígenas, campesinos y mestizos deben ser integrales. Deben abordar todos los aspectos de la vida, desde la producción de alimentos hasta la justicia y el poder. Los dominados no pueden apelar a la justicia del Estado, sino crear instituciones propias. De esta manera, los procesos de cambio no pueden ordenarse alrededor de los Estados actuales. Los procesos autonómicos se fundamentan en poderes democráticos, no estatales, anticoloniales, porque destruyen las relaciones de subordinación de raza, género, generación, saber y poder heredadas. Así, construyen otras nuevas, en las cuales las diferencias coexisten sin imponerse unas a las otras. Rechaza al partido centrado en las élites más conscientes y organizadas, que con su capacidad de negociar e incrustarse en el aparato estatal, no tienen necesidad de destruirlo, ya que esperan un lugar a la sombra del sistema.

El sujeto político no es una instancia puramente lógica, sino que promueve una relación práctica con la realidad. De esa manera, re-configura la experiencia dada al inscribir lo heterogéneo y lo ausente en la comunidad: es una transformación de lo dado (Vargas Tovar, 2007).

CAPÍTULO V

LAS ENTREVISTAS: LA PALABRA DE LOS DE ABAJO SOBRE EL NUEVO HACER

Entrevista con Mauro Lemes

Miembro de la Dirección Estadual del Movimiento Sin Tierra (MST) del estado de Minas Gerais.

“Tan sólo la Reforma Agraria, la sola distribución de tierras no basta, necesitamos de más.”

Universidad Federal de Ouro Preto (UFOP). 23 de noviembre de 2003.

Entrevista con Gilmar Mauro

Coordinación Nacional Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra (MST).

“O tenemos la capacidad de organizarnos internacionalmente para hacer luchas comunes y desarrollar la solidaridad entre los pueblos, o seguro no seremos victoriosos.”

São Paulo, 2005.

Entrevista con João Pedro Stedile

Coordinación Nacional del Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra (MST).

“Del 2000 para acá, comenzó a gestarse una resistencia contra el neoliberalismo, una resistencia popular, que comenzó en Chiapas, Seattle, después los Foros Sociales Mundiales, y ahora se metamorfoseó en una resistencia electoral.”

São Paulo, abril 2007.

Entrevista con Gilmar Mauro

Coordinación Nacional Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra (MST).

“Situación y perspectiva del Movimiento de los Sin Tierra de Brasil.”

São Paulo, 2008.

Entrevista con Judith Santos
Dirección Estadual del Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra (MST)
en São Paulo.

“El MST intenta hacer esa aproximación con el medio urbano, en la perspectiva de ampliar sus alianzas y relaciones políticas, en la construcción de una organización que sobrepase la lucha por la tierra y que sea una lucha mayor que envuelva el conjunto de la clase trabajadora.”

Jundiaí. São Paulo, 7 de agosto, 2009.

Entrevista con João Paulo
Movimiento Nacional de Catadores de Reciclaje (MNCR), parte de la articulación Estadual de Bahía.

“Nuestra lucha es contra la incineración y que se devalue nuestro trabajo como catadores.”

Rio de Janeiro. Cúpula de los Pueblos. Junio 2012

Entrevistas con Raúl Zibechi

Periodista uruguayo

“En Brasil, una nueva cultura política y de protesta.”

San Cristóbal de las Casas, Chiapas. 17 de agosto, 2013.

Entrevista con Ana Paula Perles

Coordinadora Estadual do Movimiento de los Trabajadores Sin Techo (MTST).

“El MTST es un movimiento urbano que tiene como bandera inmediata la vivienda. Su objetivo es la transformación de la sociedad.”

São Paulo. 19 de diciembre, 2013.

Entrevista con Jose de Asivaldo

Coordinación del Movimiento dos Atingidos por Barragens (MAB).

“Las transnacionales en la cuestión energética son las que mandan, son las que definen y dirigen el modelo.”

Foro Social Temático, Brasília, 08 de agosto, 2014.

Entrevista con Ana Moraes

Colectivo de relaciones internacionales del MST.

“El desafío que tenemos para el próximo año, es mantener las calles ocupadas.”

Brasília, 13 de agosto, 2014, sede del MST.

Entrevista con Sonia Guajajara y Lindoamar Terena

Coordinación de la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (API-BI), región Amazónica, y coordinador de la APIBI, región Centro Oeste, respectivamente.

“Hoy vemos un interés del Congreso Nacional en querer rasgar la Constitución federal, querer limar los derechos que tratan de los pueblos indígenas en la constitución, en nombre del desarrollo del país.”

Brasília, 29 de julio 2014.

Entrevista con Rosangela Piovisani

Dirección Nacional del Movimiento de Mujeres Campesinas (MMC) y de la coordinación de la Vía Campesina en Brasil.

“Nosotros dialogamos con el Estado, tenemos proyectos con él; pero nuestra autonomía es nuestra autonomía. No aceptamos que el gobierno quiera organizarnos.”

Brasília. 2014.

Entrevista con Robinho dos Santos

Dirección Estadual del estado de Minas Gerais, del Movimiento de Liberación de los Trabajadores sin Tierra (MLTS).

“No tenemos expectativas con el gobierno. Nuestra expectativa está en la construcción del poder popular a través de las ocupaciones.”

Minas Gerais, Uberlândia, 21 de mayo, 2015.

Entrevista con Sidnei Pita

Coordinación Nacional de la Unión Nacional Por Moradia Popular (UNMP).

“Vamos a salir para la calle para que la presidenta Dilma Rousseff lance el proyecto Mi casa Mi vida tres. No puede ser el próximo año; tiene que ser en este.”

São Paulo, 2 de octubre, 2015.

Entrevista con Anderson Amaro y Rosieli Ludtke

Coordinador Nacional de Pequeños Agricultores (MPA y campesina) militante del MPA del estado de Rio Grande del Sur.

“Soberanía alimenticia es tener acceso a las semillas, es tener las propias semillas criollas de acuerdo con la realidad y la cultura de cada región, de acuerdo con su diversidad, tener autonomía en el modelo de producción que uno va a utilizar para producir.”

São Bernardo, São Paulo, 12 de octubre, 2015.

Con la colaboración de Cecilia Reigada Piva.

Entrevista María das Graças Xavier
Coordinadora de la Unión de Movimientos por Moradia (UMM) y de la Unión Nacional por Moradia Popular (UNMP).

“Creemos que cuando las personas conocen sus derechos, no serán más engañados y de esta forma pueden reivindicar y multiplicar sus derechos.”

Centro de São Paulo, 16 de octubre, 2015.

Con la colaboración de Cecília Reigada Piva.

Mauro Lemes

Uno de los métodos del MST es la ocupación de tierras y la creación de campamentos. ¿Cómo es que organizan los campamentos? y ¿cómo es que eligen cual será el próximo lugar por ocupar?

Nosotros hacemos las ocupaciones de tierra a partir de la necesidad de los trabajadores para organizarse y conquistar un pedazo de tierra. Para hacer las ocupaciones de los campamentos, hay una organización anticipada para que esto ocurra, así como una organización interna que los regula y los mantiene. Si un campamento no tiene organización, se deshace rápidamente. Existe una discusión interna que nosotros hacemos para primar por eso. En cuanto a la cuestión de cómo escoger la tierra, la gente sabe en dónde están localizadas las tierras productivas o improductivas. De forma legal, se le pide al Incra que desapropie y que la coloque a disposición de la Reforma Agraria.

¿Cuál es la diferencia entre un campamento y un asentamiento?

El campamento es el proceso primario, digamos que es cuando la persona va a enfrentar y luchar un lote de tierra, el asentamiento viene después, cuando él ya consiguió su lote. Hay que considerar que nosotros no hacemos ocupaciones solo mirando el lado económico, sino también mirando el lado político y organizativo de los trabajadores. Por qué solo la Reforma Agraria, la sola distribución de tierras no basta, necesitamos de más.

¿Cuál es su relación con el Movimiento de los Trabajadores sin Techo?

El MTST es una organización urbana. En Brasil existe una necesidad por hacer una reforma agraria, pero también de hacer una reforma urbana.

El MTST está proponiendo esa reforma urbana. Esta organización cuenta con nuestro apoyo, pero no deja de ser una organización propia, no es el MST quien la organiza.

Frente a este proceso de globalización y del avance del neoliberalismo, ¿cuál es la forma de resistencia del MST?

Se da de una forma conjunta con varios segmentos sociales, a partir de algunos focos que nosotros tenemos que combatir. Dichos focos representan al modelo neoliberal. Por ejemplo, cuando hacemos una lucha contra el ALCA, estamos haciendo una lucha contra el neoliberalismo; cuando luchamos contra los transgénicos estamos luchando contra el neoliberalismo, al hacer una reforma agraria, estamos golpeando al neoliberalismo. Cuando apoyamos otros movimientos sindicales u otras entidades que también están haciendo lucha, se está enfrentando al neoliberalismo. Así es como el MST actúa en varios frentes contra el neoliberalismo.

Una de las características que puntualizo al MST es la de ser un movimiento que desde sus orígenes no ha recurrido al uso de las armas. ¿Cuál es su opinión acerca de otros movimientos de América latina que optaron por el uso de las armas para hacer una transformación social, como los zapatistas en México o las FARC en Colombia?

Me parece que son realidades distintas; son también culturas distintas. La gente respeta y apoya de forma solidaria la causa de los pueblos latinoamericanos que están haciendo su lucha para derrotar al neoliberalismo, para derrotar al imperio. Pero esta no es la realidad que se aplica para nosotros. Esto no quiere decir que en un futuro la gente no vaya a hacer uso de las armas; quien va a decir eso es la burguesía, la clase dominante. Ahora nosotros sentimos que tenemos que edificar a la población brasileña en un sentido de formar una conciencia política, como Karl Marx decía: tenemos que formar al pueblo y contar con las contradicciones capitalistas. Cuando estas condiciones se acentúen, nosotros tendremos un pueblo formado con la capacidad para entender su papel en cuanto individuo en la sociedad. Gueorgui Plekhanov habló de eso.

Hoy día, en Brasil se vive un proceso de cambio. Un partido de izquierda, el Partido de los Trabajadores, asumió el poder. Frente a este cambio, ¿cuáles son las expectativas del movimiento?

Nosotros tenemos una cosa: no acreditamos que vaya a haber una transformación social en Brasil a través del voto o a través de un gobier-

no. El pueblo tiene que organizarse y hacer la transformación social. Por mientras, es necesario que apoyemos a un partido político; es necesario que apoyemos a este gobierno que tiene su ascendencia en los movimientos populares. Es estratégico para nosotros ahora, y acreditamos que va a haber algunos avances principalmente en las áreas sociales. Son avances en los cuales nosotros no podemos abrir mano, porque hace parte estratégica de una acumulación de fuerzas. Por eso el movimiento prima por elevar el nivel de conciencia de los pobladores, como se dice. Nosotros no vamos a hacer una transformación social con ignorantes, porque cualquier revolución que no invierte en la educación y en la formación política e ideológica del pueblo es una revolución frágil que no puede solidarizarse, que puede ser derrotada.

¿Qué opinas acerca del Programa de Reforma Agraria que propone el PT?

Me parece que es bueno, pero tiene que ser colocado en la práctica, algo que hasta el momento no ha sido realizado. Hasta ahora, nosotros apoyamos el programa agrario del Gobierno del PT; pero tiene que ponerse en práctica. Necesita, a partir de su práctica, lanzar propuestas con respecto a la distribución de tierras en el país.

¿Ustedes reciben algún apoyo económico del partido?

Sí, a través de parlamentaristas, gobernadores y apoyos. Sin embargo, todavía son tímidos, porque no quieren ligar la cuestión de los conflictos agrarios con su imagen personal o con la imagen del partido. Pero dan un poco de apoyo de sustentación. También es la gente la que tiene que cobrar de ellos. Ahí es donde nosotros contamos con eso. Creemos que hasta ahora no es el apoyo que nosotros creemos que debe ser; mas nos han dado un apoyo, aunque sea de forma mínima.

Gilmar Mauro

¿Cuéntanos cómo es que surge un movimiento como el Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra?

El MST es un movimiento social de masas, que tiene un carácter popular, sindical y político. Popular, porque en él participan hombres, mujeres y niños. Sindical, porque hace parte de la lucha económica, de una lucha por

la tierra, por créditos, por las cooperativas de consumo; en fin, reivindicaciones por educación, transporte, entre otros. Tiene un carácter político, en función de que luchamos por la reforma agraria como parte de una lucha mayor por transformaciones sociales más profundas. Creemos que no es posible realizar una verdadera reforma agraria y alterar el modelo agrícola en este país. Si no, se alterarían las estructuras del poder.

Es necesario hacer que esa lucha inmediata se vincule con esa lucha política mayor, como parte de una acumulación de fuerzas con otros sectores de la sociedad brasileña, que nos permita realizar la reforma agraria y los otros cambios necesarios para nuestro país, para mejorar las condiciones de vida y darle dignidad a nuestro pueblo. El movimiento surgió en 1984; intentaba aglutinar la luchas por la tierra ya existentes en aquella época, luchas en cierta forma desarticuladas unas de las otras. Surgió porque en Brasil nunca fue hecha la reforma agraria; hay una cantidad inmensa de tierras improductivas y una cantidad inmensa de trabajadores sin tierra.

En sus primeros momentos, surgió con el apoyo de la Iglesia y del movimiento sindical combativo en el campo; después, el movimiento se fue construyendo su propia autonomía política. Hoy es un movimiento autónomo en relación a partidos políticos, iglesias, movimiento sindical. Nos pareció que era el mejor camino.

¿Cómo fue que comenzaste a participar en el MST?

Fui para una ocupación de tierras en 1985, en la ciudad de Marmelero en Paraná. Mis padres son sin tierra. Nací y me crié en el campo. En ese año fui a una ocupación de tierras; un año más tarde, fui asentado y llevé a mi familia para el asentamiento, donde continúan hasta hoy. Esa fue la forma como entre al movimiento.

Actualmente ¿Cómo está la relación entre el MST y el gobierno?

Partiendo del principio de la autonomía, tenemos una relación de lucha y negociación. Para nuestro entendimiento, es necesario que haya un proceso de movilización social. Las conquistas económicas son fruto de las luchas del pueblo. No creemos en procesos de negociaciones de líderes pura y simplemente. Las conquistas sociales son obra y fruto de la movilización social. Son parte de un proceso de aprendizaje que se realiza diariamente a partir de las luchas donde los propios trabajadores se vuelven sujetos de su propia historia; donde se organizan, se escuchan, tienen consciencia y formación política e ideológica. A partir de eso, organizan la continuidad del proceso de la lucha que no se acaba en esa conquista económica.

Gilmar, está por suceder el próximo 17 de abril un importante evento del movimiento. Una gran llamada nacional con la realización de la marcha. ¿Nos puedes decir cuáles son las principales reivindicaciones de esta marcha?

Primero, tiene que ver con la reforma agraria propiamente dicha. El gobierno de Lula asumió un compromiso de asentar 115 000 familias por año y no cumplió. Para perjudicar todavía más, el ministro de economía Antonio Palloci cortó el presupuesto para la reforma agraria para este año en 2 millones de reales. Una de las cuestiones fundamentales es reivindicar el presupuesto para la reforma agraria. El segundo argumento tiene que ver con la política económica. Nosotros estamos contra la política económica aplicada por el gobierno, que privilegia a los contratos con el capital financiero, en detrimento de problemas sociales graves: los sin tierra, la no realización de la reforma agraria, el hambre, la violencia y la falta de trabajo.

En nuestro entendimiento, el problema es la violencia que se viene generalizando, no sólo en el campo, sino también en las ciudades, con recientes masacres y asesinatos. La violencia es fruto de la mala distribución de renta y riqueza. Existe una violencia en los medios de comunicación, impuesta por el pensamiento único. Existe violencia por parte del poder jurídico, que es muy rápido para promover desocupaciones de los sin tierra, pero muy lento cuando necesita juzgar favorablemente una desappropriación de latifundio improductivo a favor de los trabajadores. Existe una violencia del Estado: la construcción de más cárceles, el cual no resuelve el problema de la violencia. Es necesario que haya una distribución de renta y riqueza en el país para que haya efectivamente esa disminución de la violencia. Es necesario atacar el problema de la violencia de raíz. En el campo no hay otra forma que atacar el latifundio, un problema histórico brasileño: la concentración de tierras.

Ustedes publicaron un millón de ejemplares de su periódico *Sin Tierra* para la marcha. ¿Cómo es que el MST lidia con la opinión pública en relación con la gran prensa?

Nosotros no creemos en la gran prensa; ella estigmatiza y siempre lo hizo. No es exclusividad hacia el MST. En la historia de este país, los medios de comunicación primero estigmatizaron los movimientos, para que después los aparatos represores los aniquilaran. Frente a eso, estimulamos la solidaridad internacional, la solidaridad interna, con debates o con la producción de nuestros propios vehículos de comunicación: radios comu-

nitarias, la elaboración de periódicos. Fue el caso de ese periódico masivo que vamos a distribuir para la sociedad. También usamos otras formas de lenguaje, como el teatro popular, que estamos estimulando.

El teatro es un mecanismo para llevar el debate político ideológico a la sociedad o a las escuelas, con mejores condiciones inclusive que el propio discurso de un dirigente de un militante, porque llega a un público diferente, con una lenguaje y signos diferentes, lo cual me parece muy importante. Es el caso de intentar reproducir películas, y a partir de ellas mantener contactos con la población, pues no tienen acceso. Las salas de cine en este país son muy pocas. En fin, es un gran desafío de la izquierda brasileña y mundial buscar mecanismos de comunicación. Si no involucramos a la población en la lucha, si no tenemos la capacidad de informar a la población en la perspectiva de ascender la lucha social de masas de este país, va a ser difícil alterar esa correlación de fuerza y va a ser difícil cambiar. Comunicación tiene a ver con lucha; porque la lucha en masa es la única capaz de cambiar este país.

En un sentido más internacional, ¿cuál es la relación del MST con otros movimientos del continente?

A lo largo de los años hemos construido varios espacios importantes en América latina, tenemos la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC) que busca aglutinar todas las organizaciones campesinas con la perspectiva de hacer un diagnóstico común para hacer acciones conjuntas. En un sentido internacional, tenemos la Vía Campesina, la cual articula varios continentes. En esa misma perspectiva, se entiende que los enemigos de los campesinos son los mismos en todas partes del mundo: los grandes conglomerados financieros que hoy controlan el mercado internacional de productos agrícolas y la producción de insumos para la agricultura.

Nuestro enemigo (el de la clase trabajadora en general) es el capital financiero. Sólo se podrá enfrentar a ese enemigo, que tiene un poder muy grande e internacional, con la articulación internacional de la lucha de los trabajadores. Estamos ayudando construir el Foro Social Mundial (FSM), que es un espacio amplio, con todas las críticas que pueda recibir. Por su amplitud, es un espacio de articulación importante de luchas, como la campaña continental contra el ALCA o la campaña por plebiscitos por la deuda externa. Son varios los espacios internacionales y de articulación que envuelven tanto a campesinos como no campesinos. O tenemos la

capacidad de organizarnos internacionalmente para hacer luchas comunes y desarrollar la solidaridad entre los pueblos o seguro, o no saldremos victoriosos.

¿Y en caso de grupos como FARC y el ELN en Colombia?

Nosotros apoyamos todas las luchas de emancipación de los pueblos. Hay un principio, dentro de nuestras articulaciones en defensa de la autonomía de los pueblos, el cual consiste en adoptar las formas y luchas apropiadas. Mucha gente nos pregunta: ¿cuál es el apoyo de ustedes con los zapatistas o con otros movimientos? Los zapatistas, en función de la realidad mexicana, adoptaron esa forma de lucha. El ELN o la FARC adoptaron sus formas de lucha; esas luchas no pueden ser copiadas por otros pueblos. Cada realidad es única y cada pueblo debe escoger su principal táctica de enfrentamiento. Nosotros defendemos la autonomía de cada pueblo para hacer su enfrentamiento, sus formas de lucha. Respetamos eso y tenemos la solidaridad internacional: las luchas por liberación de todos los pueblos son un principio de nuestro movimiento.

Ya que hablas del Movimiento Zapatista, ¿existe algún vínculo con los rebeldes chiapanecos?

Yo estuve en la realidad, en un encuentro, y conversé con varios comandantes como Tacho y Elorriaga; inclusive con el subcomandante Marcos. Tenemos relaciones de solidaridad. Más que una relación orgánica, son lazos de solidaridad con la lucha del pueblo mexicano. Tenemos unas aproximaciones importantes con varios movimientos campesinos en México, varias organizaciones que han participado en nuestros eventos y hemos hecho un intercambio. Pero hay una relación de solidaridad y apoyo más con los movimientos campesinos por medio de la Vía Campesina y la CLOC, que propiamente con los zapatistas.

Eventualmente hemos construido un diálogo; ellos cuentan con nuestro apoyo y solidaridad en su lucha. Lo que nosotros queríamos era que los zapatistas pudieran participar más activamente en los espacios en América Latina, como la CLOC o la propia Vía Campesina y otros espacios de articulación política. Esto los aproximaría con otros movimientos sociales, lo cual permitiría llevar a esos espacios las experiencias que ellos desarrollan y compartir la riqueza de las experiencias latinoamericanas de enfrentamiento con el capital. Partimos de ese principio. Es necesario traer esas experiencias para hacer un diagnóstico común. Los enemigos son comunes; por lo tanto, para el enfrentamiento, sea en la selva Lacandona o en

los asentamientos del MST, o en cualquier parte del mundo, es necesario juntar los esfuerzos y enfrentar al enemigo común a todos los pueblos, al enemigo de la humanidad.

João Pedro Stedile

¿Cuál es la importancia de la Escuela Nacional Florestan Fernandes para el MST?

La escuela es más que un edificio; es una propuesta pedagógica que busca construir una nueva forma de capacitar a los militantes de los movimientos sociales. La propia construcción de la escuela fue hecha en la forma de trabajo colectivo para que los trabajadores y futuros estudiantes percibieran que esa construcción ya era un curso de formación. Por otro lado, estamos en un periodo de descenso del movimiento de masas aquí en Brasil, que viene desde la década de 1990.

Por eso, es muy importante que en esos periodos de descenso de los movimientos sociales se desarrollen programas de formación política-ideológica en el periodo de calma de las luchas sociales. Este es el momento de aprovechar el tiempo, para formar más personas, más militantes y al mismo tiempo resguardar el proyecto ideológico. Porque cuando la lucha de masas asciende nuevamente, pasamos a un período de efervescencia política. La formación se transfiere a las calles, a la lucha social. Entonces, el espacio será de lucha de clases. En el actual momento histórico, el papel de la escuela Florestan Fernandes es mantener el proyecto ideológico; alimentar ese proyecto político de cambios.

¿El MST tiene otras instituciones de enseñanza en el país?

Tenemos varias formas de desarrollar programas de formación. Una de ellas es a través de vínculos con diferentes universidades. Tenemos vínculos con más de 42 universidades, donde profesores y facultades progresistas realizan junto con el MST cursos específicos para militantes sociales en las más diferentes áreas, como pedagogía, agronomía e historia. Tenemos un curso de pos-graduación en estudios latinoamericanos en la Universidad Federal de Paraná, en los mismos moldes que la Universidad Nacional Autónoma de México. También tenemos escuelas regionales del MST. Prácticamente todos los estados tienen una escuela regional. Por lo

tanto, en los estados hay un nivel de formación política e ideológica, diría yo, de nivel medio. En la ENFF y en las universidades los cursos son de nivel superior.

¿Cómo es que se financia la ENFF?

De muchas maneras. Primero, el gasto para construirla fue bajo, porque la obra se realizó por medio del trabajo en conjunto. La alimentación es fornecida en su mayoría por los propios asentamientos, sobre todo, arroz, frijoles y leche, lo cual reduce bastante el valor de la manutención. Segundo, todo el cuerpo de enseñanza; los profesores dan clases gratuitamente. No gastamos ni un centavo con los profesores. El mayor gasto para la escuela es el transporte de los alumnos hasta São Paulo. Las divisiones estatales del movimiento contribuyen pagando los pasajes para los alumnos.

¿Cuál es la relación del MST con otros movimientos sociales en América Latina?

El MST nació con una vocación latinoamericanista. Por varias razones; inclusive por la influencia ideológica que tuvimos de otros movimientos por el continente. En la década de 1980, tuvimos la Revolución sandinista; el trabajo pastoral de la Iglesia católica y luterana fue muy importante. La teología de la liberación, que influenció al movimiento, es una teoría latinoamericana. Sus ideólogos, el padre Gutiérrez en Perú, los cardenales en Nicaragua, el padre fallecido Javier Gorrostiaga, que era español radicado en Nicaragua, siempre fueron latinoamericanistas. Eso influenció al movimiento, y le dio, desde el inicio, un carácter latinoamericanista.

La segunda influencia es que el campesinado en Brasil es muy joven. Existe el campesinado como clase social en el país desde hace solamente cien años. Se formó a final del siglo XIX a partir de los emigrantes europeos y una parcela de mestizos pobres que fue formándose en el período colonial. Entonces, es un campesinado con poca experiencia en la lucha de clases.

Siempre miramos el punto de vista histórico con cariño; miramos hacia la experiencia de los movimientos campesinos en México, los movimientos campesinos en Perú, en los Andes (un campesinado que tiene más de mil años, y que tiene otra visión de lucha por la tierra). Entonces, para nosotros los movimientos mexicanos y andinos siempre sirvieron como inspiración. Queremos aprovechar siempre ese intercambio para aprender. A partir de esa vocación latinoamericanista, el MST siempre estimuló el intercambio con otras organizaciones.

De ese intercambio surgió la idea de formar esa articulación de todos los movimientos campesino de América Latina, el cual se concretó con la fundación en 1994 en Lima, Perú, de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC). En ella, buscamos organizar una visión que vino de la historia. No debe ser una articulación sectaria doctrinaria, relacionada a una corriente política, sino que debe representar la unidad de los campesinos. Todos los que luchan, independientemente de ideologías o de partidos, tienen afinidad. En la CLOC, todos participan independiente de la corriente ideológica. Después de esa experiencia, como fruto del neoliberalismo que fue tomando cuenta de la agricultura en el mundo entero, pasamos a tener contacto con los campesinos de Europa, con los campesinos de Asia y de ahí se formó, en 1995, la Vía Campesina Internacional.

¿Cuál es su opinión respecto a este nuevo escenario en América Latina, con la llegada de Hugo Chávez, Evo Morales y Rafael Correa? ¿Cuál es el significado de esa frase que recientemente dijo Hugo Chávez: “Construir el nuevo socialismo del siglo XXI”?

En América Latina, y en Brasil en particular, la lucha de clases ocurre en ondas. Nosotros tuvimos un gran período de ascenso de lucha de clases en el continente después de la Segunda Guerra Mundial, hasta la Revolución sandinista de 1969. De la década de 1980 hasta ahora, hubo una derrota de la clase trabajadora y una ofensiva del capital internacional, del neoliberalismo, que tomó cuenta del continente. Fueron veinte años de derrotas.

Del 2000 para acá, comenzó a gestarse una resistencia contra el neoliberalismo, una resistencia popular, que comenzó en Chiapas, Seattle, después en los foros sociales mundiales, y ahora se transformó en una resistencia electoral. En la evaluación del MST, estamos todavía en una etapa de resistencia contra el neoliberalismo: el pueblo usa las elecciones para votar contra el neoliberalismo. Por esa razón, todas las elecciones, del 2000 para acá, siempre los candidatos anti-neoliberales han ganado a las elecciones. En el caso de Perú, también fue un voto anti-neoliberal.

Pero eso todavía no es un indicativo del ascenso del movimiento de masas. Nosotros todavía no entramos en un período histórico de ofensiva de las clases populares. Tal vez el primer país que ya entró sea Bolivia, que está en ascenso en el movimiento de masas; pero no podemos decir que el continente está en ascenso. En algunos países como México hay una lucha popular importante, por ejemplo en Oaxaca, o en algunos estados

bien localizados; pero el país como un todo no está en ascenso. Entonces, ¿cuál es nuestra expectativa? Es que, en el próximo período, de cinco a diez años, haya una inflexión de lucha de clases, y nosotros pasemos ese período electoral para entrar en un periodo de lucha social, de grandes movilizaciones, donde el pueblo sea protagonista.

Eso todavía no está dado. Cuando venga esa nueva ofensiva de masas, un nuevo ciclo de la historia de ofensivas, solamente ahí se producirán las condiciones para mudar el modelo económico. Chávez está anunciando el “socialismo del siglo XXI”; creo que fue hasta prudente al decir siglo XXI, porque está diciendo que es una lucha prolongada. También está diciendo de la propia lucha de clases en Venezuela que a veces muchas ideas a las cuales él hace propaganda después no tienen una base real, porque el pueblo no acumulo fuerza suficiente para concretizar aquellas ideas. Entonces Chávez está siendo visionario y propagandista; está hablando del futuro que no consigue aplicar en Venezuela. Pero pienso que nosotros estamos caminando para mudanzas, nosotros estamos caminando hacia el frente.

Gimar Mauro

¿Podría usted hacer para nosotros un diagnóstico de lo que significó el Quinto Congreso del Movimiento de los Sin Tierra?

El Quinto Congreso fue uno de los mayores Congresos desarrollados en la historia del Brasil. Logró reunir más de diecisiete mil trabajadores de todo el país. El objetivo era organizar un debate político acerca de varios temas relacionados con la reforma agraria, los cuales no se reducen simple y exclusivamente a este tema. Así que intentamos también hacer un diagnóstico internacional del capitalismo, de la actualidad, y también un diagnóstico sobre el Brasil actual. Discutimos la cuestión de las alianzas, y lo que sería un programa de reforma agraria para la actualidad; discutimos sobre los desafíos del Movimiento de los Sin Tierra en el próximo periodo, desde el punto de vista interno y organizativo. También discutimos los desafíos frente a la sociedad brasileña. Al mismo tiempo, definimos las orientaciones políticas para el MST en el próximo periodo. Además de todos estos contenidos planteados, es obvio que el Congreso es también un momento de confraternización, un momento en que toda la militancia del

MST se reúne, festeja e intercambia experiencias; al mismo tiempo, participa de ciertas actividades de lucha. Fue el caso de la marcha que ocurrió durante el transcurso de nuestro propio Congreso. En resumen, fue uno de los mayores y más importantes congresos de toda la historia del MST.

¿Cuál es la diferencia que usted encuentra, entre este Quinto Congreso y los cuatro Congresos anteriores?

Creo que la primera diferencia es el número. Es la expresión de un crecimiento de su capacidad organizativa. Aunque debemos decir, de paso, que a pesar de todo es todavía pequeña. Reconocemos nuestros límites frente a las demandas y a los desafíos de la cuestión agraria en Brasil. Somos todavía un movimiento social pequeño, que necesita crecer mucho más. Pero el Congreso es ya el reflejo de este crecimiento, en relación a los anteriores. Encuentro también una cierta maduración política, en el sentido de entender y superar una visión de la reforma agraria, que no era hegemónica dentro del MST, aunque estaba presente en su seno. Iba en el sentido de creer que era posible llevar a cabo una reforma agraria al estilo clásico.

El MST superó definitivamente esa visión, y ubica a la reforma agraria en el contexto político: el de una lucha de clases, contra el latifundio, el poder político brasileño y su estructura. Por lo tanto, plantea la cuestión del cambio de esta estructura de poder, como una forma, inclusive, de ser capaces de llevar a cabo esta reforma agraria. En mi opinión, esto es un salto político cualitativo bastante importante. El tercer elemento de diferenciación más importante es el reconocimiento explícito de que nosotros solos no vamos a poder enfrentar estos problemas. Para confrontar al gran capital, para enfrentar al poder político de la clase dominante, es necesario construir alianzas con otros sectores de la clase trabajadora; es necesario dialogar con la sociedad, principalmente, para que pueda también entender por qué es preciso cambiar la lógica del sistema, por qué hace falta cambiar a ese sistema entero y llevar a cabo los cambios en la agricultura, otro tipo de reforma agraria, otro modelo de producción agrícola. Creo que esos tres aspectos definen la importancia de nuestro Quinto Congreso.

En relación con la coyuntura internacional que usted mencionó, hay una cosa que me llama la atención: en este Quinto Congreso, el subcomandante insurgente Marcos envió una carta de apoyo al MST. ¿Cómo ve usted la integración del MST con otros movimientos de América Latina?

Una de las cosas que el MST priorizó siempre, y que siempre tuvo como uno de sus principios, fue buscar formas de construir modos de articulación política con otras organizaciones sociales, no sólo de América Latina, sino de todo el mundo. Acabo de volver de un viaje a Corea. Hace poco más de un mes, estuvimos con varios movimientos sociales, no solamente del campo. Intentamos avanzar en el fortalecimiento del grupo Vía Campesina a nivel internacional.

Ahí observamos que los problemas de los campesinos, en todo el mundo, son muy parecidos. Los enemigos son comunes; por lo tanto, el enfrentamiento con esos enemigos comunes exige el desarrollo de acciones comunes, también en escala internacional. En América Latina, hemos visto también el fortalecimiento de ciertas organizaciones campesinas, como la de los neozapatistas. Dos meses atrás se llevó a cabo una reunión, allá en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, donde compañeros del MST, y del grupo Vía Campesina internacional, tuvieron una reunión con varios comandantes del movimiento neozapatista. Estas son aproximaciones muy grandes con los zapatistas, y con el grupo de Vía Campesina. Pienso que hay un gran desafío en las próximas etapas: construir cada vez más puentes comunes, fortalecer los espacios de articulación internacional.

Nunca estuvo tan a la orden del día aquella frase con la que termina el *Manifiesto del Partido Comunista*: los trabajadores del mundo deberían de unirse. ¿No es así? Pienso que para enfrentar al capital y a su lógica, en la actualidad, hace falta que la gente se unifique en los movimientos, y que lleve a cabo luchas comunes. Si no, vamos a tener cada vez menos posibilidades de éxito. Esto vale tanto para el movimiento campesino como para el proletario en general. Solamente para dar un ejemplo, cuando acontece una huelga en un país, las grandes empresas trasnacionales relocalizan la producción hacia otro país. Esa es la idea del banco de horas: obligan a los trabajadores de un cierto lugar, a que produzcan más en otros países, lo cual implica que la huelga va a tener dificultades para afectar de una manera efectiva al sistema productivo.

Los trabajadores en otras partes del mundo están produciendo aquello que no se está produciendo, en un momento dado, en la industria local de los trabajadores que están en huelga. Entonces, cuando la huelga es derrotada, el trabajo se redobra, y los huelguistas tienen que compensar todo el tiempo que mantuvieron parada la fábrica. Por lo tanto, la carga de trabajo aumenta, incluso con el riesgo de la pérdida de empleo. Situaciones como

esta colocan al movimiento sindical, al movimiento de la clase trabajadora, frente al desafío de la articulación política y del desarrollo de luchas en escala internacional, inclusive para poder avanzar desde el punto de vista económico, y mucho más, para avanzar también desde el punto de vista político.

Usted habló de nuevos desafíos. ¿Cómo se da ahora la relación del MST con el Estado?

El Estado brasileño, y el Estado en términos generales, en la mayoría de los países es capitalista; por lo tanto, es enemigo de la clase trabajadora. No existe ninguna perspectiva de que la gente pueda avanzar demasiado, bajo la lógica y bajo el comando de este Estado burgués. Entonces, nosotros no tenemos ninguna duda de que el combate frente a ese Estado es un combate político. Es un combate permanente, que depende no solamente de nosotros, sino también de las articulaciones y alianzas políticas con otros sectores de la clase trabajadora.

En nuestra relación con el gobierno, tenemos el principio siguiente: vamos a continuar luchando, haciendo ocupaciones de tierra, organizando a los trabajadores y haciendo marchas, reivindicando la reforma agraria, y avanzando en aquello que nosotros podamos, en las conquistas económicas, en la mejoría de las condiciones de los créditos, en la mejoría de las condiciones de la infraestructura de los asentamientos. Todos estos elementos han sido nuestro patrón de comportamiento económico; por lo tanto, vamos a darles continuidad. Al mismo tiempo, vamos a desarrollar acciones políticas, que hemos estado articulando en conjunto con otros sectores, en contra del modelo económico y en contra de la actual política económica.

Fundamentalmente, vamos a desarrollar una estrategia común con otros sectores. Pienso que es extremadamente urgente, y que es una cuestión que se plantea en la actualidad: el debate acerca de la construcción de esa estrategia común, para la confrontación en contra del Estado, inclusive, como una condición para la propia realización de la reforma agraria. Desde nuestro punto de vista, no vamos a poder llevar a cabo la reforma agraria solos. Hace falta alterar la actual estructura de poder; es necesario modificar el actual esquema de la correlación de fuerzas políticas de la sociedad brasileña. Esa modificación sólo sucederá como fruto de una reiterada lucha, y de muchos enfrentamientos.

No tenemos ninguna duda de que cualquier conquista, incluso de tipo económico, tendrá que estar mediada por un fuerte conflicto social. No porque nos guste por sí mismo el conflicto, sino porque es sólo mediante

la confrontación y mediante la lucha que hemos podido conquistar lo que tenemos. Pero es también a través de éstas, que nosotros formamos a muchos de los militantes, para que se encuentren preparados frente a los desafíos, y para que sean capaces de llevar a cabo el fortalecimiento del MST, y de la lucha de clases en Brasil.

¿Cuántos militantes son hoy parte del MST?

Es muy difícil precisar esto, porque tenemos militantes de tiempo integral, y militantes de tiempo parcial. Tenemos también militantes que ya están asentados, ubicados en los asentamientos del MST, que están produciendo, y que además de cuidar su producción donan parte de su trabajo para la militancia. Podríamos decir que los diecisiete mil militantes que estaban en ese Quinto Congreso, son parte del MST. Algunos de ellos de tiempo integral, aunque la mayoría sólo una parte del tiempo. Como el MST no tiene afiliados, no hay un padrón o catálogo. Aunque pienso que existen mucho más que estos diecisiete mil. Si consideramos a todos aquellos y aquellas que, dentro de los asentamientos, desarrollan actividades en el campo de la educación, de la salud, de la producción, en fin, en todas las áreas del MST, llegáramos a una cantidad mucho mayor que esa cifra de los diecisiete mil.

¿Cómo se da el proceso de ocupación de los asentamientos?

El campamento es una forma de lucha, una forma de presión. Ahí está el problema, incluso una de nuestras contradicciones. Es una forma de presión frente al Estado, para que el Estado lleve a cabo la expropiación. Porque el Estado tiene que cumplir con la legislación, y la legislación establece que toda la tierra que no cumple una función social puede ser expropiada. Pero eso no sucede si no es mediante la presión. Cuando el Estado lleva a cabo la visita, y comprueba la improductividad de la tierra, se instala un proceso expropiatorio.

Ese proceso puede llevar entre nueve meses y muchos años, depende de cada caso: de la presión política, de las complicaciones jurídicas. En fin, puede llevar hasta cinco o seis años para ser expropiada un área. En la medida en que el Estado expropia, el poder judicial tiene que emitir un certificado de posesión, lo cual normalmente acontece después de ese enfrentamiento jurídico, y de una gran presión política. En la medida en que eso se logra, el Estado toma posesión del área y puede proceder al asentamiento de las familias, lo que nosotros llamamos *el asentamiento*, diferente del campamento. Es ya un asentamiento definitivo de las familias, después

de que se lleva a cabo todo ese viacrucis jurídico-político, y que acontece la certificación de posesión de las familias, el proceso para la liberación de los créditos iniciales y la liberación de los créditos para la producción.

¿Cómo se financia un movimiento como el del MST?

La mayoría de nuestro financiamiento proviene de los recursos de la propia base del MST. Son actividades autosustentadas. Las reuniones regionales, las reuniones dentro de los asentamientos y los cursos de formación se desarrollan normalmente en áreas de los asentamientos. Es algo que no se contabiliza, porque en verdad, los cursos de formación implican la alimentación, la estadía, que no es contabilizada, y el propio transporte regional, que se hace viable de distintas maneras. Si tomamos el conjunto de las actividades del MST, calculamos que ochenta por ciento de esas actividades se financia con la propia base, es decir, es autosustentada; quince por ciento de los recursos son de aliados, como los sindicatos, la Iglesia, o incluso algunos convenios con el gobierno; otro cinco por ciento proviene de la ayuda internacional, de los amigos del MST en Europa, en Estados Unidos, de algunas agencias y organizaciones no gubernamentales. En general, pensamos que podemos contabilizar el financiamiento de esta forma.

Esas contribuciones ayudaron también para la construcción de la escuela Florestan Fernandes. ¿Podría usted hablarnos un poco respecto de esta Escuela?

La escuela es un gran sueño, un proyecto que no es solamente nuestro, sino de toda la clase trabajadora. Es una construcción que el MST hizo; cada militante dio una cuota de trabajo voluntario para su construcción. Algunos amigos, como Sebastiao Salgado, Chico Buarque o José Saramago, donaron una colección de fotos de un libro, que era el libro *Terra*. Fue un modo de agenciarse recursos, para la adquisición de los materiales necesarios para la construcción. Toda la infraestructura, o más bien, toda la mano de obra fue un proceso en el cual toda la militancia del MST participó.

La escuela está dentro de las prioridades del MST. Es un espacio de formación política de nuestra militancia. Nosotros queremos que otros sectores de la clase trabajadora brasileña formen parte también de este esfuerzo. El movimiento sindical, el movimiento popular, etcétera. También queremos que sea un espacio donde, dentro de América Latina, podamos desarrollar cursos de formación para fortalecer las organizaciones sociales, el grupo de Vía Campesina en América Latina.

Con todo esto, queremos dar nuestra contribución para formar militantes de otros movimientos sociales de todo el continente. Ese papel lo cumplieron otros países en el pasado; Cuba, por ejemplo, cumplió un papel importante. Al mismo tiempo que usted hace el curso de formación, tiene también oportunidad de relacionarse con varios militantes de diferentes organizaciones de toda América Latina, lo cual posibilita el intercambio de experiencias, el conocimiento mutuo, la aproximación y la disolución de las diferentes barreras. Creo que eso puede ayudar a fortalecer, mucho más, ese proceso organizativo de articulación política con otros movimientos sociales, principalmente de nuestro continente.

Por eso es que nosotros estamos estimulando y desarrollando este proyecto de la escuela Florestan Fernández. Ahora, en Angola, va a ser creado un Centro de Formación del grupo Vía Campesina para toda el África. Es una especie de escuela de formación que formará a la militancia de todos los países africanos. Espero que eso tienda a crecer, y quién sabe si en el futuro puedan fundarse centros similares también en Asia, en Europa, y también en otros lugares del mundo.

Judith Santos

¿Cuál es el propósito de esta marcha?

El objetivo principal es retomar el debate de la reforma agraria juntamente con la sociedad. Por las ciudades donde hemos pasado, entregamos panfletos e intentamos ampliar el dialogo con la sociedad local. Queremos retomar la pauta sobre la reforma agraria con los gobiernos tanto el federal como estadual. En nuestra opinión, ha sido un fracaso como ha sido tratada la reforma agraria en Brasil. Esta marcha tiene como principio primordial retomar el debate sobre las reivindicaciones de la reforma agraria. Reivindicaciones que no son nuevas, sino que se han acumulado desde hace muchos años. Como no hubo un avance en la reforma agraria, entonces decidimos que en esta jornada de lucha estaríamos organizando una marcha rumbo a la capital para recolocar el debate en pauta.

¿Cómo se organiza el día a día de la marcha?

Entre ciudad y ciudad hay una distancia aproximada de 20 a 25 km. Comenzamos a las seis o siete de la mañana y caminamos aproximadamente

seis horas por día. Después de que llegamos a la otra ciudad, los equipos y sectores hacen reuniones para conversar sobre los procesos organizativos de la marcha. Hay algunas otras actividades en esta marcha, como la realización de una asamblea con la juventud, otra con las mujeres, entre otras actividades culturales donde participan grupos de teatro, danza y música. Llegaremos a São Paulo el día 10 y estaremos hasta el 14 realizando diversas actividades. Comenzaremos un diálogo con los organismos competentes sobre la reforma agraria y presentaremos nuestra pauta de reivindicaciones.

¿Actualmente se habla de la realización de una reforma agraria popular, como se está dando este proceso?

Este dialogo se ha estado construyendo. Es un proceso de largo plazo que necesita debatirse con todos los movimientos sociales que luchan por la tierra. Es necesario debatir con la sociedad y pactar conjuntamente con los gobiernos. Porque una reforma agraria exige la participación de la sociedad como un todo, no es apenas un movimiento que va a hacer una reforma agraria popular. Tiene que contar con la participación del conjunto de la sociedad. Estamos haciendo el debate con los movimientos que hacen parte de la Vía Campesina, el MST, el Movimiento dos Atingidos por Barragens (MAB), el Movimiento de Pequeños Agricultores (MPA), entre otros.

Esta marcha se da en un momento histórico muy importante para el movimiento: cumplen veinticinco años de lucha. ¿Cómo llega el MST a este aniversario?

El MST continúa con su esencia. Es un movimiento que consiguió resistir y seguir sus objetivos por la lucha de tierra. Sigue organizándose. Creo que una de las razones principales que mantiene vivo al MST es la organización; cuenta con todas las familias. Esa participación amplia, democrática, en la toma de decisiones, compone a todos los que participan en el MST. No dejó de hacer su principal lucha, que es la lucha por la tierra. Pero hubo otros avances a lo largo de estos veinticinco años. Por ejemplo, la cuestión de pactar con la sociedad un proyecto mayor que no sea sólo la reforma agraria. El MST está en la periferia, está construyendo un diálogo con los trabajadores de la ciudad, porque creemos que no es sólo un movimiento que va a hacer la transformación social. El MST en sus más de dos décadas de lucha, tuvo un gran avance: amplió la participación de sus militantes, así como el diálogo con otras esferas, no sólo en la lucha por la tierra.

¿Cómo se realiza el trabajo en las periferias?

Partimos del principio de que en las periferias ya existe una cierta organización. Respetamos mucho este trabajo. El movimiento está juntando fuerzas. El MST se suma a otras luchas que están más en las zonas urbanas. Intentamos ampliar y hacer ese diálogo: ir a las periferias, dialogar con las personas; intentamos aproximar a esas personas para que participen del conjunto de la lucha social. El MST intenta hacer esa aproximación con el medio urbano, en la perspectiva de ampliar sus alianzas y relaciones políticas, en la construcción de una organización que sobrepase la lucha por la tierra y que sea una lucha mayor que envuelva el conjunto de la clase trabajadora.

Cómo ya comentaste, una de las razones de esta marcha es colocar en pauta la cuestión de la reforma agraria con el gobierno. Actualmente, ¿cómo se está dando esta relación?

Desde que el gobierno actual asumió la presidencia y el gobierno como un todo, hemos venido pautando. El MST no dejó de hacer su lucha, puntualizando los objetivos y sus reivindicaciones. En tanto, el movimiento creía que con este gobierno sería más fácil la realización de la reforma agraria: un gobierno aparentemente de izquierda que tiene toda una historia de lucha con la clase trabajadora. Pero eso no fue lo que ocurrió. Si observamos, a lo largo de estos últimos años, la reforma agraria se ha tratado como un fracaso. Muchas familias continúan asentadas, familias que por años han acampado en las orillas de las carreteras y hasta hoy no tienen una respuesta concreta en términos de asentamiento. En nuestra evaluación, la reforma agraria no avanzó con este gobierno. Por eso, esta movilización (que no es sólo en São Paulo sino también en otros estados), se realiza con el objetivo de presionar y hacer un dialogo.

La movilización sirve para hacer cierta presión social y política. Esta marcha tiene ese carácter. Traer de vuelta el debate, para que el gobierno tome un posicionamiento en relación con las respuestas para esas familias que están acampando. En fin, queremos una respuesta concreta del gobierno sobre los asentamientos, una respuesta inmediata para estas familias. Exigimos infraestructura, desenvolvimiento para esos asentamientos que en gran escala están precarizados; porque no hace ninguna diferencia liberar la tierra y no desenvolver los asentamientos. Se necesita construcción de pozos, calles, escuelas de calidad, salud y cultura. Hay una serie de puntos respecto a los asentamientos que están en esta pauta, porque los asentamientos hoy están precarizados.

En los últimos años, ¿se percibe que la lucha en el campo se ha ido modificando, y que además de los hacenderos está el monopolio de las grandes empresas transnacionales?

Actualmente ese es un gran problema que enfrentamos. Ese modelo relacionado con la agricultura fue adoptado por el gobierno y no está dirigido hacia el pequeño agricultor. Existe una gran prioridad para el agro-negocio que es justamente eso: el direccionamiento de las políticas de la agricultura para las grandes empresas, tanto nacionales como internacionales. No hay alguna prioridad de política destinada a la reforma agraria. Ese es un conflicto que vivimos actualmente. La posición del movimiento es contra ese modelo de agricultura que ha sido adoptado. Intentamos hacer ese enfrentamiento, que es una lucha directa contra el capital. Actualmente, luchar contra el agro-negocio en Brasil es hacer un enfrentamiento directo al capital, porque el capital se desarrolló en el campo. Las relaciones sociales de producción, las fuerzas productivas, se desarrollaron en los últimos años desde la entrada del capital al campo. La lucha del MST con los grandes latifundios, las grandes empresas nacionales e internacionales, está directamente relacionada con una lucha mayor, que también es una lucha con el capital.

João Paulo

¿Cómo surge el Movimiento Nacional de Catadores de Reciclaje (MNCR)?

Surge debido a la necesidad de muchos compañeros de tener una forma de trabajo más digna, con mejores condiciones, contra las condiciones inhumanas a las cuales estamos sometidos: a los basureros y a veces a las calles. Sentimos la necesidad de organizarnos y luchar por políticas públicas de verdad. Todos escuchamos el discurso de inclusión social, pero los catadores siempre fuimos excluidos por el proceso social. Somos vistos como marginados, como alcohólicos. Eso muchas veces tira la dignidad del trabajador. Hoy estamos tratando varias luchas, con los órganos municipales, estatales y federales, para que realmente se entienda que el catador no es sólo un catador de basura, sino de material de reciclaje. Ese material generara su profesión. Hoy somos categoría; hoy tenemos ya una profesionalización, desempeñamos un trabajo digno como cualquier otro.

Nuestra idea es pasar eso para la sociedad, mostrar que necesitamos de esa contrapartida, de ese apoyo.

¿En qué año se dio esa organización?

Surgió en 1999, cuando se hizo una marcha en Rio Grande del Sur. Los compañeros sintieron la necesidad de articularse; a partir de ahí, se expandió para otros estados. En el caso de Salvador-Bahía, comenzó en el 2002, cuando tuvimos nuestro primer encuentro estadual. A partir de ahí, empezamos a organizar a otros compañeros con la idea de formar cooperativas.

Y a nivel nacional, ¿cuántos estados participan en el MNCR?

Actualmente, todos los estados de Brasil participan en el movimiento. Tenemos un dato del gobierno federal de 800 000 catadores todavía desorganizados, y más o menos un millón de catadores organizados. Son los que forman parte del movimiento.

¿Qué te hace seguir luchando dentro de este movimiento?

Uno tiene un reconocimiento; primero, por sus propios compañeros que están día a día luchando para que las cosas mejoren. Uno tiene el reconocimiento de la sociedad cuando se da cuenta de que la categoría está unida, está organizada. Se tiene el reconocimiento de los órganos tanto municipales como federales; eso hace que el catador se sienta más fuerte, para ir en cada punto y buscar su material de reciclaje.

¿Cuáles son las demandas del MNCR?

La no incineración; esa es nuestra demanda nacional. Es un peligro para la sociedad, para la salud pública; es un peligro para la clase trabajadora de los catadores. La incineración fue vendida en los países desenvueltos como la tecnología que podría resolver los problemas. Pero hay ejemplos, como Japón y algunos países en Europa, donde se planeó que en veinte años no se tuviera más incineración porque no es una tecnología viable. Cuando uno quema el residuo o los materiales reciclables, uno tira el trabajo del catador. Cuando uno le quita el trabajo a los catadores, les está quitando la lucha del trabajo que por años se ha hecho. Se entra en una lógica capitalista en la cual se deben retirar esos residuos de la naturaleza con el fin de más consumo. Nuestra lucha es contra la incineración y en contra de que se desvalore nuestro trabajo como catadores.

En esta cúpula uno mira que hay una diversidad de movimientos sociales, que van desde las luchas urbanas hasta las rurales. Respecto al Movimiento de Catadores, ¿hay experiencias fuera de Brasil?

Existe una red latinoamericana. Se creó por la necesidad de compartir, de llevar este proceso a otros lugares. Hay otros compañeros que están viajando a lugares como en Asia y Europa, abriendo espacios de diálogo, llevando esa expectativa de mejoría y valorización del catador. Mira, como yo hago articulación dentro del estado de Bahía, mi trabajo es estar el tiempo entero visitando los basureros, a cada catador de la calle, participando en toda discusión que se tenga, para mejorar el trabajo de los compañeros. Entonces, parte de mi vida es estar en la carretera.

Antes de empezar a conversar, estabas escuchando el discurso que compartías con tus compañeros y mencionaste dos cosas que me parecen muy interesantes: la primera era la capacidad de emancipación y la segunda, que me parece fundamental, es la organización de base. ¿Cómo es que ustedes, con tanta gente, organizan su base?

Nosotros tenemos varios encuentros donde participan los líderes de cada localidad. Hacemos las capacitaciones que sean necesarias, para que cuando no estén los líderes los compañeros tengan autonomía para desarrollar su trabajo, para que ellos sean propagadores de una idea más socialista en su proceso de trabajo.

¿Cómo es que se da ese proceso?

Se da de catador a catador. Nosotros tenemos nuestra cartilla de formación política, donde tenemos acción directa, autogestión, solidaridad de clases, y otros posicionamientos que entendemos necesarios. Esas cartillas nos ayudan con el proceso de formación. Pasamos ese material a los compañeros, para que ellos sepan cómo se hace una asamblea, cómo se hace una reunión; para que puedan discutir con los órganos públicos. Tenemos un proceso de politización. Cada día que pasa, la importancia de eso es mayor para llegar a un grado de emancipación real donde podamos atender a todos los compañeros que están en las calles y en los basureros.

En tu opinión, ¿cuál es la importancia de un evento como la Cúpula de los Pueblos?

Es una forma de colocarnos frente a otros movimientos sociales y mostrar que estamos aquí para atender las demandas de los otros y las nuestras. Un lugar donde los movimientos sociales se organizan. Pero creo que las demandas de los movimientos no son obedecidas por quienes están en la cúpula mayor, la de los gobiernos. Será que la Cúpula de los Pueblos es un espacio democrático que puede contribuir con los órganos del gobierno, o será que nuestra contribución no vale nada. En mi opinión

queda esa duda. Me parece que las dos cúpulas no pueden estar separadas: tienen que haber debate; tenemos que ser oídos. Si está el discurso de los gestores, también tiene que estar el de los movimientos sociales, frente a frente. Pero la participación en el evento, cuando se tiene la oportunidad de estar con compañeros de otros movimientos y encontrar compañeros del MNCR de otros estados y muchas veces nuevos compañeros, se fortalece la lucha, porque entendemos que estamos caminando.

Raúl Zibechi

Raúl, la próxima semana estarás presentando en varias universidades de la Ciudad de México tu último libro *Brasil potencia*. ¿Cómo ves las manifestaciones que empezaron a ocurrir desde el mes de junio en Brasil?

Maravillosas. Me parece que por primera vez en veinte años —desde 1989—, y muy superior a las movilizaciones contra Fernando Collor de Mello en 1992, hay una gigantesca movilización urbana. Me da la impresión de que el núcleo de resistencia se traslada del campo a la ciudad. Me parece que hay un cambio, un viraje político muy importante en Brasil. Eso es un acumulado de la resistencia de Belo Monte, de la resistencia del Movimiento Pase Libre (MPL), que cada vez que hay un aumento de pasaje sistemáticamente en decenas de ciudades vienen peleando y en un momento eso se expande.

¿No era sólo por los veinte centavos?

No, no. De alguna manera es algo mucho más profundo. Se podría decir que es una lucha contra el consenso lulista, entendido como la alianza de elites que género Lula o el PT, que consiste en una integración de la elite sindical y de la administración petista del aparato de gobernabilidad. Ahí hay un rechazo fuerte. La vida de los pobres ha mejorado, pero no su lugar estructural; son pobres. Comen mejor, visten mejor, pero su lugar estructural sigue siendo la precariedad, que hoy se manifiesta en el transporte y en otras cosas. Entonces, estoy muy feliz con esa serie de movimientos. Por supuesto, ahora las movilizaciones cayeron; pero imagínate a los núcleos del MPL en Brasil, en São Paulo o Río de Janeiro: grupos chiquitos, de veinte personas, por lo mucho, se han fortalecido.

¿Cómo definir esas nuevas movilizaciones, ese “algo nuevo”?

Creo que en Brasil está naciendo una nueva cultura política, o una nueva cultura de protesta. El MPL la encarna de forma muy clara: horizontalidad, autonomía, apartidismo (que no es anti-partidismo), federalismo. Esa nueva cultura política, aparece por primera vez, desde que el MST renovó la cultura política brasileña, cuando emergió a principios de la década de los ochenta, renovando la cultura de luchas, con los asentamientos, campamentos: ocupar, resistir, producir; con todo un estilo. Pero ahora, esto se manifiesta en las zonas urbanas, donde los jóvenes se han formado de otra manera, donde hay una cultura, por ejemplo, del *hip hop*, donde hay una cultura de grupos autónomos. Esa cultura política del MST, de la cual vienen muchos de ellos, enraizada en las ciudades, da otra cosa distinta al MST, ni mejor ni peor, sino distinta, que ya tiene su propio camino. Ya no son dependientes del apoyo del MST; hay un movimiento urbano que camina y ojalá que el MST acompañe. Creo yo que sí.

Entonces, ¿cómo es que encajan esos movimientos sociales con estas nuevas movilizaciones?

Mira, yo te voy a decir una cuestión muy crítica que después voy a matizar. El 24 de junio en plena oleada de movilizaciones sucede la masacre de Maré, en Nova Holanda: once muertos por la Bope. ¿Qué pasa ahí? Cuando el 11 de julio los sindicatos hacen su tabla de reivindicaciones, no mencionan la militarización ni la masacre de Maré; es una tabla de reivindicación corporativa. Creo que la cultura sindical tradicional, sobre todo los sindicatos que hoy luchan, como la Conlutas o el Intersindical, necesitan vincularse con estos nuevos movimientos y, por supuesto, también el MST; creo que es el único que lo intenta.

A mi modo de ver y con la mayor humildad, me parece que el MST ha sido el movimiento más importante de Sudamérica. Todos hemos aprendido y seguiremos aprendiendo, pero hoy es importante potenciar estas luchas, más allá de si le vienen bien a la presidenta Dilma o a la reelección. Esos cálculos políticos no sirven. El MST está en condiciones de vincularse, de aprender de esta nueva cultura política juvenil urbana. Creo que puede hacerlo, porque tiene la ética de lucha anticapitalista y el MPL y estos movimientos también lo son. Le están pegando a un núcleo duro del capitalismo: la acumulación por desposesión urbana, las mega obras de los Juegos Olímpicos, el sistema de transporte excluyente. Ahí hay un desafío, que no es fácil asumir. Siempre lo nuevo nos cuestiona lo viejo.

Yo soy viejo y lo nuevo nos cuestiona. Hay que aprender de eso nuevo. Tengo una enorme confianza en el MST, porque a lo largo de treinta años ha mostrado que puede; no es fácil, pero confío.

En tu libro *Miseria y política*, hay una frase que me parece muy interesante: “América Latina es un laboratorio de resistencias sociales en paralelo. Es también un banco de ensayo de programas para aplicar a la insurgencia social”. ¿Nos podrías hablar un poco sobre las políticas públicas?

Mira, lo he visto en las comunidades estos días. Tú tienes una comunidad zapatista y a un lado una comunidad del PRI, que tiene casas de bloques, muy bonitas, aparentemente. Las políticas sociales son una forma de dividir a los pueblos y de aplacarlos. En el caso de Brasil, hay una gigantesca política social: la Bolsa Familia que llega a millones de familias. Sin ese programa, Brasil estaría en un conflicto social muy fuerte. Las políticas sociales vienen para controlar a los pobres; hay que entenderlas desde ese punto de vista. Está bien que el Estado les dé a los pobres; pero lo que hay que darles, como dijo Hugo Chávez, es poder para combatir la pobreza. Los pobres tienen que tener poder.

Aquí hay, a mi modo de ver, una comprensión equivocada de una buena parte de la izquierda continental, de ver las políticas sociales como conquistas, cuando son bancos de ensayo de captación de pobres. Pero las políticas sociales también tienen límites muy severos y serios. Ahora estamos ante este nuevo desafío. ¿Que va a pasar ahora que se sabe que las políticas sociales son limitadas para cambiar el lugar estructural de la gente? Como te decía, dan mejorías en alimentos, acceso a determinadas cosas; pero mira el sistema de salud. Hay una salud para ricos, otra para clase media y otra para pobres. Eso no puede ser; no hay derechos. El derecho a la salud no lo tienen los pobres y ni que hablar de los que viven en las favelas.

¿Cómo seguimos adelante? Bueno, pues no sabemos. A mi modo que ver, los gobiernos progresistas, que son mucho mejor que los gobiernos conservadores, tienen límites muy serios. Esos límites no los van a romper los viejos movimientos, ni los sindicatos, sino la nueva agenda. Lo que pasa es que cuando los jóvenes salen a las calles, no salen disciplinadamente como los anteriores; salen de otra manera. Eso choca, a veces molesta. Por supuesto, la derecha se prende ahí; pero ese es un riesgo que siempre corremos. Yo creo que estamos en una nueva fase, y Brasil es una muestra.

Estamos en una nueva fase en todas partes. En Chile hay una nueva generación de movimientos, con los estudiantes, con los mapuches. En Perú tenemos una nueva generación también, la resistencia a la minería en Conga, los guardianes de las lagunas, etcétera. En este terreno estamos frente a una nueva situación, y eso es para alegrarse y para ver cómo aprendemos, cómo nos reajustamos a esta nueva situación.

Si con la aplicación de estas políticas los movimientos están perdiendo espacio, entonces, ¿en dónde están ganando?

Bueno, cuando hablamos de movimientos, hay que ver de quiénes hablamos. Hablando de los nuevos movimientos, me refiero al MPL a los Comités de la Copa, de los sin techo, los catadores, los urbanos. Están ganando una comprensión de lo que sería el agro-negocio urbano: las megaobras son el agro-negocio urbano. Aquí es donde viene lo nuevo. Imagínate que los favelados empezaran a salir a las calles. ¿Tú te lo imaginas? Yo creo que sería casi una guerra. Pero sólo las clases medias tienen derecho a salir a la calle, los sindicatos, los sin tierra. ¿Qué pasa cuando salgan los favelados? No van a salir formados en filas como el MST. Van a salir de otra manera; porque es otra cultura, y la cultura política de los favelados es de aquellos que no tienen nada que perder más que sus cadenas. Una periodista brasileña hace poco dijo: cuando hay manifestaciones en la avenida Paulista, la policía responde con gases y con balas de goma; pero cuando hay manifestaciones en la favela, hay balas. Son dos espacios distintos. Tenemos que elegir sin cálculos mezquinos; o sea, qué pierdo o qué gano, de qué lado estamos. Ese es el pensamiento de un revolucionario ¿Dónde me coloco? Si no estamos ahí, estamos dejando huérfanos a los favelados de políticas revolucionarias.

Ya para finalizar, Raúl, cuéntanos un poco sobre tu experiencia en la escuela. ¿Qué es la libertad según los y las zapatistas?

La libertad para los zapatistas es la opción por la revolución por un mundo nuevo. Lo que yo vi son muchas comunidades con una gran fortaleza interior, con una decisión de ir hasta el final. Esto lo voy a dejar bien claro: ellos han derrotado las políticas sociales, las han derrotado. En una comunidad donde eran cien, igual y quedan quince familias zapatistas. Hay otras comunidades que son enteras de zapatistas; otras, 90%; otras, se han perdido. Hay de todo. Es el precio por superar, neutralizar y derrotar las políticas sociales. Debe haber sido muy costoso para ellos. Pero para eso estamos aquí. Lo que vi: un poder autónomo, una economía autónoma.

Ellos son autosuficientes. En la pobreza, sí, en la pobreza; pero comen, se educan y cuidan la salud y defienden su territorio sin apoyo del Estado. Tienen su milpa, café, frijol, ganado, y tienen tiendas en las comunidades zapatistas donde compran lo que no pueden producir: sal, aceite, azúcar, jabón. No tienen que ir al mercado capitalista, lo que hay ahí es otra sociedad: revolución.

Ana Paula Perles

¿Cómo surge el MTST?

El movimiento surge por iniciativa del Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra. Era un momento muy difícil del gobierno de Fernando Henrique Cardoso; había sucedido la masacre de Eldorado de los Carajás el 17 de noviembre de 1996, y la Coordinación Nacional de São Paulo del MST pensaba una reacción de defensa y ataque: propuso la realización de una marcha nacional y la creación del MTST para hacer un trabajo en el medio urbano, como un brazo urbano del movimiento. Eso sucedió entre 1996 y 1998. Para el 2003, se dio una separación, una ruptura con el MST. Algunos dirigentes decidieron construir el MTST.

Actualmente, ¿cuál es su vínculo con el MST?

Nuestra relación es más un vínculo político, como aliados. Tenemos autonomía frente al movimiento.

A grandes rasgos, ¿cómo podrías definir al movimiento de los Trabajadores Sin Techo?

Como un movimiento urbano que tiene como bandera inmediata la vivienda. Su objetivo es la transformación de la sociedad. Las personas se envuelven en el movimiento por causa de la lucha por la vivienda. A través de ella, intentamos cuestionar la organización de las ciudades, el modelo capitalista. Intentamos desarrollar otros trabajos en las comunidades que no sean sólo por una casa. Buscamos hacer una discusión política en torno a eso.

Actualmente, ¿en cuántos estados del Brasil está el movimiento?

Estamos activamente en siete estados del país: en São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Roraima, Tocantins, DF. Antes del 2003, cuando estábamos junto al MST, se intentó hacer un trabajo, una tentativa nacional de ir para

Rio de Janeiro y Pernambuco. El movimiento surgió en São Paulo; es el lugar donde más ocupaciones se han realizado.

¿Más o menos cuántas ocupaciones han realizado desde su surgimiento?

Son varias. Aquí en el estado de São Paulo, te podría decir que: Desde Ocie Alvez, Anita Garibaldi, Carlos Lamarca, Chico Mendes, Rosa Luxemburgo, Joao Cândido, Che Guevara, Silveiro de Jesús, también Nueva Palestina, Tierra y libertad, Pineirinho y Santa Cristina en el ABC, Frei Tito, Zumbie, Dandara en Campinas y ahora estan Faixa de Gaza, Capadocia, Dona Deda y Villa Nueva Palestina en el Boi Mirim.

¿Cuál es la relación del movimiento con los partidos políticos?

El MTST es autónomo tanto del gobierno como de los partidos políticos, aunque tenemos alguna aproximación con algunos de ellos, como aliados, como es el caso del MST también. Inclusive, uno de los principios del movimiento, que hace parte de nuestro reglamento interno, es no hacer una doble militancia, sea en algún partido o en otros movimientos urbanos. Para ser parte del MTST no se puede participar en los partidos.

¿Actualmente, cuáles serían los desafíos del movimiento?

Tenemos algunos desafíos. El primero sería en relación con la construcción de una unidad entre los movimientos urbanos a nivel nacional. Estamos un poco fragmentados. Intentamos por medio de proyectos como el de Resistencia Urbana o Periferia Activa la construcción de la unidad. Otro de nuestros desafíos es la reforma urbana; en este entorno de ciudades-mercancía, se vuelve muy difícil pautar eso dentro de la agenda nacional de los gobiernos. Otro desafío que está muy presente en nuestro día a día es la cuestión de los desalojos. Intentamos construir formas para poder combatir los desalojos, luchar por la creación de una ley o algo que sea más institucionalizado para garantizar el derecho de las personas.

¿Cómo definen lo que ustedes llaman de *poder popular*?

Cuando decimos poder popular, establecemos para dentro de las ocupaciones la idea de control de aquel terreno y formar colectivos dentro de la ocupación de seguridad, sobre la intervención del Estado, la salud, la educación. Es una forma de crear un poder popular; pero también es establecer hacia fuera. Es una palabra de orden que necesita ser construida más allá de las ocupaciones. Por eso venimos estableciendo otras relaciones. La Resistencia Urbana que surgió en 2010 es la construcción de una frente popular de movimientos urbanos que extrapola la frontera

de São Paulo, donde participan otros estados y otros movimientos, como la Lucha Popular de Para, el Movimiento Popular por Moradia (MPM) del estado de Paraná.

La idea es hacer jornadas articuladas, en la medida que hay jornadas hay pautas nacionales, que no siempre están vinculadas con la moradia, pero en donde se levantan problemas de las comunidades. Podemos decir que una de las frentes del Poder Popular es la resistencia urbana. Son esos movimientos que no son sólo el MTST; también está la Periferia Activa que surge en el 2006 como propuesta de Silverio (un compañero del movimiento que falleció). Esa idea la retomamos el año pasado. Está sólo en São Paulo y es una frente de movimientos más vinculados con las comunidades. Es uno de los brazos del MTST y lucha por moradia, para articular las cuestiones de las comunidades.

Regresando un poco con la cuestión de los desalojos, ¿nos puedes comentar cómo es que realizan las ocupaciones?

Las ocupaciones que hacemos están directamente relacionadas con la confrontación a la propiedad privada.

¿Sólo ocupan terrenos o también edificios?

Nosotros sólo ocupamos terrenos, latifundios urbanos; sólo ocupamos edificios públicos como un mecanismo de presión. Para realizar una ocupación, primero debe haber un trabajo de base, que se define en la voluntad del trabajador de querer hacer esa ocupación. Las personas que van por primera vez a las reuniones tienen la tarea de llevar a otras dos personas a la próxima reunión. Hacemos ese trabajo de base en las periferias; en esos lugares existe una necesidad muy fuerte por la falta de vivienda. Realizamos ese trabajo en torno de dos o tres meses; en el último mes combinamos el lugar, en ese medio tiempo, vamos investigando sobre los terrenos, si es privado o no.

Cuando decidimos cual va a ser el terreno, marcamos una fecha y realizamos la ocupación. Ya en el momento de la ocupación, existen algunas estructuras que deben ser construidas: el barraco de la reunión, la cocina, el alojamiento y los baños. Esas son estructuras básicas, hemos aprendido que hay que tener por lo menos lo necesario para los compañeros que ocupan, ya que son condiciones difíciles y precarias. En el primer día hacemos una asamblea explicativa; durante la primera semana, habitamos a las personas a no hacer lotes, a tener consciencia de que la tierra ocupada es una tierra colectiva. Intentamos ser organizados para construir los ba-

rancos, las vías, las calles; porque más para frente hay que tener agua y luz, entonces necesitamos ser organizados.

La idea es que en la primera semana ya se tenga una coordinación del campamento. Eso surge a partir de las elecciones dentro de las asambleas. A partir de ahí organizamos a los grupos, pintamos los barracos. Todo eso en los primeros quince días. Es un trabajo intenso, cansado, pero despierta una conciencia colectiva-participativa en las personas. Asambleas, reuniones de grupo y reuniones con los coordinadores se realizan todos los días; es una formación política diaria. Empieza el trabajo de negociación en conjunto con el organizativo de la ocupación; no hay cómo separar una cosa de la otra. Es importante que en las primeras semanas consigamos garantizar la negociación.

¿Y conforme se van dando las negociaciones, la idea es que las casas sean construidas en el terreno ocupado?

No necesariamente. Ocupamos un terreno para hacer presión para la construcción de las casas. Pero no existe esa obligación que en el lugar donde ocupemos sea el mismo para la construcción de las moradas.

¿Cómo es que ustedes ven el programa gubernamental de MI Casa mi Vida, lanzado en el 2009?

MI Casa mi Vida es el segundo programa de habitación del país. El primero correspondía al Banco Nacional da Habitación (BNH), de la época de la dictadura. Antes de eso, sólo había autoconstrucción. Consideramos que ese programa es como una especie de aspirina para la crisis que tenemos en Brasil. De la misma forma en que el BNH propició un crédito para la clase media, MCMV también. El primer anuncio fue para un millón de casas y tuvo 18 millones de inscripciones. De ese millón, 600 000 casas era para quien tuviera un valor superior a los tres salarios mínimo (1800 reales). Entonces, no es un programa para beneficiar a las personas con las que el movimiento trabaja. En la segunda etapa de MCMV, se cambió para 1600 reales. Es un programa que no beneficia a las personas que realmente lo necesitan. De ese millón de casa, sobran tan sólo 400 000 casas populares, de las cuales 3% puede ser vía entidad. Lo que estamos intentando como movimiento es "Mi Casa mi Vida, Entidad" (MCMVE), que consiste en consolidar nuestros proyectos vía entidades.

¿Cómo es ese proceso?

Tenemos una asociación de moradores. Ellos se catastran y discutimos con el gobierno para construir a través de la entidad. Conseguimos el te-

rreno, pasamos para la Caja Económica; si entra en los valores de la Caja, conseguimos la negociación con ellos. La Caja Económica pasa el dinero a la entidad y la entidad compra el terreno, contrata una constructora y construye las casas.

¿Cuál o cuáles son las diferencias entre el MTST y algunos otros movimientos de moradia que actúan en la ciudad?

Los movimientos históricos de moradia en São Paulo se construyeron en el proceso histórico del PT. Parte de los dirigentes de esos movimientos fueron asumiendo cargos dentro del partido y fueron cediendo al gobierno. Esa es una de nuestras diferencias; no tenemos algún vínculo con los partidos. Tenemos nuestra autonomía. Históricamente, nos fuimos constituyendo en la forma de ocupar latifundios urbanos, como al principio teníamos una línea de desarrollo con el MST, la idea era discutir el problema de la habitación. Ocupamos el latifundio urbano; no ocupamos edificios como otros movimientos. No tenemos como meta reformar los edificios antiguos, sino construir a partir de la ocupación. Con la ocupación, que es provisoria, la propuesta es conseguir negociar las casas o los apartamentos. Por eso no ocupamos edificios. Eso no significa que no apoyemos a los movimientos que lo hagan; respetamos y apoyamos su lucha.

¿Una de las características del MTST, ha sido la del bloqueo de las calles o avenidas principales?

Sí hemos realizado muchos bloqueos. No te voy a decir que es un mérito sólo nuestro, otros movimientos lo hacen. Para nosotros la idea de los trabamientos o de los bloqueos va en el sentido de cuestionar la circulación de las mercancías. Si no tenemos moradia, si no tenemos un derecho garantizado, entonces confrontamos directamente al Estado que es dominado por el capital. La idea es interferir en la circulación de mercancías.

En los últimos tiempos, una de las cosas que llama la atención sobre el MTST, es el crecimiento de sus acciones, ocupaciones, manifestaciones. ¿A qué se debe ese crecimiento? ¿Cómo ven este proceso?

Por algunas razones, desde el 2008, el MTST en São Paulo se volvió estatal y el movimiento se nacionalizó. Eso hizo que el movimiento se expandiera, lo cual ha dado una cierta unidad al movimiento y apariencia en la sociedad. Pero, ¿por qué? Es muy visible, muy cristalino, el problema de la falta de moradia en Brasil. Hemos hecho muchas ocupaciones en los últimos años. En nuestra línea política está la formación de militantes a partir de la base; en la medida en que vamos realizando más ocupaciones,

más personas se suman a la lucha. También construimos algunos mecanismos importantes de negociación y articulación dentro de la comunicación. La verdad, la comunicación siempre fue difícil. Pero conseguimos mejorar nuestra página de internet, tener un vínculo más directo con algunos de los medios masivos que le prestan atención al problema de la moradia. Tenemos un periódico de circulación interna que se llama *Ocupar y resistir*, usamos Facebook y los mensajes por el celular. Eso ha ido mejorando en buena parte nuestra comunicación.

Jose de Asivaldo

¿Cómo surgió el movimiento?

El movimiento se constituyó a nivel nacional en 1991, durante un encuentro aquí en Brasilia, fruto de un proceso de muchos debates y discusiones. En las décadas anteriores, durante el gobierno militar, se construyeron muchas grandes represas, desde el sur, norte y nordeste; hicieron muchas hidroeléctricas con enormes reservorios que afectaron a millares de familias. Hay represas en el Valle de San Francisco, en la región del nordeste que desalojaron a más de 80 000 personas. En Itapirica, en los años ochenta, fueron desalojados más de 40 000; en Tucuruí, más de 20 000; en el río Uruguay con la represa de Machadinho también fueron miliares de personas. Siempre hubo mucha lucha y resistencia. Todas esas luchas locales se constituyeron en un movimiento nacional.

¿Actualmente cómo están organizados?

Estamos en dieciocho estados de la federación brasileña. Tenemos instancias a nivel nacional. Hemos centrado nuestro debate estratégico contra el modelo energético. Consideramos que ahí se da el verdadero robo a la población brasileña a través de la tarifa; luchamos por nuestros derechos. Hacemos la lucha contra las represas, organizando a las familias en grupos de base.

En estos doce años del gobierno del PT, ¿cómo ha sido la relación entre el MAB y el gobierno?

El gobierno Lula, que comenzó en 2003, fue un gobierno lleno de contradicciones. No hizo cambios estratégicos ni profundos. En relación con el modelo energético, creó una agencia de investigación; pasó a ser so-

cietario en la mayoría de las represas hidroeléctricas; colocó al Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) para poder financiar más. Con los afectados tuvo cierto dialogo, pero eso no quiere decir que el MAB haya tenido conquistas importantes. En nuestra comprensión, no es ni porque el gobierno no quiera, sino porque a través de ese modelo privado tiene la óptica del lucro.

La óptica del capital que viene del periodo neoliberal le impone al gobierno una condición; el gobierno no tiene fuerza para responder, entonces no hace cambios profundos, sea en el agro-negocio, en la reforma agraria, de la misma forma en el modelo energético. En esta última, el poder de las empresas es mucho más fuerte: hay bancos, mineras, etcétera. La relación entre el gobierno y el MAB ha sido conflictiva. Hay que decir que el gobierno del PT no es sólo un gobierno del PT, es un gobierno donde se tiene al principal líder en el ejecutivo, como fue con Lula y ahora con Dilma; pero es un gobierno de coalición, donde se tienen partidos de izquierda, centro izquierda, derecha y extrema derecha (como el PMDB), que defiende la política de las empresas. Por lo tanto son sus aliados. Cuando algunos de los sectores del gobierno quieren avanzar, por ahí no pueden pasar. Se ha ganado con cosas menores, pequeños avances, algunos proyectos productivos; pero en cosas mayores, como reasentar familias, no se ha avanzado. Nosotros estamos desde hace cuatro años discutiendo una política pública para los afectados por las represas y el gobierno no ha decretado. Siempre hemos hecho ese enfrentamiento con mucha claridad. Las transnacionales en la cuestión energética son las que mandan, son las que definen y dirigen el modelo.

En los últimos años, ¿consideras que ha habido un avance en relación con la creación de proyectos hidroeléctricos?

Sí: en los últimos años de gobierno la demanda por energía creció. Todos los datos dicen que se tiene que aumentar la producción de energía. Entonces en el caso de la energía eléctrica, el gobierno ha hecho varios proyectos polémicos. Por ejemplo, en el río Madeira, las hidroeléctricas de Santo Antonio y Jirau del gobierno de Lula, y actualmente el proyecto de Belo Monte, con el gobierno de Dilma Rousseff, son proyectos polémicos. Esos tres proyectos son en torno a 18 000 mega-watts que están en fase de conclusión. En los últimos años, creo que han sido construidas o están en construcción al rededor de cuarenta pequeñas hidroeléctricas, todas en la relación público-privada.

¿Cuál sería uno de los grandes desafíos del MAB?

El mayor desafío del MAB es consolidar una política de alianza en las organizaciones de la clase trabajadora, fortalecer la plataforma operaria-campesina, con un público urbano para imponer un cambio en el modelo energético. Eso va a cambiar mucho la lucha. Es uno de nuestros mayores desafíos: la construcción de alianzas y apoyos. Dentro de ese desafío hay otros: primero, consolidar una política de alianzas estratégicas en el área del debate energético entre campo y ciudad; como movimiento, crear un fuerza capaz de responder por la coyuntura que está diseñada, para hacer el enfrentamiento; y por último, necesitamos construir una vanguardia de izquierda en Brasil. No hay como hacer una lucha solitaria, construir vanguardia de la clase trabajadora.

¿El MAB tiene alguna articulación continental?

Sí, tenemos contacto en México y con diversos movimientos anti-represas aquí en América del Sur y Centro América. Estamos en la construcción de una unidad que estamos llamando de Movimiento Anti-Represas (MAR). Nos estamos articulando con aquellos que hacen luchas concretas, con el pueblo, del pueblo y para el pueblo.

Una de las represas que ha llamado mucho la atención ha sido Belo Monte. ¿Cómo están las cosas actualmente?

Belo Monte debe estar en 40 o 50% de su construcción y va a acabar afectando a más de 50 000 personas. La política de las empresas de ese lugar es muy violenta. Los militantes del MAB que están en esa región, están siendo perseguidos, procesados por luchar y por organizar al pueblo por sus derechos. Uno tiene que luchar por los derechos dignos de los pueblos afectados, rurales, urbanos, indígenas y pescadores. Hoy estamos organizando a las familias en Altamira, en Brasil Novo y otros municipios, haciendo el enfrentamiento cotidiano contra el consorcio Norte Energía. Estamos creando una cultura de lucha de forma organizada con los afectados por las represas, creando un muro de reasentamientos entorno de la hidroeléctrica. Ahí uno tendría al pueblo el tiempo entero en la perspectiva por la lucha de sus derechos. Queremos construir un nivel de organización capaz de obtener conquistas económicas concretas, como reasentamientos con la producción de productos agroecológicos o reasentamientos urbanos con una vivienda decente, y disminuir lo máximo posible el poder del capital privado en esa región.

Ana Moraes

¿Cuál es tu evaluación sobre el último Congreso que aconteció en febrero de este año aquí, en Brasilia?

Estuvimos trabajando con la base por cerca de tres años, para levantar los puntos que llevaríamos para el Congreso. Nos preguntamos qué reforma agraria queríamos. Discutimos con nuestra base esta pregunta y nos dimos cuenta de que necesitamos un proyecto, al cual nombramos Reforma Agraria Popular. Defender una reforma agraria que sea participativa con los trabajadores, con la desapropiación de tierras. Para las garantías y la estructura para la formación del asentamiento son necesarias la educación, la salud, la agroindustria, así como la permanencia de los jóvenes en el asentamiento. El modelo que defendemos es un conjunto de iniciativas y de políticas públicas. Ese proyecto fue el que debatimos en nuestro Sexto Congreso.

¿Podrías mencionar algunos de los logros de este Sexto Congreso?

La cantidad de jóvenes que participaron fue superior a los congresos anteriores. Esto nos dio una dimensión de la cantidad de jóvenes que están permaneciendo en el campo, a partir de un proceso de lucha y construcción del MST. Una juventud que está presente y participativa. Otro logro fue la discusión de la reforma agraria popular con otras organizaciones populares del campo. Invitamos a otras fuerzas del campo brasileño, para que no fuera sólo un espacio del MST, donde participó la Federación Nacional de los Trabajadores y Trabajadoras de las Agricultura Familiar (Fetraf), la Confederación Nacional de los Trabajadores en la Agricultura (Contag), que no hacen parte de la Vía Campesina.

Por último, otro hecho importante fue que evaluamos nuestra movilización. En junio del año pasado hubo grandes movilizaciones de varios segmentos de la sociedad. Nosotros acompañamos hasta cierta medida esas movilizaciones, pero no como una bandera, sino como una defensa: si el pueblo está en la calle, nosotros estamos juntos. Después tuvimos nuestra marcha del Sexto Congreso. Fue nuestra gran movilización. Salimos para exigir, plantear y presentarle al gobierno brasileño nuestra propuesta elaborada en los cinco días de trabajo que duró el Congreso, que le entregamos a la presidenta Dilma. La movilización para el MST siempre ha sido una forma de lucha para conquistar nuestros objetivos.

¿Y cómo evalúan la relación en estos más de diez años con el gobierno del PT? ¿Cómo ha sido la relación entre el MST y el gobierno?

La relación siempre fue independiente. Siempre hemos mantenido nuestra autonomía frente al gobierno. La llegada de Lula significó una perspectiva para los trabajadores, de tener sus propuestas defendidas, la de un proyecto distinto para Brasil. El MST siempre defendió y apoyó su candidatura, porque era romper con toda una oligarquía. Dicen que el MST paró con las movilizaciones, pero lo que realmente estábamos haciendo era un proceso de negociación. En el periodo de Fernando Henrique Cardoso, hubo un proceso intenso de lucha; pero con el gobierno Lula consideramos que era el momento de negociación. La referencia que siempre hacemos entre un gobernante y otro, es el índice de desapropiación de la tierra. Con Lula tuvimos un proceso de apoyo a los trabajadores, aunque no al deseo del MST, porque nuestro planteamiento siempre fue asentar a todas las familias acampadas. Mientras exista una familia acampada, nuestra lucha seguirá. Tuvimos un proceso un tanto amplio de desapropiación y de diálogo, aunque la relación que mantuvo el gobierno del PT con el agronegocio impidió mucho nuestra lucha.

¿Y con la actual presidenta?

Con Dilma hemos tenido un proceso de desmovilización. Las negociaciones que veníamos haciendo se trabaron, bajo el pretexto de que se estaba haciendo la infraestructura en los asentamientos negándose a más desapropiaciones, lo que hemos condenado. El proceso de desapropiación tiene que continuar; hay que desapropiar todas las tierras improductivas que hay en Brasil y más que eso: hay que condenar toda la producción de transgénicos. Con el gobierno Dilma, hubo un avance mucho mayor que en el gobierno de Lula, del agronegocio, así como del aumento de compra de tierras por extranjeros. En este gobierno, hubo un bajísimo porcentaje de desapropiación y del atendimiento de la pauta del MST, consideramos que con el gobierno de Dilma hemos tenido un retroceso.

En esta relación con el PT, ¿el movimiento no perdió autonomía?

Nunca, muchas veces que no estábamos de acuerdo con las decisiones del gobierno salimos a la calle para defenderlas. Nunca un proceso de lucha fue negociado para beneficiar al gobierno en contra de las decisiones de los trabajadores. Aquí en Brasilia, nosotros hacemos las negociaciones directamente con el gobierno; pero la decisión está en el Estado. Nosotros negociamos con el gobierno. Cada estado y cada frente del MST tiene

autonomía para seguir su proceso de lucha. Continuamos con nuestra autonomía frente al gobierno.

¿Nos puedes hablar sobre la violencia que ocurre en el campo en los últimos años? ¿Cuál es el balance que ustedes hacen?

Con el avance del agronegocio, la violencia sólo aumentó. La causa de la violencia en el campo brasileño es el agronegocio, financiado y defendido por el gobierno brasileño. La tendencia es que eso aumente. Se tiene la idea equivocada de que el agronegocio es el que más produce en el campo, cuando la verdad no lo es.

Uno de los programas sociales que llama la atención del gobierno del PT, ha sido la Bolsa Familia. Desde tu punto de vista, este tipo de políticas asistencialistas, ¿en qué sentido crees que benefician o afectan a los movimientos sociales?

Consideramos que es una buena acción del gobierno en relación con la distribución de renta. Pero si comparas la relación con el PIB brasileño, es muy poco. Lo que en realidad hace el gobierno es entregar esa bolsa para frenar las movilizaciones. Desde lo inmediato, es un gran logro para el gobierno brasileño; pero en gran medida, es poco lo que se distribuye. Para nosotros, ese programa es muy pequeño en la distribución de renta, que no hace el enfrentamiento con el modelo económico de Brasil.

¿Algunos asentados reciben bolsa familia?

Algunos, sí.

¿Y eso de alguna forma no acaba disminuyendo su capacidad de movilización?

Sí. No sólo los asentados; muchas familias del campo reciben la bolsa familia y se dan por satisfechas. Ese es un proceso de retroceso para movilizar a las familias para conquistar un pedazo de tierra y poder producirla, tener su soberanía y que no sean dependientes de una política del gobierno. Lo que nosotros defendemos es que cada familia en el campo tenga su tierra para cosecharla.

¿Nos puedes comentar sobre la producción y la venta de los productos del movimiento? ¿Cuáles son sus dificultades?

En Brasil hay una barrera muy grande para la comercialización de los productos de las cooperativas. Hoy tenemos un mecanismo que se llama Organización de las Cooperativas Brasileñas (OCB). Todas las cooperativas tienen que estar inscritas en ella para poder vender su producción. Aunque la mayoría de cooperativas inscritas en la OCB son más de empresas que

de los trabajadores. Existe una burocracia que no permite que vendamos a grandes mercados. Tenemos los mercados locales. Producimos arroz, leche en polvo, semillas, pero no logramos adentrarnos en el mercado brasileño, porque la burocracia no permite que el trabajador venda sus productos directamente. Está la figura del intermediario, que siempre quiere comprar los productos a un precio más bajo. Nuestro objetivo es que nuestros productos tengan el sello de la reforma agraria, del proceso que nosotros defendemos; que quien los consuma sepa cómo es que esta hecho ese producto; que se haga de forma directa entre el productor y el consumidor.

¿Cómo es el sello de la reforma agraria?

Es un sello que tienen nuestros productos, que está hecho sin agrotóxicos, hecho en cooperativas de trabajadores. También colocamos el lugar donde fue producido, en un asentamiento de la reforma agraria.

¿Más o menos cuántas personas forman parte del MST?

En torno de unas 200.000 familias asentadas y 300.000 acampadas.

¿Cómo es el trabajo que realizas en la parte de relaciones internacionales?

Dentro del MST, intentamos tener relaciones con países tanto de América Latina como del resto del mundo. Es siempre un proceso de dos vías. Por un lado, lo que presentamos es lo que tenemos de experiencia en los treinta años de organización; por el otro, conocer las experiencias de organizaciones en otros países. Yo tuve la oportunidad de estar en Venezuela, participando en la primera brigada internacional del MST.

Ya habíamos tenido otras experiencias en otros países, pero esta era la primera brigada permanente desde 2005 hasta hoy. Otra de las principales brigadas que tenemos es en Haití, donde trabajamos con los campesinos, recientemente, en la construcción de una escuela de agroecología. La articulación que tenemos con otros movimientos se llama ALBA Movimientos. Surgió de una iniciativa del presidente Hugo Chávez, que el ALBA no fueran sólo presidentes. Él decía: “los presidentes pueden irse, pero los pueblos se quedan”. Después de eso, hicimos un proceso de construcción y articulación. Actualmente tenemos, desde la Patagonia hasta Canadá, relaciones con diversas organizaciones dentro del ALBA Movimientos.

¿Además de la relación que tienen con la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC) y la Vía Campesina?

Sí; con la Vía Campesina fue nuestra primera relación de integración y articulación mundial. Ha sido una de las organizaciones donde nos orgu-

llecemos de haber participado y organizado una articulación mundial de campesinos.

En estos treinta años de lucha, ¿cuáles consideras que sean las características que mantienen al MST activo, no sólo como uno de los movimientos campesinos más importantes del continente sino del mundo?

Para el MST siempre ha estado muy claro que el proceso de lucha es el proceso más importante que tenemos. Existimos por las familias que están acampadas y asentadas; pero más allá de eso, hemos comprendido que el proceso de fortalecimiento se da a través del conjunto del trabajo que hacemos y ahí logramos tener varios sectores como el de producción y educación. Tenemos el gran éxito de que casi toda la juventud está estudiando, sea en la graduación o participando de algún proceso de formación ideológica en nuestra Escuela Florestan Fernandes (ENFF). Ese es el gran instrumento que tenemos para estar firmes en la lucha: nuestra formación. En cada estado hay escuelas de formación, en cada asentamiento y campamento hay procesos de formación con su base. Son procesos donde participan las familias, ese proceso es el que nos fortalece.

El método de dirección es muy importante. Cada tres meses nos reunimos toda la dirección nacional del MST; se discuten las reivindicaciones que vienen de abajo, de nuestras bases. Es un proceso que se da de forma horizontal, sin jefes ni jerarquías. La participación se hace de forma colectiva. Tenemos nuestros principios que hemos construido a lo largo de treinta años, que son nuestra motivación para la lucha. Lo que considero que nos mantiene activos es nuestro proceso de formación, tanto la formación política como la técnica. Porque hemos comprendido que debemos formar a nuestros técnicos con cuño político, que es el hijo del campesino que está dentro del movimiento. Hemos formado agrónomos, médicos, técnicos agrícolas, pedagogos. Hay una construcción colectiva.

En relación con sus treinta años de lucha, otra cuestión que ha cambiado es el enemigo. ¿Ahora el agronegocio está más presente que antes?

Sí. El proceso de conformación y el avance del capital financiero hicieron que cambiara el enemigo de los trabajadores. La ampliación de ese capital hizo que se fortaleciera el proceso del agronegocio, que hoy no es más la burguesía nacional. Tenemos que pelear con el capital internacional. Toda esa congregación ha cambiado el enemigo principal; un enemigo

que no es sólo del MST, sino de todos los trabajadores de Brasil y del mundo: el capital financiero.

Actualmente, ¿cuál sería uno de los principales desafíos que enfrenta el movimiento?

Es mantener el proceso de lucha. El desafío que tenemos para el próximo año es mantener las calles ocupadas. Comprendemos que venimos de un gran desgaste de conquistas; un número muy bajo de desapropiaciones, casi nulas; poca infraestructura en los asentamientos, y poco apoyo de políticas públicas para el campo. Consideramos que el gran desafío para el próximo año será nuestro poder de movilización. Siempre lo hemos tenido; pero lo que debemos hacer, paralelo a las ocupaciones, es un proceso de movilización hacia nuestros objetivos, defender de forma más contundente nuestro proyecto de reforma agraria popular.

Sonia Guajajara y Lindoamar Terena

¿Cómo se articula la APIBI a escala nacional?

Lindoamar: La APIBI está formada por cinco representantes que corresponden a cada una de las regiones del país. Tiene su sede en Brasilia y su función es monitorear qué está sucediendo en relación con los derechos de los pueblos indígenas en el país. En cada región hacemos la lucha por nuestro territorio y nuestros derechos. Anualmente tenemos una asamblea, que es el campamento Tierra Libre; sucede en el mes de Abril, en la semana que se conmemora a los pueblos indígenas. Por lo general, en ese campamento nos encontramos alrededor de 1800 líderes de todo Brasil.

¿Cuál sería una de las principales propuestas de la APIBI?

Lindoamar: Hacer la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, que nuestros derechos sean implementados y respetados. Porque en nuestro país estamos enfrentando esa gran dificultad: el gobierno, a cualquier precio, en nombre de un desarrollo sin alma, pasa por encima de varias comunidades indígenas.

¿Cuáles son los principales problemas y conflictos que actualmente enfrentan los pueblos indígenas?

Sonia: Aquí en Brasil, la lucha de los pueblos indígenas se volvió básicamente una situación de enfrentamiento con los sectores políticos y eco-

nómicos. Principalmente, se trata de trabar una lucha por la manutención de los derechos. Hoy tenemos nuestros derechos totalmente amenazados; son derechos que fueron garantidos en la Constitución Federal, que es la ley máxima del país. Sin embargo, vemos un interés del Congreso Nacional por rasgar la constitución federal y limar los derechos que tratan de los pueblos indígenas en la Constitución, en nombre del desarrollo del país.

Nosotros levantamos esa cuestión: ¿Desarrollo para quién? ¿Para los pequeños grupos? ¿Desarrollo para los empresarios? ¿Para los del parlamento? ¿Para quién? Nosotros los pueblos indígenas tenemos otra lectura sobre el desarrollo: el Buen Vivir, tener nuestras tierras protegidas, condiciones de trabajo, practicar nuestra cultura, reproducir nuestro modo de vida. En Brasil, con esos intereses económicos que visan el crecimiento del país, están queriendo tirar principalmente el derecho territorial. Para nosotros, pueblos indígenas, no hay cómo reproducir un modo de vida si no tenemos la garantía del territorio. En ese sentido, el país se olvida de que tiene esa diversidad inmensa, que somos 305 pueblos diferentes, que hablamos 274 lenguas y eso no se considera.

En vez de valorar esa diversidad y colocarla como una riqueza, nos presentan como un obstáculo frente al desarrollo, frente al crecimiento del país. Nuestra lucha ha sido intensa, en el sentido de garantizar que podamos continuar viviendo como indígenas. Sin esos derechos, no tenemos cómo continuar siéndolo. De esa forma, el país está faltando al respeto totalmente a la existencia de los pueblos indígenas que aquí habitan. El movimiento indígena tiene el papel fundamental de hacer esa lucha, en el sentido de dar continuidad a lo que fue conquistado por otros líderes: esos derechos que están plasmados en la Constitución.

Nuestra lucha por la tierra va más allá de la una lucha constitucional. La tierra para nosotros es un derecho originario. Mucho antes de que fuera escrita la Constitución, la tierra ya era de los pueblos indígenas. Defendemos la Constitución, los derechos, pero siempre reafirmamos que la tierra es un derecho originario. Muchas veces se nos trata como invasores dentro de nuestra propias tierras, porque los hacendados, el Congreso Nacional, por medio de la bancada ruralista, intentan a toda costa mostrar a la sociedad que los pueblos indígenas estamos trabando el crecimiento, impidiendo la producción.

¿La tierra es el primer conflicto por el que pasan los pueblos indígenas?

Sonia: La cuestión territorial aquí en Brasil, la garantía del territorio, siempre ha sido la bandera de lucha mayor de los pueblos indígenas. Siempre. Desde el periodo de la colonización, el interés sobre los territorios siempre estuvo presente. Ese conflicto ha sido constante; actualmente se intensificó por causa del agro negocio y de los ruralistas en alianza con el poder político. En el país se acabaron prácticamente todas las tierras públicas; lo que se tiene son las tierras indígenas. Ellos quieren de cualquier forma tomar nuestras tierras. Están buscando una forma de legalizar, de explorar y esto se está dando a través de medidas legislativas. El problema mayor es la lucha por el territorio, pero también está la violencia contra los pueblos indígenas. Se han intensificado los conflictos en el campo. Otra cosa es la criminalización de los líderes indígenas. El judiciario protege a los indígenas y hace lo contrario; ahora están judicializando todas las tierras que están en proceso de marcación. Tenemos una unificación de los tres poderes contra los pueblos indígenas. Hacemos una defensa que deja de ser sólo por derechos y sí por la vida de los pueblos indígenas.

¿Me podrían comentar un poco más sobre la violencia en las comunidades y la criminalización de los líderes indígenas?

Lindomar: El aumento de la violencia, la criminalización y las prisiones está relacionado con la cuestión de la tierra. Entendimos que si hay que esperar al gobierno en relación con lo que manda la Constitución federal, nunca vamos a ver nuestro territorio. Por el contrario, lo que estamos viendo son los tres poderes comulgando con un mismo ideal. Buscando quitar los derechos de los pueblos indígenas. Entendimos que debemos defender nuestra vida, nuestro territorio. Cuando nuestros pueblos y líderes se organizan para hacer ese enfrentamiento, estamos sujetos a ser asesinados, perseguidos, amenazados, presos. Tenemos situaciones donde algunos líderes tienen la oportunidad de salir del país para denunciar nuestra situación; algunos son presos antes de poder salir, como le sucedió a un líder de Bahía, del pueblo Tupinambá. El gobierno brasileño publicó un decreto donde autorizó que las fuerzas armadas reprimieran cualquier levantamiento indígena. Estamos viendo la dictadura de vuelta. Uno no puede reclamar. Cualquier agente de la fuerza armada puede quitarte la vida, sin que tenga alguna consecuencia para ellos.

¿Cómo está la actual relación de los pueblos indígenas con el gobierno? ¿Existe un diálogo? ¿Cómo están las cosas?

Sonia: La relación es muy compleja, muy difícil, en relación con el gobierno del PT en los últimos diez años. En el inicio, creímos mucho, porque es un partido de izquierda. Era un partido democrático; nosotros ayudamos a construir el plano de gobierno, la campaña, estuvimos juntos. Sólo que, después de un tiempo, parece que por parte de los movimientos, hubo una cierta acomodación. No se cobrara mucho, porque se creía que el gobierno haría mucho por el pueblo, cuando en realidad hubo una alianza: un gobierno de composición con los partidos de derecha que olvidó totalmente la cuestión indígena. Nosotros fuimos olvidados por cuenta de esa alianza.

Cuando uno junta esos años de gobierno del PT, uno mira que fue el gobierno que menos demarcó tierras indígenas en comparación con los gobiernos anteriores. No estoy diciendo que los otros gobiernos fueron buenos, porque no resolvieron la cuestión indígena; pero en relación con el PT, que fue un gobierno en el que creímos mucho, fue el que menos demarcó. Con el gobierno de Lula, todavía hubo un cierto interés. Nos recibía, conversaba con los indígenas, participaba en las reuniones de la Comisión Nacional de Política Indigenista (CNPI), que es una instancia de participación de los pueblos indígenas de forma paritaria. Con la presidenta Dilma no tenemos ninguna relación; nunca tuvimos una conversación.

Sólo hubo una y única entrevista con la presidenta, que fue por causa de las manifestaciones de junio del 2013. En aquella ocasión, ella afirmó que no autorizaría nada que impactara las tierras indígenas sin consultar a los pueblos. Lo que vemos es todo lo contrario. Esta Convención 169 de la OIT, de la cual Brasil forma parte, que no nos fue cumplida. La consulta no existe, no hay ningún respeto por esta Convención; ni por los otros derechos: ninguno se ha cumplido. En el 2012, se firmó el decreto de la Política Nacional de Gestión Territorial y Ambiental de las Tierras Indígenas (PNGATI). Ya está decretada, sólo que hay una contradicción muy grande dentro del gobierno.

Por un lado se firma un decreto para hacer la gestión de los territorios; por el otro, ese derecho está en la tentativa de retirar. ¿Cómo es que uno hace la gestión del territorio, si uno no tiene la seguridad de ese territorio? Como espacio de diálogo, tenemos la CNPI, donde no hemos tenido avances. No se han cumplido los acuerdos firmados en ese espacio; y las instancias de representación en los consejos y en comisiones, son meramente formales. Lo que ha sucedido es una violación total de los derechos.

No es una relación armoniosa; por el contrario, es una relación de conflicto con el gobierno.

Lo mismo ocurre en el caso de la PNGATI que fue una construcción conjunta. No da para decir que resolvió algo; por el contrario, no se consiguió hacer efectiva. Es un gobierno lleno de contradicciones. No nos da ninguna seguridad. A veces rompemos. La propia CNPI ya rompió el diálogo con el gobierno federal y el movimiento indígena de la misma forma, porque cuando intentamos ellos nunca consiguen cumplir los acuerdos. Otro ejemplo fue la tentativa del Ministerio de Justicia de cambiar los procedimientos sobre la demarcación de tierra en diciembre del año pasado.

El ministro de Justicia, Eduardo Cardozo, elaboró una minuta que altera esos procedimientos. El movimiento indígena reaccionó contra la minuta. Decidimos hacer un proceso de consulta con nuestras bases, en nuestras aldeas, en las regiones. Ellos aceptaron que realizaríamos 34 etapas preparatorias; en el mismo momento, ellos llegaron con la propuesta de hacer sólo un seminario nacional. Fue una quiebra total con el acuerdo. Entonces decidimos no conversar más de forma alguna y que ellos desistieran de esa minuta. Por tanto, la minuta está parada. La tentativa que tuvimos para conversar no funcionó, es por cuenta del propio gobierno que acaba quebrando los acuerdos con el movimiento indígena.

Lindomar: Por parte del movimiento indígena siempre hubo esa procura de dialogar y presentar lo que entendemos que es mejor para los pueblos indígenas. El gobierno sigue tocando diversos proyectos que impactan las tierras indígenas, como las usinas en Mato Grosso del Sur y otros conflictos en Bahía o Río Grande del Sur. Es por esto que el gobierno decidió instalar una mesa de diálogo, pero nunca con una intención de resolver, sino sólo de calmar los ánimos. Con el paso del tiempo, esa mesa no tuvo una solución concreta para resolver los conflictos. Son esas situaciones por las cuales el movimiento indígena no confía en el gobierno. Cuando tuvimos esa reunión con la presidenta Dilma Rousseff, tuve la oportunidad de decirle frente a frente que los pueblos indígenas, los pueblos olvidados de este país, esperaban mucho más de su gobierno. Debía colocarse al lado de los hijos olvidados de la patria, que son los pueblos indígenas y todos aquellos que luchan por tener una vida digna.

Pensando que este es un año electoral, ¿cuáles son sus perspectivas? ¿Cómo ven ese panorama electoral?

En la última movilización que tuvimos aquí en Brasil, a finales de mayo de este año, el último día, cerca de 800 líderes fuimos al Ministerio de Justicia. Nos dejó claro que el no iría a demarcar las tierras indígenas. Para nuestro entendimiento, el ministro no está a la altura del cargo que ocupa. Un ministro que tiene miedo de cumplir la ley es un cobarde. Definimos que teníamos que evaluar el periodo electoral de este año. La APIBI necesita tener un posicionamiento sobre las elecciones, que nuestras bases también se posicionen. ¿Y ahora qué vamos a hacer?

¿Podrían hablar un poco sobre la Bolsa Familia? ¿En qué sentido creen que beneficia o no a las comunidades indígenas?

Sonia: Es muy difícil hablar de la Bolsa Familia. Desde nuestro punto de vista, debería haber programas adecuados con la realidad de los pueblos indígenas, programas que atiendan las realidades locales. La Bolsa Familia es un programa general, hecho para todo mundo y que no respeta ni considera las especificidades de los pueblos indígenas. Cuando uno conversa con las personas de las comunidades, por más que ellos también tengan esa opinión, acaban aceptando y con miedo de perder. Hay tanta carencia de políticas públicas, de condiciones de calidad de vida, que las personas quieren asegurar por lo menos eso. En algunas comunidades llegó la Bolsa Familia; aunque sea poco, ellos lo consideran positivo, porque no tienen nada.

De forma general, como parte del movimiento indígena, consideramos que debería de haber un programa que atendiera las distintas realidades locales. Por ejemplo, en la Amazonas se gasta de la aldea para retirar el dinero. Es muy difícil, porque el valor que se recibe muchas veces ni siquiera cubre el valor del gasto en llegar a la ciudad. Muchas familias acaban acumulando tres meses, para buscarlas de una vez, para poder compensar. Debemos pensar alguna forma que realmente resuelva la situación y no cree dependencia, porque muchas veces dejan de producir. Muchos indígenas hacen esa evaluación: ese programa crea dependencia y por lo tanto los desmotiva a movilizarse o a producir. No es un programa que corresponda a las necesidades reales de los pueblos indígenas.

En ese sentido de la no dependencia, ¿cómo pueden definir la autonomía?

Sonia: Los pueblos indígenas, para tener una autonomía plena, en primer lugar deben tener garantizados los territorios; en segundo lugar, esos territorios deben estar protegidos. En Amazonas, donde se avanzó en el

proceso de demarcación de tierras, no existe esa situación de autonomía resuelta, porque 90 % de los territorios demarcados sufren un proceso de invasión ilegal de diversos tipos, como la pesca o la madera. No hay una política de protección para las tierras indígenas, no hay ninguna protección. Para la autonomía, necesitamos garantizar, proteger y tener las condiciones para poder gestionar los territorios. El gobierno siempre genera programas que crean dependencia.

¿Consideras que los pueblos indígenas se volvieron muy dependientes del gobierno?

Quien tiene acceso a esos programas sí. Pero la conciencia de los pueblos indígenas ha aumentado bastante. Hoy el gobierno amenaza nuestros territorios. Eso hizo que los pueblos estuvieran más alerta y vieran esas políticas como una bondad del gobierno: nos está dando eso, porque no nos está dando otras condiciones para tener más. Hubo un gran despertar, que es la lucha por nuestro territorio. Todos estamos en la misma situación. Los pueblos que tiene las tierras demarcadas no están seguros, porque la tentativa del Congreso Nacional es reducir cada vez más esas tierras.

¿Cuáles consideran que han sido los logros del movimiento indígena en los últimos años?

Sonia: La lucha del movimiento indígena en Brasil ha sido muy intensa y todo lo que se conquistó ha sido con mucha pelea, con mucha determinación por parte de los líderes. Hoy luchamos para mantener esos derechos. Tenemos la responsabilidad de mantenerlos, por más que no hayamos conseguido más derechos. Hemos frenado varios procesos. En el Congreso Nacional hubo la PAC-215, que transfiere la responsabilidad de la demarcación de tierras del poder Ejecutivo al Legislativo. Los congresistas quieren tener esa responsabilidad de demarcación, ellos van a decidir si es tierra indígena o no. Está la PL-1610, sobre los recursos minerales en tierras indígenas; también está la PAC-038, la cual intenta llevar al Congreso la responsabilidad de la tierra.

Tenemos una PAC-237 que habla de concesión de tierras indígenas. La PLP-227 es complementaria; trata sobre la soberanía nacional, que es relevante y de interés público en la Unión. Dicen que las tierras indígenas son del la Unión. Por tanto, ellos deciden qué es relevante para el país. Para el entendimiento de ellos, es la explotación de los minerales y las hidroeléctricas. Todas esas leyes, son un paquete para la exploración de nuestros territorios, pero dicen que es para el beneficio del país. Nosotros, como

movimiento indígena, hicimos que todas estas medidas perdieran fuerza. Cuando fueron anunciadas en el Congreso, ya venían con plazo de validez. Nosotros conseguimos debilitar la PAC-215. En mayo, en nuestra última movilización, el presidente de la Cámara, Henrique Eduardo Alves, asumió el compromiso que la PAC-215 no sea aprobada en tanto no hubiera consenso. Si él cumple con su palabra, no será aprobada, por causa de las movilizaciones indígenas.

La misma PLP-227 también está guardada. Eso en el legislativo; en el ejecutivo está la portería 303 que trata de quitar el derecho a la consulta. Por más que no avanzáramos mucho, hemos conseguido trabar algunas medidas. Si no fuera por el movimiento indígena estarían vigentes. Hay que aumentar las movilizaciones, seguir presionando. No podemos bajar nuestras armas, porque ellos están decididos a defender sus intereses, de la misma forma que nosotros estamos decididos a defender nuestros territorios.

¿Cómo está la cuestión del derecho a la consulta para los pueblos indígenas de Brasil?

Sonia: La Convención 169 existe, Brasil la ratificó. Pero no se cumple, inclusive el movimiento indígena está organizando un *Dossier*, una reclamación para presentarla en la OIT en 2015, por el incumplimiento de la Convención en el país. Muchos de los proyectos se están haciendo sin ninguna consulta. Cuando llega la información la obra ya está iniciada. No tenemos ningún ejemplo para demostrar que hubo alguna consulta. Hubo una iniciativa por parte del gobierno para reglamentar, pero rompimos con ese proceso. Para nosotros lo importante es aplicar la Convención 169, no reglamentar. Aquí en Brasil, hay muchas obras de carreteras, ferrocarriles y exposición agrícola que afectan directamente a las tierras indígenas. Cada vez más aumenta el interés del agro negocio por cambiar la demarcación de la tierra indígena. Esa es la coyuntura del momento; es lo que está pasando ahora.

¿Cómo está el proceso en Belo Monte?

Sonia: A pesar de toda la lucha que hubo para trabar esa obra, que tuvo una gran visibilidad y un apoyo internacional, no conseguimos pararla. La obra continúa y está casi concluida. Los impactos son muy visibles: un cambio total en las ciudades, se triplicó la población, los precios y el costo de vida. De la población de Belo Monte, 80% está contra la obra. Es

un caso emblemático, que sirve como un espejo para otros pueblos, para luchar e impedir la construcción de proyectos en sus tierras.

¿Cómo está la cuestión de la salud en las comunidades?

Sonia: Ese es un tema muy preocupante. No se habla más de salud, se habla de enfermedades. El sistema que tenemos, el modelo de salud indígena no llega a las aldeas. Tenemos la estructura de la Secretaría Especial de Salud Indígena (SESAI). Fue una lucha muy importante del movimiento indígena para que crearla. Antes estaba la Fundación Nacional de Salud (Funasa), que estuvo por diez años y que no consiguió resolver nada. Sólo aumentaron los índices de muerte, inclusive por desnutrición, y el número de niños afectados. Fue terrible. Pensamos otro modelo que fue la SESAI. Aún así, no se ha podido estructurar.

La mayor preocupación es que el Ministerio de Salud y Justicia tiene otro proyecto de salud indígena. Quieren crear un instituto privado para hacer las contrataciones y ejecutar acciones en las aldeas. Ese anuncio sucedió apenas el 4 de agosto. Ya presentaron la propuesta como dada. El movimiento indígena se está oponiendo. Cualquier instituto tiene que discutirse con los pueblos. El Estado brasileño tiene que asumir esa responsabilidad con la salud de los pueblos indígenas y no otorgar a terceros ese servicio.

¿Cuál es el estimado de indígenas en el país?

Sonia: Más o menos 817 000 indígenas.

¿Existe alguna articulación del movimiento indígena brasileño con el resto del continente?

Sonia: Hemos avanzado. La articulación que tenemos es con la Coordinación de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA). También hemos realizado actividades con la Abya Yala, de Centroamérica, y con la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI). Ahora estamos fortaleciendo el Enlace Continental de Mujeres Indígenas de América (ECMIA), pero necesitamos fortalecer más, buscar otros movimientos. Inclusive hablamos y citamos mucho a los zapatistas, pero todavía no hemos conseguido esa aproximación. Esperamos que podamos hacerla pronto.

Rosangela Piovisani

¿Cómo surge el MMC?

En la década de los ochenta había muchas mujeres participando en las comunidades eclesíásticas de base, de asociaciones, sindicatos. Sin embargo, había una necesidad muy grande de tener un lugar específico para discutir los temas que envuelven a las mujeres: salud, derechos, participación. En esos espacios estos temas no eran prioridad. Por eso surgió la necesidad de crear un espacio específico para la organización de las mujeres. Un espacio para entender que las pautas de las mujeres no son menores en relación con la reforma agraria. Consideramos que es una pauta central y necesita estar dentro de las pautas de los movimientos y de la clase trabajadora. Así surgió y se amplió el movimiento. Actualmente, el MMC está en veintidós estados del país. Tiene una coordinación nacional integrada por dos compañeras de cada estado. La coordinación se reúne dos veces por año y la dirección, formada por doce mujeres, se reúne con más frecuencia para discutir las pautas que coloca la coordinación.

¿Cómo se da ese proceso?

En 1995 hubo un encuentro nacional para conocernos y ver qué estaba pasando en los estados. Fue un evento muy importante. Se decidió crear una articulación nacional, que tenía en su composición organizaciones de mujeres y mixtas, como sindicatos y movimientos. Los movimientos autónomos de mujeres tenían mucha claridad sobre la necesidad de dar un paso al frente, de construir un movimiento específico. Fuimos debatiendo desde las bases, en los estados, preguntándonos cuál es la simbología, cuáles son las principales luchas. Entre los días 5 y 8 de marzo del 2004, realizamos un Congreso con 1400 mujeres de dieciséis estados, aquí en Brasilia, y presentamos el movimiento. A nivel nacional es reciente, pero la construcción de su historia ya tiene más de veinte años en algunos estados.

¿Quiénes integran el MMC?

El movimiento está formado por mujeres de comunidades tradicionales, quilombos, indígenas, de asentamientos, de campamentos. Nuestra pauta está enfocada en trabajar la autonomía de las mujeres, la valorización de su trabajo, de sus ingresos, porque el sistema capitalista sólo valora a quien genera ingresos. Dado que la producción informal de las mujeres es invisible en el proceso capitalista, no son vistas como trabajadoras. El

trabajo del movimiento es concientizar el papel de las mujeres, ser reconocidas como trabajadoras y generadoras de ingresos, como proveedoras.

En ese sentido, ¿cuáles son los ejes del movimiento?

Tenemos tres: la formación, la organización y la lucha. Estos son los tres pilares del MMC. Acreditamos que sin una organización a partir de la base no existe sustento de ningún movimiento; es necesario para hacer articulaciones, promover debates, en fin. La otra es la formación; hay una carencia de formación política en Brasil, especialmente de las mujeres. Las escuelas no forman ciudadanos críticos para luchar por una sociedad más justa. Los movimientos cumplen ese papel de formación ideológica, de discusión, de participación de las mujeres. No es participar por participar, sino participar con calidad; para la construcción de leyes más justas, por derechos, para la construcción de una sociedad que respete a las mujeres; para analizar el sistema, los impactos del capital, la criminalización de las mujeres. Por último, está la lucha, que también es formación. Todo lo que hemos conseguido hasta ahora ha sido por la lucha; en los asentamientos, en las calles. Muchos enfrentamientos. Así hemos conseguido derribar las barreras de las leyes y de las puertas que históricamente siempre estuvieron cerradas para las mujeres.

¿Cuáles consideras que han sido las victorias del MMC?

Una de las grandes conquistas es la propia creación del movimiento. Tenemos una cultura que además de ser capitalista, es patriarcal y machista, la cual no nos permitía construir un movimiento. Después de 500 años, las mujeres tuvieron la osadía de tener una organización propia. Esto es un hecho extremadamente importante para las mujeres, porque si una no se organiza, no se moviliza, no consigue dar visibilidad a las desigualdades y a los deseos de un pueblo oprimido. Con las mujeres todavía es más difícil, porque está la opresión de clase y la opresión de género. Infelizmente, este sistema patriarcal usa como herramienta la violencia doméstica, tratada como algo normal. El hombre es el jefe y tiene el poder sobre las mujeres y los hijos.

La organización lleva a que las mujeres hagan una autoreflexión de su papel como ciudadanas, que exijan derechos y respeto. Ha sido con la construcción del movimiento que hemos conseguido algunas cosas concretas; una de ellas que fue una gran victoria: la lucha por la seguridad social. Después de la dictadura militar tuvimos un proceso constituyente en Brasil. Esa constitución fue promulgada el 8 de diciembre de 1988. Es un avance en los derechos sociales; esto es muy importante para la clase

trabajadora. Las mujeres consiguieron garantizar jubilación, salario de maternidad, auxilio. Estas son victorias históricas de la organización de las mujeres en este país.

La otra cosa sería quien mira desde fuera al campo y no ve más a una persona, a un hombre, un jefe. Tiene que ver un todo. El movimiento fuerza a discutir esto. Todos los espacios son espacios de las mujeres, de las tareas de la reproducción de la vida, del cuidado de la huerta medicinal, de las variedades de semillas, de la soberanía alimentar. Pasa por las manos de las mujeres y no hay forma de no de ver eso. Cuando el movimiento comenzó a formarse, las mujeres no aceptaban ser más invisibilidades en ese proceso. Exigieron su espacio, su derecho a ser respetadas y ser vistas en la construcción.

¿Cómo se da la articulación del MMC con otros movimientos campesinos?

Desde el comienzo ya participábamos de la Coordinación Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC), en cuanto a la articulación nacional de mujeres desde 1997. Luego entramos a la construcción de la Vía Campesina. Aquí en Brasil, la Vía Campesina está formada por dieciséis organizaciones; nosotros somos una de ellas. Esto es muy importante, porque tenemos nuestra lucha específica; pero con el conjunto de las otras organizaciones tenemos luchas más amplias. Con los indígenas, la lucha por el territorio; con los pequeños pescadores, la cuestión del crédito, las áreas de pesca y de preservación; con los sin tierra, la lucha por la tierra. La lucha del MMC no es sólo del MMC, es de la clase trabajadora. La Vía Campesina da cuenta de eso, en el sentido de construir una unidad de los trabajadores del campo. Eso da más fuerza y da más peso político en las negociaciones, en las acciones. En Brasil hay una autonomía entre los movimientos y el propio Estado. Eso es muy importante. Nosotros dialogamos con el Estado, tenemos proyectos con él. Pero nuestra autonomía es nuestra autonomía; no aceptamos que el gobierno quiera organizarnos. Nosotros conducimos el movimiento; si hubiera algún convenio, algún contrato, está muy claro que lo conducirá el movimiento.

¿Cómo podrías definir la autonomía para el MMC?

Autonomía, yo no diría sólo para el MMC, sino para las mujeres. Cuando se habla de autonomía, uno está hablando de respeto, de alguien que decide lo que hace con su vida, con su futuro. El MMC es autónomo porque quien lo conduce son las mujeres campesinas. Nosotros no tenemos asesoría de fuera.

Quien dirige son las mujeres, y son ellas quienes tienen el poder de decisión. Eso es tener autonomía en la organización, en la formación y en la lucha.

¿Podrías hablarnos un poco sobre la violencia que se da en el campo, específicamente contra las mujeres?

El conflicto en el campo, y hablo de forma general, no es más aquel conflicto entre el dueño de la hacienda y los campesinos como se conocía; ahora es el agronegocio representado por empresas. Respecto a la violencia contra las mujeres y el proceso de criminalización, trabajamos de la siguiente forma. Primero existe la violencia doméstica. Construimos la ley María de la Peña, pero todavía no es suficiente para frenar esa violencia. También está la violencia del propio capital; por ejemplo, cuando las empresas envenenan la tierra y las mujeres se ven directamente afectadas con eso, en sus cuerpos, con sus hijos.

En los últimos dos años, una persona extremadamente conservadora, un diputado, asumió la Comisión de los Derechos Humanos y discrimina a las mujeres, a la comunidad LGBT, a los indios. También se encuentran las últimas declaraciones del diputado Jair Bolsonaro haciendo apología a la violación de las mujeres; no es la primera vez que lo hace. Las mujeres están siendo duramente criminalizadas por organizarse. El sistema refuerza el machismo y el patriarcado. En Brasil no hay una ley clara sobre la descriminalización del aborto; existe para casos de enfermedades o violaciones, pero aun así quien decide es la justicia. Muchas veces, cuando llega la autorización de la justicia para realizar el aborto, ya es muy tarde. Las mujeres no tienen autonomía sobre su cuerpo para decidir qué es mejor. Nosotras no estamos pidiendo, no estamos haciendo apología al aborto, nosotros queremos que no criminalicen a las mujeres.

Recientemente hubo elecciones en Brasil. Una de las cosas que llama más la atención es que el Congreso se configuró como uno de los más conservadores en décadas. Desde tu visión, ¿cuál será el impacto que esto tendrá en el campo?

Los diputados y los senadores electos en este año y que van a asumir su cargo en el 2015 vienen de un cuadro más conservador, de una bancada evangélica mayor. Vienen del agronegocio y de la banca empresarial. Ese ha sido un debate que los movimientos sociales han sostenido sobre el propio sistema político brasileño. ¿Quién financia esas campañas? Si 27 % de la elección en Brasil fue financiada por la industria de armas, ellos no van a representar a la clase trabajadora, a las mujeres; van a representar a

quien pagó la campaña. En los últimos dos años y en el próximo periodo trabajamos en la convocación de una asamblea constituyente soberana. Nosotros tenemos que discutir el sistema político brasileño, en especial el financiamiento de campaña, que debe ser público. No puede ser pagado por esas empresas, porque quien está en el Congreso no tienen ningún compromiso con nosotros, sino con esas empresas y la bancada del agrogocio y los evangélicos. Ellos se juntan siempre cuando se trata sobre temas referentes a la cuestión indígena o a las mujeres.

¿Cuáles consideras que son los desafíos del MMC?

Son muchos los desafíos, muchos están en la formación de cuadros dirigentes, de los militantes de base. Ese es un desafío que atravesamos y que también atraviesan otros movimientos: poder acompañar y hacer una formación calificada. Otro desafío es que la participación de las mujeres tiene una dependencia financiera muy grande, especialmente del esposo, del papá, del compañero. La división sexual del trabajo es un desafío del MMC; las tareas, el cuidado de los ancianos, de los niños no son sólo de las mujeres. La sociedad lo coloca de esta forma, pero tenemos que rediscutir. A veces a las mujeres se les impide participar, organizarse o participar en las reuniones, porque tienen que cuidar a sus padres o llevar a sus hijos de la escuela.

La concientización sobre la autonomía de las mujeres es un desafío para nosotras. Otro desafío es avanzar en cosas muy concretas para las mujeres. A diez años, venimos haciendo un debate con el gobierno brasileño para la construcción de un crédito especial para las mujeres. No hemos conseguido avanzar. Ese gobierno popular que escogimos lo máximo que consigue es hacer líneas de financiamiento de crédito donde las mujeres no entran. Hoy, para acceder al Programa Nacional de Fortalecimiento da Agricultura Familiar (Pronaf), necesitas tener comprobación de ingresos. Pero cuando miras, sólo 13% de las tierras en Brasil son de mujeres. ¿Cómo es que van a tener una comprobación real si la tierra no está a nombre de ellas? Entonces, para el lenguaje bancario, ellas son incapaces de honrar con compromiso un financiamiento. Esos son los desafíos. Creemos que sólo con mucha lucha y mucha formación podremos avanzar.

¿Cómo se financia el MMC?

Tenemos diversas maneras, desde la contribución de las propias mujeres con el movimiento, las bases, las colectas, hasta convenios con el propio Estado brasileño, que financia nuestras actividades. Te doy un ejemplo. Vamos a hacer un debate sobre la documentación de las mujeres. Nosotros lo hace-

mos; el Estado libera recursos para hacerlo. Hay que prestar cuentas, hacer informes. Hay una burocracia detrás de todo eso. Pero el Estado no da cuenta de hacer eso. Hay una carencia y una demanda muy grande. Nosotros somos cumplimos con ese papel; eso nos da cierta condición de sustento. También tenemos algunos proyectos muy puntuales, con algunas organizaciones no gubernamentales dentro y fuera del país. Pero cada vez está más difícil.

Robinho Dos Santos

¿Cuándo surge el movimiento?

La fundación del MLST aconteció entre los días 21 y 22 de agosto de 1997, con 720 delegados en Brasilia. Algunos venían de las ligas campesinas; otros, del MST. Entendíamos que era importante trabar una lucha por la tierra y crear empresas agrícolas comunitarias. Era un poco complicado, porque cuando uno menciona la palabra *empresa*, parece que está asociando al capital. Consideramos que la empresa agrícola comunitaria es un modelo que proponemos de la diversidad en la unidad.

¿Por qué consideraron importante crear un otro movimiento que luchara por la tierra?

La necesidad surge con Bruno Maranhão, quien actuaba en la lucha por la tierra en Pernambuco, Alagoas y en Rio Grande del Norte; también por Manoel da Conceição, quien actuaba en Tocantins y Maranhao. Paulo Faria era un ex sindicalista de Rio de Janeiro que actuaba en el estado de Goiás. Esos compañeros consideraron que había que conquistar más tierras.

¿En cuántos estados del país actúa el MLST?

Estamos en diecisiete estados del país. En nuestra última estadística, éramos al rededor de 40 000 asentados y 20 000 acampados.

¿Cómo es la estructura del movimiento?

Se organizar por grupos que a su vez eligen a los coordinadores, quienes a su vez escogen un coordinador de campamento-asentamiento. Ellos escogen la coordinación regional que elige la dirección regional, y así pasa por la estadual, hasta llegar a la nacional, que son aproximadamente cuarenta dirigentes.

Actualmente, ¿cuáles son las demandas del movimiento?

Desapropiación de áreas, infraestructura para los asentamientos para no volverlos una favela rural. El punto principal son los campamentos y

asentamientos inteligentes; esa es la bandera. Queremos colocar comida de calidad en la mesa de los trabajadores. Entendemos que si se come con calidad, tendremos salud de calidad, y calidad de vida es salud. Un país que gasta menos en salud podrá invertir más en infraestructura y tecnología. Nosotros no estamos contra la tecnología; por el contrario, queremos avanzar en eso. En el momento en que exista una pequeña agroindustria en cada municipio del país, tendremos condiciones de disputar de igual a igual con el agronegocio; es un desafío. Una cosa de la empresa agrícola comunitaria es industrializar y agregar valor a su producción, aplicando recursos en las familias, a favor del productor y no del intermediario. Otra cosa es que los intermediarios compren nuestros productos, los industrializan y cuando los venden dicen que fueron ellos quienes los produjeron. Ese es uno de nuestros problemas: tenemos dificultades para vender nuestros productos en la ciudad. Queremos que sea a favor del productor y no del especulador.

¿Qué alimentos producen?

Tenemos hortaliza, tubérculos, maíz. En Brasil, los campesinos, lo que llamamos agricultura familiar, son los responsables por la producción de 78% de los alimentos ¿Pero cómo es comercializado? Ellos compran nuestros productos y los venden como si fueran de ellos. El agronegocio no produce alimentos; sólo se preocupa por la ganancia. Como te decía, una de nuestras dificultades es colocar los productos en el mercado. Ahora estamos con algunas negociaciones para hacer una feria de productos orgánicos; pero como todavía no tenemos el sello de orgánico, lo vamos a llamar de producción ecológicamente correcta. Es mucha burocracia para conseguir el sello; difícilmente se consigue uno.

¿Cómo se financia el MLST?

Tenemos algunas personas que hacen donación solidaria. Hace tiempo teníamos apoyo de algunos sindicatos y partidos para el movimiento; pero actualmente nuestra lucha es financiada por nosotros mismos.

¿Y la relación con el gobierno?

No tenemos expectativas con este gobierno. Votamos dos veces por la presidenta Dilma y en su primer mandato no consiguió construir ningún asentamiento y va para el segundo con la misma característica. Dicen que asentó, pero la verdad es que el asentamiento ya existía. Ella nos da la espalda y da dinero para el agronegocio.

¿Y la asignación de Kátia Abreu como ministra de Agricultura?

Es una afrenta al pueblo brasileño; es algo inaceptable. El gobierno nos dice que no quiere compromiso con nosotros. No tenemos expectativas con el gobierno, nuestra expectativa está en la construcción del poder popular a través de las ocupaciones.

¿Cuál es la participación de las mujeres en el MLST?

Hemos conseguido avanzar bastante. El objetivo es que consigamos 50% de las mujeres para la organización del movimiento. La lucha sin la mujer va por la mitad.

¿El MLST es un movimiento que recibe la Bolsa Familia?

El asentado tiene mucha dificultad para tener la bolsa familia, porque es mucha burocracia. Un día hay que moverse para firmar un papel; otro día otro. Es muy desgastante; se busca y no se consigue. Menos de diez por ciento de los acampados y asentados reciben esos beneficios. Teniendo la tierra, no necesitamos de la Bolsa Familia. Necesitamos condiciones para producir, porque la Bolsa Familia es asistencialismo y no es lo que queremos.

¿El movimiento forma parte de la Vía Campesina?

Respetamos mucho. Por lo mismo no participamos orgánicamente en ella; tenemos unidad de acción con ellos. También porque tenemos el Foro Regional Triangulo Mineiro y Alto Paranaense, que se sería un modelo de la Vía Campesina.

Sidnei Pita

¿Cómo surge la Unificación de lucha por ULC?

Surgió en la década de los noventa en una lucha por tarifas sociales más baratas dentro de los cortiços (vecindad). No existía una lucha en pro de morada digna en el área central. Lo más difícil para los moradores eran las tarifas de agua, de luz, y un movimiento bastante fuerte para guarderías. Las madres no tenían dónde colocar a sus hijos. Nació el 15 de junio de 1991, al lado de la iglesia del Carmo en el centro de la ciudad.

¿La lucha era para los cortiços cortiços del centro?

Sí. Se fundó en la lucha de los barrios del centro, el centro expandido. Ahora los llaman de perímetros. Son doce.

¿Cuáles han sido las demandas?

En el comienzo, la lucha era por tarifas sociales y guarderías. Pero no paso mucho tiempo para que comenzara una lucha por moradas dignas en el centro, porque las personas que vivían en los cortizoscortiços se mantuvieran en esos lugares para no tener que ir a lugares más distantes. Esto dio un norte a la lucha por vivienda en las áreas centrales. De 1989 a 1992, Luiza Erundina, la primera alcaldesa de la ciudad (por parte del Partido de los Trabajadores), tuvo una sensibilidad mayor y construyó subprogramas en las áreas de cortizoscortiços. De esos programas se hicieron algunos conjuntos habitacionales. En ese momento, la Unión de Lucha por Cortiços (ULC) comenzó a organizar y unificar los barrios. La fundaron los trabajadores del barrio de la Mooca, Belem, luego de Santa Cecilia y Bom Retiro.

¿Cómo se organiza la ULCM?

Tenemos representantes. Consideramos que en la ULCM uno no manda, representa por dos años. Hay coordinadores, representantes, fiscal, financiero, de comunicación, sociocultural y de ética.

¿Cómo es que hacen el trabajo de base?

Fue muy importante; actualmente menos, pero continuamos. Digo que hoy es menos porque las personas vienen directamente. Pero antes íbamos mucho a los cortiços, a hacer trabajo dentro, puerta por puerta. Muchas veces los locatarios no nos dejaban entrar. En la Mooca, quien controlaba era el tráfico. Nos dejaban hacer nuestro trabajo: concientizar a las personas de que esa forma de vivienda no es saludable, no es de calidad. Las personas fueron entendiendo que ellas podían vivir en el mismo local pero con mejor calidad de vida, con una renta más barata. Continuamos haciendo, pero como nuestra organización ya tiene veinticinco años y es conocida, las personas acaban llegando. Se acercan de los cortiços y favelas. Hace cuatro años ampliamos el nombre para Unión de Lucha por Cortiços y Moradia (ULCM), que forman parte de la zona este, sudeste y centro. Hemos ido creciendo; ya tenemos cuarenta grupos de base.

¿Ahora también actúan en la periferia?

Sí, principalmente en la zona este y sudeste, en Heliópolis, por la lucha por la tierra. Tenemos un proyecto donde caben más de 800 000 unidades. La ULCM se va a quedar con 1200 unidades.

¿Cuántos cortiços hay en esas áreas?

En la gestión de Martha Suplicy (2001-2005), hicimos un censo; después, el gobierno del estado hizo otro. En el barrio de la Se había mas de

2500; en la Mooca 1800. Tal vez no sea una cuenta precisa. Actualmente creemos que hay más de 300 000 o un poco más, porque ahora juntamos las ocupaciones es una morada provisoria.

¿Hay políticas para los cortiços?

Actualmente, en la ciudad de São Paulo no hay más programas para cortiços ni del lado del municipio ni del lado del gobierno federal. Tenemos algunos proyectos puntuales que son del gobierno federal que donaron algunos inmuebles del Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), de la Secretaria del Patrimonio, pero no hay un programa de verdad para los cortiços. Hoy hay un programa ficticio que se llama de Participación Pública y Privada (PPP). Hace un mes dieron el primer lote. Cuando uno le da la responsabilidad a la empresa privada, exime la responsabilidad del poder público. Ese es un gran equívoco. No hay programas. No.

¿La especulación inmobiliaria?

Ese es un gran problema para nosotros. Hicimos todo un esfuerzo por remarcar las zonas especiales de interés social. En la votación en la Cámara del plano director, luchamos para no tener pérdidas. Si no hacemos una articulación y no presionamos a las audiencias públicas, perdemos espacios en las áreas centrales, en donde hay más infraestructura. Es una lucha de clase. También hacemos acciones en conjunto, cuando es más amplio, donde participan otros movimientos como el UMM, MTST, CMP, entre otros.

¿Los extranjeros pueden participar del movimiento?

Tenemos un grupo en el barrio Glicério, en la iglesia de la Paz, donde reciben a los refugiados de Haití. Coordinamos un grupo que ha ido creciendo. Las personas empezaron a participar; otras personas del Glicério.

¿Y el gobierno actual de Fernando Haddad?

El tiene dificultad de ver el hoy. Es un gobierno de futuro, de planeamiento. Hemos conseguido un proyecto con 11 000 unidades; ya hemos asegurado 7000. Estamos pasando por un proceso de dificultad económica de corte del gobierno federal hasta en los programas. En São Paulo la tierra es cara. Por eso el día 5 de noviembre vamos a salir a la calle, para que la presidenta Dilma Rousseff lance el proyecto Mi Casa mi Vida tres. No puedes ser el próximo año; tiene que ser en este.

¿Cómo se articulan nacionalmente?

La ULCM está afiliada a la Unión de los Movimientos de Moradia de Grande São Paulo, el interior del Estado; y la Unión del Estado está afiliada a la Unión Nacional. Estamos en veintidós estados del país.

¿Y continentalmente cómo se organizan?

Tenemos la Secretaría Latinoamericana de Vivienda Popular (Selvip). Este año tuvimos varios módulos de escuelas itinerantes de enseñanza de morada para autogestión. Hubo dos módulos en Minas Gerais. El próximo año tendremos uno en Quito, Ecuador; y el seminario de la ONU es el hábitat tres. También nos articulamos en la Coalición Internacional del Hábitat (HIC), que está en 280 países del mundo.

Anderson Amaro y Rosieli Ludtke

¿Cómo surgió el Movimiento de Pequeños Agricultores (MPA)?

Anderson: El movimiento surge de una coyuntura a mediados de la década de los noventa, cuando los pequeños agricultores de Brasil eran rehenes de no tener quien los representara de forma más combativa. Los sindicatos tenían ese papel, pero no había respaldo. Por lo tanto, en una situación de ausencia, surgió el MPA como una forma de articulación de los campesinos. Es importante mencionar algunos factores que ayudaron para ese surgimiento: la falta de políticas públicas para el campo y una gran sequía que aconteció en todo el país, específicamente en la región sur del país. Los campesinos perdieron todo y se quedaron endeudados. Entonces, la Comisión Pastoral de la Tierra (CPTI) realizó un campamento para tratar sobre esa situación de calamidad.

Pensamos que llegarían 5000 campesinos y llegaron más de 30 000. En ese momento vimos un gran potencial para el surgimiento del movimiento. Por tanto, surgió la necesidad de crear una organización que representara a esos campesinos. Paralelo a eso, estaba aconteciendo lo mismo en Espírito Santo, Rondonia y Santa Catarina; movimientos muy parecidos. Una vez como MPA, comenzamos a organizar nuestros encuentros, el primero con el lema: “organizar, producir, alimentar”. Aconteció en la Ronda Alta en Rio Grande del Sur. Luego, el segundo encuentro fue en Ouro Preto do Oeste, en Rondonia; el tercer encuentro en Victoria da Conquista, en Bahía (2010).

A lo largo de su historia, ¿cómo ha sido la resignificación del ser campesino?

Anderson: Vemos un reconocimiento de lo que es ser campesino. Hasta el año 2003, el concepto de campesino estaba asociado con lo atrasado,

con lo arcaico. Ahora el propio Estado se refiere tanto a la agricultura familiar como a la agricultura campesina. Creemos que el campesino es más que el trabajo en familia, porque se puede tener una agricultura familiar destinada a la monocultura. Tenemos un concepto del campesino relacionado con la cuestión cultural, con su respeto hacia la naturaleza. Consideramos campesinos no sólo a los agricultores tradicionales, sino también a los quilombos, a los indígenas, todos y cada uno con sus particularidades.

¿Cuál es la importancia de la participación de las mujeres en el MPA?

Rosieli: No sólo dentro del movimiento, sino dentro de la sociedad como un todo, las mujeres tienen un papel fundamental. Dentro del MPA, desde hace un tiempo estamos luchando por tener espacios específicos para las mujeres, de empoderamiento, de reflexión, de debate. Las mujeres son quienes sienten en la piel el reflejo de las desigualdades. Es necesario debatirlas, así como necesario es debatir la cuestión de la violencia. Nos preguntamos, ¿cuál es el feminismo que las campesinas queremos construir? No es el mismo feminismo basado en la ciudad; hay que construir un feminismo campesino adecuado a nuestra realidad. Es necesario trabajar cada vez más con ese patriarcado que lucra encima del trabajo invisible de las mujeres. Por eso los espacios son importantes. Hay que reconocer que las mujeres tienen un papel fundamental que se naturalizó: cuidar de los hijos, de la casa. Es un trabajo no reconocido y mucho menos valorado.

¿Nos podrías hablar un poco más sobre el feminismo campesino?

Rosieli: Es el feminismo campesino popular que estamos construyendo, que es un proyecto de sociedad, no es sólo para las mujeres. Buscamos defender la cuestión de la igualdad entre las personas, sin opresión, ni violencia, que el trabajo de las mujeres sea valorado y no sea invisible, que sea reconocido. También principalmente sobre la emancipación política, porque muchas veces las mujeres no consiguen espacios. El feminismo campesino viene para reforzar las cuestiones de la clase campesina, porque vivimos en un ambiente de lucha de clases.

¿Hubo alguna resistencia dentro del MPA por causa de la lucha de las mujeres?

Rosieli: No hubo resistencia, pero tenemos dificultades por los recursos. Tenemos que hacer muchas cosas para hacer nuestras reuniones y tener nuestra autonomía. No es fácil. Todo mundo defiende que es contra

la violencia; pero si hay algún tema más importante, el tema de las mujeres se queda en segundo plano.

¿Cómo es que se organizan nacionalmente el MPA?

Anderson: Estamos organizados en diecisiete estados y articulando en dos más. Estamos organizando los grupos con base en la construcción de nuestro proyecto, nuestra plataforma política: el Plano Campesino. Ahora estamos luchando por la construcción del Programa Campesino, que es un brazo del Plano.

¿Cómo se está dando esa organización?

Anderson: Estamos en construcción en conjunto con el Estado Brasileño. Todos los movimientos de la Vía Campesino apoyan la propuesta y estamos dialogando con el Movimiento de Desarrollo Agrario (MDA) en la construcción del programa. Creemos que hasta finales del próximo año lo habremos lanzado oficialmente.

¿Nos pueden hablar de la importancia de este primer Congreso Nacional?

Anderson: Consideramos que marcó la acumulación del movimiento en sus casi veinte años. Después de los tres encuentros, realizamos nuestro primer Congreso en una coyuntura muy dura para todos los trabajadores del país, pero en una perspectiva muy importante: la alianza campo y ciudad.

Rosiel: EL Congreso marca una madurez del movimiento. Después de 19 años, creemos que es un momento muy importante de nuestra historia, consideramos importante organizar un Congreso y no un encuentro para afirmar las propuestas políticas del movimiento. Estamos en un momento histórico de alianza entre el campesino y el operario, para aglutinar fuerzas de la clase trabajadora contra el modelo neoliberal.

¿Cómo se da esa alianza, pensando que es el lema de su Congreso “Plano Campesino, Alianza Campesina y Operaria por la Soberanía Alimentaria”?

Anderson: El pilar de nuestra organización es el alimento, la construcción de la soberanía alimentaria y la preservación de las semillas criollas. Para nosotros son nuestro bien mayor. Tomamos el lema de la campaña internacional de la Vía Campesina, “Las Semillas, Patrimonio Común de la Humanidad”. Esa alianza se da a través del alimento, la alianza campo-ciudad. Nosotros producimos comida de calidad, agroecológica, no esa alimentación enlatada, sin sabor, envenenada. Hay una alianza entre quien

produce y quien consume. Una alianza de trabajadores del campo y trabajadores de la ciudad.

¿Podrían definir mejor qué es la soberanía alimentaria?

Anderson: Es muy importante para los campesinos. Muchas veces algunas organizaciones no tienen la dimensión de eso y trabajan encima de la seguridad alimentaria, que es también importante. En ese sentido, no se preocupan por la calidad o el origen del alimento. Con la seguridad alimentaria, tú sólo tienes la garantía de que las personas coman. La soberanía alimentaria es algo mayor; es tener autonomía en lo que uno produce y consume. No es sólo la seguridad, sino la autonomía. Hasta la década de los setenta, teníamos una diversidad de más de 36 tipos de cereales que se redujo siete. Hay una pérdida extraordinaria en el sentido global. Estamos empobreciendo la alimentación. El agronegocio busca tener el control de la cadena alimenticia y que los campesinos continúen subordinados a la lógica de producción, con base en su insumo químico y de agrotóxicos. Brasil aumentó extraordinariamente la producción con base en venenos. Todos los años rompemos récords de producción con veneno, inclusive con algunas sustancias prohibidas en otros países. Antes se hablaba de 5.2 litros de veneno por consumo anual; ahora se habla de ocho. Nosotros tenemos una propuesta para eso: la agroecología como un principio en la producción. El Programa Campesino es nuestra oportunidad de una transición masiva para la agroecología; eso es lo que nosotros defendemos.

Rosiel: Las mujeres tienen un papel fundamental en la soberanía alimentaria, en garantizarla. Se habla de no usar veneno, es la mujer que va a luchar en su casa para no usarla, el veneno es muerte y las mujeres luchamos por vida. El cuidado de las semillas, de los hijos, las mujeres lo ejercen y lo reconocen como una lucha contra usar veneno, contra plantar transgénicos, contra depender de las farmacias, sino usar las plantas medicinales y tener nuestro propio alimento. Soberanía alimentaria es tener acceso a las semillas, tener las propias semillas criollas de acuerdo con la realidad y la cultura de cada región, de acuerdo con su diversidad. Es tener autonomía en el modelo de producción, poder planear sistemas de policultivos.

Nosotros usamos un concepto que se llama *alimergia*, producción de alimentos con cuidado al medio ambiente y producción de energía. En los sistemas combinados de alimentos, es un modelo diferenciado de producción que cuida de la naturaleza: alimento, medio ambiente y energía. Ese concepto fue creado por el MPA y se pensó dentro de los sistemas campe-

sinos de producción, para optimizar los espacios. A veces los campesinos tienen poca tierra, pero pueden plantar varias cosas en el mismo local, para que eso ayude a re-fertilizar el suelo, como para que ellos se complementen en una sinergia. Eso es agroecología en su esencia. Con eso podemos tener toda una producción y la garantía de la soberanía alimentaria. Por ejemplo, en un sistema agroforestal, podemos producir dieciséis toneladas de alimento; en un monocultivo de soya, uno consigue tres toneladas. Es mayor la cantidad y la diversidad de los alimentos, ya hay un equilibrio; cuando uno siembra misturado, el propio suelo se recupera, uno no necesita colocar insumos químicos.

Hay una serie de ventajas con el concepto de *alimergia* y con el concepto de sistemas campesinos de producción, que es antagónico a la cadena productiva. Una cadena prende; te especializas en una sola cosa que es subordinada al Estado. Para nosotros no. Lo primero es garantizar la mesa llena, de acuerdo con la cultura, la realidad y la diversidad. El excedente puede ser comercializado; sólo que ahora ese excedente ya tiene una dimensión mayor. Además de los mercados, usamos los programas gubernamentales para vender nuestra producción.

¿Dónde venden sus productos?

Rosieli: Uno de los lugares son los mercados en muchos de los municipios del país. También promovemos trocas (intercambios) entre los propios campesinos. Tenemos el Mercado Popular de Alimento en el estado de Espírito Santo, y eso está creciendo. La ley en Brasil no permite que comercialicemos un producto que sea industrializado por los propios campesinos.

En este proceso acelerado del modelo de agronegocio que vive el país, ¿ustedes consiguen ver algún beneficio?

Anderson: Es muy difícil mirar algún beneficio. Siendo bien pragmático, el único beneficio que veo es su importancia en la balanza comercial, la contribución en el PIB. Si uno tiene los datos del Instituto Brasileño Geografía y Estadística (IBGE), 80% de la alimentación del pueblo brasileño lo producen los campesinos. No son ellos los agronegocios los responsables de la alimentación del pueblo; no tienen importancia en la producción de alimentos. Producen *commodities*, es decir, la balanza comercial, porque tienen un gran subsidio por parte del Estado brasileño. Si uno quita ese subsidio, el agronegocio no se sustenta. Considero que tiene esa importancia en la balanza comercial y un apoyo fuerte del Estado que lo subsidia.

¿En los últimos diez años ese modelo ha aumentado?

Anderson: Tuvimos avances de los dos lados. Por un lado, tuvimos algunos programas que posibilitaron la comercialización de los productos de la agricultura campesina que comenzó con un objetivo y se transformó en otro. Fue sólo crear un mecanismo que generó un aumento de la producción de la agricultura campesina. Hubo avances. Pero hace falta crear una política de abastecimiento del país. Desgraciadamente, el Estado todavía no entiende esa necesidad.

¿Cómo ha sido en la última década la participación de las mujeres en el campo?

Rosieli: Ha avanzado bastante. Tenemos un colectivo nacional de género. En algunos estados no es de género; es de mujeres para tratar temas específicos. Por ejemplo, del lugar que yo vengo, Rio Grande del Sur, el machismo es más severo. Entonces, comenzamos un trabajo con las plantas medicinales, y a partir de ese trabajo introducimos los temas políticos: género, feminismo, plano campesino, agroecología, sistema campesino de producción. Conseguimos tratar esos temas trabajando con las plantas. Aconteció sin planear, porque las mujeres se identifican con el trabajo de las plantas, siempre realizan teoría y práctica.

Actualmente, ¿cuáles consideras que son los desafíos del MPA?

Anderson: Afirmar la necesidad de la unidad de la clase trabajadora del campo y la ciudad para la construcción de un programa estratégico para el campo brasileño, que en nuestra plataforma es el Plano Campesino. Nuestro desafío es tener una política pública que dialogue con la pobreza del campo brasileño, dignificar su producción, que los campesinos tengan la posibilidad de estructurarse y así producir de forma más calificada y mejor, para contribuir con la alimentación de los trabajadores del campo y la ciudad.

María das Graças Xavier

¿Cómo surgió la Unión de Movimientos por Moradia (UMM)?

En la década de los ochenta, surgieron varias ocupaciones en el estado de São Paulo. En ese momento existía la pastoral de la vivienda que estaba vinculada con la Iglesia católica, llamada de Comunidades Eclesiásticas

de Base (CEB). Percibiendo esas ocupaciones, se preguntaron por qué no fundar un movimiento que junte a todos esas experiencias. Así, en 1987 surgió la UMM, representada por movimientos de la zona este, suroeste, oeste y de la región norte. Luego tuvo un carácter municipal; tres años después, se creó la Unión Nacional por Moradia Popular (UNMP), primero en São Paulo, luego en Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás y ahora estamos en veintidós estados de la federación nacional.

¿Cómo funciona la estructura de la UMM?

Para ser parte de la coordinadora de la Unión, hay que trabajar con un grupo de base. El principal objetivo es el trabajo de base. ¿Quiénes son nuestra base? Personas que viven en favelas, en viviendas precarias, que no tienen condiciones de pagar una renta, que viven en la casa de familiares o que ganan hasta tres salarios mínimos. Tenemos una dirección en São Paulo, con veintitrés miembros y una coordinación amplia, organizada con todos los miembros filiados a la UMM: aproximadamente 380 entidades en el Estado de São Paulo. Cómo es que dividimos. Te doy un ejemplo: todas las ciudades de la *Baixada Santista* son una macro; todas las ciudades próximas de Sorocaba es la macro de Sorocaba; de Campinas, el macro de Campinas, y así va. Las llamamos de macro en vez de ser por municipios.

¿Cuáles son los principales objetivos del movimiento?

Nuestro principal objetivo es el trabajo colectivo y la autogestión: cuando uno construye de forma colectiva su vivienda. Las personas participan de todo el proceso: la compra del terreno, la compra del material, el diseño de la casa; las familias participan desde el comienzo hasta el final. ¿Cuál es el valor de todo eso? Que cuando la gente termina su casa, tienes personas formadas en albañilería, hidráulica, en cuestiones relacionadas con eléctrica. Todo es y se hace de forma colectiva. Todo eso se aprende.

¿Cómo es que se da ese proceso de participación autogestionada?

Las personas están relacionadas con todo el proceso. Una cuestión importante es que en todos los proyectos incluimos un espacio comunitario. Durante toda la construcción tenemos una parte que llamamos de técnico social. Debatimos sobre todo lo relacionado con la construcción de la vivienda. Cuando las personas van a trabajar en la obra, los fines de semana, tenemos un horario de formación, para que participen y sepan qué está pasando. Son ellos mismos quienes deciden, no son los técnicos o los ingenieros.

¿Tienen autonomía?

Sí. Nosotros no queremos construir sólo casas, sino ciudadanía. Creemos que cuando las personas conocen sus derechos, no es fácil que las sigan engañando. De esta forma, pueden reivindicar y multiplicar sus derechos.

¿Cómo se dio ese proceso?

En 1989 buscamos otras experiencias que ya trabajaban con ese proceso de autogestión. Fuimos a Uruguay y conocimos la experiencia de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (FUCVAM), que trabaja con cooperativismo. Ahora tenemos la Secretaria Latinoamericana de Vivienda Popular (Selvip) que actúa en países como Argentina, Uruguay, México, Perú, Ecuador, Bolivia y Venezuela. En cada país trabajamos los avances en relación con la reforma urbana. Por ejemplo, en la constitución de 1998, en Brasil, está el derecho a vivienda; pero sólo prevaleció después del estatuto de la ciudad. Ese es un trabajo que hacemos colectivamente con la base, para que las personas se empoderen y sepan que hay una ley que les garantiza el derecho de vivienda, que es un deber del gobierno municipal, estadual y nacional. Cuando las personas saben de eso, empiezan a cobrar a los gobiernos y estos empiezan de verdad a realizar políticas para habitación.

¿Nos puedes hablar de la lucha por la aplicación del tercer programa Mi Casa mi Vida?

Mi Casa mi Vida es un ejemplo del mejor programa en toda la historia del país. Tiene un subsidio muy grande; pero las familias de pocos recursos no podían alcanzarlo porque el terreno es muy caro, principalmente en el estado de São Paulo. Algunos gobiernos tienen la política de mandar a esas personas para las periferias, beneficiando la especulación inmobiliaria. Cada vez que un gobierno hace un proyecto en la periferia, lleva agua, luz, toda la infraestructura y la especulación viene atrás, expulsando cada vez más lejos a esas poblaciones.

Actualmente los movimientos luchan para tener una vivienda en las áreas centrales, que están llenas de infraestructura y son más baratas. El programa Mi Casa mi Vida facilita eso: un apartamento en el área central vale entre 400 000 y 500 000 reales. A través del programa, uno consigue comprar esa unidad o reciclarla por un valor más bajo: 120 reales mensuales durante diez años. Las personas tienen forma de pagar ese valor, incluso ganando un salario mínimo. Se sienten con dignidad en el momento

que tienen un lugar para vivir. Por otro lado, vemos ciertas dificultades en el programa. Algunos de los gobiernos municipales y estatales dejaron de invertir con recursos en la construcción de más viviendas. Ahora los gobiernos dan hasta 20 000 reales, y la mayor parte viene del gobierno federal.

Lo que defendemos es que el gobierno federal otorgue ese dinero para la construcción y que los gobiernos municipales y estatales aporten los terrenos, porque la parte más difícil es el terreno. Si hay una contrapartida entre municipio y Estado para ceder los terrenos, no sería tan alto, y con los recursos del programa Mi Casa mi Vida podríamos construir casas de calidad; no aquellas casas que los gobiernos proponen, que son cajas de fósforos. Una casa con 32 o 42 metros. Nosotros queremos construir viviendas, pero queremos que sean viviendas dignas, de acuerdo con la cantidad de personas que van a vivir en cada una.

¿Eso ya acontece o es una propuesta?

Las casas construidas por el programa Mi Casa mi Vida Entidades, sí. Son de 49 metros para arriba. Conseguimos hacer eso con el mismo recurso que el gobierno construye casas de 42 metros. Los movimientos conseguimos hacer mejor y mayor, con más calidad y con material de primera. Tenemos casas construidas con 69 metros. Son las familias que buscan y proponen precios de materiales, no hay un interés de lucro, sino de la calidad.

En tu opinión, ¿por qué en los últimos años han surgido tantos movimientos urbanos?

Después del 2002, hubo una apertura de políticas públicas con participación popular. Se fueron creando varios consejos, conferencias y las personas comenzaron a conocer sus derechos. Considero que fue a partir de eso, comenzaron a organizarse. Saben que pueden luchar por tener una vivienda digna. La UMM trabaja con aliados, con otras entidades y movimientos tanto en la zona urbana como en la rural, tanto con el Movimiento dos Atingidos por Barragens (MAB) como con el Movimiento de Trabajadores Sin Tierra (MST); intentamos unificar pautas. Juntos luchamos por la reforma política, por la reforma agraria, la reforma urbana. Hemos avanzado en ese sentido. Antes había mucha fragmentación; actualmente, por más que tengamos algunas diferencias, en las reivindicaciones trabajamos juntos colectivamente.

¿Existe algún colectivo de mujeres dentro del movimiento?

Tenemos una secretaría de mujeres donde tenemos una pauta específica, esa pauta se lleva a nivel nacional. Tenemos varias reivindicaciones; por ejemplo, el primer proyecto de ley que le dio la titularidad de la casa a la mujer. Fuimos nosotros quienes lo hicimos, con el trabajo de algunas entidades feministas. Ahora estamos trabajando un proyecto de ley que consiste en que cada 5% de las unidades construidas sean para las mujeres víctimas de violencia. También hacemos seminarios nacionales que involucran a todos los estados para trabajar con una mirada diferente. Llevamos esa pauta para el Foro Nacional de Reforma Urbana, para las conferencias de ciudades y la conferencia de mujeres.

BIBLIOGRAFÍA

- Acosta Alberto (2009), “La maldición de la abundancia”, Abya-Yala, Quito.
- Albán, J. (26 de junio de 2015). Lava Jato: el caso de corrupción más grande en la historia de Brasil. *Semana económica*. Recuperado de <http://semanaeconomica.com/article/economia/economia-internacional/163441-lava-jato-el-mas-grande-caso-de-corrupcion-en-la-historia-de-brasil/>
- AFP. (19 de junio de 2015). Caso Petrobras: detuvieron a los presidentes de Odebrecht y Andrade Gutierrez. Recuperado de <http://www.infobae.com/2015/06/19/1736383-caso-petrobras-detuvieron-los-presidentes-odebrecht-y-andrade-gutierrez/>
- Alem, A. C. y Cavalcanti, C. E. (2005). O BNDES e o apoio à internacionalização das empresas brasileiras: algumas reflexões. *Revista do BNDES*, 12(24), pp. 42-76.
- Almeida, L. F. (2011). Uma expressão do neonacionaldesenvolvimentismo do governo Lula: o Plano Brasil 2022. *XXVIII Congresso Internacional ALAS. Recife*. Recuperado de http://www.sistemasmart.com.br/alas/arquivos/18_8_2011_0_15_19.pdf
- _____, (2012). Entre o nacional e o neonacional-desenvolvimentismo: contribuição para o debate sobre poder político e classes sociais no Brasil contemporâneo. *Serviço Social & Sociedade*, 112.
- _____, (2012). Nacionalitarismo, antiimperialismo e democracia: um desafio teórico-prático que se repõe para o marxismo no século XXI. *Lutas Sociais*, 28. Recuperado de <http://www4.pucsp.br/neils/revista/vol.28/lucio-flavio-rodrigues-de-almeida.pdf>

- _____, (2013). Após dez anos de governos do PT, sair da perplexidade e unificar as lutas. *Lutas Sociais*, 27. Recuperado de <http://revistas.pucsp.br/index.php/ls/article/view/18457>
- _____, (2013). Colher a poesia do futuro: algumas reflexões sobre as manifestações de junho. *Puc viva*, 48.
- Almeida, P.R. (2005). Breve visão histórica sobre o planejamento no Brasil. Recuperado de <http://www.pralmeida.org/05DocsPRA/1369PlanejBr1946-2005.pdf>
- Álvarez, M. I. (6 de agosto de 2015). Lava Jato: 4 claves del escándalo de corrupción en Brasil que llega hasta Perú. Recuperado de <http://larepublica.pe/politica/67037-lava-jato-claves-para-entender-el-caso-de-corrupcion-en-brasil-que-involucra-peru>
- Álvarez Junco, J. (11 de noviembre de 2014). Virtudes y peligros del populismo. *El País*.
- Amaral, R. (2016). Democracia en América Latina: las lecciones de Brasil. *Alai*. Recuperado de <http://www.alainet.org/es/articulo/181119>
- Amin, S. (2005). Imperialismo y Globalización, Centro de estudios Miguel Enriquez, CEME, 2005, Chile
- _____, (2001). Globalización. Expansión del capitalismo. Imperialismo o apartheid. *Conferencia Mundial Contra el Racismo de Durban* Sudáfrica, 28 agosto-1 septiembre 2001, Comité de Solidaridad con la Causa Árabe
- Arcany, V. (2011). Notas para una interpretación histórica de la trayectoria del Partido de los Trabajadores (PT). *Herramienta*, 8. Recuperado de <http://www.herramienta.com.ar/herramienta-web-8/notas-para-una-interpretacion-historica-de-la-trayectoria-del-partido-de-los-traba>
- Arcany, V. (13 de marzo de 2015). Tres preguntas y tres respuestas breves sobre un domingo triste. *Rebelión*. Recuperado de <http://www.rebelion.org/noticia.php?id=196601>
- Arteaga, H. y Salazar, E. (30 de octubre de 2016). Los millonarios préstamos del BNDES al club “Lava jato”. *Ojo Público*. Recuperado de <http://ojopublico.com/318/el-club-lavajato-y-los-millonarios-prestamos-del-bndes>
- Avakian, B. (30 de julio de 2000). Las ilusiones de la democracia..., y la realidad de la dictadura. *Revista virtual La Neta del Obrero Revolucionario*, 1064.
- Azevedo, A. (1971). *O Brasil e suas regiões*. São Paulo: Companhia Editora Nacional.
- Banco do Brasil. (2010a). *Banco do Brasil. 200 anos de história: 1964-2008*. Belo Horizonte: Del Rey, Fazenda Comunicação & Marketing do Banco do Brasil.
- _____, (2010b). *História do Banco do Brasil*. Belo Horizonte: Del Rey, Fazenda Comunicação & Marketing do Banco do Brasil.
- Barbosa, N. (2013). *Dez Anos de política econômica*. Brasil: Clacso.
- Barman, R. J. (1999). *Citizen Emperor: Pedro II and the Making of Brazil, 1825-1891*. Stanford: Stanford University Press.
- Bello, P. (2014). ¿De verdad inventar/interpretar sobre Podemos es periodismo? *Iniciativa Debate*. Recuperado de https://docs.google.com/document/d/1_k6EWUFolpgvdPf6YjvQhEUVpadIHGSKSTCQwUY3fo/pub
- Berterretche, J. L. (2013). Brasil, Estrategia del lulismo para el próximo decenio. *La Haine*. Recuperado de <http://www.lahaine.org/mundo.php/brasil-estrategia-del-lulismo-para-el-pr>
- Bihl, A. (2015). Actualizar y diferenciar el enfoque marxista del Estado. *Rebelión*. Recuperado de <http://www.rebelion.org/noticia.php?id=200847>
- BNDES. (2009). BNDES aprova limite de crédito de R\$ 1,5 bilhao para Grupo Gerdau. *BNDES*. Recuperado de http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Sala_de_Imprensa/Noticias/2009/Industria/20090707_gerdau.html
- Boff, L. (2013). Brasil: Equívocos conceptuales en el gobierno del PT. *Alai*. Recuperado de <http://www.alainet.org/es/active/65818>
- Boito, A. (2012). As bases políticas do neodesenvolvimentismo. *Fórum Econômico da FGV*, São Paulo.

- Bouamama, S. (2014). El colonialismo no puede morir mientras subsista el capitalismo. *La Pupila Insomne*. Recuperado de <http://www.rougemidi.org/spip.php?a>
- Boxer, C. R. (2002). *O império marítimo português 1415–1825*. São Paulo: Companhia das Letras.
- Braga, R., Wanderley Preite, S. (2015). Brasil: Ley de tercerización es la mayor derrota popular desde el golpe del 64. *Sin permiso*. Recuperado de <http://www.sinpermiso.info/textos/brasil-ley-de-tercerizacin-es-la-mayor-derrota-popular-desde-el-golpe-del-64-entrevista>
- Brasil Foods. (2013). Relatório anual e de sustentabilidade 2013. *Brasil Foods*. Recuperado de <http://ri.brf-global.com/arquivos/BRF%20RA%20PT%20140609.pdf>
- _____, (2012). Relatório anual e de sustentabilidade (versão completa). Brasil Foods. Recuperado de <http://www.brasilfoods.com/ri/siteri/web/arquivos/BRF%20RA%20Completo%20PT%20130625.pdf>
- Brasil: la ley petrolera cambia y favorece la participación extranjera. (Octubre de 2016). *Telam*. Recuperado de <http://www.telam.com.ar/notas/201610/165883-congreso-brasil-ley-petrolera-apertura-participacion-extranjera.html>
- Brasil. Stedile: ‘El neodesarrollismo se agotó’. (Julio de 2015). *Resumen*. Recuperado de <http://www.resumenlatinoamericano.org/2015/07/10/brasil-stedile-el-neodesarrollismo-se-agoto/>
- Braskem (s. f.). A Braskem está entre as 50 empresas mais inovadoras do mundo. *Braskem*. Recuperado de <http://www.braskem.com.br/site.aspx/Inovacao>
- Bravo Bresani, J., Bourricaud, F., Favre, H. & Piel, J. (1969). *3 Ensayos y una polémica. La oligarquía en el Perú*. Perú: Instituto De Estudios Peruanos.
- Bueno, E. (2003). *Brasil: uma História*. São Paulo: Ática.
- Bueno, G. (1997). La democracia como ideología. *Ábaco* 12(13).
- Calmon, P. (2002). *História da Civilização Brasileira*. Brasília: Senado Federal.
- Cano Wilson, A., Gonçalves da Silva, L. (2010). Política industrial do governo Lula, Texto para Discussão. *IE/Unicamp*, 181.
- Carvalho de, J. M. (2001). Nación imaginada: memoria, mitos y héroes. En E. González, A. Moreno y R. Sevilla (eds.), *Reflexiones en torno a 500 años de historia de Brasil*. Madrid: Catriel.
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), (2007). *La inversión extranjera en América Latina y El Caribe*. Santiago de Chile.
- (2015) *La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe, 2015* (LC/G.2641-P), Santiago de Chile.
- Chávez, E. (18 de junio de 2015). El rastro del Citibank. *Caretas*. Recuperado de <http://www2.caretas.pe/Main.asp?T=3082&idE=1212&idS=260#.WFGcJbKpWVJ>
- Coelho, M. A. (1996). *Geografía do Brasil*. São Paulo: Moderna.
- Conferencia de las Naciones Unidas sobre comercio y desarrollo (2013). *Informe sobre el comercio y el desarrollo*. Ginebra. Recuperado de http://unctad.org/es/PublicationsLibrary/tdr2013_es.pdf
- Congreso de los Pueblos Indígenas de Colombia (22 de noviembre, 2001). *América Latina en Movimiento*. Recuperado de <http://www.cuestiones.ws/revista/n8/abr02-indigenas-carrion.htm>
- Connaughton, B. y Sosa, F. (1999). *Historiografía latinoamericana contemporánea*. México: UNAM.
- Constructoras brasileñas se expanden por América Latina consolidando las redes e infraestructura del capitalismo extractivista (22 de octubre, 2011). *La Haine*. Recuperado de <http://clajadep.lahaine.org/?p=11303>
- Coronado, J. (2011). Sol clama indignada por una democracia mejor. *Sociedad, política y Des/colonialidad del poder*. Recuperado de http://politicaso-ciedad.blogspot.mx/2011_10_15_archive.html
- Costa da, E. V. (1995). *Brasil: de la monarquía a la república*. México: Consejo Nacional para la Cultura y las artes.

- Crespo, C. (2015). Nuevas Elites Económicas Emergentes se han enriquecido con el Gobierno “Plurinacional” de Evo Morales. Hacia una caracterización de la pluriburguesía boliviana. *Bolpress*. Recuperado de <http://www.bolpress.net/art.php?Cod=2015093001>
- Dalla Costa, A., Gelinski Júnior, E. y Wichinevsky, M. (2014). Multinacionales de países emergentes: la internacionalización de las empresas brasileñas entre 1970 y 2013. *Apuntes*, 41(75). Recuperado de http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=S0252-18652014000200001&script=sci_arttext
- D’Angelo, F. (2015). Fuga de capitales: riesgos y amenazas. *Correio da Cidadania*. Recuperado de <http://www.rebellion.org/noticia.php?id=203424>
- Dangl, B. (2014). Imperios invisibles, poder estatal y colonialismo del siglo XXI. *Upside Down World*. Recuperado de <http://upside-downworld.org/main/en-espatopmenu-81/4908-balas-del-capitalismo-en-latinoamerica-imperios-invisibles-poder-estatal-y-colonialismo-del-siglo-xxi>
- De Moraes, Armando (2014) La vocación hegemónica de Brasil, Periódico Diagonal (<https://www.diagonalperiodico.net>, 20/09/2014)
- Diégues, F. (2004). *A revolução brasileira*. Rio de Janeiro: Objetiva.
- Dresser, D. (30 de enero de 2009). Discurso en el Foro “México ante la crisis”. *El Universal*.
- Encuesta de Datafolha: cae al 8% la aprobación al gobierno de Rousseff (agosto de 2015). *ABC Agência Brasil*. Recuperado de: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/es/politica/noticia/2015-08/encuesta-de-datafolha-cae-al-8-la-aprobacion-al-gobierno-de-rousseff>
- EFE. (10 de junio de 2015). Empresa investigada en el caso Petrobras realizó donaciones al instituto de Lula. Recuperado de <http://www.efe.com/efe/usa/america/empresa-investigada-en-el-caso-petrobras-realizo-donaciones-al-instituto-de-lula/50000103-2635663>
- Fausto, B., Devoto, F. J. (2005). *Brasil e Argentina: Um ensaio de história comparada (1850–2002)*. São Paulo: Editoria 34.
- Federici, S. (2013). *Revolución en punto cero. Trabajo doméstico, reproducción y luchas feministas*. Madrid: Traficantes de sueños. Recuperado de <https://www.traficantes.net/sites/default/files/pdfs/Revolucion%20en%20punto%20cero-TdS.pdf>
- Fernández, M. A. y Marcos, J. (2012). Oscar Olivera: “El Gobierno de Bolivia se está subordinando a las transnacionales de Brasil y al narcotráfico”. *Otramérica*. Recuperado de <http://otramerica.com/personajes/el-gobierno-de-bolivia-se-esta-subordinando-a-las-transnacionales-de-brasil-y-al-narcotrafico/1700>
- Fernández Liria, C. y Alegre Zahonero, L. (2007). *Educación para la ciudadanía*. Madrid: Akal.
- Fernández Ortiz, G. (19 de febrero de 2014). Disputa agraria, disputa integral, disputa global. *Rebelión*. Recuperado de <http://www.rebellion.org/noticia.php?id=181005>
- Fernández Savater, A. (8 de mayo de 2015). “¿No nos representan?” Discusión entre Jacques Rancière y Ernesto Laclau sobre Estado y democracia. Disponible en http://www.eldiario.es/interferencias/democracia-representacion-Laclau-Ranciere_6_385721454.html
- Ferro, M. (1994). *História das colonizações*. São Paulo: Companhia das Letras.
- Fiori, J. L. (2004). Formação, expansão e limites do poder global. En J. L. Fiori (coord.), *O poder americano*. Petrópolis: Vozes.
- , (2009). Prefácio ao Poder Global. *Revista tempo do mundo*, 1(1).
- , (2013). O Brasil e seu “entorno estratégico” na primeira década do século XXI. En E. Sader (coord.), *10 anos de governos pós-neoliberais no Brasil: Lula e Dilma*. São Paulo: Boitempo - Flacso.
- , (2014a). Lula foi uma liderança internacional excepcional. *Panorama Mercantil*. Recuperado de <http://www.panoramamercantil.com.br/lula-foi-uma-lideranca-internacional-excepcional-jose-luis-fiori-cientista-politico-e-professor-da-universidade-federal-do-rio-de-janeiro-ufrrj/>
- , (2014b). Entrevista de Leopoldo Gonzáles Aguayo. *Poder Global*. Recuperado de <http://www.poderglobal.net/wp-content/uploads/2014/04/entrevista-fiori-universidade-mexico.pdf>

- Flórez-Flórez, J. (2005). Aportes portcoloniales (latinoamericanos) al estudio de los movimientos sociales. *Tabula Rasa*, 3. Recuperado de <http://www.redalyc.org/pdf/396/39600305.pdf>
- Fontes, V. (2010). O Brasil e o capital-imperialismo: teoria e história. Rio de Janeiro: UFRJ.
- Gamarra, L. F. (5 de junio de 2013). Apuesta de Brasil en el Perú alcanzaría los US \$20,000 millones al 2020. *La República*. Disponible en <http://larepublica.pe/05-06-2013/apuesta-de-brasil-en-el-peru-alcanzaria-los-us-20000-millones-al-2020>
- García, A. S. (2013). La internacionalización de las empresas brasileñas: consensos y conflictos. En J. Hernández Zubizarreta (coord.), *Empresas transnacionales en América Latina*. Recuperado de http://publicaciones.hegoa.ehu.es/assets/pdfs/294/Empresas_transnacionales_en_America_Latina.pdf?1372929459
- Gaspari, E. (2002). *A Ditadura Envergonhada*. São Paulo: Companhia das Letras.
- Gerig, M. (2015). La disputa por los conceptos adecuados: ¿"Colonialismo simpático" o decolonialidad? *Rebelión*. Recuperado de <http://www.rebellion.org/noticia.php?id=204713>
- Geus de, A. (s. f.). Las caras de IIRSA: ¿integración regional o interconexión Sudamericana? *Academia*. Recuperado de <https://www.academia.edu/2219320/>
- Gimate-Welsh, A. (2006). *Rumbo a los Pinos en el 2006*. México: UAM - Porrúa.
- González Casanova, P. (2016). Crisis, tendencias y alternativas. *La Jornada*. Recuperado de <http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/10/20/crisis-tendencias-y-alternativas>
- Guarneri, F. (2015). Una alternativa de izquierda contra los ajustes del gobierno de Dilma, el PT y la derecha. *La Izquierda diario*. Recuperado de <http://www.laizquierdadiario.com/Una-alternativa-de-izquierda-contra-los-ajustes-del-gobierno-de-Dilma-el-PT-y-la-derecha>
- Hernández, M. (2015). El de Dilma no es un gobierno de izquierda, hace lo que la derecha le impone. *Labine*. Recuperado de: <http://www.lahaine.org/mundo.php/el-de-dilma-no-es>
- Hirsch, J. (1996). *Globalización, capital y estado*. México: UAM-Xochimilco.
- Holloway, J. (30 de julio de 2014). Podemos o Syriza pueden mejorar las cosas, pero el desafío es salir del capitalismo. Fragmentos de entrevista. *El Diario*. Recuperado de http://www.eldiario.es/interferencias/John_Holloway_Podemos_Syriza_capitalismo_6_287031315.html
- _____, (15 de mayo de 2015). El pensamiento crítico frente a la hidra capitalista. *La Jornada*.
- Houtart, F. (2015). El Movimiento de los Sin Tierra (MST) y la coyuntura política en el Brasil. *CADTM*. Recuperado de: <http://www.cadtm.org/El-movimiento-de-los-sin-tierra>
- Huaman, A. (9 de agosto de 2015). La buena estrella de la empresa brasileña Engevix en el gobierno aprista. Recuperado de <http://www.peruanoscontralacorruccion.com/index.php/2015/08/09/la-buena-estrella-de-la-empresa-brasileña-engevix-en-el-gobierno-aprista/>
- Iglesias, M. V. (2002). *Promoção de exportações via internacionalização de firmas com capital brasileiro*. Brasil: BNDES. Recuperado de http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/export/sites/default/bndes_pt/Galerias/Arquivos/conhecimento/livro_desafio/Relatorio-09.pdf
- Investigan a empresas constructoras de Brasil por corrupción. (28 de junio de 2015). *Notimex*. Recuperado de <http://planoinformativo.com/nota/id/399228/noticia/investigan-a-empresas-constructoras-de-brasil-por-corrupcion.html>
- Katz, C. (2015). ¿Qué es el neodesarrollismo? Una visión crítica. Argentina y Brasil. *Serviço Social & Sociedade*, 122. Recuperado de http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-66282015000200224
- Korol, C. (2015). Salida a la crisis se disputa en las calles. *Rebelión*. Recuperado de <http://www.rebellion.org/noticia.php?id=203052&titular=salida-a-la-crisis-se-disputa-en-las-calles->
- Laclau, E. (2006). *La razón populista*. Buenos Aires: FCE.

- _____, (2008). *Debates y combates. Por un nuevo horizonte de la política*. Buenos Aires: FCE.
- Laclau, E., Butler, J., Slavoj, Ž. (2011). *Contingencia, Hegemonía, Universalidad. Diálogos contemporáneos en la izquierda*. Buenos Aires: FCE.
- Laclau, E. y Mouffe, C. (2010). *Hegemonía y estrategia socialista. Hacia una radicalización de la democracia*. Buenos Aires: FCE.
- Landivar, N. (2009). Os padrões de comportamento das ‘transbrasileiras’ no Equador: extraterritorializando a responsabilidade do Estado brasileiro. En *Transnacionais brasileiras na América Latina: um debate necessário*. São Paulo: Expressão Popular.
- Levinas, L. (2015). La financierización de la política social: el caso brasileño. *Sin Permiso*. Recuperado de <http://www.sinpermiso.info/textos/la-financierizacion-de-la-politica-social-el-caso-brasileño>
- Limia David, M. (1998). Retomando el debate sobre sociedad civil. *Marx Ahora*, 6.
- López, M. (2015). Brasil: Entorno Macroeconómico de un país emergente. *Observatorio de la Economía Latinoamericana*, 156. Recuperado de <http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/br/>
- Lora Cam, J. (2003). Radicalismo de izquierda y confrontación político militar en América Latina. Lima-Perú: Ed. Juan Gutemberg.
- _____, (2004). *Recolonización y resistencia en el espacio andino amazónico*. San Marcos, Lima: IPS.
- _____, (2009). *Los Andes: de rupturas anticoloniales y reconfiguraciones del poder*. Puebla, México: El Errante.
- Lora Cam, J., Petras, J. (2013). *Extractivismo y simulacros progresistas en Bolivia y Latinoamérica*. Puebla: BUAP.
- Lora Cam, J., Sánchez, J. L. (2013). Hacia una metodología de la praxis, Puebla: BUAP.
- Machado, D. (20 de septiembre de 2014). La vocación hegemónica de Brasil. *Diagonal*. Recuperado de <https://www.diagonalperiodico.net/global/23854-la-vocacion-hegemonica-brasil.html>
- Machado, J. (2015). Dilma contra las cuerdas. *Viento Sur*. Recuperado de <http://www.vientosur.info/spip.php?article9953>
- Machado, R. (2015). Entrevista a Ricardo Antunes: “El trabajo que estructura al capital desestructura a la sociedad”. *Viento Sur*. Recuperado de <http://vientosur.info/spip.php?article10281>
- Maringoni, G. (s. f.). Crisis en Brasil: ya no es Dilma quien nos gobierna. *Ramble Tamble*. Recuperado de <http://rambletamble.blogspot.mx/2016/03/las-lecciones-de-brasil-cuando-gobierna.html>
- Marra, A. (2015). La joya de la corona jaquea a Dilma. *Brecha*. Recuperado de <http://brecha.com.uy/la-joya-de-la-corona-jaquea-dilma/>
- Maso del, J. Y Rooso, F. (2015). La hegemonía débil del populismo. *Ideas de izquierda*. Recuperado de <http://www.laizquierdadiario.com/ideasdeizquierda/la-hegemonia-debil-del-populismo>
- Monteiro Rizzotto, P. (octubre de 2013). Aumento de renda não significa elevação social. *Do Brasil Económico*.
- Moraes, M. (2011). Constructoras brasileñas se expanden por América Latina. *Rebelión*. Recuperado de <http://www.rebellion.org/noticia.php?id=137451>
- _____, (13 de noviembre de 2011). La expansión de las transnacionales brasileñas. *Viento sur*. Recuperado de <http://vientosur.info/spip.php?article5879>
- Moreira, I. A. G. (1981). *O Espaço Geográfico, geografia geral e do Brasil*. São Paulo: Ática.
- Moreno, C. (2013). *Economía verde: En lugar de una solución, la nueva fuente de acumulación primitiva*. Quito: Rosa Luxemburgo.
- Moreno, J. D. (2001). De la ‘gobernanza’ o la constitución política del neoliberalismo. *Vientosur*, 20.
- Naciones Unidas. (2013). Informe sobre Comercio y Desarrollo, 2013. Recuperado de http://unctad.org/es/PublicationsLibrary/tdr2013_es.pdf
- Nepomuceno, Eric. Página 12, 2016, Buenos Aires

- Ositran. (2013). Resumen periodístico Ositran. *Ositran*. Recuperado de <https://www.ositran.gob.pe/joomlatools-files/docman-files/RepositorioAPS/0/0/par/resumenp/311013.pdf>
- Pavlovsky, E. (septiembre de 2000). Prólogo de Eduardo “Tato” Pavlovsky al libro *Globaloney* de James Petrás. *Topía*. Recuperado de <https://www.topia.com.ar/articulos/pr%C3%B3logo-de-eduardo-tato-pavlovsky-al-libro-globaloney-de-james-petras>
- Petras, J. (2013). Columna de James Petras. *Ivoox*. Recuperado de http://www.ivoox.com/james-petras-23-junio-audios-mp3_rf_3248963_1.html
- Petrobrás: corrupción, privatizaciones y expoliación imperialista. (Julio de 2015). *La izquierda diario*. Recuperado de http://www.laizquierdadiario.com/Petrobras-corrupcion-privatizaciones-y-expoliacion-imperialista?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter
- Piketty, T. (2014). *Capital in the Twenty-First Century*. Cambridge: Belknap Press.
- Pinassi, M. O. (2015). La miseria estructural de la crisis brasileña: ¿Y la lucha de clases? *Herramienta*, (57). Recuperado de <http://www.herramienta.com.ar/revista-herramienta-n-57/la-miseria-estructural-de-la-crisis-brasileña-y-la-lucha-de-clases>
- Piqueras, A. (2015). La importancia de la política en grande. *Rebelión*. Recuperado de <http://www.rebelion.org/noticia.php?id=203354>
- Pizzorno, A. (enero de 2006). El orden jurídico y estatal en la globalización. *Memoria*, 203.
- Portela, F. (6 de abril de 2015). Principales empresas brasileñas transnacionales 2015. [Mensaje en un blog]. Recuperado de <http://empresasbrasils.blogspot.mx/2015/04/principales-empresas-transnacionales.html>
- Porto-Gonçalves, Carlos Walter (2009). Del desarrollo a la autonomía: la reinención de los territorios. En: *Revista Memoria* 238, Octubre- Noviembre 2009. México.
- Porto-Gonçalves, C. W. y Betancourt, M. (2013). Encrucijada latinoamericana en Bolivia: el conflicto del TIPNIS y sus implicaciones civilizatorias. Recuperado de **Tensiones territoriales y Políticas públicas de desarrollo en la Amazonia**. Niteroi, RJ.
- Prada Alcoreza, R. (11 de junio de 2014). La geopolítica edulcorante de la dominación mundial. *Rebelión*. Recuperado de <http://www.rebelion.org/noticia.php?id=185885>
- ¿Quiénes están detrás de las protestas en Brasil contra Dilma Rousseff? (marzo de 2015). *Público*. Recuperado de <http://www.publico.es/internacional/quienes-detras-protestas-brasil-dilma.html>
- Rancière, J. (2007). *Los bordes de lo político*. Buenos Aires: La Cebra.
- Renan, T. (2015). La deuda pública es un megasquema de corrupción institucionalizada. Recuperado de <http://www.alainet.org/es/articulo/170942#sthash.LCvTi7x.dpuf>
- Renique, J. L. (21 de abril de 1998). Después de la caída. Del fujimorismo a la democracia en el Perú. *Washington Post*.
- Rodrigues, J. H., Seitenfus, R., Bochat, L. (1995). *Uma história diplomática do Brasil, 1531-1945*. Brasil: Civilização Brasileira.
- Roy, A. (2014). ¿Con qué detergente lavas? El poder público en la era del imperio. *Rebelión*. Recuperado de <http://www.rebelion.org/noticia.php?id=6510>
- Sader, E. (2013). *10 anos de governos pós-neoliberais no Brasil: Lula e Dilma*. São Paulo: Boitempo - Flacso.
- Salas Oroño, A. (2015). Crisis en Brasil: Petrobras y la lógica del ajuste. *Celag*. Recuperado de <http://www.celag.org/crisis-en-brasil-petrobras-y-la-logica-del-ajuste-por-amilcar-salas-orono/>
- Salazar, G. (2015). Gabriel Salazar descuartiza a la clase política. *Punto Final*, 837(50).
- Salazar, M. (junio, 2016). Cuotas y pagos millonarios de la Interoceánica. *Convoca*. Recuperado de <http://convoca.pe/investigaciones/cuotas-y-pagos-millonarios-de-la-interoceanica>

- Salem Vasconcelos, J. (2015). Crisis discursiva del PT: entre tabúes y autoproclamación. *La Haine*. Recuperado de <http://www.lahaine.org/mundo.php/crisis-discursiva-del-pt-entre>
- Sandoval, R. (2015). *Pensar desde la resistencia anticapitalista y la autonomía*. México: CIESAS.
- Sanz, M. (12 de agosto de 2015). Hegemonía sin revolución. *Rebelión*. Recuperado de <http://www2.rebelion.org/noticia.php?id=202073>
- Sennes, M. (2009). *Políticas públicas e multinacionais brasileiras. A ascensão das multinacionais brasileiras. O grande salto de pesos-pesados regionais a verdadeiras multinacionais*, Elsevier. Belo Horizonte: Fundação Dom Cabral.
- Skidmore, T. E. (2003). *Uma História do Brasil*. São Paulo: Paz e Terra.
- Skidmore, T. y Smith, P. (1996). Brasil: ¿desarrollo para quién? En *Historia contemporánea de América Latina*. Barcelona: Crítica.
- Souza, H. (2009). Transnacionales “brasileñas” clavan las garras en América Latina. *A Nova Democracia*. Recuperado de <http://anova-democracia.com.br/espanhol/108-n-57-septiembre-de-2009/2473-transnacionales-qbrasilenasq-clavan-las-garras-en-america-latina>
- Souza de, A. B. (2008). *Duque de Caxias: o homem por trás do monumento*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira.
- Strasser, C. (2000). *Democracia y desigualdad. Sobre la ‘democracia real’ a fines del siglo XX*. Buenos Aires: Clacso.
- Stédile, J. P. (2015). El neodesarrollismo se agotó. *Rebelión*. Recuperado de <http://www.rebelion.org/noticias/2015/7/200891.pdf>
- Svampa, M., “Consenso de los commodities, giro ecoterritorial y pensamiento crítico en América latina” en OSAL N°32, CLACSO, Buenos Aires, 2012. Tamayo, E. (14 de junio de 2001). Esclavitud y tráfico de seres humanos. Alai. Recuperado de <http://www.alainet.org/es/active/1283>
- Tautz, C., Siston, F., Lopes Pinto, J. R., Badin, L. (2010). O BNDES e a reorganização do capitalismo brasileiro: um debate necessário. En *Os anos Lula: contribuições para um balanço crítico: 2003-2010*. Rio de Janeiro: Garamond.
- Tavares, E. (2015). La minería y los eco-aburridos. *Rebelión*. Recuperado de <http://www.rebelion.org/noticia.php?id=205750>
- Terán Mantovani, E. (2014). “La crisis del capitalismo rentístico y el neoliberalismo mutante (1983-2013)”. Recuperado de http://www.clacso.org.ar/libreria_cm/archivos/pdf_313.pdf
- Transparency International's, (2009) *Global Corruption Report 2009*, Cambridge University Press
- Vainfas, R. (2002). *Dicionário do Brasil Imperial*. Rio de Janeiro: Objetiva.
- Vega Cantor, R. (2012). *Colombia: Capitalismo gangsteril y despojo territorial*. Recuperado de <http://proyectoaiap.blogspot.mx/2012/11/extractivismo.html>,
- Vesentini, J. W. (1988). *Brasil, sociedade e espaço-Geografia do Brasil*. São Paulo: Ática.
- Villegas, P. (2013). Bolivia en proceso de recolonización por el imperialismo a través de Brasil. *Oilwatch Latinoamérica*. Recuperado de <http://www.oilwatchsudamerica.org/petroleo-en-sudamerica/bolivia/4503-bolivia-en-proceso-de-recolonizacion-por-el-imperialismo-a-traves-de-brasil-.html>
- Wainer A. Y Schorr, M. (2015) ¿Neodesarrollismo sin sujeto? Los límites de la clase dominante. *Ideas de izquierda*. Recuperado de <http://www.laizquierdadiario.com/ideasdeizquierda/neodesarrollismo-sin-sujeto-los-limites-de-la-clase-dominante-argentina/>
- Watchdog, B. (2015). La mano invisible del BNDES. *Convoca*. Recuperado de <http://convoca.pe/especiales/la-mano-invisible-del-bndes-en-america-latina>
- Webber, J. R. (2015). Teatro político en Bolivia. *Revista Herramienta*, 56.
- Wikipedia (s.f). Consenso de Washington. *Wikipedia*. Recuperado de http://es.wikipedia.org/wiki/Consenso_de_Washington
- Wolin, S.S., (2008) “Democracy Incorporated. Managed Democracy and the Specter of Inverted Totalitarianism, Princeton University Press, Princeton.

- Zibechi, R. (20 de noviembre de 2009). El Estado como molino de viento. *La Jornada*. Recuperado de <http://www.jornada.unam.mx/2009/11/20/opinion/018a1pol>
- , (2012). *Brasil potencia: entre la integración regional y un nuevo imperialismo*. Colombia: Desde Abajo.
- , (4 de mayo de 2014). El Brasil que recibe la Copa del Mundo. *Desinformémonos*. Recuperado de <https://desinformemonos.org/el-brasil-que-recibe-la-copa-del-mundo-por-raul-zibechi/>
- Zibechi, R. (25 de septiembre de 2015). Interconexión sin integración: 15 años de IIRSA. *Rebelión*. Recuperado de <http://www.rebelion.org/noticias/2015/9/203700.pdf>
- , (13 de marzo de 2015). En Brasil, un ciclo de luchas para frenar la derecha. *Programa de las Américas*. Recuperado de <http://www.cipamericas.org/es/archives/14669>
- , (agosto, 2015). Estados Unidos gana en Brasil. *Rebelión*. Recuperado de <http://www.rebelion.org/noticia.php?id=202622>
- , (18 de marzo 2016). Brasil: sin izquierda y sin rumbo. *La Jornada*.
- Zizek, S. (2008). *En defensa de la intolerancia*. Madrid: Sequitur.

